



carlos altamirano
dialéctica de
una derrota



**historia
inmediata**



siglo veintiuno editores, sa

CERRO DEL AGUA 248, MEXICO 20, D.F.

siglo veintiuno de españa editores, sa

C/PLAZA 5, MADRID 33, ESPAÑA

siglo veintiuno argentina editores, sa

siglo veintiuno de colombia, ltda

AV 30. 17-73 PRIMER PISO. BOGOTA, D.E. COLOMBIA

edición al cuidado de carmen valcarce
portada de anhelo hernández

primera edición en español, 1977

© siglo xxi editores, s. a.

derechos reservados conforme a la ley
impreso y hecho en méxico / printed and made in mexico

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	9
1. EL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE	14
Un partido singular, 16; Un largo camino de maduración, 20; Aportes al debate teórico, 23; La línea de "Frente de Trabajadores", 31; Vigencia histórica del socialismo chileno, 34	
2. LA UNIDAD POPULAR: UN PROGRAMA PARA CHILE	36
Tres documentos claves, 37; El programa de la UP, 39; Un vacío inexcusable, 43	
3. LOS MIL DÍAS DE LA UNIDAD POPULAR	46
4. LA VÍA PACÍFICA Y EL PROCESO REVOLUCIONARIO	56
La vía: ¿problema táctico o estratégico?, 56; Vía pacífica y vía armada, 57; La estrategia del movimiento popular, 60; El enfrentamiento insoslayable, 69; Viabilidad de una estrategia armada, 71	
5. LAS DIFÍCILES CAPAS MEDIAS	74
Presencia política de las capas medias, 74; Su sistema ideológico, 78; Insuficiencias de una política, 79; La pequeña burguesía y el Gobierno Popular, 84	
6. LA DEMOCRACIA CRISTIANA: PROBLEMA DE AYER Y DE HOY	88
Una precisión indispensable, 88; Esencia y apariencia de la DC, 89; La DC y el gobierno de Allende, 93; El diálogo imposible, 95; La DC: alternativa al movimiento popular, 102	
7. PODER POPULAR: EXIGENCIA DE LAS MASAS	105
La generación del nuevo poder, 106; Objetivo único: el poder, 112	
8. EL "IZQUIERDISMO" EN LA EXPERIENCIA CHILENA	117
9. ESTADOS UNIDOS Y EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO	124
Chile: un modelo no previsto, 124; El Gobierno Popular frente a Estados Unidos, 125; Agresión: respuesta norteamericana, 127; Ford, el cinismo y la CIA, 133; Autopsia de la descomposición, 139	
10. FUERZAS ARMADAS: LA MÁS SERIA INSUFICIENCIA	147
Mito y realidades, 147; El Gobierno Popular y las Fuerzas Armadas, 152; Ausencia de una política militar, 156	

11. LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS EN LA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO 163
 La estructura económica heredada: obstáculo al desarrollo, 166; La coyuntura internacional: dificultades imprevistas, 170; La agresión burguesa-imperialista, 170; Los errores de la política económica, 172
12. ONCE DE SEPTIEMBRE: DÍA DE LA TRAICIÓN 185
 Preparan su guerra, 185; La denuncia de la marinería, 189; Y hubo que crear el "Plan Z", 191; El golpe militar: resistencia sin armas, 193; El Partido Socialista el 11 de septiembre, 196; Salvador Allende, 198
13. DIALÉCTICA DE UNA DERROTA 201
 Urgencia de una autocrítica, 201; Un modelo contrarrevolucionario, 201; Alcances necesarios, 206; La desviación principal, 212
14. TIRANÍA FASCISTA 222
 Un balance demoledor, 223
15. CONSIDERACIONES Y PROPOSICIONES ACERCA DE UNA ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA EN CHILE 226
 La crisis mundial y el imperialismo, 227; Victorias del socialismo, 230; América Latina: nuestro escenario, 240; Historia de la dependencia, 242; Tensiones explosivas, 247; Crisis de vanguardias, 250; El gobierno de los ejércitos, 254; La Iglesia católica y las masas cristianas, 260; Un camino para Chile, 265; Hacia una política revolucionaria de masas, 267; Algunas ideas para la formulación de un proyecto político, 270; El bloque ideológico, las capas medias y la política de alianzas, 270; El complejo militar represivo, 283; Las fuerzas motrices de la revolución chilena, 288; Un partido para el socialismo, 288; La unidad de la clase, 293; La unidad del pueblo, 297

INTRODUCCIÓN

Se extinguía el 4 de septiembre de 1970. El pueblo se había volcado sobre la alameda Bernardo O'Higgins, arteria principal de Santiago, para celebrar una victoria que por largas décadas se había mostrado esquiva. Allende era virtualmente el presidente de Chile, aunque el gobierno de Frei dilataba mañosamente el reconocimiento oficial de los resultados electorales. Trabajadores, jóvenes estudiantes, mujeres de las poblaciones marginales y campesinos de la periferia capitalina, explosionaban sobre la ancha avenida, el júbilo del vasto movimiento popular triunfante. La burguesía amedrentada, intoxicada por su propia propaganda, se había parapetado en sus mansiones, aguardando el asalto de las turbas vencedoras. La culpa acumulada en siglo y medio de dominación y explotación, oscurecía y silenciaba los barrios elegantes.

Aquella fue una noche de alegría larga. El pueblo cantó y bailó hasta avanzada ya la madrugada. Ni un solo vidrio se quebró en Santiago. Ni una sola bofetada castigó la arrogancia replegada del enemigo derrotado. Los trabajadores se asomaban a su destino con una increíble demostración de generosidad y madurez cívica.

Casi exactamente tres años después, cuando también se apagaba otro día de septiembre, la burguesía alborozada bebía champagne en sus lujosos salones. Allende había sido asesinado y se clausuraba brutalmente la vibrante experiencia que él encabezara. La soldadesca, inoculada de odio, irrumpía en los hogares populares, y allí destruía, robaba, violaba y asesinaba, mientras el pija ebrio delataba, golpeaba y colaboraba en la tarea de exterminio.

Cuando septiembre fue del pueblo, los partes policiales no registraron un solo desmán. Cuando fue de la burguesía, murió ensombrecido por el hedor de 40 mil cadáveres. El terror rojo, persistentemente anunciado por los heraldos de la burguesía, no se asomó entonces ni en los tres años subsiguientes. El terror blanco, en cambio, vino sin anuncio y su faena nunca se dio pausa después de la derrota popular. Dos estilos de vida, dos concepciones diferentes de la sociedad y del hombre. Una, la del pueblo, alegre, generosa, abierta a la esperanza de una vida superior; otra, la de sus adversarios, torva, deshumanizada, implacablemente resuelta a defender sus privilegios.

El examen de los dos proyectos sociopolíticos que emergen de aquellos acontecimientos, el intento de construir una sociedad socialista, en pluralismo, en democracia y en libertad, y la experiencia fascista, que metodiza la destrucción de un vasto sector social para afincar el dominio burgués imperialista, constituyen el objetivo central de este libro.

Él está escrito para satisfacer una urgente necesidad personal y partidaria, a la vez que una apremiante exigencia revolucionaria. Desde la dirección del más poderoso partido de la Unidad Popular, jugamos un importante papel en el quehacer convulsivo de los últimos años. Ello nos impuso la obligación de ir recogiendo las interrogantes variadas que emergieron del desenlace trágico. Deseamos, en estas páginas, dar a ellas una respuesta directa y categórica, desde nuestra perspectiva. Comprendemos las dificultades y asumimos plenamente los riesgos. El triunfo electoral de un movimiento marxista, en un país pequeño, dependiente y subdesarrollado, es un hecho excepcional en la historia; el desarrollo posterior del proceso y su subsiguiente fracaso, crearon incógnitas complejas, difíciles de desentrañar.

Premeditadamente habíamos eludido enfrentar esta tarea sin contar con una perspectiva histórica adecuada y sin la serenidad indispensable para liberar el análisis de cualquier interferencia subjetiva y emocional.

Creemos que ya ha trascurrido el tiempo suficiente como para encarar esta exigencia. Entendemos insoslayable la obligación de hacer llegar nuestro pensamiento a los combatientes, que desde todos los rincones de los caminos revolucionarios, hurgan en la experiencia chilena las lecciones inapreciables que emergieron de su victoria y derrota.

Con posterioridad al golpe militar, empezó a proliferar en Europa y en América Latina, una profusa literatura analítica en torno a las cuestiones fundamentales planteadas por nuestra singular experiencia. Ello no es extraño. Pocos hechos, en lo que va del siglo, han impactado tan violentamente a la opinión pública mundial. Pocas veces, el movimiento revolucionario internacional había formulado con tan vehemente severidad el cuestionario de sus dudas:

¿Qué factores determinaron la derrota? ¿Cuál fue la magnitud y la entidad de los errores cometidos? ¿Qué desviaciones lo obstaculizaron y sobre qué "fichas ideológicas" deben éstas ser imputadas? Y por cierto, como cuestión sustancial, ¿estaba o no la derrota fatalmente determinada por la singularidad misma de la vía, en apariencia divorciada, de la ortodoxia?

Las respuestas ensayadas han entregado un aporte valioso al debate promovido. No obstante, en no pocas de ellas, se ha incurrido en errores determinados por perspectivas inadecuadas. Existe, a nues-

tro juicio, tendencia a magnificar factores adjetivos del proceso, a los cuales se atribuye un peso específico, casi excluyente. Para algunos, la suerte de aquél, aparece sellada pura y simplemente por la decisión voluntariosa del imperialismo de hacerlo abortar. Para otros, estaba condenado por la incapacidad de la dirección revolucionaria, para articular, política y socialmente, un entendimiento con los sectores medios, que evitara el aislamiento del proletariado. Hay también, quienes buscan el nudo de la trama en el ritmo impuesto a la experiencia, lento para montescos, vertiginoso para capuletos.

No pocos aparecen orientados, más que a profundizar objetivamente en la realidad íntima del drama chileno, a satisfacer determinadas posiciones partidistas o doctrinarias. Finalmente, algunos juicios críticos se expresan a contar de moldes ya utilizados o de experiencias ya vividas, con los cuales se pretende establecer analogismos mecánicos.

Entendemos por cierto, que todo proceso social se descompone en una multiplicidad de factores y está condicionado por un cúmulo de circunstancias y situaciones que lo explican. Despejar lo que hay de esencial y coherente, en la tupida red de hechos intrascendentes, aleatorios o marginales, sólo es posible a partir de la ponderación objetiva de cada realidad concreta. Sin el conocimiento cabal de ésta, se trabajará inevitablemente con categorías extrañas, que en definitiva, oscurecerán una visión integral del fenómeno analizado.

La realidad sobre la que se construyó el triunfo de la Unidad Popular en Chile, y que abrió las compuertas de un proceso revolucionario inédito, es desde luego, una realidad específica, con la cual no resulta fácil establecer marcos analógicos. Aquella victoria no fue en modo alguno un regalo caprichoso de la historia. Está construida sobre supuestos sociales, políticos e ideológicos consolidados en años de lucha. Hay tras ella una larga evolución histórica, cuyas características explican la posibilidad de una empresa, que no pudo intentarse en ningún otro país de América. Son las condicionantes del desarrollo del movimiento popular chileno, las que determinarán en estricta relación de causas y efectos, la naturaleza de la victoria de 1970, y la fisonomía singular de la experiencia revolucionaria inaugurada con ella.

Nos parece fundamental, por todo ello, diseñar el escenario político y social en el que ha decurrido el acontecer del último lustro. A partir de él, podemos entregar una visión objetiva de la experiencia que vivimos, despojándola de causas y efectos meramente circunstanciales. Sin ignorar la urdimbre de factores que intervinieron en la emergencia política que culminó en septiembre de 1973, intentamos aislar en ella los principales acontecimientos y problemas teóricos que pone de manifiesto.

En esta perspectiva, hemos eludido la relación cronológica, pormenorizada y descriptiva de las circunstancias que confluyeron en el proceso. Hemos evitado del mismo modo todo lo que pudiera tener un carácter autobiográfico. El material para ello no es desestimable. El autor como jefe del más importante partido de gobierno, vivió la intimidad de los hechos más trascendentes de los últimos años. No obstante, no se trata aquí de hacer historia. Pensamos, tal vez, haya más tarde oportunidad para ello.

Llamará la atención el que ciertos conceptos y afirmaciones aparezcan reiterados en diversos capítulos de esta obra. Así lo hemos querido. Al elaborarla, apenas si hemos dispensado alguna preocupación por las normas técnico-literarias. Hay, sí, una voluntad muy resuelta de "impregnar" al lector de ciertas ideas que nos parecen medulares. Después de todo, el autor no es un escritor ni un ideólogo, sólo es militante de un partido revolucionario, cuyo pensamiento y posiciones son las resultantes de una vivencia protagónica en el acontecer chileno. Este libro es virtualmente "un cuaderno de anotaciones", en el que se han volcado —si se quiere en desorden— reflexiones y juicios intensamente vividos y profundamente meditados.

No pretendemos que las conclusiones inferidas del análisis de la experiencia chilena, tengan validez más allá del ámbito de nuestra realidad nacional. Por cierto, hay lecciones profundas que deberán enriquecer el acervo teórico-político de movimientos revolucionarios de otras latitudes, del mismo modo que determinadas opciones estratégicas, clausuradas por el imperialismo para Chile y el continente, continuarán siendo factibles en el acontecer de otros pueblos.

No intentamos en este ensayo un estudio exhaustivo de la experiencia fascista que emerge tras el asesinato de Salvador Allende. Creemos que la opinión pública universal —quizá con la sola excepción de la de Chile— ha tenido acceso a una amplia información acerca de la magnitud de sus crímenes, torpezas y horrores. El lector sólo encontrará una descripción global de la asombrosa empresa de demolición dirigida por la pandilla usurpadora. Sobre su faena destructora nos limitamos a repetir con Saint Just: "Han sido tan malvados cuanto su estupidez se los ha permitido." No obstante, nos ha interesado llamar la atención sobre las características del régimen tiránico que hoy oprime a nuestra patria, en cuanto proyecto político y opción estratégica, seleccionada por los Estados Unidos y las grandes empresas transnacionales, para estabilizar su dominio en América Latina.

Este libro ha sido escrito en una perspectiva de franqueza. Nos parece que a esta altura, enfrentados a la inmensa tarea de rescatar a Chile de la barbarie, podemos y debemos asumir el riesgo de la

franqueza. La crítica y la autocrítica imponen una obligación ineludible a la vez que un derecho irrecusable. Cumplimos esa obligación y ejercemos ese derecho, entregando en las páginas siguientes el pensamiento de un combatiente socialista chileno, como simple aporte a un debate, que permanecerá por largo tiempo abierto.

1. EL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE .

En los últimos años del siglo pasado, el joven proletariado chileno empieza a dar consistencia orgánica a sus luchas. Las ideas socialistas se habían deslizado desde la vieja Europa y encontrado oídos atentos y receptivos, especialmente entre los trabajadores de las áridas regiones norteñas. La maduración en todo caso será lenta y difícil.

Es en el norte del país —poseedor de las grandes riquezas salitreras— donde se generan las condiciones y el clima humano adecuado para el parto de la primera organización política de los obreros de Chile. Allí emerge también el constructor visionario, cabeza de la magna empresa. Organizador infatigable y sembrador generoso, se dio de inmediato a la tarea de vertebrar nacionalmente, las inquietudes y rebeldías que afloraban en la larga geografía. En 1912, Luis Emilio Recabarren, padre del movimiento obrero chileno, fundó el Partido Obrero Socialista (POS).¹

En 1915, cuando la primera guerra mundial imperialista devastaba Europa, el POS se estructura en todo el país como la única vanguardia política del proletariado chileno. Muy pronto, los resplandores de octubre iluminarían las esperanzas de la humanidad postergada. Cuando nace la III Internacional —respuesta histórica al reformismo expresado en la Internacional Socialdemócrata— el partido de Recabarren se convierte en su sección chilena con el nombre de Partido Comunista de Chile. Bajo su alero inspirador, la joven organización obrera suscribirá sus lineamientos y conducta. La apreciación de la III Internacional —en 1929— sobre el carácter de la crisis mundial y su política beligerante frente a los sectores reformistas, se traduce en el PC en un dogmatismo practicante, que termina por debilitar su crecimiento.

Al iniciarse la década del treinta la gran masa de los trabajadores no obedecía a dirección política alguna. No la ubicaba ni en el PC ni en su escisión trotskista. La única entidad nacional sindical, la FOCH, adherida también a la III Internacional, apenas si logra una precaria representatividad.²

¹ Casi en la misma época en que Recabarren fundaba en el norte el POS, en Magallanes, en el extremo austral, se constituía el Partido Socialista chileno y en Valparaíso se organizaba el Partido Socialista Obrero. Entre estas organizaciones no existía relación alguna.

² Federación Obrera de Chile. Se organiza en 1909 con el nombre de "Gran Federación Obrera de Chile" bajo una clara inspiración mutualista.

Las dramáticas exigencias planteadas por la crisis mundial, genera fragmentadas organizaciones en busca de una respuesta conducciona. Así, en la perspectiva de construir una vanguardia revolucionaria, nacen la Nueva Acción Pública (NAP), el Partido Socialista Marxista, la Acción Revolucionaria Socialista (ARS), la Orden Socialista, el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Socialista Unificado y otros grupos. En ellos militan hombres destacados, tanto en las asambleas estudiantiles, centros efervescentes de importantes sectores de la pequeña burguesía, como en las agitadas luchas obreras: Óscar Schnake, Marmaduke Grove, Eugenio Matte, Eugenio González, Salvador Allende, Augusto Pinto, Carlos Alberto Martínez, obreros los dos últimos, todos de antigua y combativa trayectoria.

Sobre estas organizaciones y bajo la conducción de estos revolucionarios se construye más tarde el Partido Socialista de Chile. La crítica situación económica, la anarquizante coyuntura política y la creciente movilización de las masas, los lleva a plantearse —prematura y románticamente— nada menos que la conquista del poder. La resuelta determinación de algunos sectores de las fuerzas armadas permitirá cristalizar esta aspiración.

El 4 de junio de 1932 nace en Chile una “República Socialista”, engendrada por la audacia, el coraje y el idealismo. Sólo sobrevivirá doce días, suficientes para despertar en las masas una voluntad de poder y convencerlas acerca de la necesidad de contar con una poderosa vanguardia orgánica.

Será precisamente un militar quien jugará un papel protagónico en aquella aventura; el comodoro del Aire, Marmaduke Grove Vallejo. Sus posiciones políticas habían encontrado profundo eco en los sectores más avanzados de las fuerzas armadas. Más tarde se convertiría en el líder nacional de un vasto movimiento popular de cuyo seno emergería el Partido Socialista de Chile.

Aquel episodio de la historia nacional, despreciado por los historiadores reaccionarios, despojado de sus causas y efectos circunstanciales y más allá de la inspiración voluntarista de sus ejecutores, sacudió profundamente la conciencia popular. Las decisiones revolucionarias adoptadas al calor de una voluntad creadora pusieron en contacto práctico a los trabajadores chilenos con la irrecusable justicia del socialismo y abrieron un ancho cauce donde confluían las inquietudes socialistas, hasta entonces dispersas.

La experiencia fugaz no se extingue en el fracaso. Sus conductores entendieron que éste era históricamente inevitable. El golpe

Madurará más tarde como combativa organización de la clase, dinamizada por el POS y las organizaciones anarquistas. Adhiere a la Internacional Socialista, perdiendo ascendiente e influencia sobre las bases obreras.

temerario abrió hermosas expectativas, pero no estaba afincado en las masas, ni existía tampoco el partido vanguardia, capaz de consolidarlas.

Los vacíos evidentes apuraron la respuesta a este urgente requerimiento social: nace así el 19 de abril de 1933, el Partido Socialista de Chile.

UN PARTIDO SINGULAR

El Partido Socialista emerge a las luchas políticas y sociales, definido por características únicas y singulares. Estos rasgos lejos de diluirse en el trascurso de su dilatada evolución, se acentuarán hasta diseñar una personalidad política e ideológica difícilmente identificable con la de otros partidos adscritos al movimiento comunista; integrantes de la Internacional Socialista, o fuerzas independientes del movimiento revolucionario latinoamericano.

Nace y se desarrolla como un partido revolucionario. En su gestación confluyen las más variadas corrientes del pensamiento progresista de la época, que no obstante aceptar con reservas el marxismo, se confunden sustancialmente en una común orientación revolucionaria y antimperialista. En la Declaración de Principios, aprobada en su primer Congreso, establecía: que acepta “el marxismo como método de interpretación de la realidad, enriquecido y rectificado por todos los aportes científicos del constante devenir social”; reconoce la lucha de clases; preconiza la instauración de “la dictadura de los trabajadores organizados”; define el carácter de clase del Estado; y adhiere al internacionalismo proletario, expresado en el continente, en una “Federación de Repúblicas Socialistas”. Este mismo documento, enfatiza ya en esa época acerca de la inviabilidad de un tránsito pacífico al socialismo, toda vez “que la clase dominante ha organizado cuerpos civiles armados y erigido su propia dictadura con el fin de mantener a los trabajadores en la miseria e impedir su emancipación”.

La dispersión ideológica de los primeros años, lejos de atomizarlo como alternativa política coherente o de arrastrarlo a posiciones reformistas, destino invariable de los movimientos populares latinoamericanos nacidos bajo similar signo, irá siendo progresivamente superada.

Receptivo a las influencias de las diferentes corrientes del pensamiento marxista revolucionario, fue al mismo tiempo obstinadamente

refractario al efecto "colonizador" de tales tendencias. Nunca aceptó vaticanos ideológicos.

El vigoroso ascenso de la clase obrera en los últimos cuarenta años, la insurgencia combativa del campesinado, el desarrollo unitario del movimiento sindical, las acciones reivindicativas de estudiantes y pobladores, acusan la presencia consecuyente del ps y su extrema sensibilidad frente a las variadas manifestaciones de la lucha de clases. Es pues, en esencia, un partido de masas. En ninguna etapa de su vida permanece como un grupúsculo revolucionario desligado de los trabajadores ni como expresión académica y elitista de sectores radicalizados de la pequeña burguesía. Enraizado profundamente en las masas, su política ha expresado las aspiraciones revolucionarias del pueblo chileno.

Desde su nacimiento, y este es otro de sus rasgos característicos, mostró una irrenunciable vocación latinoamericanista. Mucho antes del ejemplo magnífico de la Revolución cubana, entendió que el desarrollo de los movimientos revolucionarios en América Latina, no era factible desde posiciones autárquicas y que existía una ligazón sustancial que hacía interdependientes sus destinos. Mantuvo invariablemente una concepción "bolivariana" de las luchas independentistas continentales, ubicando el centro de su quehacer político en Chile y en América Latina. Esta vocación latinoamericanista se expresa clara y resueltamente en la ya mencionada Declaración de Principios: "La doctrina socialista es de carácter internacional y exige una acción solidaria y coordinada de los trabajadores del mundo. Para realizar este postulado, el ps propugnará la unidad económica y política de los pueblos de Latinoamérica para llegar a la Federación de las Repúblicas Socialistas del Continente."

Por ello, valoré al avance implícito en los movimientos nacionalistas y populistas del continente: PRI en México, APRA en Perú, ADECO en Venezuela, MNR en Bolivia, peronismo en Argentina. Buscó y estableció con estos movimientos una red de relaciones en función del papel progresista y antimperialista jugado en su época. El latinoamericanismo del ps chileno fue siempre una expresión activa y militante. Ininterrumpidamente, desde su nacimiento, promueve una política de vinculación directa con todos los líderes y fuerzas políticas que adscribieron posiciones antimperialistas, nacionalistas y populistas en el continente.

—Fue constante presión sobre los gobiernos burgueses para abrir las puertas del país a las organizaciones perseguidas. Los dirigentes desterrados de APRA, ADECO, del MNR, de los partidos socialistas de Uruguay, Argentina y Colombia, entre ellos Juan José Arévalo, Rómulo Betancourt, Antonio García, Juan Lechín, etc., encontraron en el

socialismo chileno el apoyo solidario y el vehículo eficiente para continuar sus luchas. Personalidades de la izquierda latinoamericana han ingresado al ps. En dos oportunidades el autor integró delegaciones que propusieron a Lázaro Cárdenas y otros líderes latinoamericanos acciones conjuntas a nivel continental.

—En la década del sesenta el ps entrega —en la medida de sus escasos recursos— un apoyo activo y concreto al movimiento guerrillero boliviano, uruguayo (tupamaros) y argentino (montoneros). Militantes socialistas se incorporaron a la guerrilla boliviana, y cuando ésta es derrotada, Allende, entonces presidente del Senado, interpone la influencia de su cargo para salvar la vida de los guerrilleros que sobrevivieron a la represión.

—Es conocida la participación del ps en la creación de OLAS, cuyo primer presidente fue precisamente Salvador Allende.

—Durante el gobierno de la UP, después de la matanza de Trelew, un grupo de militantes del ERP solicitaron asilo en Chile. La concesión de tal asilo —en la coyuntura que se estaba viviendo— ponía en peligro la política exterior de Chile. Planteada una contradicción entre las exigencias coyunturales de la política exterior y sus principios internacionalistas, el ps y el Presidente de la República optaron sin vacilación por estos últimos.

Fue y es un partido independiente. Nace levantando banderas autónomas frente a las grandes corrientes del movimiento obrero internacional. El Partido Socialista constituye una expresión nacional ajena a las directrices de las internacionales. Se marginó por igual de la II Internacional Socialdemócrata y de la III Internacional Comunista. Esta característica aparece claramente definida por el ex secretario general del partido, camarada Raúl Ampuero, en carta dirigida a la dirección política del pc. En ella precisa:

los socialistas rehusamos someternos a cualquier centro dirigente. Propiciamos en cambio, un multilateral, democrático y activo intercambio de ideas y experiencias, entre todas las fuerzas, movimientos, partidos y estados anticapitalistas, sobre la base de la más estricta igualdad de derechos, a fin de que cada cual pueda encontrar por sí mismo la vía más eficaz y rápida —y la menos dolorosa— para establecer la sociedad socialista.

Su conducta se encuentra enraizada en las particularidades nacionales y en las mejores tradiciones chilenas. Desde su origen reivindicó para el proceso revolucionario la historia más valiosa del país y de su realidad.

Óscar Schnake, primer secretario general y fundador del partido, enfatizaba en 1939 esta singularidad en los siguientes términos:

Nuestra orientación es profundamente realista. Pretendemos conocer la realidad chilena, interpretarla en su mecanismo económico y social y hacer del partido un instrumento capaz de cambiar esta realidad. Pretendemos movilizar al pueblo entero hacia una acción de segunda independencia nacional, poner todo lo bueno de nuestra tradición histórica, política y social, al servicio de esa acción; despertar la sangre, los gustos, los afectos, despertar lo heroico que ha fecundado estas tierras, para darle un valor moral, traducido en voluntad, espíritu de sacrificio y solidaridad, a nuestra acción. Vamos impulsando la acción de todo un pueblo hacia su liberación, por eso queremos darle un contenido nacional, que abarque nuestra manera de trabajar, gozar, sufrir y sentir para hacer un pueblo nuevo en todas sus facetas.

Desde estas posiciones ha entregado su contribución constante al internacionalismo proletario, partiendo del reconocimiento de la solidaridad natural con los intereses de la clase obrera y todos los oprimidos del mundo. Ha hecho suyas las grandes luchas de los pueblos de Bolivia, Brasil, Puerto Rico y Guatemala, y desde sus inicios —la definitivamente victoriosa de Cuba. Entregó su apoyo decidido al combate heroico del pueblo vietnamita, a Argelia soberana y a los pueblos árabes, en especial al palestino; en la búsqueda legítima del reconocimiento de su identidad como Estado y como nación. Al mismo tiempo ha mantenido cordiales y fraternales relaciones con el pcus, el PSUA de la RDA, la Liga de Comunistas Yugoslavos, el Partido del Trabajo de Corea y en especial con el pc de Cuba.

Hoy, en las difíciles condiciones que impone la derrota, ha llevado a niveles superiores relaciones fraternas y solidarias con el FLN de Argelia; con los partidos Baas de Siria y de Irak; con los partidos socialistas de Francia, Italia, Bélgica, Holanda, España, Grecia y Portugal; con los partidos comunistas de Italia y España; y ha entregado una adhesión resuelta y combativa al MPLA de Angola.

Por encima de las características señaladas destaca un rasgo proyectado decisivamente en el curso de la evolución política de Chile en los últimos veinte años: su sentido unitario y su resuelta conducta por imponer la unidad superior de la clase. Es esta concepción la que define —en mayor medida— su idiosincrasia histórica singular. Mientras otros partidos socialistas de América y Europa se debatieron en un anticomunismo consignista y agotaron a la clase obrera en enfrentamientos estériles, el socialismo chileno —desde 1956— sostuvo la necesidad estratégica del entendimiento de los dos partidos obreros, como piedra angular de una política de alianza.

Articuló con el pc un sólido mecanismo de entendimiento, identificando sus destinos en la grandiosa tarea de construir el socialismo, sin pretensiones alternativistas subalternas ni seguidismos inconsecuentes.

Este es un aspecto vital en la vida del partido. Su profundo sentido unitario no sólo se expresa en el hecho de ser el único partido socialista en el mundo que ha planteado como política propia y permanente, la unidad con un partido comunista, proposición formulada en el instante mismo de su fundación y mucho antes que la Internacional Comunista elaborara la política de Frente Popular. En el plano sindical, plantea desde el primer instante la necesidad de lograr la unidad de la clase, en una central que agrupe a todos los trabajadores, sin distinción. En el ámbito internacional emerge proponiendo la unidad política de las repúblicas latinoamericanas.

Finalmente, conviene destacar el espíritu altamente combativo que animó al partido desde su nacimiento. Se forja al calor de una aspiración revolucionaria, cual fue la "Revolución de Junio", y da sus primeros pasos combatiendo a sangre y fuego a las hordas del fascismo criollo. Un año después de su fundación organiza brigadas de defensa, que devienen más tarde en las Milicias Socialistas. Éstas disputan cotidianamente la calle al nazismo chileno, poderosamente organizado. Las "camisas de acero" se multiplican por miles, de Arica a Magallanes y sus mártires galvanizan al partido y estimulan su acción. La Juventud Socialista se forma en este clima combativo y revolucionario. Sus años de reflujo y decaimiento, no harán perder al ps este sello tan personal.

UN LARGO CAMINO DE MADURACIÓN

El Partido Socialista, como queda dicho, se fundó hace cuatro décadas en el contexto de una de las más graves crisis del capitalismo mundial, dramáticamente presente en Chile en la virtual paralización de su economía. El hambre se asomó por todas las latitudes y agitó las ansias de redención de las masas pauperizadas. Fue un período de notable ascenso de la lucha social, la cual alcanzó una expresión confusa y fragmentada en la instauración de la efímera "República Socialista", en junio de 1932.

El Partido Socialista aparece cuando el movimiento obrero sufría una honda crisis de dirección. Fue la respuesta histórica a la ausencia de un instrumento político capaz de interpretar las aspiraciones de la clase trabajadora. Esta exigencia histórica, la formula Óscar Schnake, su primer secretario general, en los siguientes términos:

El pueblo necesita un partido que por su organización, por los hombres que lo dirijan y su voluntad de acción, sea una garantía de su nuevo destino

político. Falta un movimiento político eficaz que resuma las esperanzas y la fe del pueblo... Es el Partido Socialista que nace como depositario de su unidad de propósitos, y llamado a realizar su unidad de acción... Nace como una necesidad y por eso es recibido como el Partido del pueblo. (Discurso pronunciado el 19 de abril de 1939.)

A su seno afluyen las diversas corrientes del pensamiento revolucionario de la época —marxistas, anarquistas, socialdemócratas, nacional populistas, trotskistas— cristalizadas en una común orientación revolucionaria y antimperialista.

Las tendencias disociadoras generadas por estas corrientes marcan en sus inicios un deambular político inestable. Sin embargo, ya las elecciones parlamentarias de 1937, lo sitúan entre los partidos más poderosos del país. Es un gigante inmaduro, cuyo itinerario estará sellado por un accionar contradictorio de aciertos y desaciertos, rubricados por períodos de acercamiento y alejamiento de las masas.

Cuando el pc, superadas sus posiciones "izquierdistas", plantea la constitución de un Frente Popular junto al pr —consolidado ya como el partido de la pequeña burguesía y de sectores no despreciables de la naciente burguesía y la oligarquía minera—, el Partido Socialista abandona su inicial política de independencia de clases y se incorpora a la alianza propuesta.

Sin lugar a dudas, el Frente Popular significó para nuestro pueblo —por primera vez en su historia— un avance democrático de extraordinario valor y se echaron las bases de su futura industrialización. La clase obrera fue beneficiaria de una política social amplia que multiplicó el área de sus derechos y conquistas. Pero los grandes problemas de la liberación nacional no fueron tocados. Para el Partido Socialista, el resultado de esta experiencia y de las sucesivas fue desastroso. Abandonado por las masas, desintegrado en fracciones personalistas, terminará prácticamente por desaparecer del organigrama electoral en la contienda presidencial de 1946. En aquella oportunidad, el ps se negó a apoyar al candidato radical-comunista, Gabriel González Videla, y obtuvo una ínfima votación.

Sin embargo, las razones que determinaron su nacimiento y su presencia en la vida política del país, continuaron presentes después de la gestión colaboracionista. Sus mejores hombres se empeñarán en la tarea de rescatar para el socialismo chileno sus perfiles auténticos y reafirmar su vigencia histórica. En 1943, frente al gobierno radical de Juan Antonio Ríos, Salvador Allende plantea la imperiosa necesidad de que el ps retome la vanguardia de la lucha postergada:

La guerra ha llegado a un punto en que se evidencian ya con violencia, las contradicciones sociales del frente democrático, y nuestro país no escapa ni

puede escapar a enfrentarse con ellas. No somos partidarios de exagerar ni contribuir a trizar la solidaridad de todos los hombres y sectores que están en lucha contra el fascismo; pero tampoco podemos renunciar a conquistar para los trabajadores manuales e intelectuales, los derechos y las reivindicaciones a que legítimamente son acreedores. (Carta al PC chileno, 1943.)

El año 1946 se realiza en Concepción el XI Congreso General del ps. A su cabeza se coloca una dirección joven, expresión de la voluntad de reconstruir el partido de acuerdo a sus aspiraciones y doctrinas originales, superando los vicios que le habían enajenado el respaldo de los trabajadores. Lideriza el nuevo sector dirigente, el secretario general de la juventud, Raúl Ampuero.

Comienza entonces el ininterrumpido proceso de recuperación. Por primera vez el socialismo chileno define seriamente sus fundamentos teóricos y programáticos. Se estructura una organización sólida, ajena al caudillismo, o al oportunismo inmediatista, característica del período anterior, y se impone una conducta política responsable y consecuente, todo lo cual permite retomar la adhesión de importantes sectores populares.

El partido empieza a vivir un proceso vigoroso de maduración política y revolucionaria. En julio de 1957, se celebra el llamado Congreso de Unidad, que homogeniza al socialismo chileno en torno a la línea política de "Frente de Trabajadores". Esta concepción, presente en los inicios del partido y concebida como una táctica de lucha de la clase obrera a partir de una correcta caracterización de la revolución chilena, rescata la autonomía del proletariado, y reclama la unidad política y social de los trabajadores.

Como resultado de esta línea, se consolida un entendimiento básico con el Partido Comunista, en el llamado Frente de Acción Popular (FRAP), que de inmediato atrajo la adhesión entusiasta de vastos sectores de obreros, campesinos, empleados, intelectuales y juventud. En las elecciones presidenciales de septiembre de 1958, dos años después de su fundación, socialistas y comunistas estuvieron a punto de conquistar el gobierno. La mínima diferencia de votos que nos privó de la victoria permite medir físicamente el poderío del movimiento estructurado tras una correcta política de alianzas.

Sólo en el Congreso de Chillán en 1957, el partido se declara leninista, definición que recoge con atraso el quehacer concreto de la mayor parte de su existencia. Tal declaración no es sino la reafirmación de un principio que ya formaba parte de su acervo político ideológico. El proceso de constante superación teórica, iniciado en 1946 en Concepción, culmina en el Congreso de Chillán, donde defi-

nitivamente precisa su posición frente a los temas más candentes de la problemática revolucionaria, nacional y continental.

En el ínterin fue soldada la alianza socialista-comunista, una experiencia excepcional de colaboración entre dos partidos obreros, sobre bases de igualdad y de respeto de sus diversidades. Jamás en la historia política de Chile, y pocas veces en la del movimiento obrero internacional, se dio el caso de un bloque político tan compacto. Su solidez se acentúa frente a las exigencias de la realidad chilena, posibilita la unidad de la clase obrera y del movimiento popular, y construye a partir de ella la victoria de 1970.

APORTES AL DEBATE TEÓRICO

La lucha enfrentó a los partidos populares a la necesidad de despejar sus posiciones en torno a algunas cuestiones cardinales. Éstas han incidido en la evolución política de los últimos años con mayor o menor intensidad, en períodos y coyunturas diferentes, pero en todo caso siempre estuvieron presentes, sea como factores de unidad o como elementos disociadores.

Cuatro grandes temas han enriquecido el debate ideológico en el seno de la izquierda: la existencia y obediencia a un centro ideológico, la definición del carácter de la revolución chilena, la determinación de la vía de acceso al poder y la concepción de una adecuada política de alianzas.

Frente a cada uno de ellos, el Partido Socialista formuló sus posiciones conservando siempre una sorprendente constante histórica. A pesar de las agitadas vicisitudes de su trayectoria política, la respuesta socialista mantiene una básica consecuencia ideológica.

Definiéndose como un partido marxista, defendió obstinadamente en su origen y desarrollo, la plena autonomía de los partidos y movimientos revolucionarios para elaborar sus propias concepciones tácticas y estratégicas. Es su mérito haber comprendido, hace cuarenta años, que estas concepciones sólo podían ser plasmadas a partir de la valoración científica de cada realidad nacional y del enraizamiento del partido en las singularidades de esa realidad.

Desde esta perspectiva, el ps recusó tempranamente su adscripción a cualquier "centro de conducción", estimando que la presunta infalibilidad de los recetarios generales atentaba contra la diversidad

misma de la vida. Los pueblos transitan por estadós de desarrollo disímiles y hasta contrapuestos. Cada uno de ellos impone, a la tarea de construir el socialismo, métodos, vías, formas de lucha y características diferentes. Sin negar la existencia de rasgos comunes en toda revolución, y sin desconocer las leyes generales de la historia, el socialismo chileno entendió y entiende que ellos se configuran en las diferentes prácticas revolucionarias, y no en la determinación, más o menos rígida, de algún pontificado indiscutido.

Sintiéndose parte de las fuerzas socialistas del mundo y solidario de su destino, propició un intercambio activo, creador y democrático de experiencias, ideas y concepciones, sobre la base del respeto mutuo y de una plena igualdad de derechos.

Hoy día, importantes partidos del movimiento comunista internacional reclaman esa autonomía cuya trascendencia el socialismo chileno vislumbró en el instante mismo de su gestación.

Y no parece éste sólo un problema de principios. Desde una perspectiva más pragmática, se constata la importancia de que las masas perciban la independencia de sus vanguardias revolucionarias. La experiencia ha demostrado que lo prefieren así.

Ésta es una cuestión por largos años mantenida en el centro del debate revolucionario latinoamericano. ¿Deberá ser la nuestra una revolución democrático-burguesa o una revolución socialista?

Desde luego, el carácter de la revolución no se determina teórica o subjetivamente. No lo decide la voluntad apriorística de los individuos o de las fuerzas revolucionarias, sino es el producto del análisis objetivo de la sociedad. Es el grado y naturaleza del desarrollo capitalista en cada caso específico y la estructura y dinámica de las clases sociales, particularmente el papel de las burguesías nacionales, lo que define en esencia el carácter de la revolución.

A partir de esta afirmación y del examen concreto de la sociedad chilena, el Partido Socialista estimó en el pasado, y estima hoy, que las transformaciones no corresponden en modo alguno a la llamada "revolución democrático-burguesa".

En Chile, con una formación histórica capitalista dependiente y una avanzada fase de monopolización, la burguesía no estaba ni está en condiciones de realizar las tareas —aún inconclusas— correspondientes a esa eventual etapa. La revolución democrático-burguesa fue insoslayable en los países capitalistas altamente desarrollados. Las burguesías nacionales desempeñaron allí un papel, imposible de reiterar en los países subdesarrollados, donde desde su inicio —así ha ocurrido en Chile— amarraron su destino a las oligarquías locales y a los imperialismos, convirtiéndose en clase dependiente, o dicho de otro modo, en clase dominante-dominada.

Los sectores más importantes y dinámicos de la burguesía chilena están umbilicalmente ligados al capital extranjero, impidiéndoles —este hecho— encabezar la lucha antimperialista.

En febrero de 1964, el entonces secretario general del ps, Raúl Ampuero, puntualizaba la posición socialista frente al carácter de la revolución, en los siguientes términos:

Con el tiempo dos concepciones se perfilan claramente en el campo de la política popular. El Partido Comunista, en una reiteración más o menos mecánica del cuadro de 1938, persistía en la necesidad de sostener un amplio frente democrático o de liberación nacional que comenzara en la extrema izquierda con los Partidos obreros y terminara en el centro con los radicales y demócratacristianos, sin excluir en algunos momentos, la participación eventual de ciertos grupos liberales. Tal línea se afirmaba en el esquema teórico tradicional de algunos círculos marxistas al disociar en dos grandes fases el desarrollo revolucionario en los países dependientes: la etapa democrático-burguesa y la etapa socialista. Por su propia naturaleza, en la primera cabría a la burguesía nacional un papel decisivo si no el principal. Los socialistas, por nuestra parte, vivimos muy intensamente la experiencia del Frente Popular, para ignorar los procesos operados durante esos años. Cada vez con mayor resolución empezamos a sostener una concepción nueva, que negaba a la burguesía chilena como clase, toda posibilidad real de conducir la lucha antimperialista y antifeudal, aún de participar en ella con lealtad y consecuencia.

De tal manera, los socialistas concebimos el proceso revolucionario como una marcha ininterrumpida, como un proceso único y continuo, que cumple en su primera fase tareas eminentemente antimperialistas y democráticas, pero que inevitablemente desemboca en la construcción de una sociedad socialista. Así entendido el proceso asume desde sus inicios un carácter socialista. Es ésta la concepción delineada por el Programa Básico del Gobierno de la UP, al caracterizar a Chile como un país “capitalista, dependiente del imperialismo”, y señalar que “el objetivo central de su política es remplazar la actual estructura económica, terminando con el poder monopolista del capital nacional y extranjero y del latifundio para iniciar la construcción del socialismo”.

Entendemos que esta concepción no es válida para los países coloniales y semicoloniales, donde las burguesías nacionales están en conflicto con los intereses imperiales. En cambio, sí nos parece vigente para la mayoría de los países de América Latina, en los cuales el grado de avance de las relaciones capitalistas y su condición dependiente, constituye un impedimento insalvable para el desarrollo de la sociedad.

El Partido Socialista tiene el mérito de haber caracterizado hace años la sociedad chilena como una formación histórica capitalista dependiente, definición ampliamente ratificada por la literatura científica posterior. A partir de esta afirmación, la burguesía nacional, precisamente por su condición dependiente, se encuentra en la imposibilidad de ser fuerza dirigente en la lucha de liberación. En América Latina, esa lucha y la revolución social, son partes integrantes y mutuamente complementarias de un mismo proceso. En esta situación la burguesía, como clase, no está en posición de detentar el liderazgo ni de la revolución liberadora ni de la revolución social. Solamente el proletariado puede asumir el papel de fuerza hegemónica.

Hasta el advenimiento del Gobierno Popular en 1970, el problema de las vías de acceso al poder parecía tener un carácter más bien adjetivo. El desenvolvimiento seguro y constante del movimiento popular en los marcos de una institucionalidad liberal, aparentemente amplia y flexible, tendía a hacer irrelevante y académica una discusión profunda del tema.

Las tribulaciones del proceso revolucionario y su desenlace posterior, lo rescatan del plano meramente teórico, para otorgarle una definitiva y, podríamos decir, dramática prioridad.

No obstante, el Partido Socialista había asumido posiciones. Primero, desde una general aceptación de las concepciones teóricas dominantes, y más tarde, en forma más precisa, a partir del análisis concreto de nuestra realidad sociopolítica. Entre una y otra existe un hilo conductor que lo lleva siempre a denunciar la inviabilidad de la llamada "vía pacífica al socialismo".

La experiencia obstinada confirmaba la inmutabilidad de las leyes generales del marxismo. En ningún lugar del mundo las clases dominantes se han dejado expropiar sin recurrir a la violencia. Por el contrario, donde quiera que los pueblos alteraron la normalidad de su dominación, se volcó sobre ellos la más extrema crueldad.

En América Latina la práctica ha sido inequívoca e inveterada. La violencia estuvo siempre presente, ya en las querellas interburguesas, ya en las luchas sangrientas de sus caudillos oligárquicos, o en la afirmación del dominio imperialista. El saldo fue siempre estremeedor. En Colombia, en un lapso no superior a diez años, la violencia del sistema sacrifica a más de trescientos mil hombres. En México, no menos de un millón de campesinos son asesinados en la larga lucha por la liberación y la tierra. En Centroamérica y Brasil las oligarquías gobernantes afirman su poder en la masacre periódica de obreros, de estudiantes y campesinos. En mayor o menor medida ello ocurre en cada rincón del continente. Por su parte, los marines norteamericanos irrumpen a sangre y fuego, cuantas veces fue menester,

ya para rapiñar territorio, ya para hacer respetar los “dividendos justos” de sus inversionistas. La historia de América Latina es, pues, una historia de sangre y de terror.

La existencia de una sólida estructura democrática, la vigencia secular de una institucionalidad sólo ocasionalmente interrumpida, y la presencia de un sistema mucho más evolucionado que otros del continente, no eximía a los revolucionarios chilenos de la obligación de examinar el significado de la violencia en nuestra historia. Suponerla apriorísticamente ajena a “las tradiciones nacionales”, fuera de tabla en la discusión doctrinaria, fue un error irreparable.

Siempre, de una u otra manera, en el seno del socialismo chileno, pesó una honda desconfianza acerca de las “bondades” de nuestro sistema político. Se entendió que el régimen liberal, representativo, flexible y apto para modernizarse —así lo había demostrado— dejaría de ser tal para la reacción en cuanto la insurgencia popular cuestionara seriamente la dominación burguesa-imperialista.

En 1961, el secretario general del partido reiteraba este escepticismo en los siguientes términos:

Los socialistas, sabemos que antes, coetáneamente o después de un proceso electoral —no estoy haciendo profecías— pero en algún instante, las clases privilegiadas de este país van a utilizar la fuerza para paralizar la ofensiva del pueblo sobre el poder, para desconocer los resultados electorales, para restringir su voluntad de decisión en los comicios. No sé cuándo ni dónde, pero la experiencia de los últimos años demuestra que la oligarquía latinoamericana no titubeó nunca en romper la legalidad en la vana tentativa de conservar una sociedad condenada.

En 1967, siendo elegido secretario general Aniceto Rodríguez, se celebró en Chillán el XXII Congreso del partido. Allí, por primera vez, llenando uno de los grandes vacíos del análisis político partidario, se abordó el problema estratégico de las vías de acceso al poder, no considerado en el desarrollo de la tesis del “Frente de Trabajadores”. A contar de un diagnóstico acertado —los hechos demuestran hasta la saciedad la ineptitud de la institucionalidad burguesa para tolerar el acceso al poder del proletariado— se concluyó que la vía armada era la vía correcta en el contexto de nuestra realidad. Que el quiebre definitivo del Estado burgués, cualquiera fuera la duración de una eventual vía pacífica, se definiría —en última instancia— en forma violenta.

El documento político aprobado expresaba en su parte medular: “La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y

económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista. Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada.”

Esta conclusión, sin olvidar la excepcional evolución política chilena, consideraba sus debilidades intrínsecas frente al desarrollo de un proyecto revolucionario. Por eso el mismo documento, al explicitar el pensamiento anterior, señala:

Necio sería negar que Chile se destaca dentro del Continente por la larga trayectoria de su movimiento popular, que en las variadas circunstancias de su historia, merced a sus luchas y esfuerzos, ha logrado estructurar en nuestra patria un sistema político considerablemente más evolucionado y maduro que el resto de las hermanas repúblicas. Y por eso mismo, es en Chile también donde se hacen más evidentes los límites y las inconsecuencias de estos sistemas políticos formalmente democráticos. La experiencia de hoy y la de ayer —como ya dijimos— demuestra que el sistema democrático se mantiene hasta el momento en que las clases dominantes empiezan a considerar amenazados sus intereses fundamentales, y cuando eso ocurre, no vacilan en romper el esquema institucional que antes les servía para defender por la fuerza su situación privilegiada.

Admitimos que la imprecisa redacción de la concepción central del documento, no reflejó adecuadamente la importancia de otras formas de lucha, de extraordinaria significación en Chile. La evolución del movimiento popular, su grado de organización, su enorme poderío, son justamente expresión de esas formas de lucha. La lucha de masas, la lucha ideológica y el uso de las instituciones burguesas, permitieron la creación de un sólido bloque de izquierda.

En esencia, el diagnóstico estratégico elaborado en Chillán fue correcto y no corresponde a “un infantilismo revolucionario” —como se ha pretendido— o a la adopción de una política “izquierdista producto de concepciones foquistas”. Por el contrario, creemos que otra sería nuestra suerte y otro el destino de la revolución chilena, si hubiéramos sido consecuentes con ese diagnóstico y hubiéramos dispuesto de la capacidad orgánica para implementarla.

Una reflexión final sobre este tema, pertinente a partir de la tendencia a identificar la previsión racional del uso de la violencia con el anhelo subjetivo de provocarla. Ningún partido revolucionario desea —*per se*— la violencia, ni la exalta a la categoría de un imperativo político, ni se declara “por principio” partidario de ella. En la bús-

queda de una sociedad superior aspiramos precisamente a abolirla. Sin embargo, la historia nos enseña porfiadamente que la fuerza es el recurso último de las clases privilegiadas. Y lo hemos aprendido con la sangre y el dolor de muchos pueblos, entre ellos el nuestro. De allí que no sería revolucionaria la dirección que trasformara la legítima y noble aspiración de construir pacíficamente el socialismo, en el objetivo esencial, último e inmodificable de su acción.

El 29 de febrero de 1956 se constituyó el Frente de Acción Popular (FRAP). Socialistas y comunistas configuraron, por primera vez en la historia del país, un bloque político sobre una base clasista y revolucionaria. El nacimiento del FRAP cerró un largo ciclo en la evolución del movimiento popular chileno, cuyo balance global era negativo. Al mismo tiempo inaugura un período de ascenso constante de la clase trabajadora tras una formulación estratégica correcta. Es la "gran marcha", que concluirá catorce años más tarde en una de las victorias más trascendentes del movimiento obrero internacional.

Sobre la base del esquema tradicional, que concibe la existencia de dos "tiempos" en el desarrollo revolucionario de los países dependientes: uno democrático burgués y otro socialista, el PC persistía en una alianza con la llamada burguesía progresista. Así se formulaba la tesis del "Frente Democrático".

Los socialistas, por su parte, duramente impactados por las experiencias colaboracionistas de los años anteriores, y con una distinta concepción del carácter de la revolución chilena, propiciaban un entendimiento que rescataba para el proletariado su autonomía y papel conduccional.

En definitiva, el FRAP se estructura bajo el signo de esta política de alianza, concretando en los hechos un amplio frente de clases, en primer lugar con los campesinos; y en segundo lugar con sectores progresistas de las capas medias, intelectuales y juventud.

Como dijimos, en 1936 los partidos Socialista y Comunista habían confluído —junto al Partido Radical— en la integración del Frente Popular. Este proyecto era la transcripción nacional de la línea diseñada por Jorge Dimitrov, en el VII Congreso de la Internacional Comunista, materializado casi simultáneamente en España y Francia.

Entre 1936 y 1956 ambos partidos vivieron alternativas de unidad y distanciamiento. Agotada prematuramente la experiencia de Frente Popular, surgieron discrepancias sustanciales, que obstruyeron por largos años la unidad de la clase. Durante mucho tiempo, tanto el PS como el PC contrajeron alianzas y compromisos separados, temporales y precarios, con distintas fracciones de la burguesía.

En 1946, el Partido Comunista insiste en el compromiso frentista al constituir junto con el Partido Radical la denominada Alianza Democrática, cuyo candidato —Gabriel González Videla— es elegido presidente de la República. Esta vez las consecuencias fueron más funestas. Apenas seis meses después de instalado el nuevo gobierno, en el cual inicialmente participaron ministros comunistas, radicales y liberales, se desató una feroz represión, especialmente sobre el Partido Comunista, el cual fue colocado fuera de la ley. No parece ocioso recordar que en Chile, Francia, Italia, Finlandia y Bélgica, los partidos comunistas son expulsados de las combinaciones gubernativas de que formaban parte casi simultáneamente. En marzo de 1947, Gabriel González Videla pide la renuncia de los ministros comunistas y declara el partido fuera de la ley. Spack lo hace en Bélgica en el mismo mes; Ramadier en Francia en mayo del mismo año; mientras De Gasperi hace lo propio en Italia, en la misma época, al regreso de su viaje a los EU. Las instrucciones del imperialismo fueron cumplidas de inmediato y oportunamente en países y latitudes absolutamente diferentes.

Por su parte —en 1952— el ps ve en la insurgencia del multitudinario movimiento populista liderizado por Carlos Ibáñez, la posibilidad de orientarlo tras banderas antimperialistas. Si bien el apoyo a Ibáñez estableció de hecho una alianza con amplios sectores medios y populares, en definitiva el gobierno del “General de la Esperanza” se agotó en una nueva frustración.

En resumen, durante veinte años (1936-1956), el movimiento popular se desgastó en una pertinaz política de coaliciones electorales sin sentido ni destino. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué beneficios se lograron? ¿Cuáles son los avances?

Exceptuando la experiencia del Frente Popular, históricamente insoslayable en el contexto de la guerra mundial contra el fascismo, y cuyo mérito principal fue en Chile haber quebrado definitivamente el dominio oligárquico e inaugurado el proceso de industrialización nacional, el saldo de dos décadas de colaboracionismo fue categóricamente negativo. El sometimiento de los objetivos históricos del proletariado a caudillos populistas y a direcciones burguesas reformistas, se tradujo en derrotas y frustraciones, en represión, corrupción y descrédito.

En Chile así ocurrió. Debilitadas las vanguardias revolucionarias sobrevino un grave retroceso no fácil de remontar. La alianza con el pr en 1946, no impidió —una vez iniciada la guerra fría— la aplicación al pc de una ley de excepción, la desarticulación de sus cuadros y la proscripción de la vida civil. Las alianzas, compromisos y pactos circunstanciales y oportunistas del ps hasta ese mismo año lo arrasaron, por su parte, a su casi total desintegración.

Hasta ese entonces el pr, en cuanto expresión mayoritaria de las

capas medias, jamás aceptó apoyar un candidato de los partidos populares, ni siquiera en 1958 o 1964, cuando ya nada tenía que hacer. Sólo después de un largo y difícil proceso de depuración orgánica e ideológica y una vez erradicados sus sectores reaccionarios, accedió a un proyecto socialista, impulsado por los partidos del proletariado.

De allí la significación profunda, la trascendencia histórica y revolucionaria del FRAP.

Ya lo hemos dicho. Conforman el bloque político revolucionario más sólido, estable e ideológicamente compacto, de América Latina. Su estatura política nace de una concepción estratégica correcta, que interpreta y moviliza a capas muy amplias de la población, y del hecho de haberse constituido en la expresión orgánica y unitaria de la clase obrera y de sus intereses históricos.

Durante catorce años orienta los combates de las masas por la conquista del poder, alimenta el desarrollo vigoroso de su conciencia de clase y se erige en única y real alternativa al poder burgués, gravitando decisivamente en todo el quehacer nacional. Bajo su condición, se suelda la unidad política de la clase obrera, tras sus partidos de vanguardia; y su unidad social, en la Central Única de Trabajadores, fenómeno sin precedentes en otro país del mundo capitalista. Surge así una opción auténtica de poder revolucionario. Su influencia sobre el conjunto de la sociedad, llega al punto de permitirle "internalizar" en ella sus más importantes banderas de cambios estructurales. La nacionalización de las riquezas básicas, la reforma agraria, la redistribución del ingreso, la planificación de la economía, se incorporan al debate nacional y en definitiva son aceptadas por el conjunto de la nación, incluyendo a la clase hegemónica.

LA LÍNEA DE "FRENTE DE TRABAJADORES"

Veinte años de colaboración con fracciones de la burguesía condujeron al movimiento popular a la frustración y a la derrota. Catorce años de lucha, tras un proyecto propio, construyeron la victoria de 1970 y permitieron la irrupción de un proceso revolucionario que colocó al pueblo en el umbral de la conquista del poder.

Éste fue el resultado —en Chile— de la aplicación de una justa política de alianzas de clases, en la búsqueda de una perspectiva verdaderamente revolucionaria.

Ésta se diseña sobre la definición del carácter socialista de la revolución, que liga en un proceso ininterrumpido las tareas democráticas y antimperialistas con las tareas socialistas. En consecuencia se pro-

nuncia por un programa antimonopólico, antilatfundista y antimperialista, cuya implementación pasa por fases diferentes, y donde los rasgos socialistas se acentúan sostenida y progresivamente. Recusando a la burguesía nacional —dependiente del imperialismo y carente de autonomía para asumir tareas contrarias a él— señala como los únicos llamados a protagonizar la lucha contra el viejo orden: al proletariado, a los campesinos, al subproletariado marginal, a la pequeña burguesía progresista, a la intelectualidad y a los estudiantes.

El “Frente de Trabajadores” supone el agrupamiento de las masas en cuanto clases explotadas, para enfrentar a la clase explotadora. Centra entonces su política en la necesidad de rescatar el papel autónomo del proletariado como fuerza hegemónica de un bloque socio-político.

La concepción de “Frente de Trabajadores” no es una creación tardía en la vida del partido, novedosa y ajena a su acervo ideológico. Ya en sus primeros documentos encontramos el llamado reiterado a la formación de un frente revolucionario, construido a partir de la hegemonía e independencia de los trabajadores. Hasta la constitución del Frente Popular —1936—, se defienden como postulados básicos, el carácter socialista de la revolución y la conformación para tal efecto de un “Frente de Trabajadores”, con plena autonomía de clase.

Será precisamente la negativa experiencia colaboracionista la que pondrá en evidencia la corrección histórica de las posiciones iniciales: las alianzas pequeña burguesía-proletariado, a las cuales este último se incorpora invariablemente desde posiciones de subordinación, lo obligaron a renunciar a su propio proyecto político, limitándolo a actuar como furgón de cola de la burguesía y simple masa de maniobra electoral de ésta.

La línea adoptada en 1957 —que desde entonces caracteriza ininterrumpidamente la conducta de nuestro partido— recoge creadora y acertadamente los principios básicos y la experiencia de la lucha de clases en las décadas anteriores, a la par que la voluntad autonomista y unitaria de la clase obrera.

En la lucha ideológica, practicada en el seno del movimiento revolucionario chileno, la línea de “Frente de Trabajadores” constituyó la contrapartida natural frente a la línea del PC de “liberación nacional”. A partir de la etapa democrático-burguesa, como antesala necesaria de la transición al socialismo, la tesis del PC sobre política de alianzas reservaba la iniciativa a los partidos de la pequeña burguesía reformista (PR primero, más tarde el PDC), cuya misión sería modernizar el Estado y obligar a la burguesía nacional a cumplir su papel histórico clásico.

El rechazo que la tesis socialista supone a la práctica tradicional de

alianzas, ha sido interpretado como la expresión de una política aislacionista de la clase obrera, bajo el pretexto de cautelar la pureza de su formulación estratégica. Esta apreciación es incorrecta. Todos los documentos del partido, elaborados con posterioridad al Congreso de 1957, reiteran la amplitud de los sectores sociales que tienen cabida en la constitución del frente propuesto. Tal amplitud se materializó en la constitución del FRAP primero y de la UP más tarde. Ambas coaliciones demostraron históricamente el vasto espectro social que el proletariado es capaz de dinamizar en torno a su propio proyecto.

Esta nueva concepción política impactó profundamente la conciencia de las grandes masas urbanas y campesinas. Les restituyó la confianza perdida y las movilizó combativamente alrededor de un centro polarizador de extraordinaria potencialidad revolucionaria, el cual alteró desde 1956 —decisivamente— el cuadro político nacional.

El FRAP, en cuanto coalición política conformada en torno al eje central de los partidos de la clase, demostró cómo el proletariado, alineado tras un proyecto político trascendente y comprometido en una gran empresa revolucionaria, es capaz de movilizar importantísimos sectores de la opinión pública, sin lesionar su autonomía ni su papel dirigente. Sumergido, en cambio, bajo un proyecto y una dirección burguesa o pequeño burguesa, mediatiza sus propias alternativas y luchas.

Durante las dos últimas décadas, el campesinado y la clase obrera constituyeron un poderoso polo de atracción. Socialistas y comunistas enfrentaron juntos todos los eventos electorales, sindicales, estudiantiles y en general políticos de la época. Manteniendo sus diferencias, unidos en la diversidad de sus concepciones, son beneficiarios por igual de un crecimiento sostenido y parejo y de una similar dimensión electoral. La extraordinaria influencia irradiada por la resuelta unidad de los partidos obreros, tiene un inmediato reflejo en el proceso de decantación interna operado en el viejo Partido Radical, así como el inicio de un proceso similar en las filas del PDC. En 1969, una parte cualitativamente importante de la juventud demócrata-cristiana se escinde para dar nacimiento al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), que de inmediato reconoce filas junto a los partidos populares. Esa poderosa atracción continuará expresándose incluso después de la victoria popular en 1970, cuando —esta vez— la IC se desgaja de la Democracia Cristiana y se integra al bloque dirigido por los partidos obreros.

Finalmente, nos parece necesario precisar que en rigor la línea de "Frente de Trabajadores" no ha excluido ni excluye la posibilidad de concertar alianzas con los partidos de la pequeña burguesía. Hasta 1970, e incluso hasta nuestros días, no se ha dado en Chile alternativa

alguna de alianza como no fuera sobre la explícita renuncia de la hegemonía de los partidos obreros. Los llamados ambiciosos a constituir amplios frentes de lucha con sectores no proletarios, invariablemente “faltos de eco”, se diluyeron en pactos electorales intrascendentes, subalternos y oportunistas, o lisa y llanamente, no se materializaron.

VIGENCIA HISTÓRICA DEL SOCIALISMO CHILENO

Podemos afirmar sin jactancia, que el ps buscó afanosamente un camino para la transformación de Chile desde posiciones clasistas y revolucionarias. Su conducta política en los últimos veinte años —más allá de errores y debilidades— ha estado determinada por una correcta interpretación marxista-leninista de la realidad nacional y de la estructura dinámica de la lucha de clases. A partir de ella precisó sus posiciones fundamentales: rescatar el papel protagónico que corresponde al proletariado en la liberación económica y social del país; afirmar que esta liberación sólo es posible en el contexto de una revolución socialista, en cuyo seno no están compartimentadas las tareas democráticas y socialistas; finalmente, concluir que no es factible el tránsito pacífico al socialismo en el ámbito de la realidad concreta nacional y continental. La derrota del proceso revolucionario en 1973 no cuestionó estas aseveraciones. Por el contrario, las confirmó de manera trágica. Ellas estuvieron a prueba durante los tres años del Gobierno Popular. En el marco del Programa Básico de la up y afianzando en su esencia revolucionaria, el ps reiteró una concepción estratégica que suponía la defensa de la revolución, tomando incluso la iniciativa si ello era necesario. Puede afirmarse, no sin razón, que una vez más nuestro partido estuvo acertado en sus previsiones estratégicas, pero no en sus implementaciones tácticas.

Los vicios y debilidades del ps han estado a flor de tierra. Hemos hecho un esfuerzo consciente y sostenido por superarlos y no hemos tratado de ocultarlos. A lo largo de su vida, ha caído en contradicciones inherentes a una sostenida y combativa actividad política; pero tanto su desarrollo ideológico como su quehacer en la realidad nacional, se desplegaron en torno a un eje central, cuyos lineamientos esenciales han sido tenazmente respetados en el curso de las últimas dos décadas.

Creemos que la experiencia concreta de la vida política chilena, vino casi invariablemente en auxilio de las posiciones socialistas. A despecho de quienes ven en ellas la preeminencia de una ideología pequeñoburguesa o la simple carencia de “rigor científico” en sus análisis, la historia se ha encargado porfiadamente de preservar su vera-

cidad. Los testimonios son variados y a prueba de cualquier intento de tergiversación.

La derrota misma reafirma la certeza de su vigencia. La contribución del socialismo chileno a la evolución política del país, y la más específica, al proceso revolucionario encabezado por la UP, supera en mucho sus errores. Sus banderas permitieron ayer canalizar las grandes esperanzas de las masas chilenas, vinculándolas a la lucha continental. Fue el cauce insustituible a través del cual se impidió que sectores significativos de trabajadores, intelectuales y jóvenes fueran ganados para posiciones reformistas o "izquierdistas". Fue su insistencia, tozuda e intransigente a veces, la que más influyó por imprimir un sello revolucionario al Programa del Gobierno y a sus decisiones fundamentales.

La vigencia del PS no está determinada sólo por su largo gravitar en la vida nacional, ni por la generosa lealtad de sus militantes, ni por sus glorias de antaño, ni por los mártires entregados a la lucha contra el fascismo. Todo ello cuenta, por cierto. Pero su proyección política en las luchas de hoy y del futuro, está avalada por su historia, por su íntima ligazón con las aspiraciones de las masas y, fundamentalmente, por la validez de sus formulaciones ideológicas. Es ello lo que le otorga especificidad histórica, personalidad política y un perfil sólidamente enraizado en la vida de la nación.

Ese patrimonio de ideas y sentimientos determina, pues, su presencia insustituible en los combates futuros. Cualquiera sea la extensión y profundidad del esfuerzo fascista por erradicarlo de la realidad chilena, inevitablemente reaparecerá como una fuerza decisiva en el acontecer del país.

2. LA UNIDAD POPULAR: UN PROGRAMA PARA CHILE

A mediados de 1969, los partidos Socialista y Comunista dirigieron una carta pública a los partidos y movimientos que más tarde convergían en la fundación de la Unidad Popular, invitándoles a constituir un bloque político capaz de ofrecer a Chile una alternativa nacional, popular y revolucionaria.

El llamado fue acogido. Algunos días después dirigentes de organizaciones representativas de diversas corrientes revolucionarias y progresistas iniciaban el estudio y redacción del futuro Programa Básico de Gobierno.

Culminaba así una etapa perseverante de desarrollo y maduración del movimiento popular chileno. La UP surge como una exigencia natural de este proceso, en el marco de una crisis de dominación del sistema burgués imperialista, del fracaso rotundo de una experiencia reformista, y en instantes en que el ascenso de las masas busca sobrepasar las formas capitalistas dependientes de desarrollo.

En el plano político y social, la Unidad Popular emerge como la continuación del antiguo Frente de Acción Popular (FRAP) creado en 1956. La incorporación de otras vertientes del pensamiento democrático otorga a la unidad de los trabajadores una nueva dimensión y la amplitud necesaria para encarar, más allá de una etapa transicional, la construcción del socialismo.

Al igual que en el FRAP, catorce años antes, el centro de gravedad continúa girando en torno a los partidos del proletariado.

El pueblo visualiza en la nueva alternativa una fuerza poderosa, socialmente amplia e ideológicamente homogénea, cuyo proyecto político resume los intereses y las aspiraciones de las grandes mayorías nacionales y, por sobre todo, de las capas sociales más postergadas.

Así, el movimiento popular se ve fortalecido con la incorporación de importantes expresiones del pensamiento laico y cristiano de avanzada. El Partido Radical, representante de la pequeña burguesía, sacude su lastre reaccionario impulsado por una nueva visión de la realidad nacional. Culmina así un largo proceso de maduración ideológica, el cual le permite afianzar su personalidad política y desde sus antiguas posiciones racionalistas y positivistas, adherir a una empresa histórica de carácter socialista. Lo mismo ocurre con el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), portavoz de los sectores cristianos, también identificado con un proceso de contenido

socialista. Este movimiento se desgaja de la Democracia Cristiana después del vano intento de arrastrarla a un compromiso de transformación revolucionaria.

Si bien la incorporación de estos partidos no altera cuantitativamente la antigua composición del FRAP, preciso es reconocerlo, determinó el triunfo electoral de 1970, y su integración al nuevo bloque cualitativamente tuvo un significado importantísimo. Fuerzas políticas con una diferente dimensión del hombre, del mundo y de la historia, se conjugaron en la decisión superior de modificar radicalmente las viejas estructuras, erradicar del poder a las clases dominantes, construir un nuevo Estado e iniciar la edificación del socialismo.

Hacia 1970, el fracaso del reformismo, la extrema concentración del capital y la exacerbación de la dependencia, terminan por poner en evidencia el carácter de nuestra sociedad y de la revolución que debía transformarla. El acuerdo de los partidos de la UP respondió a estas circunstancias, al desarrollo de sus respectivas líneas políticas y a la disposición unitaria, sostenida largamente por la izquierda chilena.

TRES DOCUMENTOS CLAVES

Este compromiso histórico quedó formalmente consagrado en tres documentos: "El pacto de la Unidad Popular", "El acuerdo sobre conducción y estilo de la campaña" se prevé el enfrentamiento social bierno Popular".

Ellos se elaboran bajo una orientación justa y correcta y recogen puntos de vista y concepciones disímiles. En lo medular son el resultado armónico y dialéctico de las posiciones de los partidos signatarios, especialmente PS y PC. Pero sería erróneo suponer en estos documentos, el reflejo de imposiciones unilaterales de algunos de los partidos.

El proyecto político entregado al país cancela la experiencia reformista dirigida por la DC durante los años 1964-1970. Ya la introducción del Programa Básico señalaba:

Las recetas "reformistas" y "desarrollistas" que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei, no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio naufragaron sin pena ni gloria en el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado

una vez más que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo.

La concepción de un nuevo poder, basado en la participación real y organizada del pueblo, para la solución de sus problemas específicos, es diseñada también en la introducción del programa como una tarea destinada a producir sus efectos al calor de la propia campaña electoral:

Para estimular y orientar la movilización del pueblo hacia la conquista del poder, constituiremos por todas partes comités de la Unidad Popular, articulados en cada fábrica, fundo, población, oficina o escuela, por los militantes de los partidos de izquierda e integrados por esa multitud de chilenos que se definen por cambios fundamentales. Éstos no sólo serán organismos electorales. Serán intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las masas y sobre todo se prepararán para “ejercer el Poder Popular”. Así pues, este nuevo poder que Chile necesita, debe empezar a gestarse desde ya donde quiera que el pueblo se organice para luchar por sus problemas específicos y dondequiera que se desarrolle la conciencia de la necesidad de ejercerlo.

Una vez aprobado el programa, los partidos de la Unidad Popular suscribieron públicamente un pacto comprometiéndose ante el pueblo a llevar adelante los objetivos acordados, los cuales “están decididamente vinculados a un nuevo concepto de la conducción del país, que el Gobierno Popular se propone poner en práctica”.

Finalmente, en un tercer documento denominado “Acuerdo sobre conducción y estilo de la campaña” se prevé el enfrentamiento social como la inevitable culminación del proceso revolucionario. Las fuerzas populares —enfatisa— no patrocinarán una confrontación artificial, pero “la agudización de las contradicciones del sistema provocarán un enfrentamiento cada vez mayor, que elevará las luchas de las masas a superiores niveles, planteándose final y necesariamente el problema definitivo de la conquista del poder”.

El mismo documento reitera el papel asignado a los comités de Unidad Popular como expresiones “germinales del poder popular”, los cuales, después de la victoria, estaban llamados a convertirse en “factores dinamizadores y de dirección local de los procesos de cambios revolucionarios”.

Como puede apreciarse, existe un lineamiento central coherente en los documentos adicionales suscritos por los partidos populares. Éste incide en la concepción esencial de la conquista del poder y en el papel medular desempeñado por las masas en la construcción de ese poder. No se trataba de una simple convergencia para cumplir sólo

una etapa antimperialista y democrática, como se ha pretendido, sino transitar más allá por las rutas que conducían “a iniciar la construcción del socialismo”.

EL PROGRAMA DE LA UP

En Chile se dispensó siempre una general indiferencia a los programas de gobierno. Éstos servían sólo para alimentar el caudal de promesas destinadas a atraer al pueblo y se extinguían en el olvido, una vez alcanzada la victoria.

Los partidos de la UP quisieron innovar y lo lograron. En realidad la unidad se sella en torno al programa y no a la persona del abanderado. Mucho antes de designarlo se elaboró un compromiso de gobierno cuidadosamente debatido durante largos meses por todos los integrantes de la futura coalición de gobierno. Sólo producido el acuerdo se procedió a elegir el candidato.

En consecuencia, el Programa Básico de la Unidad Popular no fue el resultado de una redacción precipitada para salvar la exigencia formal de una campaña presidencial. Lo que cuidadosamente allí se dice es lo que meditadamente se quiso decir.

Iniciada la campaña, el documento aprobado —impreso en un millón ejemplares— fue difundido en todo el país. Así el voto emitido en la elección de septiembre de 1970 fue un voto consciente e ilustrado. Todos, partidarios y adversarios, sabían a qué atenerse respecto al futuro Gobierno Popular.

El Programa Básico era —sin duda— un programa revolucionario. La burguesía chilena, no obstante estar habituada a su propia demagogia, reparó oportunamente en ello y le atribuyó la mayor seriedad. Así lo entendió también el imperialismo.

Sin embargo, en algunas organizaciones de la izquierda y del movimiento popular —por razones diferentes y desde ángulos contrapuestos— se minimizó sus aristas radicales, exhibiéndolo sólo como una plataforma de lucha, limitada a definir el reducido núcleo de los “enemigos fundamentales”, ofreciendo en cambio un amplio regazo, capaz de cobijar a la inmensa mayoría de los chilenos “no afectados ni afectables”.

De ello se desprenden no pocas conclusiones erradas.

¿Cuáles son los conceptos ejes y dominantes del programa popular?

El primero, categóricamente explicitado: la conquista del poder. El segundo, implícito en su contexto: la voluntad de alcanzarlo a tra-

vés de los mecanismos institucionales existentes, en un decurso gradual y progresivo. La vía pacífica, aunque no directamente expresada, emana del conjunto de sus proposiciones.

Estos conceptos se infieren inequívocamente de los siguientes párrafos literales contenidos en el capítulo primero, denominado: "Poder Popular":

Las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente.

Las fuerzas revolucionarias y populares no se han reunido para luchar por la simple sustitución de un presidente por otro, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige, sobre la base del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo.

El triunfo popular abrirá paso así al régimen político más democrático de la historia del país.

Señala a continuación como una de las tareas más importantes del Gobierno Popular la de "transformar las instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder".

Todas estas formulaciones convergen en la idea central: crear un poder popular, nuevo, diferenciado, cuyo principal protagonista son los trabajadores. En otras palabras, sustituir el Estado burgués, instrumento de poder de las clases dominantes, por un nuevo Estado, expresión de los intereses del proletariado y sus aliados.

A partir de este objetivo cardinal, el programa señala la vía escogida:

El gobierno garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad de domicilio y los derechos de sindicalización y de organización, regirán efectivamente, sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes.

Más adelante desarrolla la tesis de la participación de los trabajadores en las decisiones de los órganos del poder y el de la extensión de los derechos y garantías democráticas vigentes, asegurando "a las organizaciones sociales los medios reales para ejercerlos y creando los mecanismos que les permitan actuar en los diferentes niveles del aparato del Estado".

Finalmente, se garantiza a la oposición el "respeto pleno de los derechos que se ejerzan dentro de los marcos legales".

El Programa de la UP planteaba así el objetivo revolucionario de la conquista del poder, el establecimiento de un nuevo Estado con diferente carácter de clase, y "el inicio de la construcción del socialismo" para el período indicado en el programa.

En el amplio debate promovido en torno al Programa Básico, el Partido Socialista planteó la exigencia de iniciar la construcción del socialismo como tarea del Gobierno Popular y no como simple perspectiva histórica. Esta posición era antagónica a la enunciada por el Partido Comunista, según el cual "la revolución chilena, por su esencia y objetivos, es antimperialista, antimonopólica y agraria y con vistas al socialismo".

Veamos, de acuerdo con el programa, ¿a quiénes se traspasa el poder? ¿y quiénes son los beneficiarios de este traspaso?

El programa lo señala taxativamente: "a los trabajadores, el campesinado y los sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo".

Si queremos ser rigurosos, debemos reparar en el carácter restrictivo del concepto transcrito. Se trataba de traspasar el poder sólo a los sectores progresistas de las capas medias "no a todas las capas medias". En una palabra, aquellos que por su comportamiento político estaban en condiciones de adherir a un proceso revolucionario, subentendiendo la presencia de otros estratos hostiles a él.

¿Cuáles eran los objetivos de la conquista del poder?

La respuesta fluye del contexto del programa. El propósito era realizar transformaciones revolucionarias en "el orden institucional", en "la organización de la Justicia", en "la estructura y concepción de la defensa nacional", en "la organización de una nueva economía", en "la cultura", en "la educación" y en "el plano de las relaciones internacionales".

En el plano institucional se plantea que la nueva estructura del poder se "construiría desde la base", a través de un proceso de democratización y de una movilización organizada de las masas. Una nueva Constitución política legitimaría "la incorporación masiva del pueblo al poder estatal" y una "Asamblea del Pueblo", expresión máxima de la soberanía, remplazaría al anacrónico sistema bicameral.

Se propugnaba una reestructuración sustancial de la organización de la justicia, estableciendo que los miembros de la Corte Suprema serían designados por la Asamblea del Pueblo, y no a través de un sistema de autogeneración, como lo prescribía la carta fundamental.

Como puede apreciarse, se proponía un cambio radical de todo el andamiaje institucional chileno. Nada permanecía intocado. El obso-

leto Estado burgués sucumbía ante “la incorporación masiva del pueblo al poder estatal”.

En la construcción de la nueva economía —por supuesto planificada— su objetivo central era remplazar la estructura económica vigente “terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo”.

Núcleo capital de la transformación económica era la constitución de un área estatal dominante: “el Área de Propiedad Social”. Ésta debía conformarse con las empresas nacionalizadas de la gran minería del cobre, salitre, hierro y carbón; todo el sistema financiero, en especial la banca privada y los seguros; la totalidad del comercio exterior; los monopolios industriales estratégicos y, en general, “aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país”.

Junto a la proyectada área social dominante, la cual cubría la mayor parte de la actividad económica nacional, se establecían los límites de un área mixta y otra de propiedad privada.

Una importante tarea programática era también la profundización de la Reforma Agraria, estableciéndose tres sistemas de tenencia de la tierra: las cooperativas, que pasaban a ser hegemónicas; la propiedad individual y las empresas estatales.

En el orden educacional, se propugnaba un sistema democrático, único y planificado, orientado a entregar “las más amplias y mejores oportunidades educacionales”. Disponía la estructuración de “una escuela unificada” (básica y media); impulsaba métodos destinados a enfatizar la incorporación activa y crítica de los estudiantes y garantizaba la participación de maestros, trabajadores, estudiantes, padres y apoderados en la transformación del sistema. Finalizaba señalando que “el nuevo Estado tomará bajo su responsabilidad los establecimientos privados, empezando por aquellos planteles que seleccionan sus alumnos por razones de clase social, origen nacional o confesión religiosa”.

De otra parte, tampoco se olvidaba reglamentar la orientación y propiedad de los medios de comunicación de masas al determinar que “deberá imprimírsele una orientación educativa y liberarlos de su carácter comercial, adoptando medidas para que las organizaciones sociales dispongan de estos medios, eliminándose de ellos la presencia nefasta de los monopolios”. En otras palabras, se establecía que la radio, la tv, las empresas editoriales, la prensa y el cine, deberían abrirse a las “organizaciones sociales”, es decir, a los trabajadores, y se prohibía su dominio por los monopolios.

Finalmente, en el capítulo de la política internacional se consignaba: la autonomía política y económica de Chile; establecer relacio-

nes con todos los países del mundo; fomentar vínculos de amistad y solidaridad con todos los pueblos; promover un fuerte sentido americanista y antimperialista, a través de “una política internacional de pueblos antes que de cancillerías”; denunciar a “la OEA como instrumento y agencia del imperialismo norteamericano”; y finalmente “la revisión, denuncia o desahucio”, según los casos “de los tratados o convenios que signifiquen compromisos que limiten nuestra soberanía” y concretamente, “el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR), y el Pacto de Ayuda Mutua y otros pactos que Chile ha suscrito con Estados Unidos”.

UN VACÍO INEXCUSABLE

Éste era el programa de la UP. Como puede observarse, un programa extraordinariamente radical, dirigido contra todos los núcleos de dominación externa e interna y concebido para que el bloque político victorioso, liderizado por la clase obrera, iniciara la transformación revolucionaria del país.

A nuestro juicio, lejos de ser un diseño reformista —hay quienes lo sostienen—, asume en su texto y en su intención profunda, las características de un programa auténticamente revolucionario. Aun aquellas medidas clásicas en una experiencia reformista moderna, adquieren indudable connotación revolucionaria en un proyecto cuyo objetivo último era el traspaso del poder de una clase a otra. Nunca antes, en ningún país del mundo, fue sometido a la decisión soberana del sufragio un programa tan avanzado.

Más allá de la precisión de los enemigos fundamentales —el capital monopólico nacional, el imperialismo, y el latifundio—, está el objetivo estratégico explícito: la transferencia del poder detentado por las clases explotadoras a las clases explotadas. Éste es el acto revolucionario por excelencia. En consecuencia, él condiciona toda la profundidad, alcance y extensión de las medidas propuestas. Una reforma agraria masiva, realizada en un contexto de transformaciones radicales de la estructura económica y dentro de la perspectiva de traspasar el poder de una clase a otra, no es una disposición reformista. No lo es tampoco —en el mismo marco— la nacionalización de las riquezas naturales. Ni la creación de un área de propiedad social que debía comprender la parte más vital de la economía nacional. Ni el término del control de los monopolios sobre los medios de comunicación de masas. No obedece tampoco a una concepción reformista, propugnar

un ordenamiento institucional que avienta del poder a las viejas clases oligárquicas y plantea, en su remplazo, la construcción de un nuevo Estado gobernado por los desposeídos. Incluso es revolucionario, en el ámbito de lo que había sido la evolución política de Chile, “hincarle el diente” al Poder Judicial, quien ajeno a la permanente modernización del sistema, había permanecido intocado, como nostálgica reminiscencia de la *belle époque* de la oligarquía chilena.

Sin embargo, más allá de sus categóricas formulaciones, los documentos programáticos acusaban un vacío de extraordinaria trascendencia: no señalaban los mecanismos concretos para alcanzar los objetivos revolucionarios planteados. Ésta fue su mayor deficiencia. Es esta omisión la que resulta decisiva en la manifestación de ulteriores divergencias estratégicas en la conducción del proceso revolucionario.

Por lo que concierne a nuestro partido, la correspondiente apreciación estratégica fue formulada en 1967, en el Congreso de Chillán, al señalar que sólo “la destrucción del aparato burocrático militar del Estado burgués puede consolidar la revolución socialista y que las formas políticas y legales de lucha no conducen por sí mismas al poder”. De esta manera, a contar de la victoria de septiembre de 1970 y la constitución del Gobierno Popular, el ps evaluó la situación, constatando el surgimiento de “nuevas y favorables condiciones”, que permitían “predecir el acrecentamiento a pasos agigantados de una situación revolucionaria”, la cual planteaba inexorablemente “la conquista del poder”.

Si aceptamos que los mecanismos capaces de permitirnos alcanzar los objetivos programáticos señalados estaban implícitos en la concepción de un tránsito pacífico e institucional, y que el sistema democrático representativo facilitaría la ejecución de las transformaciones propuestas, debemos concluir que el programa sólo era realizable en cuanto se lograra la mayoría electoral necesaria. En otras palabras, se trataba de un proyecto sujeto a la condición de que las fuerzas revolucionarias obtuvieran en los comicios la mayoría absoluta de los sufragios y que esta mayoría fuera respetada por la reacción. Quedaba en pie, como opción hipotética, la concertación de una alianza política con la Democracia Cristiana. Opción casi imposible cuando el objetivo último del programa era tan ambicioso como: “el traspaso del poder”, “la incorporación masiva del pueblo al poder estatal” e “iniciar la construcción del socialismo”.

Si en los hechos se pudo ir tan lejos —mucho más de lo previsible— en la construcción de la nueva economía y en la transformación de la sociedad, fue simplemente porque no se requería de una mayoría parlamentaria. Para la nacionalización del cobre existía un abrumador consenso nacional. En la reforma agraria era posible utilizar la legis-

lación vigente con relativa eficacia. Finalmente, no debe olvidarse que el área social de la economía toma consistencia mediante la aplicación de los mecanismos legales de requisición e intervención, contemplados en un decreto con fuerza de ley, promulgado cuarenta años antes por la "República Socialista", decreto rescatado del olvido por un modesto funcionario y aplicado por un talentoso jurista de la Unidad Popular.

La experiencia chilena ha puesto de manifiesto la importancia que asume la formulación de un programa correcto, que aglutine a las masas ofreciéndoles una alternativa real de poder. No obstante, también nos ha enseñado que ello no es suficiente. La claridad programática debe tener un correlato en la claridad operativa. La vanguardia revolucionaria debe saber "qué hacer", pero también tiene la obligación de prever "cómo hacer". En Chile pretendimos solucionar este problema en el curso del proceso. El desenlace demostró, y sigue demostrando, que el problema de la vía no es un problema subalterno, cuya solución puede improvisarse, en el desarrollo mismo de la experiencia revolucionaria.

3. LOS MIL DÍAS DE LA UNIDAD POPULAR

La Unidad Popular fue victoria. El pueblo que siempre se había asomado por la puerta de servicio a los triunfos electorales de la burguesía, irrumpía finalmente en el Palacio de los Presidentes. El triunfo, tantas veces esquivo, alzaba las banderas populares. La esperanza de los desposeídos, hasta entonces clandestina, volaba por los caminos de Chile presagiando la perspectiva de una vida más digna y generosa. Mientras tanto, la burguesía estupefacta diluía su arrogancia centenaria para esconder el pánico tras los ventanales herméticos de sus mansiones.

En la madrugada del 5 de septiembre de 1970, el pueblo interrumpió su alegría desbordada para escuchar al nuevo Presidente. Allende, en elocuente improvisación, resumía así la grandeza y proyección del triunfo:

Han sido el hombre anónimo y la ignorada mujer de Chile los que han hecho posible este hecho social trascendente. Miles y miles de chilenos sembraron con su dolor y su esperanza esta hora que al pueblo pertenece. Y desde otras fronteras, desde otros países, se mira con satisfacción profunda la victoria alcanzada. Chile abre un camino que otros pueblos de América y del mundo podrán seguir. La fuerza vital de la unidad romperá los diques de las dictaduras y abrirá el cauce para que los pueblos puedan ser libres y puedan construir su propio destino. Dije y debo repetirlo: si la victoria no era fácil, difícil será consolidar nuestro triunfo y construir la nueva sociedad, la nueva convivencia social, la nueva moral y la nueva patria.

Aquella noche —en medio de una irresistible explosión de júbilo— culminaba un largo proceso de luchas políticas y sociales. Desde principios de siglo los trabajadores habían estado presentes en el quehacer político nacional. Su influencia y sus combates contribuyeron decididamente al desarrollo de una democracia avanzada, fortalecida con un amplio sistema de derechos cívicos, de garantías individuales y sociales y con un régimen eficiente de seguridad social.

Al iniciarse la segunda mitad del siglo, la clase obrera, ya madura y poseedora de una elevada conciencia de clase, diseña su propio proyecto histórico y construye su propia fuerza. A partir de su unidad política, expresada en el entendimiento de los partidos obreros y de su unidad social, manifestada en la Central Única de Trabajadores,

inicia a paso seguro “su marcha de gigante” hacia la conquista del poder.

La victoria de 1970 sorprende a la humanidad entera. La ortodoxia parecía romperse ante la experiencia histórica inédita escrita en un país pequeño y distante. Un vasto movimiento popular, cuyo eje lo conforman dos poderosos partidos marxistas obreros, advenía al gobierno con un programa revolucionario que establecía explícitamente la voluntad de “iniciar la construcción del socialismo”. Y lo más sorprendente: ello era posible a través del sufragio universal.

El asombro es justificado. El triunfo de la UP coloca por primera vez en la historia de las luchas sociales al proletariado y sus aliados en aptitud de disputar, desde el centro mismo del Estado, el poder a la burguesía nacional y al imperialismo. La tarea asumida por el gobierno de Salvador Allende constituye un desafío a la experiencia histórica universal, al pretender construir una vía al socialismo “en libertad, pluralismo y democracia”, o dicho en otros términos, transformar la vieja estructura capitalista usando una institucionalidad cuyos supuestos ideológicos están enraizados en la más pura tradición liberal. Chile, como lo dijera en alguna oportunidad el propio Allende, se encontraba ante el reto “de iniciar una nueva manera de construir una sociedad socialista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada”. Era “la primera nación de la tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista”. (Mensaje al Congreso Nacional, 21 de mayo de 1971.)

El triunfo de la Unidad Popular enfrentó a sus partidos a una responsabilidad gigantesca. El cumplimiento del programa significaba arremeter contra los intereses imperialistas, enclavados en el centro de su economía, contra los grandes consorcios financieros, los monopolios industriales y el latifundio. Se trataba de disparar al corazón del sistema, destruirlo y organizar una nueva economía y un nuevo Estado.

La tarea debe ser encarada en un contexto extraordinariamente adverso. Nace horquillada por las limitaciones naturales de una institucionalidad burguesa y por la formidable ofensiva del adversario, orquestada y alimentada por el país más poderoso de la tierra.

A pesar de ello, el balance del esfuerzo realizado nos permite hacer una afirmación aparentemente pretenciosa: en tres años el Gobierno Popular hizo avanzar al país lo que en décadas no lograron las anteriores administraciones conservadoras o reformistas.

Este espectacular avance se materializa en el escenario de una guerra abierta y declarada, en la cual —sucesiva y alternativamente— se utilizan todas las armas del arsenal burgués imperialista. El mundo conoció la magnitud de la embestida desplegada para hacer abortar

la experiencia chilena. Todos los recursos fueron legitimados: el crimen, el terrorismo y el sabotaje; la asfixia financiera y el chantaje internacional; la obstrucción institucional y la provocación artificial del caos económico. Era el "Vietnam silencioso" del cual hablaba el presidente Allende.

A pesar de todo ello, sobrevive una labor increíble, vista en perspectiva histórica. Durante tres años de lucha enconada, se construye una obra que la historia de Chile —a no dudarlo— mantendrá como punto cardinal de referencia futura.

No pretendemos hacer un balance exhaustivo de las imponentes realizaciones materiales y de las transformaciones radicales abordadas en el curso del proceso. No es el objetivo ni la intención de este libro. Solamente deseamos consignar algunos aspectos de esa obra, fundamento de nuestra íntima convicción sobre cuál ha de ser el juicio último de la historia. Indudablemente no será posible escribirla, prescindiendo de los mil días luminosos protagonizados por la heroicidad de un pueblo, la conciencia revolucionaria de su clase trabajadora y la decisión de lucha de las masas.

Una visión de conjunto de la tarea realizada, demuestra cómo usando hasta el límite los elementos institucionales disponibles, se cumplieron los tres más importantes objetivos económicos del programa propuesto: la nacionalización del cobre y demás recursos naturales, la constitución de un área social dominante, y la destrucción del latifundio.

El gobierno de Allende recuperó para Chile la totalidad de las riquezas extractivas. El cobre, el hierro y el salitre retornan al patrimonio de la nación al amparo de un estatuto jurídico cuya singularidad alcanzó resonancia más allá de las fronteras nacionales.

Las empresas imperialistas dueñas del cobre, Kennecott y Anaconda, durante más de 50 años de explotación intensiva, habían retirado del país utilidades equivalentes a la mitad del patrimonio físico acumulado en 160 años de vida republicana. Cuatro mil millones de dólares. Éste fue el fundamento moral y económico de la decisión del gobierno, ratificada por el Congreso Nacional: deducir de las indemnizaciones correspondientes las rentas que en concepto de la ley fueron estimadas excesivas.

Por primera vez en un país dependiente se aprobaba un procedimiento legal en cuya virtud se realiza un balance global de las actividades de un empresario extranjero, determinando su debe y su haber en la economía del país. La llamada "Doctrina Allende" introduce

un elemento nuevo en las prácticas expropiatorias. La noción de una renta establecida, de acuerdo a normas financieras y éticas razonables, cuestiona de hecho las inversiones imperialistas en todo el mundo. (La legislación expropiatoria consideró "rentabilidad excesiva" aquella que excedía de un 12% anual.) Fácil es comprender entonces la envergadura de esta medida y el grado de coraje moral necesario para imponerla.

Junto a las compañías productoras de cobre, el gobierno nacionaliza otras empresas bajo control norteamericano e interviene la Compañía de Teléfonos de Chile, filial criolla de la ITT.

La reforma agraria, apenas iniciada durante el gobierno de Frei, se profundiza hasta casi liquidar el latifundio. Él había conformado el régimen productivo de la tierra y tuvo una expresión relevante a lo largo de la evolución político social de Chile. La oligarquía agraria impuso su sistema de vida durante todo el siglo XIX y parte del XX.

En el plano social, alcanza especial significado la definitiva incorporación del campesinado a las luchas políticas, cuyo despertar venía evidenciándose en años anteriores, al calor del ascenso del movimiento popular.

El esfuerzo fundamental para la estructuración de la nueva economía y en torno al cual se centró la más encarnizada ofensiva reaccionaria, fue la constitución del Área de Propiedad Social. Ésta era una medida esencial para iniciar la construcción del socialismo. De allí su énfasis en el programa popular y la rabiosa oposición burguesa. El área social dominante se configuró con los grandes monopolios mineros, industriales, financieros y de distribución y las llamadas empresas estratégicas. Inicialmente se estatizaron las más importantes empresas textiles, metalúrgicas, petroquímicas y de alimentos básicos.

Durante el Gobierno Popular, el Estado asume el control de los bancos privados, nacionales y extranjeros (96% del crédito bancario).

Las funciones de éstos se orientan en beneficio de los medianos y pequeños industriales, mineros y agricultores, a la par que se rebaja significativamente la tasa del interés. En Chile las instituciones bancarias eran los principales vehículos de un imperio integrado por once "clanes económicos", los cuales concentraban la mayor parte del poder industrial, comercial y financiero de la burguesía.

Paralelamente, el gobierno se desplazó sobre todas las actividades de la sociedad, implementando medidas de beneficio popular, todo ello en el marco de transformaciones radicales de la estructura económica.

Fue impuesta una drástica redistribución de ingresos a través de la política de precios, sueldos y salarios, medidas tributarias y mejoras sociales encaminadas a satisfacer las necesidades fundamentales de la

población. Durante los dos primeros años se logró un aumento espectacular de la producción industrial (12%) y una disminución sustancial de la cesantía.

El incremento del consumo no fue sólo concebido con un propósito social, sino también como un recurso técnico para expandir la producción.

En el plano social la actividad fue igualmente significativa.

Los servicios de salud se perfeccionaron, ampliándose en términos no conocidos en el país. Fue entregado gratuitamente medio litro de leche diario a todos los niños de Chile y los policlínicos periféricos fueron puestos sin costo al servicio de toda la población. La tasa de mortalidad infantil descendió considerablemente, al amparo de una adecuada política de protección a la madre y al niño.

El nuevo régimen intensificó aceleradamente la construcción de viviendas populares, llegando a duplicar los metros cuadrados edificados en comparación con el quinquenio anterior.

La educación recibe un impulso vigoroso, expresado en su extensión masiva a toda la población escolar, en la reducción significativa del analfabetismo (12% en 1971 y 10.8% en 1972) y en la ampliación considerable de las matrículas en todos los niveles de la enseñanza.

Las pensiones mínimas de vejez, invalidez y viudez del Servicio de Seguro Social aumentaron en un 550% entre 1970 y 1972. Se nivelaron las asignaciones familiares. Trescientos mil ancianos jubilados elevaron sus ingresos desde un tercio a un salario mínimo completo. La previsión fue extendida a 130 mil pequeños comerciantes, 200 mil feriantes, 30 mil pequeños industriales y artesanos, a los deportistas profesionales, actividades conexas y trasportistas.

Durante el año 1971, el producto nacional bruto experimenta un crecimiento jamás conocido en la historia del país: 8.3%. En el año siguiente, no obstante las dificultades surgidas, el índice es aún alto: 5%. Dos sectores decisivos, industria y construcciones, aumentaron en un promedio superior al 10 y 8% respectivamente. Por su parte, la minería del cobre, a pesar de los problemas generados por su nacionalización, no interrumpe su crecimiento.

Por otra parte, los intelectuales progresistas se agitan en la búsqueda de nuevos valores, consecuencia de un proceso social donde el proletariado por primera vez asume un papel protagónico. Esa búsqueda se da en todas las manifestaciones de la cultura y, desde luego, con un mayor grado de decisión en la Universidad. Se trata de encontrar una coherencia estratégica entre los nuevos objetivos planteados por la revolución y una cultura, que recoja las aspiraciones y el pensamiento de los trabajadores y contribuya a erosionar y destruir en la superestructura los viejos esquemas de la burguesía. El diálogo

intelectual y científico alcanza sus más altos niveles, y la Universidad, dinamizada por los sectores democráticos y progresistas, asume la tarea de satisfacer las necesidades culturales, científicas y tecnológicas de nuestro pueblo. La crítica, el afán de conocimiento de la realidad, la creación literaria y artística expresan el empeño de la intelectualidad chilena por recuperar el carácter nacional de la cultura. Con razón ha dicho Cortázar: "Lo que vi en las universidades a través de diálogos con estudiantes y profesores, me confirmó en la certidumbre de que el gobierno de Salvador Allende y sus asesores en el plano de la educación y de la cultura habían visto lo que en su día también viera de manera ejemplar el gobierno revolucionario cubano, al proponerse no sólo la liberación exterior y física del pueblo, sino era otra liberación igualmente difícil de conseguir: la de la mente, la de la sensibilidad frente a la belleza, la lenta y maravillosa conquista de la identidad personal, de la auténtica capacidad de ser un individuo, sin la cual no es posible consolidar y defender la liberación exterior y la soberanía popular." (Julio Cortázar. Declaración ante la Tercera Sesión de la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar de Chile. México, 18 de febrero de 1975.)

La labor del Gobierno Popular se orienta tras esa tarea. En septiembre de 1971 se crea la Editorial Quimantú. En sólo dos años se editan 12 millones de ejemplares de libros, revistas populares y especializadas, y documentos diversos. Los libros impresos incluían una temática variada, que iba desde el análisis social y educacional hasta la historiografía chilena y latinoamericana, a la par que las obras más relevantes de la literatura universal. Las ediciones populares de obras literarias se agotaban rápidamente, a veces el mismo día de su aparición.

A niveles populares, se generó una extraordinaria inquietud intelectual. Recogiéndola y en el objetivo por atender la exigente demanda, Quimantú encaminó su esfuerzo a la organización de bibliotecas en los sindicatos, organizaciones poblacionales, deportivas y juveniles.

La misma orientación fue proyectada sobre los limitados medios de comunicación que la UP logró controlar. Una experiencia política significativa se vivió en torno al funcionamiento del canal 9 de la Universidad de Chile. Allí, los trabajadores de izquierda enfrentaron la administración derechista de la Universidad y dieron a los programas un contenido cultural e ideológico comprometido. La pugna en torno al control del canal, que la burguesía pretendió persistentemente silenciar, es uno de los episodios más relevantes de los cambios operados en la conciencia de los trabajadores. Ellos mismos lo financian; cuando la rectoría de la universidad decide privarlo de recursos, de-

terminan directamente su programación, y cautelan físicamente su funcionamiento cuando el terrorismo fascista arrecia.

En todos los planos de la actividad artística, la imaginación creativa se expresa en niveles antes desconocidos. La influencia popular se deja sentir en la pintura y en la música. Aparecen los murales, creación simple y directa del pueblo, inicialmente con un objetivo propagandístico. A través de todo el país las consignas del movimiento popular adquieren expresión plástica en calles y edificios. Paulatinamente se va perfeccionando su estilo y su contenido en la emulación fraternal de los diferentes grupos que proliferan en el cultivo de la nueva manifestación artística. Terminan por convertirse en un virtual medio de comunicación popular a nivel nacional. Sobre los murales del pueblo la burguesía volcará posteriormente todo su profundo odio de clase.

Los valores auténticos del folklore fueron reivindicados al calor del nuevo impulso. Sobre las estructuras autóctonas alcanza un vigoroso desarrollo la música de protesta, música contestataria, de combate, expresión vital de la experiencia revolucionaria. Ella recoge los combates de la clase obrera, difunde sus tradiciones y las engarza con las nuevas alternativas de la lucha. Algunos de sus cultores logran una excelente jerarquía artística. Víctor Jara —por ejemplo— paga con su vida el compromiso de su poesía y de su canto. Otros, como el conjunto Quilapayú y los Intillimani, continúan hoy a través del mundo estimulando la solidaridad internacional y difundiendo la lucha de nuestro pueblo por sobrementar la pesadilla fascista.

Finalmente, el premio Nobel, otorgado al gran poeta americano Pablo Neruda, fue también el premio a la más gloriosa poesía de lucha libertaria escrita por el pueblo chileno.

Durante el Gobierno Popular, Chile alcanzó una audiencia internacional de la que antes nunca gozó. El país se abre al mundo en el desarrollo de una política exterior autónoma. Las primeras medidas del gobierno constituyen una afirmación de su soberanía plena: a despecho de la Casa Blanca, se establecen relaciones con las naciones "proscritas": Cuba, China, RDA, Vietnam, la República Popular de Corea.

Durante tres años, Chile tiene estatura y presencia internacional. La humanidad está extraordinariamente atenta al original proyecto de liberación social y nacional que se desarrolla en sus fronteras. Su voz se eleva con particular prestigio y gravitación entre los países no alineados. Santiago es sede de importantes eventos internacionales. El presidente Allende viaja al extranjero y es aclamado por los pue-

blos que ven en él la dimensión de un líder continental. Su voz se hace oír acusadora en el seno de las NU, para denunciar la agresión de que éramos objeto y el drama del Tercer Mundo. Los representantes de la humanidad allí reunidos, le escuchan en silencio y le ovacionan de pie.

Así juzgaba el mundo a Chile. Lo hemos percibido recién después de la derrota. La inmensa solidaridad, resuelta y sostenida, en torno a la tragedia que vive nuestro pueblo, no es ajena al sitio que Chile conquistó en el concierto de las naciones. El Chile de hoy, hace más relevante la jerarquía del de ayer. Un Chile aislado y repudiado internacionalmente, al que la humanidad elude, y cuya presencia se mantiene sólo por la magnitud del crimen y del terror. La dimensión del desprestigio está brutalmente simbolizada en la inmovilidad física de un tirano, que apenas es recibido en la madriguera de alguno de sus congéneres, y cuya presencia resultó desdolorosa incluso a los fascistas españoles.

Fue esta una inmensa tarea para un gobierno que debió construir superando obstáculos de todo orden. Indudablemente el balance arroja un saldo espectacular si se le mide en el marco de factores coyunturales sobrevenientes que confluyeron a asfixiar su esfuerzo: una baja violenta y sostenida del precio del cobre en el mercado internacional; la paralización de la inversión foránea y una gran restricción de la nacional, y un fuerte bloqueo financiero impuesto por los organismos internacionales y privados extranjeros. En los dos últimos años, el Gobierno Popular debe además absorber el alza del precio internacional de los productos agropecuarios y de diversas materias primas.

Parece justo preguntarse: ¿Qué país ha desarrollado un proceso tan profundo de transformaciones estructurales al ritmo que lo hizo la Unidad Popular, sin enfrentar —por esa sola circunstancia— una dislocación de sus actividades económicas?

Lo concreto es que en Chile, pese a los poderosos agentes externos e internos mancomunados en la faena de anarquizar y destruir la economía del país, ésta no sólo se mantuvo sino aumentó su ritmo durante los años 1971 y 1972. La desarticulación se produce básicamente cuando el imperialismo y la burguesía, devenida en burguesía especulativa, estimulan planificadamente el caos económico; administran el mercado negro; promueven y financian la subversión empresarial y el terrorismo; crean deliberadamente desde el Parlamento factores de presión inflacionaria; y finalmente amarran las manos del gobierno, impidiéndole enfrentar en el plano de la institucionalidad la situación artificialmente provocada.

Los resultados antedichos no hubieran sido posibles sin un aporte, en términos de capacidad, compromiso, imaginación creadora e incluso eficiencia, compartido por todos los niveles de dirección del proceso. Mandos altos y medios descubren una gigantesca capacidad realizadora, sin precedentes en la historia de Chile. No se habrían alcanzado, de otra manera, los extraordinarios índices de producción, salud, construcción y educación. Todo ello a despecho del empeño de la burguesía por producir el caos, la anarquía y la inseguridad.

Pero el impulso transformador no puede ser atribuido solamente a la decisión y consecuencia revolucionaria de las vanguardias. Por encima y más allá de ellas, estuvo siempre presente el protagonista principal del proceso: el pueblo.

El creciente conflicto social y la aguda lucha de clases libera toda la potencialidad creadora y el espíritu combativo de las masas. Participan en la conducción del proceso y exhiben allí toda la inmensa variedad de sus aptitudes. Cuando el adversario cerca la economía, los trabajadores se movilizan para reactivarla; cuando los patrones paralizan sus industrias, la clase obrera las ocupa de inmediato poniéndolas en marcha con eficiencia sorprendente; cuando la burguesía ahíta de odio destruye, el pueblo con la alegría inmensa de una obra que la sabe propia, construye.

En el gobierno de Allende el pueblo palpó la expresión cabal de sus intereses. Comprende desde la primera hora que las deficiencias de conducción en el desarrollo de su propia participación, en el manejo del poder y en la dinámica misma de la lucha, serán superadas. Entiende el proceso, como la vivencia de una empresa revolucionaria que la historia medirá, más allá de sus errores, por la grandiosa experiencia escrita.

Hasta el instante mismo de la derrota multiplicará incansablemente su energía creadora en centros vecinales, comités campesinos, juntas de abastecimiento, comandos comunales, cordones industriales; en incipientes órganos de defensa del proceso.

Jamás un pueblo vivió instantes de mayor exaltación nacional, de mayor motivación colectiva. Frente a la burguesía torva, intoxicada por el rencor, poseída por un odio irracional de clase, el pueblo daba su lucha con la alegría plena de saberse parte de una vida que antes siempre se le mostró ajena. Mientras el enemigo vomitaba resentimiento, los trabajadores llenaban los aires de Chile con su canto de victoria.

Esta es en definitiva la gran obra de la Unidad Popular, indestructible y luminosa. Un pueblo entero conoció la dignidad y se asomó a una vida nueva. Tuvo conciencia de su fuerza y selló el supremo

compromiso de clase. Esa conciencia sí es irreversible. No habrá perversidad capaz de destruirla.

El juicio definitivo de la historia deberá medir esta obra en el contexto de sus inmensas dificultades. Fue destruida, según afirmaron, para "reconstruir Chile". La comparación resulta casi grotesca. El fascismo ha tenido también sus mil días. Ejerciendo un poder omnímodo; con el gigantesco aporte del imperialismo: más de tres millones de dólares diarios; con un elevado precio promedio del cobre; sacrificando los niveles de vida de la población hasta extremos inauditos; y veamos sus propios resultados: un país demolido, su sociedad quebrada, su cultura oscurecida, internacionalmente rechazado; con ciudadanos sin derechos individuales ni colectivos; cuyos trabajadores han sido despojados de conquistas logradas a través de medio siglo de luchas y combates; con sus universidades jibarizadas. En el plano económico los resultados no son menos desastrosos: el PNB, en promedio, durante los últimos tres años se ha reducido hasta índices de menos cero; la inflación, también en promedio, es superior al 400% anual; la cesantía se eleva sobre el 20%. Ésta es la obra del fascismo y de su socio: el gobierno de EU.

4. LA VÍA PACÍFICA Y EL PROCESO REVOLUCIONARIO

LA VÍA: ¿PROBLEMA TÁCTICO O ESTRATÉGICO?

Hay quienes sostienen en el seno de la izquierda chilena que la determinación del carácter de la vía armada o no armada es sólo un problema táctico, sujeto a la correlación de fuerzas en las coyunturas decisivas de la lucha por el poder. De ello se desprendería, que construir una estrategia revolucionaria resolviendo anticipadamente si habrá o no insurrección armada, es innecesario.

Dilucidar este tema tiene máxima relevancia, no sólo en el recuento del pasado, sino en el contexto de un debate proyectado sobre el quehacer futuro del movimiento popular. La vía es una previsión estratégica indispensable en todas las fases del desarrollo de la lucha revolucionaria.

Los grandes pensadores marxistas siempre previeron una vía probable. Ella no puede minimizarse al extremo de convertirla en una “especie de sonrisa de la esfinge o en una respuesta que se guarda hasta el último día en la rodilla de los dioses” (Rodney Arismendi, *La Revolución y América Latina*).

Lenin prevé la vía de la Revolución rusa con doce años de antelación, y además formula la consigna de la “insurrección armada” no como un llamamiento directo, sino como una conclusión indispensable. (*Dos tácticas*, 1905.) Definir la evolución probable del proceso en el escenario de la realidad concreta es obligación ineludible de la dirección. Es también imprescindible para la preparación subjetiva de las masas y de los cuadros revolucionarios.

Uno de los más sólidos teóricos del marxismo-leninismo en América Latina, el secretario general del pc uruguayo, Rodney Arismendi, expone el problema en los siguientes términos:

En un período de preparación (nosotros usamos como equivalente otra categoría usada también por los clásicos: período de acumulación de fuerzas) y cuya duración en la Rusia de entonces fue de varios años, Lenin no sólo prevé la vía insurreccional, sino que la propaga en lucha contra el seguidismo, que rebaja los objetivos revolucionarios del proletariado, entre otras cosas negándose a plantear el problema de las vías; como contra el “revolucionario vulgar” (putschista y aventurero) que grita “al asalto” en

cualquier circunstancia de tiempo y lugar, y que menosprecia estúpidamente la agitación y la propaganda en los períodos preparatorios, y agrega:

Y si muchas veces el dogmatismo supone absorber la táctica en el planteamiento general teórico, espectáculo habitual del infantilismo izquierdista, el oportunismo de derecha envilece casi siempre la teoría achatándola al nivel de una táctica...

Entendemos por cierto que la previsión del desenlace más probable de la pugna social no autoriza en modo alguno la renuncia al desarrollo de todas las formas de lucha. En otras palabras, la determinación de la vía estratégica no es incompatible sino, por el contrario, condición de una necesaria flexibilidad táctica.

La pretensión de rebajar un problema estratégico fundamental, a la categoría de una cuestión "hipotética, predictiva y secundaria", cuyas incógnitas las iría despejando el proceso, fue en definitiva la condicionante sustancial de la derrota del movimiento popular. (Jaime Gazmuri, *Aprender las lecciones del pasado para construir el futuro*, Santiago, Editorial Nueva Democracia, noviembre, 1974.) Si éste hubiera sido estudiado sería y oportunamente, considerando las leyes generales del marxismo, recogiendo las lecciones de la historia para prever las variantes posibles de la "vía chilena al socialismo", el destino del proceso hubiera sido diferente.

Perseverar después de la tragedia en el mismo error es sembrar el terreno de derrotas futuras.

VÍA PACÍFICA Y VÍA ARMADA

Nos parece importante para el análisis correcto de la experiencia chilena ensayar algunas precisiones conceptuales. Las vías de acceso al poder conforman un área de la temática revolucionaria, en la cual no existen marcos de referencias claros, que definan con exactitud el alcance y contenido de éstas.

La vía pacífica —algunos prefieren denominarla "no armada"— sería aquella que tanto en el curso del proceso como en su culminación, recurre a formas pacíficas de lucha. Supone, básicamente, el desarrollo de la lucha de masas, el empleo de métodos legales y la utilización de la institucionalidad burguesa. El ciclo de tránsito del capitalismo al socialismo se cierra sin prever ni recurrir a la violencia, lo que no obsta a que ésta pueda darse en manifestaciones secundarias y objetivas.

Éste fue el camino escogido en Chile.

La vía armada, por el contrario, supone en todas o en alguna de las fases del proceso, el uso de la violencia revolucionaria. Es este el factor, que en último término, rompe la espina dorsal del régimen dominante, quiebra su aparato represivo. La vía armada puede utilizar durante un largo camino la institucionalidad burguesa y formas legales de lucha, pero prever —y aquí esta el quid del problema— para las instancias decisivas del proceso, el empleo de la violencia. En consecuencia, configura este camino, no tanto el uso real de ella, como la previsión de este uso y la adecuación y preparación consecuente de la vanguardia revolucionaria, a esa eventualidad.

Después del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética se empezó a estimar la posibilidad de acceder al socialismo a través de métodos pacíficos y a configurar teóricamente la concepción de una vía no armada, cuyas exigencias no han sido precisadas en términos explícitos.

Aquellos que en el análisis objetivo de sus realidades específicas consideran la vía pacífica como factible, coinciden en la necesaria existencia de “una correlación que en un momento dado proporcione a las fuerzas transformadoras un poder abrumadoramente superior al de los defensores del capitalismo”. (Santiago Carrillo, *Libertad y socialismo*.) Dicho en otros términos, “la vía pacífica es posible solamente cuando es aplastante la prevalencia de las fuerzas revolucionarias”, cuando se ha logrado “tal superioridad de fuerzas que se obliga a la burguesía a desistir de la violencia”. (Kiva Maidanik, “En torno a las enseñanzas de Chile”, *Revista A. Latina*, núm. 2, Academia de Ciencias de la URSS.)

Éste es el “consenso” del cual nos hablan los comunistas italianos. La superioridad de fuerza, tanto social como política, demanda —con antelación a la destrucción del aparato represivo de la burguesía— quebrar su bloque ideológico, con el fin de lograr el desplazamiento, al campo revolucionario, de la inmensa mayoría de las capas medias, dejando reducida, así, a la clase dominante a su expresión ínfima y natural.

Los partidos comunistas de Francia, Italia y España, especialmente los dos últimos, han estudiado en profundidad, las formas, mecanismos y situaciones condicionantes del tránsito pacífico al socialismo. Parten del supuesto de que no volverán a reproducirse en Europa las condiciones que hicieron posible, en la Rusia de 1917, a un partido pequeño en número, pero resuelto y preparado como el bolchevique, aprovechar el desplome del Estado autocrático-zarista, para tomar audazmente en sus manos la conducción del país. Ausentes aquellas premisas “tan extraordinariamente favorables”, la situación revolucionaria “pue-

de surgir como consecuencia de crisis políticas y sociales graves, a condición de que los partidos comunistas y el conjunto de las fuerzas revolucionarias, sean ya una 'gran fuerza' preparada y consciente, de forma que el plus del factor subjetivo, contrarreste el minus del factor objetivo". (Santiago Carrillo, *op. cit.*)

Concebida así, la vía pacífica exige, no sólo conquistar una mayoría electoral, equivalente a un 51% de los sufragios, sino que esa mayoría sea de tal modo abrumadora, como para disuadir a la burguesía del uso de la violencia. La perspectiva de lograr esta fuerza aplastante determina los lineamientos básicos de los más poderosos partidos comunistas de Europa occidental. A ella confluyen, el "compromiso histórico" del pc italiano; el "Pacto para la libertad" de los comunistas españoles y la "Unidad del pueblo francés" del pc de Francia.

En el empeño por ganar esa "inmensa mayoría", aquellos partidos han venido realizando un esfuerzo sostenido, orientado a destruir las fijaciones anticomunistas de amplios sectores de sus respectivas sociedades: se ha adecuado el lenguaje, se ha renunciado a viejos símbolos partidarios, se han desahuciado conceptos como el de la dictadura del proletariado, y se ha expresado la firme decisión de transitar al socialismo, ejerciendo los derechos democráticos "hasta el fin".

Así entendida la vía pacífica, acusa diferencias de importancia con la concepción que de ella tiene el Partido Comunista de la Unión Soviética. Sus ideólogos más relevantes aceptan la vía pacífica como una vía probable, pero insisten en que ella, no sólo debe construirse sobre una correlación de fuerzas favorables, sino además, en la capacidad y preparación de la vanguardia revolucionaria para alterar las formas de lucha en el momento mismo que ello fuera necesario y utilizar la violencia en defensa de la revolución amenazada.

Hay quienes han creído ver en la experiencia chilena una forma atípica de acceso al poder, en la cual se entremezclan su emergencia y desarrollo pacíficos, con un desenlace violento.

Disentimos de esta opinión. En rigor, la previsibilidad del enfrentamiento armado, y la necesidad consecencial de adaptar orgánica, ideológica y militarmente el movimiento revolucionario a esa previsión, ubicaban el camino chileno, en la concepción de la vía armada, aunque su acción no se enmarcara durante todo el curso de los acontecimientos en sus formas clásicas. La ruptura final, factor insoslayable en la subversión del dominio de clase, sólo podía lograrse —en Chile— en términos de fuerza militar. La ausencia de aquella previsión y la incapacidad para sustituir oportunamente la estrategia equivocada, determina —en definitiva— el fracaso de la experiencia chilena. Si bien ésta demuestra cómo se puede alcanzar el gobierno y ganar la

mayoría del pueblo; no logró —en cambio— demostrar cómo esa mayoría puede hacer respetar su voluntad, cuando está sin armas.

De otra parte, la fuerza social —indudablemente mayoritaria— expresada por la UP, no tuvo aquel carácter “abrumadoramente superior”, exigido por los dirigentes comunistas europeos.

LA ESTRATEGIA DEL MOVIMIENTO POPULAR

El capítulo histórico iniciado en septiembre de 1970, está caracterizado en última instancia por la resuelta voluntad de iniciar la construcción del socialismo.

En tal perspectiva, la UP determinó —en el plano de las definiciones estratégicas— la naturaleza del proceso iniciado, las fuerzas motrices que lo impulsaban; precisó los enemigos y señaló a partir del papel hegemónico de la clase obrera, la gama de sus aliados potenciales.

Asumiendo a plenitud las leyes generales de la transición al socialismo, el programa de la UP formuló con extrema claridad la condición medular del éxito del proceso: conquistar la totalidad del poder. Textualmente dijo: “Las transformaciones revolucionarias que el país necesita, sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente.”

Insiste a continuación en que las fuerzas populares y revolucionarias se han unido “para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo”. Finalmente señala como tarea fundamental del gobierno la de “transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder”.

Tales afirmaciones están consignadas en el preámbulo del programa, bajo un título políticamente sugestivo: “El Poder Popular.”

La originalidad del proyecto político puesto en marcha en el verano de 1971, se definía en la transformación del carácter de clase del Estado burgués sin su destrucción previa. En teoría, conquistado el más importante centro del poder político —el Poder Ejecutivo— era posible copar progresivamente los otros poderes, modificando paulatinamente el carácter del Estado. Todo ello, sin quiebre violento, sin guerra civil, y como consecuencia natural, sin dictadura del proletariado.

La vía elegida —pacífica— estaba implícita en el programa. Las

medidas a través de las cuales se construiría el nuevo Estado, se concebían en el respeto irrestricto al régimen jurídico vigente. Se sobrentendía que la institucionalidad chilena, suficientemente elástica como para modernizarse sin interrupciones violentas, en el curso de la larga evolución política y social del país, lo era también para generar en su seno la nueva institucionalidad socialista.

Sin embargo, el conjunto de la dirección revolucionaria, al aceptar la vía pacífica, no hacía profesión de fe en el comportamiento leal de los mecanismos democrático-representativos, hasta el extremo de considerarlos capaces por sí solos de tolerar la puesta en marcha de un proceso de transformaciones revolucionarias.

A pesar de ello, en las esferas dirigentes de la UP se generó una confianza creciente en la factibilidad de “la vía chilena al socialismo, en pluralismo, libertad y democracia”. En esta forma, una línea estratégica insuficientemente elaborada, expresión más de un deseo que de una concepción acabada, que ni siquiera señalaba las etapas y mecanismos tácticos que hipotéticamente la hicieran aplicable, adquiere consistencia teórica y científica.

Así, a contrapelo de todas las experiencias revolucionarias de los últimos cien años —desde la Comuna de París hasta nuestros días—, a despecho de las leyes generales del marxismo, y en abierta disposición voluntarista, se adhiere —algunos lo hacen con fe de carbonarios— a un camino jamás antes transitado.

La posibilidad de avanzar con éxito por el camino político-institucional suponía la concurrencia de variados supuestos. Algunos eran reales y otros parecían serlo, pero en definitiva todos se disipan en la dinámica de la emergencia revolucionaria.

Diversos factores confluieron para facilitar el triunfo electoral de la izquierda y el inicio consiguiente de la “vía chilena al socialismo”. La singular evolución política y social del país, había franqueado el desarrollo de una vigorosa organización sindical y de sólidas organizaciones políticas, que expresaban nítidamente los intereses del movimiento popular, en el marco de un amplio régimen de partido; la convivencia política permitía el ejercicio real de la libertad de sectores significativos de la población; existía un sistema de elecciones libres y periódicas, con un alto nivel de participación, y un complejo sistema jurídico que, sin abandonar su esencia de clase, había incorporado las reivindicaciones más inmediatas de los trabajadores.

De otra parte, la institucionalización del conflicto social, en el contexto de los mecanismos arbitrales del Estado, había permitido, en el seno de las Fuerzas Armadas, el desarrollo de una ideología cons-

titucionalista, que aparentemente las marginaba de la contienda social y del papel tradicionalmente desempeñado en defensa del status. Finalmente, configuran esta coyuntura favorable, el inmediato fracaso de un proyecto reformista; una situación internacional que alejaba la posibilidad de una intervención extranjera directa, y el factor subjetivo aportado por la conciencia política y revolucionaria de los sectores principales del proletariado y los campesinos.

La conquista del poder total a través de una vía pacífica, suponía sin embargo el mantenimiento de las condiciones antes referidas, y la concurrencia de otras nuevas, entendidas como partes integrantes del sistema político-institucional heredado.

La más importante, la de mayor incidencia en el éxito del proyecto, era la posesión del Poder Ejecutivo, concebido como el núcleo dominante del Estado, desde cuya extensa área de influencia se intentaría el "copamiento" progresivo del conjunto. La influencia atribuida al gobierno —en tanto expresión del Poder Ejecutivo— partía de una realidad constitucional, ratificada por la práctica política del último medio siglo. En Chile, desde 1925, existía un régimen presidencial. Al amparo de sus disposiciones jurídicas, era la voluntad del presidente de la República la que normalmente prevalecía en la solución de los conflictos con los demás poderes del Estado.

Independientes del gobierno, y con un área de poder menos significativa, estaban en teoría: un Parlamento amplio, flexible, con una dilatada tradición de diálogo y un Poder Judicial justo y austero, aureolado de las más excelsas virtudes.

Por otra parte, facilitaban la vía escogida, la escisión de la burguesía y una clase media susceptible de ser atraída a un proyecto revolucionario, representada por un partido poderoso, en cuyo seno —en apariencia— gravitaba un sector progresista. Finalmente, se esperaba un funcionamiento normal de la economía, sólo alterado, en períodos transitorios, por las desarticulaciones naturales producto del proceso transformador.

Conquistado el Poder Ejecutivo, se suponía que lográbamos la parte más relevante del poder político, máxime si consideramos que a él estaba subordinado el aparato represivo militar. De ello cabía inferir la existencia de una especie de "dualidad de poderes" expresada en el interior del propio Estado. El sector estatal dependiente del Ejecutivo —teóricamente lo estaban las Fuerzas Armadas— respondía al interés de clase de los trabajadores, "contribuyendo a crear el embrión de lo que debe ser el régimen institucional de transición, correspondiente a la etapa de superación del sistema capitalista". El objetivo explícito era —desde aquí— controlar el resto del aparato del Estado.

La conquista del poder provendría así, no del desarrollo de un poder popular surgido “desde la base” para remplazar el Estado burgués, como lo señalaba el programa, sino de la adaptación progresiva del orden jurídico-institucional a las nuevas realidades introducidas por las transformaciones socioeconómicas. Obviamente, nos referimos a los cambios que parecían factibles en el interior del aparato del Estado y no a la compleja estructura de poder que la reacción controlaba: el poder económico y financiero, la formidable red de comunicaciones de masas, televisión, prensa y radios, cine, el peso abrumador de su sistema ideológico, la Iglesia, las universidades. En fin, todo permanecía intacto, incluso el manejo del aparato represivo que continuaba siendo ajeno al gobierno que habíamos conquistado.

La práctica demostró, a poco andar, que la mayoría de estos supuestos naufragarían en el tempestuoso mar de una experiencia revolucionaria. Algunos tenían realidad y consistencia en tanto la burguesía era gobierno y servían a sus intereses. En una palabra, eran utilizables por ella, pero no contra ella.

El gobierno —esto es, el Poder Ejecutivo— era efectivamente “el punto de concentración” del poder del Estado, siempre y cuando el aparato burocrático militar no le fuera adverso. Al cuestionarse el sistema mismo, el Poder Ejecutivo devenía en prisionero de la estructura represiva-militar y se convertía de hecho, en un poder sujeto a interdicción.

La burguesía, parapetada en el Parlamento, y en el Poder Judicial, trasforma de la noche a la mañana y por un simple juego de malabarrismo político-jurídico, el régimen presidencial en régimen parlamentario. Los ministros, en teoría de confianza exclusiva del presidente, son acusados y depuestos a voluntad de las mayorías parlamentarias; se paraliza la acción legislativa del gobierno; se bloquean todas sus iniciativas; mientras los tribunales le dejan inerte frente al enconado ataque de sus adversarios. Al mismo tiempo, la burguesía utiliza sus enclaves en la burocracia estatal, en la Contraloría General de la República y en las Fuerzas Armadas para minar y debilitar su autoridad.

La legalidad, supuestamente utilizable contra la burguesía insurrecta, pierde su eficacia cuando ésta la abandona, y concluye —en cambio— por convertirse en “camisa de fuerza” de la revolución. La Constitución, los códigos y las leyes carecen de valor cuando la reacción —desde sus centros de poder— se reserva la facultad de interpretarlos a su amaño. Y se produce una situación por demás ridícula. El gobierno, atrapado en el compromiso impuesto por la vía elegida, no podía dar un solo paso fuera de la legalidad, en los mismos instantes que la oposición contrarrevolucionaria, autoconstituida en su garante, ubicaba todo el volumen de su ofensiva al margen de ella.

El ejército profesional, prescindente, democrático y constitucionalista de la primera hora, empieza pronto a descubrir su esencia clasista, consustancial al papel asignado en la sociedad capitalista. Primero, como aval de la burguesía contra cualquier presunta incursión del gobierno más allá de los límites del estatus; más tarde, como restaurador cruel y eficiente del dominio burgués imperialista.

A este hecho no es ajena la alteración burda y desvergonzada de las reglas del juego, impuestas por la burguesía, después del triunfo popular. Hasta entonces se había afanado en reservar al presidente de la República el carácter de "Generalísimo de las fuerzas de aire, mar y tierra". Posteriormente, el empeño se reorienta a asignarles a éstas un papel moderador y arbitral, que cuestiona incluso el ejercicio de las facultades presidenciales en materia de promociones y asignaciones de mandos.

Los hechos arrasaron igualmente con las esperanzas puestas en la división de la burguesía. Ésta no pasaba de ser una querrela familiar, superada en cuanto se hace evidente el peligro que el movimiento popular representa para el régimen. A su vez, las inclinaciones modernizantes de la clase media se agotan en las fronteras de la revolución. Apenas las transformaciones empiezan a cuestionar el estatus, se ubican —en pie de guerra— junto a la clase hegemónica. De la misma manera, las presuntas "potencialidades revolucionarias" de la DC se esfuman frente al imperativo de asumir clara y francamente la representación de sus sectores burgueses monopólicos y de la pequeña burguesía, hostil al proceso.

Por último, la pretensión de que EU, por imposición de la coyuntura internacional, se vería forzado a tolerar una experiencia socialista, inaugurada al amparo y en el respeto a la democracia, deviene en ilusoria. La agresión desencadenada desde las primeras horas, desbarata de paso la posibilidad de un funcionamiento normal de la economía.

En esta forma, la vía pacífica al socialismo se desmoronaba en tanto se diluían sus supuestos: un régimen presidencial, que por voluntad de la burguesía había dejado de serlo; un ejército "neutral" y prescindente, que asumía su papel natural en defensa del estatus amenazado; un presidente de la República, constitucionalmente generalísimo de ese ejército, cuyas prerrogativas eran de hecho cuestionadas; un poder judicial justo y austero, transformado en madriguera de la reacción y en protector de sus demasías; una burguesía respetuosa del juego democrático, que se decide a dinamitarlo en el instante mismo en que siente amenazado sus privilegios de clase; y finalmente, EU, que lejos de sentirse inclinado a tolerar una experiencia al socialismo, en democracia y libertad, moviliza, desde el primer día, todo su inmenso potencial para aplastarla.

¿Cuáles debieron ser entonces los mecanismos empleados para conquistar el poder en el entendido de que aquellos supuestos hubieran realmente operado?

Para ello era indispensable acumular fuerzas, lo cual se estimaba posible a partir de la precisión clara de los enemigos fundamentales. En términos sociales se imponía una alianza con las capas medias, y en términos políticos debía articularse un entendimiento con el Partido Demócrata Cristiano, considerando su expresión mayoritaria.

En consecuencia, alcanzada una correlación de fuerzas favorables, se ganaría el Parlamento, que a su vez permitiría modificar radicalmente el ordenamiento jurídico, trasformando la Constitución burguesa en una Constitución socialista.

En términos operativos se trataba de obtener una mayoría capaz de reflejarse institucionalmente. Ello sólo era posible utilizando los mecanismos electorales regulares o recurriendo al expediente extraordinario del plebiscito. Todo el andamiaje teórico descansaba sobre estos supuestos prácticos. Era necesario aguardar hasta marzo de 1973, y ganar las elecciones parlamentarias de ese año, en términos absolutos. No obstante, existiendo una norma constitucional que disponía la renovación sólo parcial del Senado, ni siquiera con el 51% de los sufragios se lograba controlar efectivamente el Congreso. Era inevitable, entonces, esperar hasta la subsiguiente elección parlamentaria... marzo de 1977. (El PC alcanzó a formular un llamado a ganar las elecciones presidenciales de 1976.)

Pero si ésta era la alternativa factible o deseable, ¿cuál era nuestro quehacer durante estos siete años? ¿Qué programa aplicábamos? ¿Con qué mayoría gobernábamos? ¿Cómo se resolvían los dramáticos y urgentes problemas económicos? Para ninguna de estas interrogantes había respuesta. Quedaba en pie en esta circunstancia como opción exclusiva apelar a un plebiscito. Veremos que esta alternativa, defendida con insistencia por el Partido Socialista, es desechada en la única oportunidad verdaderamente factible, esto es, inmediatamente después de la elección municipal de abril de 1971.

La experiencia de la Unidad Popular llegó a ser considerada "el segundo modelo" para la construcción del socialismo. Éste, a diferencia del modelo tradicional, no pretendía la destrucción previa y violenta del viejo aparato burocrático militar, sino su remplazo pacífico y gradual. El propio presidente Allende, en el discurso pronunciado ante el Congreso Nacional el 21 de mayo de 1971, al inaugurar el período de sesiones ordinarias diseña esta perspectiva en los siguientes términos:

Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista,

anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada. Los escépticos y los catastrofistas dirán que no es posible. Dirán que un Parlamento que también sirvió a las clases dominantes es incapaz de trasfigurarse para llegar a ser el Parlamento del pueblo chileno. Aún más, enfáticamente han dicho que las Fuerzas Armadas, hasta ahora sostén del orden institucional que superaremos, no aceptarían garantizar la voluntad popular decidida a edificar el socialismo en nuestro país.

Nuestro sistema legal debe ser modificado —concluía. De ahí la gran responsabilidad de las cámaras en la hora presente: contribuir a que no se bloqueen las transformaciones de nuestro sistema jurídico. Del realismo del Congreso depende en gran medida, que a la legalidad capitalista, suceda la legalidad socialista, conforme a las transformaciones socioeconómicas que estamos implantando, sin que una fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y excesos, que responsablemente queremos evitar.

Estas afirmaciones deben evaluarse en el contexto en el cual se formulan. El presidente de Chile se dirige —en ocasión solemne, 21 de mayo— a la mayoría reaccionaria del Parlamento, en presencia de las misiones diplomáticas acreditadas ante su gobierno, reiterando su respeto al sistema institucional vigente y su voluntad de que el proceso decurra sin quebrantamiento.

Por nuestra parte, pensamos que cualquiera que fuera el grado de confianza depositada en las posibilidades ofrecidas por las instituciones democrático-representativas-burguesas, existía la obligación ineludible de elaborar una línea estratégica alternativa, adecuada a las condiciones en cuyo marco, la burguesía —desde un comienzo— planteó la lucha.

Siendo el enfrenamiento racionalmente previsible desde un primer instante, y categóricamente insoslayable, avanzado el proceso —octubre de 1972— el problema de la vía retomaba una importancia medular. La ruptura final no estaba determinada por nuestra voluntad. Ni los sectores más inmaduros o insensatos de la izquierda lo planteaban como una opción deseable. Fue el imperialismo y la burguesía quienes desde la primera hora —aun antes de que Allende asumiera el gobierno— modificaron sus propios lineamientos estratégicos.

Fue un error entonces no haber considerado una alternativa en la previsión de un enfrentamiento, que el adversario resueltamente pretendía y —desembozadamente— preparaba. Aquí está el meollo. Todos los demás errores eran subsanables. La falla profunda, medular, es la pertinacia en sostener una vía recusada por el acontecer cotidiano. A la luz de la derrota del Gobierno Popular, queda en claro para las luchas revolucionarias futuras la extraordinaria importancia que reviste

la unidad política y direccional de la vanguardia, y por sobre todo, la unidad en torno a una línea estratégica. No bastan las convergencias tácticas, coyunturales o circunstanciales.

De las aseveraciones formuladas no debe inferirse un cuestionamiento de las formas pacíficas y legales de lucha, utilizadas para lograr el gobierno en 1970.

En el curso de los últimos veinte años, el Partido Socialista proclamó insistentemente su voluntad de emplear los recursos electorales brindados por la democracia representativa. Porque así lo entendimos, es que concurrimos a la formación de la UP desechando la alternativa irreal —propuesta por otras fuerzas de la izquierda— de constituir un “polo revolucionario”, divisionista del movimiento popular.

Creímos y creemos que la institucionalidad chilena era legítimamente aprovechable por el movimiento revolucionario. Pero no en la perspectiva de completar un ciclo histórico hasta la construcción del socialismo, sino solamente en la de enfrentar desde posiciones de fuerza más favorables —políticas, sociales y militares— la ruptura del Estado burgués. Intentar transitar el camino político institucional sin tropiezos hasta alcanzar el objetivo final, era sólo una ilusión, una frágil ilusión.

El Partido Socialista, a partir del Congreso de Chillán en 1967, definió categóricamente su posición. El documento básico de aquel torneo señalaba:

El partido no desdeña la utilización de métodos pacíficos y legales, como las luchas reivindicativas, las tareas ideológicas, la actividad de las masas y los procesos electorales, etc., pero considera que esos métodos no conducen por sí mismos a la conquista del poder, sino que son factores complementarios de su acción política sustantiva que busca la derrota definitiva de las fuerzas reaccionarias internas y la destrucción de toda forma de penetración imperialista. (Documento Político del XXII Congreso del PS, Chillán, 1967.)

En el curso mismo del proceso el PS reiteró en innumerables oportunidades su escepticismo en la vía que con inexplicable contumacia —sobre todo después del paro patronal de octubre de 1972— se continuaba implementando. En marzo de aquel mismo año, en el Pleno celebrado en Algarrobo, nuestro Comité Central reafirmó una orientación clara y definida sobre su concepción estratégica y las perspectivas tácticas que le asignábamos al proceso en desarrollo. Con extraordinaria clarividencia y precisión insistimos:

El enfrentamiento es el problema central y básico de todo este período... desde el 4 de septiembre de 1970 la lucha de clases ha desembocado en un

“enfrentamiento permanente de clases” que tiende a agudizarse y a culminar en un conflicto armado... , la agresión armada del imperialismo y la burguesía se dará necesariamente en gran escala, comprometiendo toda su fuerza militar, social, económica, política e ideológica en una aventura en que se juegan definitivamente la última carta para el control del poder... La lucha entablada entre las fuerzas revolucionarias y la contrarrevolución por conquistar el poder, hace crujir toda la superestructura, agudiza la lucha de clases, decanta y obliga a definirse a todos los sectores sociales y políticos. En algún momento del desarrollo de este proceso estas tensiones necesariamente deberán desembocar en un enfrentamiento total de clases... La burguesía no resiste la aplicación de sus propias leyes por parte de fuerzas que le son enemigas. Todas las instituciones, los códigos y el aparato burocrático están hechos para asegurar el dominio de la clase burguesa y son eficientes mientras son manejados por los propios burgueses... son instrumentos de defensa del sistema en tanto están en manos de la burguesía... con ellos se puede destruir, pero no se puede construir... no están hechos para crear una sociedad socialista... No hay posibilidad de transformación del sistema, sin quiebre, sin salto cualitativo, sin destrucción de la actual institucionalidad y la construcción de una nueva...

Finalmente decimos:

No podemos caer en la ingenuidad de creer que podemos construir el socialismo a través de las actuales instituciones y de las veinte mil leyes que existen. Sostener que la actual correlación de fuerzas puede dar lugar a un largo desarrollo, estable y tranquilo, no sólo es una ingenuidad sino que es una posición reformista y aventurera. Hay aventurerismo cuando se cree que la plenitud del poder político y el socialismo se conquistarán sin la necesidad de preparar ideológica, orgánica y materialmente a las masas... Las desviaciones reformistas en el seno del movimiento obrero, muchas veces han caído en estas irresponsabilidades aventureras, por más que se lancen los más feroces epítetos en contra del aventurerismo. Para los revolucionarios la solución no está en negar o esconder el objetivo de la toma del poder y del socialismo, sino en educar y preparar a las masas para lograrlo; si la revolución implica un tránsito violento en cualquier etapa, lo correcto no es negar la revolución a nombre del “menor costo”, sino enfrentar la violencia organizadamente, que es la única forma de que el pueblo sufra menos y el costo social sea menor. (Informe al Pleno Nacional del ps, Algarrobo, marzo de 1972.)

Esta concepción reiterada del proceso chileno, dramáticamente confirmada por su desenlace, se repite, tanto en los torneos partidarios anteriores como posteriores al mencionado. Ella sintetizaba con absoluta claridad y realismo el pensamiento de la dirección y de las bases del socialismo chileno.

Sin embargo, preciso es reconocer que el Partido Socialista no estuvo en condiciones de desarrollar una política consecuente con

aquellas previsiones. Su tradicional debilidad orgánica y la falta de formación de sus cuadros, no superadas al calor de la experiencia revolucionaria, le impedía implementar por sí solo una estrategia armada. No era, por cierto, el partido de Lenin. Estaba muy lejos de constituir una organización acerada, monolítica y disciplinada. No tenía experiencia alguna en la lucha clandestina ni dominio práctico de las formas de lucha armada. Esta deficiencia se hacía más relevante en el contexto de una combinación de partidos gobernantes, cuyos acuerdos —adoptados por mayoría— siempre acató con lealtad, actitud no frecuente en la tradición política nacional.

En la certidumbre del asalto armado, resuelto por la burguesía y el gobierno de EU, el Ps hizo cuanto estuvo a su alcance por conseguir la adopción de una estrategia que considerara la defensa militar del proceso. Era lo más que podía hacer. Ir más lejos, implicaba poner en peligro la unidad de la combinación gobernante y la estabilidad misma del régimen.

En torno a las posiciones del Partido Socialista se han tejido no pocas imágenes distorsionadas. Sobre éstas la burguesía ha hecho su juego, presentando a nuestro partido como una organización con marcadas “desviaciones ultraizquierdistas” y “violentista seguidor del modelo cubano”.

El análisis frío, objetivo y científico de la realidad concreta de Chile, llevó al socialismo a negar la posibilidad de la revolución pacífica, lo cual fue traducido como el deseo subjetivo y voluntarista de buscar y provocar a toda costa el enfrentamiento armado. Si el trágico epílogo histórico no hubiera venido en apoyo de sus justas previsiones esta distorsión aún persistiría.

EL ENFRENTAMIENTO INSOSLAYABLE

La burguesía y el imperialismo conspiraron desde la noche misma en que se anunció la victoria popular.

La CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado de EU, trabajaron la hipótesis de una victoria revolucionaria y analizaron las variantes de acción frente a ella con absoluto descaro. Así lo revelaron los documentos secretos de la IRR —entregados a la opinión pública mundial por el periodista Jack Anderson— en julio de 1971. Si algunos escépticos dudaron, han debido inclinarse cuatro años más tarde ante la aplastante ratificación del Senado norteamericano.

Cuarenta días después de la elección, es decir, cuando Allende

aún no tomaba posesión de su cargo, se montó el primer dispositivo para anular la voluntad de las urnas. Las mismas fuerzas políticas que empujan a Pinochet en septiembre de 1973, intentaron ya la subversión en octubre de 1970. En ella estaban comprometidos nada menos que los comandantes en jefe de la Marina y de la Aviación, el jefe de la división de Santiago del Ejército de tierra y el director general de Carabineros.

Aquel conato subversivo fue la partida de bautismo del proceso. El golpe frustrado por el asesinato —no previsto— del general René Schneider, comandante en jefe del Ejército, sella para siempre los términos de la lucha.

Desde aquel mismo instante se inició la marcha insurreccional de la burguesía. Ésta y el imperialismo articulan una ofensiva ininterrumpida, brutal e intimidatoria.

Las clases dominantes actuaron durante aquel período aplicando una inobjetable concepción insurreccional de masas. Todas las formas de lucha fueron utilizadas: las pacíficas y no pacíficas, las legales y las ilegales, las institucionales y las armadas. En el asedio constante al Gobierno. Popular nada se dejó de lado. Mientras la burguesía insubordinaba los cuarteles, escandalizaba al mismo tiempo en el Congreso por el supuesto atropello de algún precepto legal. En los mismos instantes en que dinamitaba una torre eléctrica o algún gaseoducto, reclamaba con voz tonante, desde la Corte Suprema de Justicia, el “quebrantamiento de la juridicidad”, porque el gobierno no otorgaba la fuerza pública para el desalojo de alguna familia modesta. Con una mano asesinaba y sabotaba, en tanto con la otra suscribía declaraciones ampulosas y retóricas sobre la ruptura institucional. Manejaba los hilos del mercado negro y la especulación, al paso que protestaba airada por el caos económico. Alteraba el orden público, promovía huelgas subversivas, practicaba el terrorismo, con el mismo entusiasmo que bloqueaba el aparato estatal y obstruía desde el Parlamento las iniciativas del gobierno.

Frente a aquella ofensiva abrumadora, las fuerzas populares se parapetan en las trincheras del ordenamiento institucional. La fe en su solidez y en su capacidad autodefensiva parecían crecer, en la misma medida en que la burguesía lo abandonaba y mostraba su irrevocable disposición de destruirlo.

Inicialmente la acción del gobierno se orientó a asegurar la neutralidad política de los altos mandos castrenses. Preciso es reconocer que el presidente Allende manejó esta tarea con extraordinaria habilidad y con éxito cierto. No obstante, este factor pierde paulatinamente relevancia en la medida que la profundización del proceso, la aguda lucha de clases y la polarización política va minando la disci-

plina de las Fuerzas Armadas y diluyendo los restos de su ideología constitucionalista.

La certeza creciente del choque, en lugar de vertebrarse en torno a una estrategia adecuada, se traduce apenas en consignas voluntaristas como: ¡No a la guerra civil! Éstas se estrellan contra la decisión ciega del adversario, y con la frialdad de las masas, quienes insistentemente reclaman la constitución de un poder popular y la entrega de armas.

Mientras tanto el gobierno sufría una evidente anemia de autoridad. La "vía chilena al socialismo" se había construido sobre el supuesto teórico de que el Poder Ejecutivo era el núcleo dominante del poder político. Efectivamente, así había sido hasta el día que la clase obrera llegó al gobierno de la nación. Sin embargo, intacto el resto del aparato del Estado, y permaneciendo el conjunto de la estructura coercitiva bajo custodia de la reacción, el Poder Ejecutivo se convertía en su prisionero. La preeminencia de éste, base presunta del régimen presidencial vigente en Chile desde 1830, salvo una corta interrupción, es paulatinamente socavada, entre un Parlamento que reclama mayores derechos y se atribuye muchas mayores facultades, y un Poder Judicial que hace virtual abandono de sus obligaciones, para convertirse en guarida conspirativa de la reacción alzada en armas. El efecto concreto de no ejercer el poder era simplemente perderlo.

VIABILIDAD DE UNA ESTRATEGIA ARMADA

Las posibles variables del enfrentamiento eran escasas: una acción que pusiera a la dirección revolucionaria a la ofensiva y que se anticipara al *putsch* reaccionario; un contragolpe, alternativa ofrecida el 29 de junio de 1973, con ocasión de un conato subversivo frustrado, y finalmente la resistencia armada, acompañada de una insurrección generalizada, en defensa del gobierno agredido.

Todas estas alternativas suponían contar con una fuerza militar, que articulara la movilización orgánica de un sector comprometido de las Fuerzas Armadas, con la existencia de un poder disuasivo en el seno de las masas y la movilización global de éstas, en defensa del gobierno.

Con todo, se mantienen los interrogantes: ¿Era posible implementar una estrategia armada en el curso del proceso? ¿Podía la clase obrera cambiar súbitamente de estrategia?

Debemos anticipar nuestra respuesta en términos escuetos y gene-

rales. Creemos aún no ha llegado el momento de dilucidar este tema en toda su amplitud. Ciertos elementos de juicio debemos mantenerlos en reserva en resguardo de su eventual utilización por la Junta fascista.

Se ha sostenido desde diversas posiciones y con diferentes argumentos que esta alternativa estaba negada a los partidos populares; que no era posible a la Unidad Popular desplazarse tras la construcción de un poder armado capaz de garantizar el desarrollo de la experiencia. La línea argumentativa tiende a consignar como causas del escepticismo, precisamente aquellos factores que son efectos de la ausencia de una adecuada estrategia para el enfrentamiento: la ausencia o debilidad de un sector progresista en el ejército; la dificultad extrema para armar al pueblo a vista y paciencia de quienes tenían el "monopolio legal" de las armas; el carácter jerárquico, autoritario y disciplinado de la estructura castrense, hostil a toda tentativa de lesionar su unidad y su espíritu de cuerpo; la falta de una dirección única; los errores y vacilaciones de la Unidad Popular en torno a la movilización y participación de las masas en el poder y, finalmente, la existencia de una correlación de fuerzas internas e internacionales desfavorables a los trabajadores, sobre todo en lo que se refiere al terreno militar.

Desde otro ángulo ha sido realzado un factor de incuestionable gravitación: la ineptitud global de las Fuerzas Armadas para absorber y digerir una experiencia revolucionaria, hegemónizada por dos partidos marxistas-leninistas. Doctrinariamente, como cualquier otro ejército en América Latina, se formaron en la adhesión a un anti-comunismo visceral, digerido en los centros de adiestramiento norteamericanos. No era extraño entonces que un sector importante de la oficialidad, desde sus particulares reacciones de clase, estuviera dispuesto a impedir que socialistas, y especialmente comunistas, tuvieran en sus manos la dirección del país. Igual, por lo demás, ha ocurrido en Europa. Hace apenas algunos meses el general norteamericano Haig, comandante en jefe de los ejércitos de la OTAN, notificó al mundo con extrema insolencia que: "los EU no pueden permitir la presencia de los partidos comunistas en los gobiernos europeos".

Nos parece, sin embargo, que más allá de las condiciones objetivas, eran las condiciones subjetivas las más difíciles de superar. No existía mayoritariamente, en el vértice direccional del proceso, una voluntad y una conciencia acerca de la necesidad de apelar a las formas de lucha armada en las instancias decisivas del proceso.

Al aceptarse el programa básico, el problema estratégico de la vía fue dejado de lado y nunca volvió a replantearse. Sólo seis meses antes del golpe militar, cuando a todas luces era insensato seguir igno-

rándolo, fue reformulado en el seno de la izquierda, aunque sin lograr un acuerdo básico.

Coincidimos plenamente en que las condiciones objetivas para la implementación de una línea estratégica armada, eran extraordinariamente difíciles en el contexto singular en el cual se generaba el gobierno popular.

Las tareas de preparar a las masas para la lucha armada; de articular un sistema defensivo; de crear aparatos paramilitares; de infiltrar y dividir a las Fuerzas Armadas, estaban plagadas de gravísimos obstáculos, acentuados en la medida en que el proceso adquiría un ritmo polarizante. Pero las tareas que tal estrategia suponía nunca dejaron de ser factibles, al menos hasta junio de 1973, cuando se malbarata la posibilidad cierta de asumir la contraofensiva, con ocasión del "Tancazo". Es en este instante cuando se agotan todas las variantes de acción del movimiento revolucionario, cuya suerte quedó sellada con la renuncia del general Prats a la jefatura del ejército.

Sobre las decisiones necesarias de adoptar en la implementación de una "política militar" insistiremos en el capítulo correspondiente. Por ahora deseamos dejar precisado nuestro pensamiento sin equívocos: el desarrollo de una estrategia armada en el curso del proceso, era muy difícil; diremos, extraordinariamente difícil; pero la vía pacífica, en cambio, en el Chile de 1970-1973 era imposible. Aún más, la facultad de optar entre una y otra nos fue prematuramente vedada. La burguesía y el imperialismo resolvieron el dilema en el instante mismo que asumimos el gobierno. El trágico epílogo de la experiencia chilena reivindica, al menos para nuestro continente, la plena vigencia de la Segunda Declaración de La Habana: "Allí donde están cerrados los caminos de los pueblos, donde la represión de los obreros y campesinos es feroz, donde es más fuerte el dominio de los monopolios yanquis, lo primero y más importante es comprender que no es justo ni es correcto entretener a los pueblos con la vana y acomodaticia ilusión de arrancar, por vías legales que no existen ni existirán, a las clases dominantes, atrincheradas en todas las posiciones del Estado, monopolizadoras de la instrucción, dueñas de todos los vehículos de divulgación, y poseedoras de infinitos recursos financieros, un poder que los monopolios y oligarquías defenderán a sangre y fuego con la fuerza de sus policías, de sus aparatos de inteligencia y de sus ejércitos."

5. LAS DIFÍCILES CAPAS MEDIAS

PRESENCIA POLÍTICA DE LAS CAPAS MEDIAS

Uno de los problemas más complejos y controvertidos dentro de la experiencia revolucionaria es el que versa sobre las llamadas “capas medias”.

En teoría no se ha precisado con suficiente rigor conceptual qué debe entenderse por “capas medias”. Está claro que los segmentos sociales que la integran no constituyen propiamente una clase, desde el punto de vista marxista, y también lo está, que ellas comprenden una variedad amplia y abigarrada de sectores socioeconómicos que oscilan entre las dos clases fundamentales: proletariado y burguesía.

Para nuestro objetivo, utilizaremos indistintamente los términos “capas medias”, “pequeña burguesía” o “clase media”, incluyendo en ellas los siguientes sectores de la sociedad: a] la pequeña burguesía no asalariada de la industria, el comercio, la minería y servicios (pequeños propietarios de medios de producción con empleo reducido de mano de obra ajena, propietarios de pequeños talleres y negocios, personas que viven de arriendos y pensiones, el minifundio en el área rural, los artesanos y trabajadores por cuenta propia); b] la pequeña burguesía asalariada —fundamentalmente del sector de servicios—, empleados, funcionarios, administradores y, en general, la burocracia estatal; c] capas intelectuales, en las cuales están insertos artistas, profesionales libres y técnicos, y d] los estudiantes.

Los sectores sociales referidos mantienen áreas de confluencia, tanto con la burguesía en el nivel superior, como con el proletariado en el nivel inferior. Incluso una reducida parte de la pequeña burguesía no asalariada tiende a desplazarse hacia el subproletariado.

En Chile, este complejo conglomerado social, fundamentalmente urbano, representa aproximadamente el 50% de la población activa del país. Este elevado porcentaje de sectores medios nos asimila a la estructura de clases de los países más desarrollados de la Europa capitalista.

Irumpen en el proceso político, con peso definido, a partir de 1920. La elección presidencial de Arturo Alessandri, caudillo liberal populista, significa el comienzo del fin del Estado oligárquico fundado por Portales un siglo antes. Alessandri hace suyo un programa que en el contexto de la época adquiere una connotación avanzada. Tanto

COMPOSICIÓN SOCIAL EN OCHO PAISES RELATIVAMENTE
DESARROLLADOS (PORCENTAJE)

	España		Japón		Italia		Francia		Gran Bretaña		Argentina		Chile	
	1970	1965	1971	1968	1966	1969	1960	1971	1966	1969	1960	1971	1966	1971
I. Burguesía	2.3	3.8	2.6	3.2	5.5	6.0	2.7	2.6	5.5	6.0	2.7	2.6	5.5	6.0
II. Clase Media	49.3	54.5	49.5	52.1	44.2	54.0	52.7	52.3	44.2	54.0	52.7	52.3	44.2	54.0
IIa. Pequeña Burguesía Asalariada	11.1	13.7	17.0	26.6	34.6	38.0	28.4	21.7	34.6	38.0	28.4	21.7	34.6	38.0
1. Empleados privados	4.8	—	8.9	19.3	23.4	24.1	—	—	23.4	24.1	—	—	23.4	24.1
2. Empleados públicos	6.3	—	8.1	7.3	11.2	13.9	—	—	11.2	13.9	—	—	11.2	13.9
IIb. Pequeña Burguesía relativamente autónoma	34.3	36.3	29.1	22.2	6.4	9.3	21.6	25.5	6.4	9.3	21.6	25.5	6.4	9.3
1. Cultivadores directos	20.0	25.0	12.1	11.2	1.4	2.6	6.8	6.7	1.4	2.6	6.8	6.7	1.4	2.6
2. Comerciantes	6.8	6.0	8.7	6.1	2.3	2.7	5.4	6.8	2.3	2.7	5.4	6.8	2.3	2.7
3. Artesanos y otros	7.5	5.3	8.3	4.9	2.7	4.0	9.4	12.0	2.7	4.0	9.4	12.0	2.7	4.0
IIc. Categoría Particular	3.9	4.5	3.4	3.3	3.2	7.0	2.7	3.3	3.2	7.0	2.7	3.3	3.2	7.0
III. Clase Obrera	48.4	41.7	47.8	44.7	50.2	40.0	44.6	46.6	50.2	40.0	44.6	46.6	50.2	40.0
1. Agricultura	8.0	1.4	6.2	2.9	1.6	1.4	8.1	12.3	1.6	1.4	8.1	12.3	1.6	1.4
2. Industria y Construcción	27.1	21.8	33.0	27.8	31.6	22.2	23.0	19.3	31.6	22.2	23.0	19.3	31.6	22.2
3. Otras actividades	13.3	18.5	8.6	14.0	17.0	16.4	13.5	15.0	17.0	16.4	13.5	15.0	17.0	16.4

FUENTE: Sylos Labini, *Ensayo sobre las clases sociales*, noviembre de 1974.

él como Carlos Ibáñez del Campo —caudillo militar nacionalista—, contribuyen a romper la hegemonía oligárquica, hasta entonces infranqueable, e integra a las masas pequeñoburguesas al sistema político.

Durante medio siglo (1920-1970) logran consolidar una fuerte estructura de privilegios relativos, concertando alianzas, indistintivamente con la burguesía y el proletariado. El perfeccionamiento de las funciones de bienestar público que asume el Estado, el desarrollo de la legislación laboral y las conquistas en el plano de la seguridad social, emergen de la convergencia de intereses comunes entre las capas medias y los sectores asalariados.

Caracteriza su deambular político su extrema versatilidad. Se identifican con un caudillo civil liberal como Alessandri, con el mismo fervor conque más tarde adhieren a un caudillo militar autoritario como Ibáñez. Durante quince años (1938-1952) asientan sus intereses en las asambleas del Partido Radical, para abandonarlo abruptamente y sumergirse en el difuso movimiento populista que coloca nuevamente —en 1952— a Ibáñez en la presidencia de la República. Agotada aquella experiencia y a partir de 1958 entregan su representación creciente a la Democracia Cristiana. Así ocurre hasta el instante en que el fascismo irrumpe en Chile.

La insurgencia de las clases medias en el escenario político, al promediar la tercera década del siglo, no es un hecho excepcional en el continente. El fenómeno corresponde a determinados estadios de la evolución política de algunos países latinoamericanos y surge con características un tanto similares en México, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.

El desarrollo industrial aparece condicionado en estos países —en buena medida— a la simbiosis de intereses de las viejas oligarquías terratenientes y mineras con las nuevas burguesías industriales emergentes.

Esta identificación y complementación de intereses, genera conflictos y contradicciones en el plano social, económico y político, los cuales —en definitiva— son resueltos a través de todo un complejo sistema, que sirve de asiento a la dominación oligárquico-burguesa.

Las burguesías industriales logran imponer su proyecto de desarrollo capitalista de la sociedad, a través de movimientos políticos y sociales en los cuales las clases medias juegan un papel de dirección sólo aparente. Es el caso del varguismo en Brasil; peronismo en Argentina; battlismo en Uruguay; Ibáñez y el Frente Popular en Chile. Estos movimientos, si bien recogen las aspiraciones reales de las clases medias, en última instancia expresan los intereses del naciente capitalismo industrial. Es éste el que orienta el curso principal de los acontecimientos, administra el desarrollo de la dependencia e impone a la

pequeña burguesía, su proyecto de clase. Aquélla, incapaz de elaborar una alternativa propia, se limita a desplazarse tras la burguesía, tomando su partido cuando se agudiza el conflicto social.

En Chile, con la incorporación de la clase obrera a la dirección del gobierno en 1970, la pequeña burguesía pierde, en términos relativos, el papel político protagónico mantenido durante el último medio siglo. En el plano electoral se había expresado fundamentalmente en la candidatura demócrata cristiana de Tomic, y en menor medida, en la de Alessandri, así, de hecho, aparecía políticamente derrotada.

En el curso de la evolución social, se vinieron agrupando en torno a los partidos obreros, sectores cualitativamente importantes de capas medias. De hecho, el Partido Socialista, nace representando a la clase obrera, a los campesinos y a los estratos más pobres de la pequeña burguesía. Éstos jugaron un papel significativo en las luchas sociales de la época, estuvieron presentes decisivamente en los inicios del proceso revolucionario de 1970 y posteriormente, en instantes de extrema polarización de clase, desempeñaron un papel trascendente, resuelto y valeroso en defensa del gobierno constitucional.

La Unidad Popular no logra constituir —no obstante pretenderlo— una amplia alianza de clases entre el proletariado y las capas medias. Efectivamente, sectores pequeñoburgueses estaban insertos tanto en las dirigencias, como en la base de los partidos populares, pero ellos no representaban ni las aspiraciones profundas ni los auténticos valores de estas capas. El PR, en 1969, no obstante su decisivo aporte a la victoria electoral de 1970, expresa sólo los restos de su antigua y poderosa influencia en aquéllas. Los otros partidos (MAPU, Alianza Popular Independiente y Social Demócrata), a pesar de su valiosa presencia en el movimiento popular, tampoco asumen una representatividad social de magnitud tal, como para llegar a conformar una amplia alianza. Finalmente, la incorporación de la Izquierda Cristiana a la Unidad Popular, en julio de 1971, si bien expresa la adhesión de un contingente cualitativamente muy importante, carece de relevancia, en términos numéricos.

Como pretendemos probarlo, la presencia de sectores pequeñoburgueses —no desestimables— en el seno de la Unidad Popular y en su periferia de atracción, representaba la máxima contribución, dable de esperar de la pequeña burguesía, en la situación concreta de Chile en ese período de su historia; en el marco objetivo impuesto por las condicionantes de su evolución social y política; y la circunstancia de encontrarse el proceso hegemonizado por dos partidos proletarios y marxistas.

A la luz de esta realidad, resulta temeraria la afirmación de que

en el curso del proceso los sectores medios habían retirado su apoyo a la UP. Este apoyo jamás existió en términos masivos. Ocurrió, sí, que paulatinamente abandonaron la actitud de neutralidad en la cual se encontraban en los inicios del Gobierno Popular, para situarse más tarde en franca oposición, casi histérica, a medida que el proceso avanzaba. En esta actitud influyó, por cierto, el comportamiento político de la cúpula demócrata cristiana, supeditada a determinados intereses imperialistas y a un sector de la burguesía monopólica nacional.

SU SISTEMA IDEOLÓGICO

En esencia, se trata de grupos sociales con escala de valores, aspiraciones y categorías culturales diferenciadas. Si bien —como lo hemos dicho— no constituyen una clase con intereses específicos y con un proyecto político autónomo, adquieren cierta homogeneidad y coherencia en lo que podríamos denominar “su propio sistema ideológico”. Es decir, una particular concepción de la vida, un núcleo de motivaciones profundas y un conjunto de valores esenciales, que siendo distintos a los de la burguesía, están subordinados umbilicalmente a ella.

Algunos de sus componentes ideológicos entran en contradicción con el conjunto de los valores burgueses. La confrontación de las grandes desigualdades sociales lleva —por lo general— a las capas medias a asumir posiciones anticapitalistas y antioligárquicas y a protestar contra la opulencia y las grandes fortunas. Sin embargo, estas contradicciones aparecen mediatizadas y encubiertas por una unidad ideológica básica, fundada en su adhesión irrestricta al concepto “de propiedad” y al modo de vida burgués.

Reclama su participación en la distribución del poder político, cuya transformación por otra parte rechaza. A partir de su aislamiento económico, idealiza un “Estado protector” por encima de las clases. Éste es “su Estado”, el llamado a impedir su “descanso social”, a satisfacer sus confusas aspiraciones de justicia, así como asegurarle la estabilidad, necesaria para el desarrollo de sus expectativas individuales.

La sobrevaloración del “prestigio social” les crea una suerte de complejo frente a la burguesía, al magnificar aspectos incidentales de la vida, a los que atribuye influencia en la determinación del estatus.

El sistema dominante les ha inculcado, paciente y científicamente, un cuadro artificial de expectativas, el cual les hace sentir su

destino en peligro, frente a cualquier intento de cambio social. Sus aspiraciones se elaboran a partir de categorías básicas de “seguridad”, “estabilidad” y “tranquilidad” en la perspectiva de la promoción y en el horror al descenso social. Todo ello, las lleva a adscribir global e irracionalmente, la concepción burguesa del “orden social”.

Es este “corpus ideológico” el que alimenta un sentimiento de honda desconfianza hacia la ideología del proletariado, y ha internalizado en ellas el temor, y más que el temor, el odio visceral al comunismo, así como la percepción de una gravísima amenaza, en cualquier proyecto de transformaciones revolucionarias.

Concretamente, en un país como Chile, penetrado intensamente por la ideología antisoviética y anticomunista exportada por el imperialismo y recogida y amplificadas por la burguesía, se hacía extraordinariamente difícil y compleja la tarea de enunciar una política correcta. Importantes sectores de las capas medias, neutrales y expectantes en las primeras horas, se ubican —y no “por incapacidad de la dirección revolucionaria”— tras la línea divisoria, en cuanto presintieron la seriedad de las transformaciones que empezaban a operarse. Muchos acceden a la perspectiva del cambio, cuando éste se plantea como una categoría teórica, abstracta e intelectual, pero disipan su entusiasmo, cuando éste adquiere concreción en la praxis revolucionaria. Como en la vieja historia del Gatopardo, desean que “algo cambie para que todo permanezca igual”.

INSUFICIENCIAS DE UNA POLÍTICA

A partir de esta realidad sociopolítica e ideológica, intentaremos responder las interrogantes originadas por la experiencia de la Unidad Popular, relativas a las capas medias. ¿Qué se entiende por una política correcta hacia los sectores medios? ¿Qué factibilidad de implementación tenía tal política una vez liberada la dinámica revolucionaria del proceso? ¿Era posible en Chile, dadas sus condicionantes históricas, una más amplia alianza entre el proletariado, los campesinos y la pequeña burguesía? ¿En qué condiciones?

Desde luego, una afirmación. Las clases medias en los países de capitalismo dependiente, en especial en América Latina, gozan de un estatuto de privilegios relativos. Su estándar de vida es sustancialmente superior al de las grandes masas pauperizadas de la ciudad y del campo. La brecha entre los niveles de vida de estas masas y los de gran parte de los intelectuales, empleados, la pequeña burguesía

vinculada al comercio y al transporte y la que actúa en la esfera de los servicios, es considerablemente mayor que la existente en países capitalistas avanzados. Esta particularidad dificulta objetivamente una alianza con el proletariado. Abierto un proceso revolucionario, el cual debe forzosamente imponer una distribución equitativa de los ingresos en beneficio de las grandes masas, el deterioro relativo de los sectores medios es casi inevitable.

La Unidad Popular tuvo una política hacia las clases medias. Una política más costosa que eficaz. El esfuerzo realizado estuvo orientado básicamente a satisfacer sus necesidades materiales. Diversas medidas, directas e indirectas, sirvieron para incentivar su adhesión al proceso: se aumenta su capacidad de consumo, se rebajan los intereses bancarios, se reorienta el crédito, se estabiliza el precio de las materias primas, se organizan cooperativas de pequeños mineros, se crean centrales de compra, asegurando abastecimiento a precios convenientes; se rebajan los tributos de los pequeños comerciantes e industriales; se extiende la previsión a más de 200 000 de ellos; se excluye a los técnicos de las disposiciones que limitaban los sueldos máximos en las empresas estatales; se permite su promoción —en las empresas nacionalizadas— a cargos antes reservados exclusivamente a los extranjeros; se amplía notablemente las posibilidades de educación de sus hijos, especialmente la universitaria.

Paralelamente, se intentó garantizarles que las transformaciones proyectadas no afectarían sus intereses.

Fue esta una forma limitada, restringida y economicista, de entender la alianza de clases. Partió del supuesto teórico de que el apoyo político de estos sectores estaba en relación directa a la magnitud de los beneficios económicos y naturales concedidos. Los hechos demostraron los vacíos e insuficiencia de esta concepción. Los pequeños y medianos comerciantes, industriales, transportistas y profesionales obtuvieron ganancias inusitadas durante los dos primeros años del Gobierno Popular. Ello, sin embargo, no fue obstáculo para que importantes núcleos de estos sectores, promovidos, financiados e instrumentados por la contrarrevolución, se transformaran en los adversarios más encarnados y asumieran posiciones fascistas.

Es decir, la simple reiteración propagandística, en orden a garantizar el desarrollo capitalista de pequeños y medianos empresarios; la seguridad de que no serán expropiados sus activos ni reducidos sus márgenes de utilidades, no son suficientes.

Para la pequeña burguesía lo vital, lo verdaderamente trascendente, es el clima general en que se desarrolla el proceso. Las tensiones, las imágenes de caos y anarquía, la incertidumbre, la sensación de peligro, la inestabilidad económica, pesan mucho más en su ánimo,

que cualquier declaración verbalista o medida legal orientadas a tranquilizarla. Les interesa por sobre todo su destino final: ¿Se mantendrá el sistema capitalista? ¿Serán afectados sus niveles y patrones de vida? De otra parte —les preocupa en forma principal—, la fuerza política que orienta y hegemoniza el proceso, ¿se trata de un partido pequeñoburgués reformista?, ¿de un líder carismático o populista? O lo que es verdaderamente temido: ¿Es el pueblo —son los obreros y campesinos— los actores principales?

En consecuencia, toda tentativa orientada a dar tranquilidad a las capas medias, si no está inserta en un proyecto de mucha mayor envergadura, profundidad y alcance, no producirá el efecto deseado. Iniciado un proceso de transformaciones revolucionarias, cae en descrédito cualquier estatuto de garantías o régimen de inexpropiabilidad, destinados a asegurar la inmutabilidad de su condición. Si un gobierno reformista, como el de Frei, por ejemplo, garantiza a los agricultores la inexpropiabilidad de predios inferiores a determinada cabida, posiblemente le creerán. Saben que aquel gobierno —en definitiva— no cuestiona la esencia del régimen capitalista. Pero si la medida es planteada, a partir de una experiencia de transformaciones profundas y radicales, cuya fuerza hegemónica son los partidos del proletariado, difícilmente creerán.

Quienes mostraban su sorpresa ante la violenta reacción de sectores cuyos beneficios económicos fueron ingentes, sin duda prescindían de sus motivaciones ideológicas íntimas. Su conducta no está determinada, lisa y llanamente, por el lucro: prefieren ganar menos con seguridad a ganar más con inseguridad.

Durante el Gobierno Popular se realizó un esfuerzo honesto para estabilizar —incluso jurídicamente— el estatus de la pequeña y mediana burguesía. El proceso debía afectar sólo ciento cincuenta empresas industriales consideradas monopólicas o estratégicas. Se entendía por empresa estratégica aquella que por su tipo de producción influía directamente sobre otros sectores esenciales. Esta definición no atendía ni a su dimensión ni a su capital. Con ocasión del paro de octubre de 1972, los trabajadores tomaron en sus manos la conducción de algunas decenas de fábricas paralizadas por sus propietarios, no consideradas dentro de las anteriores. Aquel fue un acto político, moral y jurídicamente legítimo. No obstante, algunas de ellas fueron más tarde devueltas a sus dueños.

El resto, más de 30 000 empresas industriales, medianas y pequeñas, no fue tocado. Incluso, mucho antes del golpe se había concluido la elaboración de un estatuto estableciendo expresamente su inexpropiabilidad.

Lo mismo ocurrió en el sector agrícola, donde en definitiva se optó

por hacer inexpropiables todos los predios menores de 40 hectáreas de riego básico.

Con ser justa esta política, prescindía de los mecanismos ideológicos que arrastran a las capas medias —hasta hoy invariablemente— a resistir los cambios. Son tributarias ideológicas de la burguesía. Forman parte integrante de su bloque hegemónico. En Chile, este proceso de subordinación se había fortalecido, precisamente, como consecuencia del notable ascenso del movimiento popular.

Estaban condicionadas ante un proyecto político, sobre cuya peligrosidad fueron insistentemente prevenidas a través de una formidable ofensiva de penetración ideológica, sostenida a lo largo de medio siglo, y abruptamente intensificado desde 1958. Bastó que la burguesía les deslizara en el oído: “¡Cuidado! Nosotros somos los primeros. Después les va a tocar a ustedes. Empezarán con el latifundio, seguirán con la mediana propiedad agrícola y concluirán con la pequeña. Hoy expropián las grandes empresas. Terminarán por estatizar hasta los talleres artesanales. Primero serán los monopolios de la distribución. Pero luego se tragarán todo el comercio. Así ha sido siempre, en todos los países socialistas. Así es en la Unión Soviética, en China, en Cuba. De modo que defendámonos juntos...” Y se defendieron juntos. Avanzado el proceso, hasta el más modesto almacenero se sentía en la obligación de protestar por el intento de estatizar el poderoso monopolio industrial del papel o del cemento.

La existencia de esta suerte de soldadura ideológica de la pequeña burguesía con la gran burguesía y los valores difundidos por Estados Unidos, hace esquemática la afirmación de quienes sostienen que —en el campo de las transformaciones revolucionarias— si se individualiza a los enemigos fundamentales (en Chile: el imperialismo, los monopolios y los terratenientes), se establece mecánicamente el área de los amigos. Son numerosos y variados los factores que entran a terciar: la dinámica del proceso, el carácter de la fuerza dirigente, el contexto histórico en que se desenvuelve, el peso ideológico de la burguesía, el nivel de desarrollo de la sociedad, especialmente su estructura de clase, el grado de dependencia del imperialismo, los analogismos históricos. Pero sobre todo, la entidad del “universo ideológico” de la pequeña burguesía.

Creemos que en Chile, después de 1970, la única política factible para tranquilizarlas e incorporarlas hipotéticamente a una alianza históricamente trascendente, era mediatizar la experiencia, hasta reducirla a un intento reformista más. En esta línea debíamos nacionalizar los grandes intereses norteamericanos, cancelando “justas y aceptables” indemnizaciones; limitar la socialización a sólo algunas pocas empresas monopólicas; implementar una reforma agraria moderada;

estabilizar económicamente el país y limar todas las expresiones agudas de lucha de clases. Y por sobre todo, debíamos haber impedido la presencia masiva del pueblo en la dirección del gobierno y de la economía, liquidando el control obrero en las grandes empresas, su participación en la dirección de las industrias, disolver los consejos campesinos, los comandos comunales, los cordones industriales, y por cierto, como tranquilizante supremo, desahuciar la participación comunista en el gobierno y reprimir violentamente "el extremismo". En otras palabras, en las condiciones históricas concretas en que nos encontrábamos, la condición última del compromiso era la renuncia a la revolución.

En torno a esta situación se plantea un problema de la mayor importancia teórica y práctica.

Las contradicciones existentes entre la pequeña burguesía y la burguesía, han ido perdiendo fuerza en el transcurso del tiempo, frente a la extraordinaria consistencia del bloque ideológico burgués imperialista.

Un pequeño propietario agrícola, en la Rusia de los zares, podía fácilmente concurrir a una alianza contra los terratenientes, toda vez que la red de explotación de aquéllos le era claramente perceptible. El pequeño agricultor chileno de 1970, no visualiza, dado el sistema de dominación ideológica del cual forma parte, al terrateniente como su principal enemigo, y por el contrario, ve en el proletariado y en su proyecto histórico, a su verdadero y definitivo adversario.

En otras palabras, aquellas contradicciones que antes se expresaban en términos reales y asequibles, hoy aparecen mediatizadas bajo el impacto de ese "sistema ideológico", cuyo objetivo muy preciso es adormecer la conciencia, para que no perciban esas contradicciones. En la misma medida que el mundo adquiere un carácter más ecuménico, más universal, en que se detecta con nitidez la existencia de la "gran pugna" entre socialismo y capitalismo, en que las fuerzas a nivel mundial se polarizan, todo suceso internacional empuja al hombre medio a una toma de posiciones, que dentro de las áreas de dominación ideológica del imperialismo opera en forma casi mecánica. Por ejemplo, en Chile no era claramente detectable, por el conjunto de las capas medias, la existencia de contradicciones insuperables con el imperialismo norteamericano; en cambio, sí estaban dispuestas a creer en supuestas y gravísimas contradicciones con la Unión Soviética o Cuba.

LA PEQUEÑA BURGUESÍA Y EL GOBIERNO POPULAR

Sin duda, el Programa Básico de la Unidad Popular no era contradictorio con los intereses objetivos de las capas medias asalariadas y no asalariadas. Por el contrario, establecía con bastante claridad el marco de los intereses que iba a afectar. Si nos limitamos sólo a cuantificar los enemigos fundamentales, concluiremos que ellos representaban sólo una minoría ínfima del espectro social. Algunas pocas empresas norteamericanas, doscientas empresas monopólicas y estratégicas y no más de seis mil terratenientes. Pero aquí radica el quid del problema. Es precisamente esta pequeña minoría, esta ínfima minoría, la que ejerce su dictadura institucional y sobre todo ideológica sobre el vasto y heterogéneo conglomerado pequeñoburgués e incluso sobre sectores importantes del proletariado, los campesinos y las masas marginales de la ciudad y del campo.

Indudablemente, el comportamiento agresivo de las clases medias frente al Gobierno Popular guarda relación directa con la profundidad y extensión del proceso revolucionario. Aunque las transformaciones emprendidas las favorecieron, objetiva y persistentemente, en definitiva, visualizaron en la supresión del capital monopólico y en el proyecto de cambio social, una amenaza a su propia existencia y a los valores de vida burgueses que presiden su comportamiento.

Sus mecanismos de seguridad funcionaron automáticamente, en cuanto accedió al gobierno una combinación política, en la cual gravitaban un Partido Comunista, "obsecuente servidor de la línea soviética", y un Partido Socialista, "violentista seguidor del modelo cubano".¹ En ellos vislumbraron la amenaza de destrucción de un régimen social, que las encandila con un cuadro de expectativas tan brillantes como ilusorias. En este orden de ideas, no cabe duda, habrían resistido a Allende —"presidente marxista"— y a la Unidad Popular —"combinación de partidos marxistas"— aun cuando se les hubiera ofrecido el más moderado de los programas reformistas. Tal era la magnitud de la desconfianza. Tal la hondura de sus temores y prejuicios.

No basta entonces el hecho de no estar objetivamente amenazadas. Es necesario que subjetivamente no se sientan amenazadas.

Las capas medias, en Chile y en el resto del mundo capitalista, son

¹ Conceptos de Patricio Aylwin, en carta dirigida a Radomiro Tomic el 6 de mayo de 1975, que expresan el pensamiento de un sector importante de la pequeña burguesía chilena y sobre todo del Partido Demócrata Cristiano.

parte integrante del bloque ideológico de la burguesía, están soldadas a él, y en modo alguno se sienten partícipes de la misión histórica del proletariado. Destruir este bloque, romper esta soldadura tan compleja y persistente, constituye sin duda uno de los desafíos de mayor trascendencia que enfrenta el movimiento revolucionario contemporáneo. Este problema no es ajeno a las nuevas posiciones que asumen los partidos comunistas de Europa occidental. En torno a él se ha abierto un amplio debate político y sociológico y se ha generado una profusa literatura analítica.

En Chile, la tarea de enfrentarlo resultaba todavía más ardua. A más del "corpus" de motivaciones íntimas, comunes a todas las clases medias, se agregaba el peso de una campaña ideológica que las había predispuerto frente a "los propósitos diabólicos" del Gobierno Popular: en último término, toda forma de propiedad sería liquidada, las libertades aherrojadas, impuesto el totalitarismo marxista, la dictadura del proletariado, los tanques soviéticos entrarían en Santiago y sobrevendría el desabastecimiento, el hambre, la anarquía social, el desorden y la inseguridad.

Todas las poleas de trasmisión ideológica de la burguesía y de EU habían machacado con enervante regularidad sobre estas imágenes distorsionadas. No era —en consecuencia— "la incapacidad de la dirección revolucionaria" la causa determinante de la estampida de la mayor parte de la pequeña burguesía, en instantes de extrema tensión social, de aguda polarización de clases y de crisis revolucionaria.

Con todo, la experiencia chilena obtuvo un formidable éxito. En 1970 ganamos la elección presidencial con el 36.3% de los votos. En 1971 nos empinamos sobre el 50% y en marzo de 1973 —en medio de una violenta crisis económica— logramos el 44%. Las cifras son aún más elocuentes. En septiembre de 1970, la UP obtuvo un millón de votos; en abril de 1971, un millón cuatrocientos mil; y en marzo de 1973, un millón seiscientos cincuenta mil sufragios. ¿Se puede atribuir entonces a la incapacidad de la dirección revolucionaria el no haber logrado una alianza más amplia? ¿Es que en otro país han concurrido las capas medias junto a la clase obrera para clausurar el poder económico y político de la burguesía o para traspasar el poder de la clase dominante al pueblo? ¿Se ha logrado —tal vez— en algún lugar, aglutinar en torno a los partidos obreros, un bloque social que represente á más del cincuenta por ciento de la población? ¿Acaso en Italia? Durante treinta años los comunistas italianos han venido desarrollando un esfuerzo extraordinariamente lúcido y coherente para romper la "hegemonía" de la burguesía y lograr un "compromiso histórico" con la DC. Indudablemente han conseguido avances muy sig-

nificativos. Pero hasta la fecha no ha sido posible concretar una alianza estable, ni siquiera con el ps, partido que de algún modo representa a importantes sectores pequeñoburgueses.

Igual ha ocurrido y ocurre en Francia, España, Portugal y Grecia. En los países de América Latina la situación es aún mucho peor. "La amplia alianza" postulada insistentemente por los partidos comunistas permanece, hasta ahora, sólo como categoría deseada.

Toda la literatura revolucionaria y política advierte con rara unanimidad sobre el carácter versátil, oscilante y oportunista de las capas medias. ¿Por qué entonces sorprenderse de lo ocurrido en Chile? ¿Por qué atribuirle una incidencia tan importante a los excesos —torpes por cierto— en que incurrieron algunos sectores de la extrema izquierda? ¿Es que la responsabilidad del ultrismo resuelve el problema de fondo?

En más de algún análisis precipitado del comunismo chileno se ha llegado a responsabilizar al "izquierdismo" por la fascistización progresiva de algunas capas de la pequeña y mediana burguesía. Tal afirmación prescinde absolutamente de la esencia ideológica reaccionaria de las clases medias y de su comportamiento histórico. Alemania se nazificó sin la presencia de extremistas. Mussolini y Franco fascistizaron Italia y España sin que esos grupos tuvieran mayor relevancia en las convulsionantes experiencias vividas por esas naciones. Son, pues, motivaciones más profundas y complejas las que determinan el comportamiento de las capas medias, y que en Chile, impidieron un compromiso social y político con ellas. Tal entendimiento sólo ha sido posible en coyunturas muy excepcionales. Por ejemplo, en las guerras populares de liberación, donde la lucha por la independencia nacional se identifica con la lucha por el socialismo, y donde la estructura de clase era muy diferente a la que existe en Chile, Argentina, Italia o Francia.

¿Cuál entonces es la política adecuada frente a las capas medias?

El empeño por atraerlas se hace básicamente viable en la medida que se accione con éxito sobre sus mecanismos psicológicos. Toda política debe orientarse a minar sus fijaciones y prejuicios. Más allá de excitar sus egoísmos y de satisfacer sus aspiraciones materiales, se trata de integrarlas en un gran proyecto de vida. Pero ello es extraordinariamente complejo y requiere de un proceso largo. Implica un esfuerzo de extrema latitud, destruir en la conducta cotidiana, en los hechos más que en las palabras, las imágenes pacientemente inoculadas. Sin embargo, a esa alternativa llegamos tarde. No era factible en el tráfago de una experiencia convulsionada, que había liberado en el pueblo todo su potencial revolucionario y rebasado los objetivos esquemáticamente prefijados.

Por otra parte, en la elaboración de cualquier política correcta hacia las clases medias, no puede prescindirse de un factor puesto en diáfana evidencia en Chile: la existencia de una autoridad real y efectiva.

La experiencia universal es uniforme. Por esencia vacilantes, se definen invariablemente en función de un polo de autoridad. Si éste no existe, cualquier intento de persuasión está condenado al fracaso. La pequeña burguesía valora en alto grado el ejercicio de la autoridad, del orden y la disciplina, en la misma medida que es hostil a su ausencia, a la inseguridad y a la anarquía.

Su resistencia al proceso revolucionario fue tanto mayor cuanto percibió que éste no estaba afianzado en un poder real, en una autoridad efectiva. Si la experiencia chilena hubiera contado con una dirección revolucionaria, única, centralizada y homogénea, expresión convincente de la fuerza y organicidad de la clase obrera y del campesinado, de su decisión de lucha y de la voluntad del gobierno de hacerla respetar irrestrictamente, pudimos atraer un contingente mayor del sector más tradicional de las capas medias —pequeños empresarios, pequeños comerciantes y trasportistas— e incluso, neutralizado al sector moderno tecnocrático —profesionales, técnicos, supervisores. En otras palabras, el diálogo sólo era factible desde posiciones de fuerza.

Una política para ser eficaz —sobre todo frente a las clases medias— exige disponer de fuertes elementos coercitivos, de la sólida evidencia de que existe una fuerza real, potencialmente utilizable, que puede y debe ser flexible, pero sobre cuya determinación de emplearla no quepa duda alguna. Sin la existencia de esa autoridad, las concesiones, el diálogo y cualquier tipo de transacción, son percibidas como signos de debilidad y no socavan la consistencia del bloque dominante.

6. LA DEMOCRACIA CRISTIANA: PROBLEMA DE AYER Y DE HOY

UNA PRECISIÓN INDISPENSABLE

En torno a la Democracia Cristiana se ha generado un debate trascendente. Durante el gobierno de la UP, la posibilidad de articular con ella un entendimiento básico, abrió hondas divergencias entre los distintos sectores del movimiento popular. El problema vuelve a reformularse hoy como una cuestión de importancia medular, frente a la urgencia de despejar las opciones tácticas y estratégicas planteadas por la lucha contra la tiranía.

La DC asume en Chile una representatividad social y política considerable, trasunto del peso específico de las capas medias en un país al que se le atribuía un carácter esencialmente mesocrático.¹

En la búsqueda de las causas originarias de la derrota, se sostiene que la suerte del proceso estuvo sellada por la incapacidad de la dirección revolucionaria para lograr una alianza con la DC. Dicha alianza, al dar una mayor base de legitimidad al gobierno, habría imposibilitado el supuesto aislamiento de la clase obrera, impedido el reagrupamiento de la burguesía en torno a su fracción oligárquico-monopólica, y finalmente, habría consolidado la gravitación del sector constitucionalista en las Fuerzas Armadas.

Tras esta aseveración se construye un cuadro argumental aparentemente sólido.

El gobierno empieza por malbaratar la posibilidad de utilizar la división de la burguesía, sobreviniente a su triunfo. Avanzado el proceso, y cuando su dinámica lo hacía peligrosamente vulnerable, se obstruyó la perspectiva de un acuerdo, que sin afectar al núcleo de la experiencia revolucionaria, la afianzaba, obstaculizando el desarrollo de la estrategia insurreccional montada por el imperialismo.

¹ "La gravitación de lo que se hace o se deja de hacer cuando se controla el 40% del Congreso Nacional; el 30% del electorado nacional; el 32% de los trabajadores organizados de la CUT; diarios, radios, tv, cinco de las ocho universidades del país, la gravitación digo, de una fuerza político-social publicitaria de esta envergadura, tiene efectos decisivos por sus acciones o por sus omisiones." R. Tomic, exposición ante el Consejo Nacional de la DC el 7 de noviembre de 1973.

La argumentación en torno al fracaso de esta alternativa "salvadora" se ha orientado a establecer la responsabilidad que en ella habría cabido al Partido Socialista.

Esta apreciación conlleva una no escasa dosis de mala fe, cuando no una inexcusable ligereza en el análisis de los acontecimientos históricos.

Efectivamente, en las distintas oportunidades, cuando se planteó la posibilidad de un entendimiento con la DC en torno a algunos problemas puntuales, el PS expresó un criterio adverso. Nunca creímos en tal alternativa. Nuestro escepticismo arrancaba de una posición profundamente realista, basada en los supuestos ideológicos y sociales que presidían el accionar demócrata cristiano. Sin embargo, formulada nuestra disensión, aceptamos democráticamente el criterio de la mayoría y no existió un solo acto nuestro orientado a obstruir el diálogo.

Nos parece importante reformular hoy nuestro pensamiento, a partir de una valoración objetiva de la conducta demócrata cristiana, en el trascurso de nuestras luchas sociales y de los parámetros dentro de los cuales encuadró su presencia en el quehacer político chileno.

ESENCIA Y APARIENCIA DE LA DC

Al extinguirse los años treinta, un pequeño grupo de intelectuales jóvenes, se marginó del viejo Partido Conservador, expresión aún sobreviviente de la centenaria oligarquía terrateniente. Era la Falange Nacional, que venía funcionando como grupo juvenil autónomo desde 1936. Su denominación recoge los analogismos, que algunos de sus líderes le atribuían, con la Falange española. Aquel fue el núcleo sobre el cual se construyó más tarde el Partido Demócrata Cristiano (1957).

El tiempo lo iría reorientando ideológicamente en torno al pensamiento social de las encíclicas papales y a las enseñanzas filosóficas de Jacques Maritain.

Más tarde, disputará exitosamente al Partido Radical la representación política de las capas medias, ofreciéndoles lineamientos ideológicos atractivos y modernizantes. En definitiva, se consolidará como un partido burgués reformista, sustentado socialmente en los estratos pequeñoburgueses, numéricamente mayoritarios en él, y en grupos de trabajadores y subproletariado de la ciudad y del campo; pero dirigido objetivamente por un núcleo que representa los intereses de los sectores más dinámicos de la gran burguesía y del imperialismo. El éxito político de este núcleo dirigente radicaba, en esencia, en su capacidad para

expresar, en una versión nueva y modernizante, los intereses de los sectores más dinámicos de la burguesía chilena y del "progresismo" norteamericano.

Al cubrir todas las gamas del espectro de clases, ofreciendo un "corpus" ideológico multifacético, confuso y contradictorio, multiplicó su capacidad de atracción y representación de intereses. Ello —indudablemente— lo logró más por su ambigüedad que por su coherencia.

Reflejando en forma plena la versatilidad social de los sectores medios, marcará su quehacer en los últimos treinta años, con un caminar incierto, que la ubica en el discurso político a la izquierda y en la acción práctica a la derecha. Adopta una posición tercerista. Se define simultáneamente como anticapitalista y antisocialista; es antiliberal, pero también antimarxista; declara su oposición teórica al imperialismo norteamericano, y al mismo tiempo, su condenación concreta al supuesto "imperialismo soviético". Sin embargo, no será difícil descubrir que los "anti" dirigidos contra la izquierda tienen extraordinaria consistencia y persistencia. En cambio, los "anti", que teóricamente parecen cuestionar de algún modo el sistema capitalista, se desvanecen en una retórica idealista, sin concreción en la realidad. La pretensión de configurar una suerte de tercerismo ideológico —un camino propio— equidistante "del liberalismo individualista" y del "marxismo totalitario", desaparece en la práctica. No hay tal ambivalencia. Cuando la coyuntura histórica la coloca contra la espada y la pared, la DC optó invariablemente por "la diestra". En definitiva, cuanto hay de profundo y sustancial en sus posiciones ideológicas, es un antimarxismo activo, militante y omnipresente.

¿Por qué en Chile, vigente la experiencia revolucionaria, no fue posible una alianza con el Partido Demócrata Cristiano?

Empecemos por consignar un hecho. Desde su nacimiento, hace aproximadamente cuatro décadas, la DC jamás aceptó una alianza política con la izquierda en su conjunto o con alguno de sus partidos principales. No ocurrió lo mismo con el Partido Radical. Éste, imbuido de una ideología racionalista, laica y progresista, se mostró siempre permeable a confluir en proyectos políticos con los partidos marxistas. Como lo hemos expresado, esa posibilidad nunca se dio con la DC. Con Pedro Aguirre Cerda, por cierto más conservador y menos modernista que Frei, un entendimiento fue posible. No lo fue en cambio con éste. ¿Por qué? ¿Por la persistencia de esta especie de constante histórica?

Contestamos. Porque la DC surge a la contienda social precisamente como alternativa frente a la izquierda. No obstante su pretensión formal de ubicarse ideológicamente en una hipotética calle del medio, en una tierra de nadie, siempre y en definitiva la encontramos como

una respuesta de contención a las fuerzas revolucionarias. La "Alianza para el Progreso", el aparentemente novedoso modelo kennediano de consolidación de la dependencia, encuentra en el proyecto demócrata cristiano su expresión más fiel. Cuando en el ardor de las luchas políticas, denunciábamos a la DC como "la otra cara de la derecha", estábamos acuñando algo más que una simple consigna. Era la ponderación inequívoca de una conducta persistentemente sostenida por ésta y de una expresión ideológica de administrada ambigüedad.

Cuando en las postrimerías de la década del treinta la izquierda chilena se cohesionó tras la línea de Frente Popular, los jóvenes líderes falangistas mantuvieron su fidelidad a la opción reaccionaria. Desde entonces y hasta 1964, cuando alcanza la plenitud de su vigor como expresión pluriclasista —básicamente pequeñoburguesa— recogiendo definitivamente la representación del sector desarrollista de la burguesía chilena, reivindicará invariablemente idéntico papel: el de ser en los hechos la alternativa frente al movimiento popular. Así lo entendió —por lo demás— el conjunto de la burguesía, y el imperialismo norteamericano, quienes al detectar en 1964 la amenaza inminente de un triunfo popular, se volcaron tras la candidatura de Frei.

Y más aún, el gobierno de Frei asume con entusiasmo el papel que el imperialismo le asigna en el plano continental: el de ofrecer un modelo alternativo frente a Cuba socialista y revolucionaria. La DC monta así la experiencia reformista de mayor trascendencia en América Latina.

La magnitud de la brecha abierta entre los proyectos políticos de la izquierda chilena y el de la DC, fue patentizada en dos frases que grafican cabalmente el pensamiento y la actitud de las bases de los partidos proletarios en esa época. Una, del secretario general del PS, Aniceto Rodríguez: "A la DC le negaremos la sal y el agua." La otra, del secretario general del PC, Luis Corvalán: "¡Con Tomic ni a misa!"

La campaña presidencial de la DC, en 1964, pone al descubierto la esencia de sus concepciones íntimas y el hondo y arraigado sentimiento que selecciona al socialismo como su principal y verdadero enemigo. Nunca en la historia del país se había acumulado en contra del movimiento popular, liderado por Salvador Allende, tal grado de vileza conceptual, de primitivismo político y de demagogia. Tal fue el contenido de la llamada "campaña del terror". Ésta trasuntaba algo más profundo que un sucio e inmoral recurso electoral. Expresa el trasfondo de un anticomunismo visceral siempre presente en instantes decisivos. Y no se trata de una actitud históricamente reciente. Hace casi cuatro décadas, el joven Frei enjuiciaba al gobierno radical de Pedro Aguirre Cerda en los siguientes términos: "Estamos mal, com-

pletamente aislados en América y eso es grave. ¿Y por qué? Por la influencia comunista que nos hace sospechosos...”

¿Qué tiene de extraño y particular entonces, que cuarenta años más tarde, el Senado norteamericano revele al mundo cómo la DC chilena ha sido el centro de una inversión millonaria de la CIA, realizada —precisamente— para bloquear el ascenso del movimiento popular? ¿Y que esta inversión fuera sostenida ininterrumpidamente desde 1962 hasta los meses siguientes al golpe militar?

El informe Church revela el historial abyecto de la burguesía chilena. No constituye una acusación interesada frente a una situación específica de corrupción ocasional. Ni siquiera una confesión determinada por móviles rectificadores. Se trata, pura y simplemente, de la radiografía de una práctica, cuya legitimidad el imperialismo defiende al amparo de los nuevos valores éticos reivindicados por el presidente Ford. Estos convalidan el crimen, el soborno, la corrupción y la intervención abierta en la vida de otros pueblos, basado en el solo derecho que emerge de los intereses imperiales.

En este nuevo contexto, la Democracia Cristiana quedó al desnudo. Durante doce años, fue financiada con dinero norteamericano. Hasta sus imágenes más modernizantes y progresistas aparecen diseñadas por la asesoría de la CIA. Su estructura orgánica, su prensa, sus radios, sus bienes no son producto del laborioso aporte de sus militantes. Siempre hubo un proveedor solícito que canceló generosamente las rentas de alquiler.

Los antecedentes del informe senatorial la colocan en una encrucijada moral de la mayor gravedad. No se trata ahora de una acusación perversa “del marxismo” a la cual se le puede salir al paso con una refutación destemplada. No es un pequeño escándalo publicitario, posible de ahogar con el silencio indignado. Es la estructura de poder del imperialismo la que habla por boca del Senado de EU para exhibir, arrogante e impúdica, los métodos utilizados por éste. Frente a la vergonzosa magnitud de la acusación, la tímida exculpación personal de Eduardo Frei —que recurre al propio informe senatorial, con lo cual le da legitimidad, para demostrar que era ajeno a una de las muchas operaciones financieras concedidas a su partido— resulta en definitiva una confesión cabal de la sostenida trama de corrupción y sometimiento. En la cronología de las dádivas imperiales, hay una “partida” en extremo sugerente: ocho meses después del golpe militar, cuando el fascismo festinaba su crueldad sobre el dolor de Chile, la CIA solicita al “Comité de los Cuarenta” la cantidad de 50 000 dólares para responder a “compromisos políticos contraídos con la DC antes del golpe”.

LA DC Y EL GOBIERNO DE ALLENDE

Es un hecho cierto que la victoria popular se construyó sobre una división adjetiva de la burguesía chilena. Las tímidas reformas ensayadas por Frei, sobre todo en el plano agrario, le habían granjeado la animosidad de los sectores más retardatarios de la oligarquía terrateniente. En torno a ellas se generó una creciente —aunque irrelevante— pugna político-parlamentaria, que alcanzó su culminación en el período preelectoral. El sector monopolista tradicional, cuya expresión política resultó debilitada con el fracaso de la experiencia conservadora de Alessandri (1958-1964), se recuperó ostensiblemente en las consultas electorales precedentes a la contienda presidencial. La DC, por su parte, instalada en el gobierno, controlaba la estructura política y administrativa, factor de indiscutible gravitación en el proceso electoral. Así, ambas fracciones de la burguesía se sentían suficientemente fuertes como para enfrentar aisladas al movimiento popular. Sólo esta apreciación subjetiva y equivocada impidió soldar la fractura, tal cual había ocurrido en 1964.

También es cierto que la DC permitió con sus votos, en el Congreso Nacional, la ratificación institucional del triunfo de Salvador Allende.

Si precisamos el contexto político y social que condicionaba la decisión demócrata cristiana, debemos concluir que ésta —con ser positiva y corresponder a la honesta vocación democrática y progresista de muchos de quienes se jugaron por ella—, no era en modo alguno una concesión graciosa al movimiento popular triunfante. Diversos factores harían que esta determinación fuera en definitiva inevitable.

La DC acababa de ser derrotada con un programa radical y un candidato de avanzada, Radomiro Tomic. De alguna manera la campaña electoral radicalizó a sus sectores populares, creando internamente un factor que dificultaba la pretensión de escamotear el triunfo de la izquierda.

De otra parte, pesaba una sólida e ininterrumpida tradición que obligaba al Parlamento a ratificar el veredicto de las urnas. Además el movimiento popular exhibía una enorme combatividad, de manera que no era fácil imponerle una “sorpresa por secretaría”. Finalmente, un hecho dramático, el asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército, a manos de una pandilla fascista, actuaría como disuasivo emocional, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. Es decir, existía una constelación de elementos convergentes, que

llevan a la dc a legitimar el triunfo popular. Lo hace cuando una sucesión de factores dieron por cancelada la intentona sediciosa montada por la CIA, la ITT, Frei y la participación activa de sus más cercanos colaboradores.

A mayor abundamiento, y en el ánimo de atribuir al hecho analizado su exacta dimensión, es útil recordar que el reconocimiento formal de la burguesía a una victoria popular no era un hecho insólito en la historia de Chile. Ya en 1938 la clase dominante, estrechamente derrotada, absorbió los márgenes de riesgo y entregó el poder a la combinación triunfante, integrada por los partidos Radical, Socialista y Comunista. En 1946, un sector de la oligarquía volvió a ratificar en el Congreso, la consagración de un candidato radical apoyado exclusivamente por el pc.

Instalado Salvador Allende en la presidencia de la República, empieza a implementarse el programa popular a un ritmo resuelto.

Paralelamente, el sector reaccionario del pdc adopta las medidas necesarias para retomar su dirección orgánica, de la cual —en esencia— siempre pudo disponer a voluntad. Así la dc se adecuaba para asumir su papel natural: constituirse una vez más en alternativa al proceso revolucionario.

Y queremos al respecto desvanecer lo que no es sino un espejismo: la existencia en el seno de la Democracia Cristiana de dos tendencias potencialmente equilibradas, cuyo preminencia en la conducción interna pudo ser influida por una correcta política de la dirección revolucionaria.

¿Qué hay de cierto en esta afirmación? Efectivamente, siempre hubo en la dc un sector progresista, que entendía natural una alianza con las fuerzas populares. Sin embargo, este sector jamás logró constituirse en real fuerza dirigente y su destino fue reiterativo: escindirse cuando percibe la inutilidad de la lucha interna. Nunca lograron la confianza de los grupos sociales más influyentes, y no obstante el prestigio moral de sus personeros, su alta calidad intelectual y su solvencia política indiscutida, en el instante de la ruptura, se convierten en generales sin soldados. Así ocurre con el partido MAPU en 1969, antes de la elección presidencial, y con la Izquierda Cristiana, en julio de 1971.

Si Frei se erige en líder endémico de la dc no lo es por el solo peso de sus cualidades personales. Es su consecuencia medular con la ideología, valores, sentimientos y prejuicios, subyacentes en una masa partidaria pequeñoburguesa, básicamente hostil al cambio. Él asume a cabalidad su representación. Esto determina su influencia y la continuidad de su presencia en la vida del partido. De hecho, nunca ha sido derrotado en las confrontaciones internas, y sus alejamientos

formales apenas si han constituido pausas efímeras, toleradas y administradas.

Afirmar que dependía de una política correcta de las fuerzas populares, consolidar el dominio del sector de izquierda y atribuir su desplazamiento a los excesos sectarios de la Unidad Popular, es una ingenuidad. Aquel sector, usufructuario ocasional de la dirección del PDC, es erradicado como y cuando lo quiere el freísmo.

Por cierto que la acusación sobre sectarismo es valedera. Constituyeron errores serios en nuestra conducta, sobre todo en las relaciones con la base demócrata cristiana. La UP no fue capaz de superar la actitud —habitual en Chile— de todos los movimientos triunfantes, en orden a distribuir los cargos públicos como si fueran “botín de guerra”. No articuló una política de acercamiento y convergencia en el seno de las masas. No siendo este sectarismo el que determinó la actitud del PDC frente al Gobierno Popular, indudablemente le dio al quehacer reaccionario de su dirección, una justificación política y moral ante sus sectores obreros, campesinos, pequeñoburgueses y subproletarios.

Sólo dos meses después de la elección municipal de 1971, donde la izquierda se empuja sobre el 50% del electorado, se aprovecha impudicamente un acontecimiento en el cual el gobierno no tuvo la menor responsabilidad para provocar una situación de ruptura definitiva. El asesinato del ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Zujovic, es utilizado con grosera hipocresía por el freísmo, para proceder al ajuste interno de la DC, asumir el control del Parlamento y soldar con la derecha (Partido Nacional) un compromiso político subsistente hasta la caída del Gobierno Popular.

El asesinato de Pérez Zujovic sirvió para ensamblar la unidad de la clase dominante, al menos en la perspectiva estratégica. A partir de aquel acontecimiento se da luz verde a una ofensiva generalizada en todos los planos: institucional, publicitario, de masas e incluso militar.

EL DIÁLOGO IMPOSIBLE

En general, los análisis en torno a la suerte de las sucesivas iniciativas promovidas por el Gobierno Popular, para buscar un área de convergencia con el PDC, se orienta a dar por establecido la viabilidad de tal entendimiento. A partir de esta afirmación se atribuye su fracaso a la actitud obstruccionista y sectaria de un sector de la

Unidad Popular. El diálogo frustrado pasa a desempeñar un papel sustantivo, al generar el supuesto "aislamiento de la clase obrera", afirmación reiterada como una suerte de axioma. El ciclo argumental se cierra infiriéndose, además, que tal aislamiento constituyó la causa principal de la derrota.

Sobre las alternativas y entretelones de las diferentes tentativas de acuerdo con la DC, el pueblo de Chile tuvo permanente información. No fue aquélla una negociación subrepticia. Hasta las menores incidencias fueron ampliamente difundidas por la prensa de gobierno y oposición.

Desde luego, es un hecho cierto que el gobierno de la UP buscó honesta y reiteradamente un entendimiento con la DC. Es cierto también que en el seno de la izquierda se formularon reservas legítimas y justificadas sobre el éxito y conveniencias de tal iniciativa. Pero es necesario dejar plenamente establecido que ningún partido de la UP obstaculizó el desarrollo del diálogo propuesto.

El Partido Socialista veía con claridad la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la DC y expresó —como antes se ha dicho— un criterio adverso. Contra él conspiraba el peso decisivo del sector freísta, la ideología de su base pequeñoburguesa, mayoritariamente prevenida contra el proceso revolucionario, y la implícita autodefinición del PDC, como alternativa de remplazo a la UP, en la perspectiva de un colapso institucional. Conocida la posición del PS, su dirección prefirió marginarse de las conversaciones, precisamente para no dar pábulo a situación alguna que pudiera ser utilizada como pretexto formal del fracaso.

En cada instante del diálogo representaron a la UP dirigentes políticos absolutamente convencidos de su factibilidad, incluyendo al propio presidente de la República.

En el mes de marzo de 1972, el presidente Allende encargó al ministro de Justicia de la época, una gestión de entendimiento en torno al problema de la constitución del área social de la economía. La aptitud y disposición del negociador parece indubitable si se considera su incorporación, más tarde, junto a su partido, a las trincheras de la más enconada oposición. El entusiasmo puesto en la empresa lo llevaron a exceder el marco de su cometido, obligando al presidente a solicitarle abruptamente la renuncia de su cargo.

El 12 de junio del mismo año —1972— el propio Allende toma la iniciativa de invitar al presidente del PDC, senador Renán Fuentealba, para reabrir la gestión fracasada. En aquella oportunidad convienen en suspender una votación senatorial sobre los votos del Ejecutivo al proyecto que el mismo senador y su colega Hamilton habían presentado al Congreso, con el objeto de delimitar el área de pro-

piedad social, y constituir una comisión negociadora abocada al estudio de un nuevo proyecto de ley sobre la materia. La UP encargó esta vez la gestión al ministro de Justicia y militante del PR, Jorge Tapia, al senador Rafael Agustín Gumucio de la Izquierda Cristiana, y al miembro de la Comisión Política del PC, Orlando Millas. Este último sería remplazado más tarde por el militante del mismo partido, entonces subsecretario de gobierno, Sergio Insunza.

Las conversaciones culminaron con dos cuestiones pendientes: la inclusión de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, el mayor monopolio del ramo, en el área social, y la forma de integrar el directorio de los bancos estatizados. El 30 de junio el gobierno aceptó nada menos que la exclusión de dicho monopolio del área social y accedió a la fórmula del PDC sobre el problema de los bancos. El 4 de julio se llegó a un acuerdo total. Al día siguiente, los senadores de la Democracia Cristiana desconocieron el entendimiento y rechazaron junto al resto de los partidos opositores los vetos propuestos por el Poder Ejecutivo a la Reforma Hamilton-Fuentealba. De esta manera naufragaban, de hecho, veintitrés días de intensas conversaciones. Un llamado telefónico de Frei, ordenando el desahucio inmediato del acuerdo, hecho desde un país extranjero, puso las cosas en su lugar.

El 30 de julio de 1973, en el clímax de subversión fascista, el presidente de la República realizó un nuevo esfuerzo. Esta vez se trataba de evitar un enfrentamiento inminente. El interlocutor fue el propio presidente de la DC, senador Patricio Aylwin. Siguiendo instrucciones precisas de Frei, Aylwin conduce las conversaciones a un punto muerto, sin salida. La línea ultimativista es señalada por *El Mercurio* el mismo día en que se inició el encuentro: "La aceptación del diálogo que hoy debe tener lugar en La Moneda está dada por la DC sobre bases precisas. Se pide al gobierno que restablezca la confianza de la ciudadanía mediante un gabinete en que exista representación institucional de las Fuerzas Armadas; que active el desarme de los grupos políticos y sindicales mediante el efectivo cumplimiento de la ley de control de armas y que admita la interpretación que ha dado la mayoría del Congreso a la promulgación de las reformas constitucionales."

A estas exigencias mínimas, planteadas sin rubor por el vocero norteamericano, el senador Aylwin agregaría la devolución de algunas empresas ocupadas por los trabajadores. Es decir, la rendición absoluta, la aceptación de un virtual "cogobierno" con los militares y el término del proceso.

El 4 de agosto, la DC rompe abruptamente las conversaciones por medio de una carta pública de Aylwin al presidente Allende. En ella,

invocando —naturalmente— los más excelsos intereses de la patria, enfatiza “que sólo en torno a los planteamientos formulados se pueden crear las condiciones de tregua y normalización cívicas indispensables para la búsqueda de entendimientos verdaderamente fecundos”. Señalará, finalmente, que si las exigencias de su partido no son aceptadas es “inútil prolongar conversaciones que sólo contribuirán a confundir más al pueblo que nos mira, con el consiguiente perjuicio para nuestro régimen democrático”.

Ante esta tajante negativa, Allende responderá de inmediato —también públicamente— con un postrer y sereno llamado: “No deseo dramatizar, pero tengo el deber de recordarle las trascendentales responsabilidades que usted y yo tenemos en la difícil instancia que vive el país y las proyecciones históricas de nuestras decisiones. Por ello, y por el interés superior de Chile, debemos continuar el diálogo. Lo invito formalmente para que prosigamos nuestras conversaciones.”

La exhortación no tendrá respuesta. La DC había actuado una vez más con las cartas marcadas. Su disposición dialogadora, en esa oportunidad, no tenía más objeto que ser una hábil maniobra para dejar sin argumentos a los sectores democráticos de su partido, que recusaban comprometerse en la estrategia golpista. Se había “jugado” nuevamente al diálogo. Este juego era parte de la contribución del sector freísta a la conspiración en marcha. La intención artera de la maniobra era tanto más evidente, si se considera, que de hecho, habían sido aceptadas la mayoría de las exigencias formuladas al presidente de la República: éste había constituido un gabinete con participación de los militares; se había llegado a un razonable acuerdo frente al problema de los vetos; y en torno a la existencia de los presuntos “grupos paramilitares”, el ejército, virtualmente bajo control de los golpistas, venía actuando impunemente, bajo el pretexto de cautelar el cumplimiento de la ley de control de armas.

Por último, a la dramática invocación del cardenal Raúl Silva Henríquez, formulada algunos días antes del golpe, la DC, por intermedio de su presidente, dará una arrogante respuesta: “No hay conversaciones mientras el gobierno no proceda a las rectificaciones planteadas en el acuerdo de la Cámara de Diputados.”

Ésta es la historia del diálogo entre la UP y el Partido Demócrata Cristiano. Podrán existir algunas variantes interpretativas, pero en lo fundamental, queda en pie la disposición de ánimo con el cual fue enfrentado. Para el sector reaccionario del principal partido de oposición, las conversaciones tuvieron siempre un carácter puramente táctico. Se trataba de dar al país una imagen de apertura, presentando al mismo tiempo al gobierno como intransigente y sectario. Conversaba, pero no negociaba. Siempre existían buenas razones para no

llegar a acuerdos. Todo el formidable aparato propagandístico de la reacción se movilizaba entonces para atribuir la responsabilidad del fracaso al gobierno o al propio presidente de la República. De esta manera, mientras los "intentos frustrados" debilitaban políticamente a la UP, le entregaban a la DC el justificativo moral de sus ulteriores movidas.

Resulta pertinente recordar un hecho demostrativo de la motivación artera que la DC atribuyó al diálogo con el gobierno. El 9 de agosto de 1973, el presidente designó un nuevo ministerio, integrado por los tres comandos en jefe de las Fuerzas Armadas, en carácter institucional. Esta medida había sido adoptada a petición del propio Aylwin al iniciarse las conversaciones. La directiva nacional DC formuló de inmediato una declaración de apoyo. Tres días más tarde, se desligó públicamente del compromiso, mientras su vocero oficial, el diario *La Prensa*, solicitaba la renuncia de los ministros militares.

Radicalizado el proceso y arrastrada la DC por la pendiente conspirativa, no era posible acuerdo alguno con la UP, sino a partir del sometimiento del gobierno y la mediatización de la experiencia revolucionaria. En su pretensión estratégica alternativista de la revolución, la DC aspiró, primero a una rectificación política por la vía institucional, para más tarde, darse por satisfecha sólo con el derrocamiento armado del gobierno.

De alternativa factible, el golpe militar pasó a transformarse en perspectiva deseable. Astutamente se había pavimentado el camino para una intervención castrense, que pusiera término al régimen institucional, posibilitando después de un breve interregno dictatorial, la convocatoria a elecciones, que permitirían el retorno de la DC en gloria y majestad al ejercicio del poder. Frei personalmente debería recoger, por mano mora, los beneficios del *putsch* militar.

Esquema insensato e incapaz de evaluar correctamente hasta qué punto el estado liberal burgués estaba condenado a muerte una vez derrocado el Gobierno Popular. Sólo mucho después del golpe, cuando habían agotado la vergüenza en el intento de avalarlo, los dirigentes DC descubren que no son protagonistas, sino meros partiquinos, de un plan contrerrevolucionario, preparado y financiado por la CIA.

Resulta superflua entonces la pretensión de definir —en el seno de la izquierda— las presuntas responsabilidades de algunos en el "fracaso del diálogo". Éste nacía abortado por la presión norteamericana y por su incompatibilidad con la resuelta estrategia de poder impuesta por la gran burguesía monopólica. Tal situación no era susceptible de ser alterada por concesiones superestructurales ni por la decisión honesta de algunos personeros progresistas de la DC. Si Allende mantuvo algunas opciones en las distintas fases de la ges-

ción, éstas fueron sucesivamente: transar el proceso revolucionario; claudicar incondicionalmente; y por último, abdicar a su cargo.

Por lo demás, así lo entendió con claridad el contingente que abandona el partido en julio de 1971 y constituye la Izquierda Cristiana. Ellos renuncian a ser sólo factor de presión interna, porque ya a esa altura —ocho meses del inicio del proceso— concluyen en la inutilidad de su misión.

Y no era sólo porque lo impidiera la estructura direccional. Las propias bases de la DC, en las cuales influían sin contrapeso las animosidades, temores y prejuicios de las capas medias frente a un proceso revolucionario, presionaban desde la derecha sobre sus líderes vacilantes.

Año y medio después del golpe militar un antecedente extraordinariamente revelador disipa cualquier duda. En abril de 1975, el ex senador Patricio Aylwin, presidente en ejercicio de la DC, formuló al plenario del partido una consulta amplia sobre las variantes de acción frente a la dictadura. La ponderación porcentual de las respuestas, despeja sin dejar lugar a dudas las interrogantes que hemos tratado de clarificar en las páginas anteriores.

Frente a la experiencia fascista la inmensa mayoría de la estructura partidaria dirigente (68.18%) se pronuncia por una actitud de "independencia crítica y activa". Es decir, el asesinato cotidiano, la tortura convertida en sistema, la violación brutal de todos los derechos humanos, la cesantía, el hambre y la miseria de cientos de miles de trabajadores, la demolición vertiginosa del país, la realidad infamante que vive Chile, ha sensibilizado "profundamente" a esa mayoría partidaria, al extremo de decidir frente a la barbarie una posición de "independencia", eufemísticamente adjetivada como "crítica y activa". Pero hay más. Un 28.79% estima que una actitud de colaboración con la dictadura facilitaría "desde dentro" la vuelta a la democracia. Un 1.51% patrocina la "resistencia" y un 9.09 una oposición frontal.

¿Y sobre la posibilidad de un entendimiento con los partidos marxistas para constituir un frente amplio? La respuesta continúa siendo elocuente: un 3.03%.

Estos datos están incluidos en una carta que el señor Aylwin dirige a Radomiro Tomic el 6 de mayo de 1975, hecha pública por voluntad de su destinatario.

Aquí está expresado con consecuencia inobjetable el sustrato del pensamiento del sector dirigente de la Democracia Cristiana. Su constante histórica: el adversario es el marxismo. No importa cuál sea la coyuntura social. Ni siquiera la tiranía de hoy es su enemigo principal. Frente a ella el partido, al igual que el señor Aylwin, se declara

“independiente, crítico y activo”. Pudo haber agregado: “quieto y silencioso”, en espera de que la pandilla fascista masacre a los trabajadores y liquide sus organizaciones, para levantar más tarde —sobre terreno yermo— las banderas de la “democracia, la libertad y el cristianismo”.

Se trata de un juego sucio, cobarde y sin destino. En los mismos instantes en que miles de trabajadores caían en las calles de Santiago, cuando se cazaba como fieras a los hombres de izquierda y la soldadesca destruía y rapiñaba sus hogares, la DC convalidaba moralmente el golpe [13 de septiembre], expresando sobre el cadáver del presidente asesinado, que “las Fuerzas Armadas no buscaron el poder y que sus propósitos de restablecimiento de la normalidad institucional y de la paz y unidad entre todos los chilenos, interpretan el sentimiento y merecen la patriótica cooperación de todos los sectores”.

La misma devoción en el nuevo régimen reitera Eduardo Frei en la carta dirigida a Mariano Rumor, presidente de la Unión Mundial Demócrata Cristiana, el 8 de noviembre de 1973: “Todos los chilenos, o al menos la inmensa mayoría, estamos vitalmente interesados en que se restablezca la democracia en Chile, y para esto es necesario que el país salga del caos, y en consecuencia que el gobierno actual tenga éxito. Las Fuerzas Armadas —estamos convencidos— no actuaron por ambición, más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país...”

Sólo en diciembre de 1975 —trascurridos más de dos años de barbarie— Eduardo Frei asume, en un documento personal, una posición comedidamente crítica frente a la junta fascista. Por primera vez, se da por apercebido de la práctica sistemática de torturas, de la violación persistente de los derechos humanos y de la bancarrota económica, social y moral del país. Su administrado silencio —mientras Pinochet se agotaba en la faena de exterminio físico de los mejores cuadros de la izquierda revolucionaria— se rompe también en una instancia astutamente calculada: cuando las presiones externas e internas sobre la junta restringen el margen de riesgo personal y político de su ataque. Por cierto, la crítica a la dictadura se formula desde las mismas categorías reaccionarias que sellaron su vida política: democracia, con proscripción del marxismo, y paz interna, con perdón de los verdugos.

LA DC: ALTERNATIVA AL MOVIMIENTO POPULAR

Es pues, a la luz de esta conducta históricamente sostenida, de donde se infieren las posiciones que el Partido Socialista asumió frente a la Democracia Cristiana. Es la práctica, tenazmente reiterada, la que hace irrelevante la pretensión de atribuir a la incapacidad de la UP o al sectarismo de alguno de sus partidos, el no haber aprovechado y estimulado "las potencialidades revolucionarias" de la DC. Tales "potencialidades" —no descubiertas antes ni durante el proceso por ninguno de los dirigentes de la izquierda— jamás existieron y resulta poco serio y acientífico inferirlas del sólo quehacer de un ala progresista, cuyo destino lamentablemente ha sido la frustración constante.

Tal cual se dio la lucha política en Chile, la unidad con el partido de Frei nunca se planteó en las filas revolucionarias. Desde 1958, la DC y los partidos obreros antagonizan como dos opciones de poder y ésta es la constante en el desplazamiento político de una y otros.

Como lo hemos visto, el Programa de Gobierno de la UP enjuiciaba severamente la experiencia demócrata cristiana: "En Chile, las recetas 'reformistas' y 'desarrollistas' que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei, no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado, una vez más, que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo." Este juicio expresaba la opinión unánime de los partidos que integran la Unidad Popular.

El diálogo deseado y formulado por el conjunto de la coalición de gobierno fracasa —exclusivamente— porque así lo quiso la dirección de la DC. Y ello no ocurrió por un subalterno capricho partidario. Ese diálogo era intrínsecamente inviable, porque el sólido circuito que conectaba al PDC con los intereses norteamericanos y de la gran burguesía hacía ilusorio cualquier apoyo, incluso circunstancial, al proceso revolucionario. Suponerlo era una ingenuidad inexcusable.

Su ideología esencialmente antimarxista, y la naturaleza de la representación de clase que asume en la sociedad, obstruía, inevitablemente, cualquier compromiso. En Chile, al igual que en el resto del mundo, su invariable pretensión alternativista frente a un auténtico proceso de cambio, la inhabilitaba para converger con las fuerzas revolucionarias en una gran empresa.

Queremos precisar aún más nuestro pensamiento. Entendimos ayer, como entendemos hoy, que una alianza con la dc en el contexto de una estrategia revolucionaria era y es un factor básico para acumular más fuerzas. Y porque así también lo entendió la burguesía y la dirección derechista del pdc, es que se apresuraron a impedir su concreción.

Ahora bien, tal alianza no depende de nuestra voluntad ni del empeño desplegado por los sectores más avanzados de la Democracia Cristiana. La más resuelta disposición de ánimo, los llamados unitarios más inflamados y amplios, se estrellarán con el antagonismo sustantivo condicionado por las leyes objetivas del desarrollo de una revolución socialista. Debemos afirmar, aun a riesgo de parecer esquemáticos, que el obstáculo esencial está determinado por la incompatibilidad entre revolución y reformismo. Los "porfiados hechos" siguen pesando más que los buenos deseos. Hoy, a tres años del golpe militar, la dc no sólo deja sin respuesta los llamados unitarios de la UP, sino declara explícita y reiteradamente no estar dispuesta a formar un frente único antifascista ni a concertar compromisos ni acciones comunes con los partidos marxistas.

Con todo, el dc es en sustancia un partido pequeñoburgués. Son los valores fundamentales de la burguesía, adoptados por las capas medias, mayoritarias en su seno, los que han marcado su conducta política en Chile y en el resto del mundo. Frente a una experiencia revolucionaria o en instantes históricos decisivos, se ha inclinado siempre por la conservación del estatus burgués, incluso cuando éste supone el terror fascista.

Ésta ha sido sin excepciones la experiencia universal. Derrotado en Europa el fascismo, los pequeños partidos demócrata cristianos, anteriores a la conflagración, se alzan como organizaciones poderosas. Su vertiginoso crecimiento nace precisamente del papel asignado en el esquema político de posguerra: ser la nueva alternativa reaccionaria, apoyada firmemente por EU, frente a los movimientos progresistas y al poderío sobreviviente de los partidos comunistas europeos. En el hecho, sustituyen al fascismo como expresión derechista en el nuevo espectro político. Así ocurre en la República Federal Alemana, Italia, Bélgica, Francia y Austria. No es aventurado pronosticar que en España ocurrirá algo similar. Un fenómeno semejante, aunque con cierto retardo, se da en América Latina. Acá, desde posiciones de centro, la dc en Chile y en Venezuela, emergen como contrapartida de los movimientos populares en ascenso.

¿De dónde entonces deducir que en Chile era posible concitar el apoyo de la dc a un proyecto revolucionario? ¿Por qué atribuirle en nuestro país especificidades capaces de imprimirle una conducta polí-

tica diferente a la de sus congéneres europeas y latinoamericanas? Ella nace con el mismo sentido histórico, asume la misma representación social, y su dirección la hegemoniza la clase dominante, al igual que en otros lugares del mundo. Es ello lo que condiciona sus actitudes de ayer y de hoy. Puede ubicársela más o menos a la derecha. Dependerá de los marcos de referencia del espectro político de cada país. Si en Chile aparece a la izquierda de la Democracia Cristiana de Alemania Federal, es porque aquí todo el espectro político está "corrido a la izquierda". La presencia de poderosos partidos obreros de inspiración marxista la obliga a plantearse, si aspira a ser alternativa, con una imagen nueva, progresista y modernizante. Pero ello no altera su esencia como expresión defensiva del estatus.

¿Por qué entonces sorprenderse por no haberse dado —precisamente en el Chile revolucionario— un compromiso, ausente no sólo en toda la historia del país, sino también en cualquier latitud de la tierra?

Debemos entenderlo definitivamente. La respuesta de la DC en Chile fue legítima, al amparo de su propia lógica. Era la respuesta de la pequeña burguesía chilena enganchada en la empresa burguesa, y sobre todo norteamericana, de impedir las transformaciones estructurales reclamadas por el atraso, la dependencia y el subdesarrollo. Era la respuesta que nacía de su condición de alternativa burguesa al movimiento popular.

7. PODER POPULAR: EXIGENCIA DE LAS MASAS

Los trabajadores de Chile, con la insondable intuición de la clase, sobrepasan a sus vanguardias al enunciar una consigna destinada a traducir un sólido e inquietante fenómeno social: ¡Crear, crear, Poder Popular!

Respuesta espontánea de las masas en una coyuntura que presienten definitiva, orientada a llenar un vacío direccional y sustituir la ausencia de una respuesta revolucionaria al problema del poder.

Aquella consigna, planteada en los momentos más álgidos del conflicto, penetra con incontenible fuerza en la conciencia de las masas, generando una reacción de violento dinamismo, en cierta medida, ajena a la tuición de los partidos populares.

La burguesía se atemoriza. Percibe de inmediato los peligros de un fenómeno preñado de extraña vitalidad y descubre la potencialidad revolucionaria inmersa en él. La Unidad Popular —en conjunto— vacila, observa en el poder emergente un vago antagonismo, intuye las dificultades para someterlo a control y, en definitiva, se sustrae a la tarea de hacerlo consciente, orientarlo y canalizarlo.

No obstante, la generación de este poder popular, a no dudarlo, es la creación más original del proceso revolucionario chileno. Es consecuencia directa de éste, de la fortaleza y pujanza adquirida por el movimiento popular, de la participación protagónica y creciente de los trabajadores en la conducción del proceso, y de la formidable contraofensiva de clase, lanzada por la gran burguesía financiera e industrial, coludida con el gobierno de EU.

El Poder Popular expresa el extraordinario desarrollo de la conciencia individual y colectiva de las grandes masas urbanas y —en menor medida— la de los estratos más pobres del campesinado. Es un grado de conciencia política definido nítidamente en términos de unidad y de poder que excede cualquier pretensión economicista. Sectores amplísimos de la población, muchos de ellos secularmente marginados (subproletariado del campo y de la ciudad, habitantes de las poblaciones periféricas), despiertan animados por hondos anhelos de participación y por un formidable impulso movilizador que los proyecta en términos de “poder” a la creación de las más variadas organizaciones para responder a las múltiples exigencias generadas por el proceso. Estas organizaciones son sentidas por el pueblo como “su poder” y encarnan su propia y espontánea capacidad de lucha.

La alternativa de crear gérmenes de poder popular a partir de la gestión directa de los trabajadores, ya fue considerada en los documentos que sirvieron de fundamento programático a la Unidad Popular. El programa de Gobierno señalaba: “las transformaciones revolucionarias que el país necesita, sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente...” Más adelante agregó: “el Gobierno Popular asentará esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo que le brinde el pueblo organizado”, para concluir que sólo “a través de una movilización de masas, se construirá desde las bases, la nueva estructura del poder...”

Si bien estos textos no configuraban una noción precisa acerca de lo que debía ser el Poder Popular, ni entregaban criterio claro sobre su carácter y naturaleza, está presente, en cambio, la idea central de impulsar en la base la constitución de órganos de poder, destinados a resolver los problemas de las masas, su participación real y efectiva en la conducción del proceso, y su profundización y defensa. Por cierto que entre esas previsiones programáticas y la elaboración intuitiva, vital y creadora de las masas, nacida al calor del proceso, hay una gran distancia. Las variadas formas de poder surgidas en las bases, no se limitaban a un quehacer coadyuvante de la acción del Estado, sino que además realizaban una actividad paralela y autónoma.

El proceso revolucionario ponía en evidencia —una vez más— la inmensa superioridad de la vida sobre las más brillantes teorizaciones.

LA GENERACIÓN DEL NUEVO PODER

Inicialmente, el nuevo poder se manifiesta como una respuesta urgente e improvisada a las acuciantes necesidades planteadas por la experiencia revolucionaria. Se gestan al calor de la lucha de clases y va desarrollándose en la misma medida en que ésta se agudiza. Nace como una formación político-social, con objetivos y tendencias imprecisas y contradictorias. Comienza ejerciendo funciones de colaboración y control sobre los organismos del gobierno, pero más tarde se transforma en instrumento de poder autónomo, al ganar fuerza e influencia creciente en el proceso.

De partida, se concibe como órgano de apoyo concreto a las tareas del Gobierno Popular, obstruidas por la burguesía y por las trabas burocráticas del aparato estatal. Para defender el consumo amenazado

por la especulación y el mercado negro, surgen las "Juntas de Abastecimientos y Precios" (JAP), encargadas de organizar la distribución en todos los centros poblacionales y denunciar y sancionar la especulación, el agio y el acaparamiento. Los "Comandos Comunales" tienen como función coordinar a nivel local los variados problemas de la comunidad: movilización, agua potable, luz eléctrica, teléfono, alcantarillado, abastecimiento: los "Consejos Campesinos" se estructuran como mecanismos relacionadores entre los organismos burocráticos del Estado y las exigencias de la Reforma Agraria; estudian los problemas campesinos, las prioridades en materia de expropiaciones y promueven el suministro de insumos e implementos agrícolas. También se crean "Comités de Vigilancia de la Producción", "Comités de Protección" de las Industrias y "Consejos de Administración" en las empresas, destinados a asegurar la participación directa y efectiva de los trabajadores en el proceso de la producción y en su defensa. Finalmente, la dramática experiencia recogida en el enfrentamiento con la huelga insurreccional burguesa, en octubre de 1972, impone la necesidad de coordinar las acciones defensivas del proletariado industrial en las grandes áreas urbanas. Nacen así los "Cordones Industriales", una de las más importantes creaciones de la intensa lucha de clases de esos años.

En forma progresiva todos estos organismos van cobrando autonomía, ampliando sus objetivos, adquiriendo conciencia de sus posibilidades, hasta constituirse en elementos de presión y de poder real. En ellos se manifestaba un proceso de extraordinaria democratización de la vida nacional, como nunca antes la hubo, a la par que van acuñándose formas de poder popular, convertidos en alternativa al aparato estatal burgués.

No fueron una creación arbitraria de las masas, más de alguna vez así se ha pretendido. Como fenómeno social, el poder popular encuentra su fundamento en causas concretas y objetivas que legitiman ampliamente su generación y conducta.

Las masas comprendieron desde un comienzo, que su sola instalación en uno de los órganos del poder burgués, no alteraba sustancialmente los obstáculos que el Estado liberal en su conjunto oponía al proceso transformador: la estructura burocrática no estaba capacitada para satisfacer las necesidades más apremiantes de las numerosas y extensas poblaciones marginales; el aparato represivo no era apto para asegurar protección al proceso productivo permanentemente saboteado por el enemigo; la legislación vigente no permitía combatir con eficacia el mercado negro, el acaparamiento y el agio.

De otra parte, el poder popular constituye una respuesta a la obstrucción sistemática de los partidos burgueses, atrincherados en

la Corte Suprema, en la Contraloría y en el Parlamento. El hostigamiento persistente para estrechar el marco de acción legal del gobierno y mutilar sus atribuciones, obligaba a una respuesta concreta de las masas. Frente a las nuevas organizaciones y formas de lucha de la burguesía, el pueblo también se daba nuevas organizaciones de clase e intentaba alterar las formas de lucha tradicionales.

Por cierto, este nuevo poder de los trabajadores del campo y la ciudad, planteaba una contradicción con la legalidad demoliberal. Su participación en la pugna social, sin la cual difícilmente trascurre una auténtica revolución, rebasaba necesariamente las estructuras jurídico-institucionales. Y no podía ser de otra manera. El conjunto de sentimientos, de estados de ánimo, de tensiones, de exaltación emocional, desatados por un proceso transformador, rompe los moldes heredados, los viejos hábitos y costumbres y las normas tradicionales.

El desarrollo de cierta conducta autónoma de las masas, fue tan inevitable en Chile, como lo ha sido sin excepción en todas las experiencias revolucionarias del mundo. Aquéllas se generan invariablemente cuando los órganos represivos del Estado se niegan a enfrentar la continua provocación burguesa. En tal encrucijada, difícilmente puede exigirse a las masas confianza en el Estado, instrumento global de la clase burguesa, y capacidad para entender que la "vía elegida" supone mantener la paz social y el respeto al ordenamiento jurídico vigente. Y en el caso hipotético de ser posible, los riesgos son considerables.

El Poder Popular estaba íntimamente vinculado a la participación creciente de los trabajadores en la dirección de la economía, y en general a todas las instancias del acontecer revolucionario. El trabajador participante adquiría doble conciencia de su valer, desarrollaba espíritu combativo y voluntad de poder, y por el solo hecho de hacerlo, se transformaba en un agente activo de la revolución, transfiriendo a su comunidad ese espíritu, esa conciencia y esa voluntad.

Para profundizar el proceso y hacerlo irreversible era necesario, y más aún imprescindible, incorporar efectivamente a las masas al ejercicio del poder. Era esto —básicamente esto— lo que les permitía constatar en forma directa, vivida y tangible que el gobierno era "su gobierno" y las educaba en el ejercicio de "su poder".

El Partido Socialista así lo entendió. En el Pleno de Algarrobo celebrado en febrero de 1972 expresamos:

Para edificar la sociedad socialista es imprescindible contar con la participación directa, mayoritaria y real de los obreros y de los campesinos en todas las etapas del proceso de transición de la sociedad capitalista a la sociedad socialista y en todos los niveles de la acción política administrativa

y económica de la nación. Es fundamental dar vida a la constitución de un auténtico poder popular. Este poder de obreros y campesinos no se instituye por un acto supremo de gobierno. Sólo puede lograrse desde abajo, a través de la acción y de la lucha de las masas. Sólo las reformas que provienen de la acción de las masas tienen potencialidad revolucionaria. Las reformas superestructurales impuestas por la administración central tenderán inevitablemente a deformar el proceso revolucionario y concluirán por convertir al gobierno en un gobierno reformista, burocrático y paternalista.

Pero también dejamos en claro que:

La radicalización política del proceso no podrá ser resultado de la acción espontánea de los trabajadores de la ciudad y del campo. Por eso nos pronunciamos categóricamente en contra de las concepciones simplemente espontaneístas. Condenamos "las tomas indiscriminadas de sitios urbanos, de predios agrícolas, de fábricas, minas y edificios públicos o privados". Y agregamos: "Los partidos revolucionarios tienen como imperativo superior darla a la acción de las masas un objetivo estratégico y una gran bandera de lucha, cual es, la conquista del poder pleno para crear una nueva sociedad.

El proceso se concebía, sí, como resultado de la acción convergente del Estado y de la organización y movilización de las masas. Esta concepción excluye las connotaciones paternalistas y burocráticas, no pocas veces atribuida a la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas estatales y en otras áreas de la actividad nacional. En cierta medida, esas deformaciones estaban determinadas por la falta de una comprensión cabal del papel de las masas como protagonista decisivo del proceso transformador, y como elemento esencial, a través del cual los triunfos políticos parciales debían traducirse en poder proletario. Allí donde la participación obrera fue real y efectiva, los resultados productivos fueron óptimos, más rápido el desarrollo de la conciencia política y más activa la presencia del pueblo trabajador en la defensa del proceso. Tal es el caso, por ejemplo, de la empresa textil Yarur: "El aumento de un 20% de la producción desde que se estatizó la empresa, observado políticamente vale un 100%, porque ése fue un aumento basado en la conciencia de los trabajadores, basado en la dirección colectiva, basado en el odio al burgués, que los explotó durante décadas. Lo mismo puede afirmarse en los casos de Bellavista, del Carbón, de Purina, de Fiap y otras empresas estatizadas." (Informe del cc del ps al Pleno de Algarrobo, febrero de 1972.)

La huelga patronal provocada en octubre de 1972, llevó a la Unidad Popular a crear una serie de organizaciones sectoriales, orientadas a neutralizar la movilización burguesa en algunos frentes de

lucha donde la confrontación había adquirido especial intensidad. Se constituyeron así los Frentes Patrióticos de Mujeres, de Profesionales y de Juventud; el Movimiento Patriótico de Renovación de los Transportistas (MOPARE) y el Movimiento Amplio de Comerciantes. Estas organizaciones fueron creadas en forma precipitada, al calor de la exigencia formulada por la violenta ofensiva reaccionaria. No obstante ser el resultado de un trabajo mínimo e improvisado, encontraron una rápida y amplia acogida, desempeñando un papel valioso en los momentos más críticos del enfrentamiento.

La respuesta resuelta que el proceso encontró en la estructuración de organizaciones defensivas de los sectores de la pequeña burguesía, pone en evidencia una seria omisión: existió una posibilidad real, desestimada, de intentar un esfuerzo de mayor envergadura, en el seno de la pequeña burguesía. Los resultados fueron óptimos si consideramos que se trataba de iniciativas improvisadas, hechas con criterio de emergencia y bajo presión de circunstancias críticas. En todo caso, hubo una amplia respuesta de transportistas, profesionales, comerciantes, mujeres, estudiantes y pequeños agricultores, a un requerimiento precipitado y carente de una perspectiva seria. Incluso la adhesión que estos sectores entregaron, no siempre contó con la atención debida y el respaldo decidido del gobierno, lo cual conspiró contra su eficacia y desarrollo.

Estos frentes y otros organismos promovidos por la Unidad Popular (Consejos de Administración, Comités de Producción), no obstante su generación inducida, eran también expresión —aunque con características propias— del nuevo poder de los obreros, campesinos y pobladores marginales.

El Poder Popular se construyó al margen de las organizaciones tradicionales de la clase obrera (Central Única de Trabajadores, sindicatos, confederaciones campesinas, etc.), llenando en cierto modo vacíos no cubiertos por aquéllas.

La notable experiencia contrarrevolucionaria de octubre de 1972, permitió hacer aflorar la extraordinaria potencialidad creadora y organizativa del proletariado y en general de las masas. Cuando la oligarquía dispuso la paralización del país, los trabajadores, por primera vez en la historia, enfrentaron como clase "la huelga patronal". Toman en sus manos con inobjetable responsabilidad la tarea de mantener en pie la producción nacional. Ocupan las industrias y fundos abandonados, organizan el abastecimiento de la población, mantienen el funcionamiento de los servicios esenciales; en una palabra, sostienen en funcionamiento la economía cuando se pretendía ahogarla por

la acción concertada imperialista-burguesa. Nunca en las luchas continentales la clase obrera como tal exhibió un caudal tan rico y variado de recursos. La reacción fue derrotada. Por primera vez en la historia del país, los trabajadores tuvieron la totalidad de las fábricas bajo su poder. Durante 26 días asumieron el control de la producción y la distribución de productos y mercancías.

Sin embargo, las luchas de octubre pusieron en evidencia la necesidad de coordinar las tareas de las más importantes áreas industriales y de defenderlas a través de estructuras de carácter popular. Así nacieron los "cordones industriales" la expresión más dinámica, vigorosa y controvertida del nuevo Poder Popular. Los siete cordones creados —en los principales centros fabriles de Santiago— y los que más tarde se organizan en Concepción y Valparaíso, tienen su base casi exclusivamente en el proletariado industrial.

Pero además existe otra vertiente social que otorga al poder popular su connotación masiva y omnipresente: el subproletariado de la ciudad y del campo, hasta entonces ausente en las dilatadas luchas sociales del país.

En Santiago, como en la mayoría de las capitales sudamericanas, se ha concentrado en las últimas décadas una gigantesca y abigarrada masa periférica, producto de las incesantes migraciones del campo y las provincias a la metrópoli. En Chile, más de la tercera parte de su población vive en la capital y sus alrededores. Allí existe un inmenso cordón de miseria y atraso, en el cual habita el 40% de sus habitantes. Son las poblaciones marginales o "callampas", réplica criolla de las "favelas" brasileñas, las "villas miserias" argentinas y los "cantegriles" uruguayos.

Esta masa multitudinaria vive en condiciones subhumanas, carente de los servicios más esenciales —luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, pavimento, teléfono; en viviendas infectas, al margen de la educación y de toda protección sanitaria.

Durante el gobierno de Frei se ensayaron con criterio paternalista algunas formas de organización de las poblaciones marginales, las cuales no alteraron en esencia su orfandad social.

Las tensiones liberadas por el proceso revolucionario, enfrentan violentamente a estos sectores con la necesidad de satisfacer expedita y directamente sus problemas. Se constituyen en factores de presión, buscan e imponen con criterio realista soluciones viables y adecuadas, e impiden en parte la mediatización de los organismos burocráticos estatales. La población marginal se activa en centros de madres y juntas de vecinos (creadas en la administración anterior), rescata estas organizaciones de los viejos esquemas populistas, las fortalece y las hace asumir nuevas tareas, sustituyendo de hecho los organismos del

Estado. Nuevas organizaciones de base confluyen, a través de una poderosa red, en los Comandos Comunales, los cuales no dan tregua al aparato estatal: lo vigilan, lo presionan, lo denuncian y lo estimulan.

Podemos imaginar el inmenso potencial acumulado, si consideramos que sólo el subproletariado representaba aproximadamente una cuarta parte de la población total del país.

OBJETIVO ÚNICO: EL PODER

El efecto más impactante de esta voluntad de poder emergente en el seno de obreros, campesinos y subproletariado marginal, es la proyección directa e inmediata sobre su conciencia política y de clase. Incluyendo las grandes transformaciones estructurales —nacionalización del cobre, reforma agraria, constitución de un área de propiedad social— ningún otro hecho conmueve tan dramáticamente a las masas como la certidumbre de este nuevo fenómeno: sentirse y saberse protagonistas principales de una experiencia histórica inédita. Descubren el valor de su fuerza congénita, no como simple referencia retórica y discursiva, sino como realidad práctica y actuante. Al igual que en otros procesos, el proletariado revolucionario y los campesinos políticamente más evolucionados, empiezan a confiar, ante todo, en sus propias fuerzas. Dudan de las posiciones vacilantes, no admiten las “medias tintas”, su programa “mínimo” pasa a ser la revolución. El fenómeno, naturalmente, se da en medio de una gran confusión táctica, política e ideológica, pero dentro de la más diáfana claridad estratégica: ganar el poder.

Si hay algo de sorprendente en la experiencia chilena, fue la extraordinaria lucidez de las masas para prever la insurgencia del fascismo. Sus organizaciones de base fueron casi más receptivas al desenlace fatal e inminente que sus direcciones políticas. No sólo entendieron que la institucionalidad burguesa se había revertido contra la revolución, sino además, percibieron con claridad la dictadura fascista como régimen sustitutorio. Esta lucidez no era consecuencia de poderes clarividentes ni del simple instinto de conservación. Era el efecto natural del alto grado de capacidad política y de conciencia revolucionaria alcanzado en el ejercicio de “su poder”. De allí la firmeza con que demandan la adopción de medidas necesarias para asegurar la defensa del proceso. De allí sus reiteradas expresiones de inquietud y desconfianza.

El 5 de septiembre de 1973, apenas una semana antes del asalto fascista, todos los órganos de Poder Popular de la provincia de Santiago, dirigieron una carta pública al presidente Allende. Este documento constituye una curiosa radiografía demostrativa de la extraordinaria intuición de las masas. Tras la descripción de la dramática coyuntura vivida, contiene el requerimiento categórico y severo, en orden a romper la dinámica defensiva y de repliegue que atrapaba a la dirección revolucionaria.

Aquella histórica y dramática requisitoria empieza por señalar la convicción del desenlace fatal:

Ha llegado el momento en que la clase obrera, organizada en la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales, el Comando Provincial de Abastecimiento Directo, y el Frente Unido de Trabajadores en Conflicto, ha considerado de urgencia dirigirse a ustedes, alarmados por el desencadenamiento de una serie de acontecimientos, que creemos nos llevarán no sólo a la liquidación del proceso revolucionario, sino a corto plazo, a un régimen fascista del corte más implacable y criminal. Antes teníamos el temor de que el proceso al socialismo se estaba transando, para llegar a un gobierno de centro, reformista, democrático-burgués, que tendía a desmovilizar a las masas o a llevarlas a acciones insurreccionales de tipo anárquico, por instinto de conservación. Pero ahora, analizando los últimos acontecimientos, nuestro temor ya no es ése, ahora tenemos la certeza de que vamos a una pendiente que nos llevará inevitablemente al fascismo.

Los trabajadores veían, palpaban y sentían exasperadamente cómo la ofensiva adversaria carecía de respuesta. El cerco burgués-imperialista no tenía correlato en el accionar del gobierno. La impunidad de la reacción aparecía garantizada, a sus ojos, por una política defensiva, de apaciguamiento y retroceso constante.

Tras una gráfica y minuciosa descripción de la situación, que mantiene al gobierno y al pueblo a la defensiva, los trabajadores previenen sobre los acontecimientos por venir. Su anuncio parece premonitorio. El acontecer se encargará de confirmarlo línea por línea, desde el formidable error del freísmo hasta la factura brutal de la tiranía militar:

Claro que el señor Frei también es ingenuo, porque cree que tal dictadura militar sería sólo de transición, para llevarlo a él a la postre a la presidencia. —Estamos absolutamente convencidos que históricamente el reformismo que se busca a través del diálogo con los que nos han traicionado una y otra vez, es el camino más rápido hacia el fascismo. —Hasta hace poco “fascismo” era solamente una palabra que no todos los compañeros comprendíamos. Teníamos que recurrir a lejanos o cercanos ejemplos: Brasil, España, Uruguay, etc. —Pero ahora ya lo hemos visto en carne propia, en

los allanamientos, en lo que está sucediendo a marinos y suboficiales, en lo que están sufriendo los compañeros de Asmar, Famae, los campesinos de Cautín. —Ya sabemos que el fascismo significa terminar con todas las conquistas logradas por la clase obrera, las organizaciones obreras, los sindicatos, el derecho a huelga, los pliegos de peticiones. —Al trabajador que reclama sus más mínimos derechos humanos, se le despide, se le aprisiona, tortura o asesina. —Consideramos que no sólo se nos está llevando por el camino que nos conducirá al fascismo en un plazo vertiginoso, sino que se nos ha estado privando de los medios para defendernos. —Por lo tanto, le exigimos a usted, compañero Presidente, que se ponga a la cabeza de este verdadero ejército sin armas, pero poderoso en cuanto a conciencia, decisión que los partidos proletarios pongan de lado sus divergencias y se conviertan en verdadera vanguardia de esta masa organizada, pero sin dirección.

Señalarán finalmente que si su requerimiento no es escuchado:

en este país habrá no una guerra civil, que ya está en pleno desarrollo, sino una masacre fría, planificada de la clase obrera más consciente y organizada de América Latina y la destrucción y descabezamiento quizás a qué plazo y a qué costo sangriento, de no sólo el proceso revolucionario chileno, sino también el de todos los pueblos de Latinoamérica que están luchando por el socialismo.

El rasgo más característico de la nueva conciencia que alienta la formación del poder popular, es su autonomía. Sin embargo, ésta no se formula básicamente en un plano competitivo y antagónico con la dirección política del movimiento popular. Expresa en cierto modo la agudización y polarización del proceso, cuya velocidad ha replegado —a pesar suyo— a las vanguardias políticas, reflejando su imprevisto dinamismo. Esto lleva a las masas a concebir nuevos métodos de lucha, diseñar caminos originales y asumir misiones de envergadura, sin desdeñar los mecanismos estatales, pero tampoco atados a ellos.

El poder popular contaba con sus propios medios de difusión. Los Cordones Industriales editan periódicos de gran circulación, los Comandos Comunales publican otros de tiraje local, hacen afiches, publican folletos, lanzan volantes. Nace así una prensa obrera combativa y ágil, donde la clase contabiliza sus luchas y experiencias.

En términos generales el poder popular se manifiesta como una estructura de apoyo al Gobierno Popular. En términos generales sus acciones estuvieron orientadas a concretar iniciativas y tareas gubernamentales, a colaborar en el plano de las soluciones locales y a facilitar la atención de problemas a los cuales no accedía con agilidad la burocracia estatal.

Como fenómeno social, lo hemos dicho, atemoriza profundamente a la clase dominante. Por primera vez ésta percibe al proletariado no como una masa primaria, ignara, difusa, incoherente y fragmentada, sino como un todo compacto, sólido, con plena conciencia de su identidad y con la firme voluntad de desplazarla del poder. Y no se trata sólo de un temor abstracto. Cuando el proletariado desfila, cuando realiza sus actos y grita sus consignas, cuando ve sus puños levantados al cielo, la burguesía siente pavor físico y se repliega en sus mansiones.

Era ya tradicional en Santiago, que cuando los obreros de la municipalidad de Las Condes, una de las comunes acomodadas de la capital, se desplazaban al centro de la ciudad a través de las arterias elegantes, se entornaban las puertas de los establecimientos comerciales y se cerraban rigurosamente las entradas de las grandes residencias. Nunca aquellos trabajadores habían quebrado un solo vidrio de una ventana o cometido un desmán. Pero en ellos la burguesía visualizaba el despertar de una clase a la que temía, en la misma medida que odiaba.

Globalmente la UP no comprendió ni captó la poderosa fuerza inmersa en el Poder Popular. Lo percibió como una expresión "izquierdista" y anarquizante de cuyo control desconfiaba.

Esta actitud tenía sin embargo una fundamentación lógica. El proceso revolucionario había abierto una brecha creciente entre exigencias y respuestas. La necesidad objetiva de conquistar el poder, agudizada por la violencia de la confrontación social, se había elevado a niveles extremos, y demandaba un correlato natural en la madurez política y orgánica de la conducción revolucionaria, en la unidad y coherencia efectiva de la dirección y en una mayor capacidad para organizar al pueblo en la lucha por la disputa del poder.

Para ello era indispensable transformar la dirección de la Unidad Popular en una dirección única y coherente. Sin embargo, los acontecimientos adoptaron un ritmo no previsto ni deseado por la dirección. Las respuestas quedaron rezagadas, y quizás en esto se encuentre la clave metodológica para explicar muchos de los problemas del movimiento popular.

A esta altura, la fuerza de la revolución se manifestaba en tres niveles: el Gobierno Popular, la Unidad Popular y sus organizaciones políticas y sindicales y el Poder Popular. En el contexto de un lineamiento estratégico correcto, estos tres niveles tenían que actuar en forma armónica y coherente. Bajo este supuesto, el poder popular debía generarse en la base, con el apoyo del gobierno y bajo la dirección de la Unidad Popular, aunque independiente del aparato estatal. Así, pasaba a ser un poder convergente, cuya autonomía no era nece-

sario cuestionar y en el que estaba la presencia educadora y la orientación de la dirección revolucionaria.

Ausente —en parte— este factor direccional y un correcto diagnóstico de la naturaleza y vitalidad del nuevo poder, se le empuja peligrosamente a una desviación: la de desarrollarse como poder alternativo o dual, antagónico al Gobierno Popular.

Esta desviación “izquierdizante” adquiere cierta solidez al tratar de trasponer mecánicamente a Chile, la experiencia de los “soviets rusos” en el período comprendido entre febrero y octubre de 1917.

Efectivamente, los “soviets” constituyeron la forma por excelencia de poder popular y como estructura político-social, en su generación y en su desarrollo, exhiben cierta analogía con el fenómeno chileno. También es efectivo que devinieron en una instancia paralela y alternativa a las instituciones del Estado burgués encabezado por Kerensky. Hasta aquí el símil parece aceptable. Pero si el doble poder exhibe plena legitimidad en la Rusia de 1917, es porque el poder estatal en términos absolutos, era instrumento de la burguesía. Y cuando los bolcheviques dirigieron la insurrección bajo la consigna: “¡Todo el poder a los soviets!”, estaban buscando la sustitución de un Estado, en el cual los trabajadores no estaban presentes. No era, por cierto, el caso de Chile. Ver al Gobierno Popular como enemigo, prescindir del hecho de que éste se había constituido en la principal palanca de poder de la clase trabajadora y del campesinado, era un error, y un inexcusable subjetivismo.

A modo de conclusión nos atrevemos a afirmar que el Poder Popular generado al calor de la experiencia revolucionaria chilena jugó un papel real y extraordinariamente positivo. Lamentablemente la dirección del proceso no tuvo capacidad para comprender la vitalidad y riqueza creadora liberada en el seno de las masas. No fue capaz de captarlas y canalizarlas en favor de la Revolución.

8. EL "IZQUIERDISMO" EN LA EXPERIENCIA CHILENA

En el debate sobre el proceso revolucionario chileno, se atribuye una relevancia inusitada a las actividades del "izquierdismo", el cual no pocas veces ha sido aislado como factor decisivo de la derrota. Pero es indudable que esta exhibición magnificada de su conducta e influencia, no guarda proporción alguna con la debilidad física y la precaria fuerza ideológica del "gauchismo" chileno.

Su expresión orgánica más importante radica, sin duda, en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que nace en los primeros años de la década del sesenta, como un grupo pequeño-burgués de influencia localizada en la ciudad de Concepción. También —forzoso es reconocerlo— "la mentalidad izquierdista" encontró audiencia, aunque de manera limitada e inorgánica, en algunos sectores del Partido Socialista. Grupos trotskistas y chinoístas, prolíferos en otros países de América Latina, en Chile no tuvieron eco y apenas alcanzaron algún grado de desarrollo.

Desde su nacimiento en 1965, el MIR sólo tuvo un crecimiento discreto. Si bien se organiza en las provincias más importantes del país, no llega a configurar un núcleo de influencia real en el seno de las masas: ni en la clase obrera, ni en el campesinado, ni en los sectores marginales. Tampoco logra penetrar en el conjunto del estudiantado universitario, ámbito en el cual nace y despliega mayor dinamismo.

Sus frentes de masas, orgánicamente bien estructurados, no evidenciaron progresos cuantitativos importantes. En las últimas elecciones de la Central Única de Trabajadores, avanzado ya el proceso revolucionario, levantaron la candidatura de Clotario Blest, vieja y venerable figura del movimiento obrero chileno, y a pesar de ello difícilmente logran superar el 2% de los votos. En las confrontaciones estudiantiles —salvo en la Universidad de Concepción— su fuerza era sólo ligeramente superior a la de la CUT. En las elecciones para designar rector de la Universidad de Chile —en la cual también votaban los estudiantes y el personal administrativo— con un candidato propio, opuesto a los de la Unidad Popular y la derecha, el MIR obtuvo una ínfima proporción de votos.

De otra parte, jamás participó directa ni indirectamente en la gestión gubernativa. Por el contrario, su posición frente al gobierno era globalmente crítica, ofreciéndose siempre como una alternativa: Los contactos UP-MIR fueron sólo ocasionales, y por lo general sobre-

cargados con una fuerte dosis de sectarismo. Con el ps las conexiones fueron bastante más estrechas, pero tampoco se tradujeron en relaciones estables y orgánicas.

Considerando estos hechos, es absolutamente equivocado atribuir a la ultraizquierda una responsabilidad desproporcionada a su real peso y capacidad, en la evolución del proceso social y político chileno, y menos aún, en su desenlace final. En Chile, la ultraizquierda no tenía fuerza ni influencia en el pueblo ni gravitación real en el gobierno. No obstante haber planteado algunas críticas correctas a la dirección revolucionaria de la up, su concepción en conjunto fue errónea. Sus errores sólo tuvieron el alcance que les otorgaba su condición de minoría pequeñoburguesa básicamente subjetiva. Esta afirmación en modo alguno pretende desconocer el daño y los problemas, no escasos, causados al Gobierno Popular, por la mentalidad inmadura y las acciones espontaneístas del "izquierdismo".

Indudablemente, éstas facilitaron el juego del adversario, alimentando la tenaz campaña reaccionaria implementada metódicamente para amplificar la magnitud, el alcance y los efectos de las acciones ultristas, las que directa o indirectamente, eran atribuidas al gobierno y al conjunto de la izquierda. El formidable aparato de difusión de la burguesía —*El Mercurio* a la cabeza— escandalizaban diariamente sobre excesos reales o ficticios acaecidos en Chile o en el extranjero. Titulares, comentarios y editoriales mantenían las prácticas del izquierdismo en el centro de la noticia. Así, mientras por una parte se trasferían a la población imágenes de inquietud y de temor, por otra se creaban artificiosamente legitimantes morales a la estrategia insurreccional del imperialismo. El ejemplo más elocuente de los servicios inconscientes prestados a la contrarrevolución, fue sin duda el asesinato del ex ministro Edmundo Pérez Zujovic, perpetrado por una insignificante organización extremista. Aquel acontecimiento dramático, ajeno en absoluto al gobierno y a los partidos populares, hizo posible soldar anticipadamente la fractura aún subsistente en el seno de la burguesía. Por cierto este fenómeno era inevitable en el acontecer chileno. No dependía de un crimen tan estúpido como inútil, pero éste dio el pretexto moral y político que el freísmo esperaba para unificar la oposición burguesa.

La ultraizquierda chilena no se singulariza respecto de otras expresiones similares existentes en América y en Europa. Quizá sí su única característica distintiva sea su resistencia al fraccionamiento grupuscular, en el que se han atomizado las diversas versiones latinoamericanas y europeas. En general no hay variantes fundamentales: la misma

incapacidad básica para ligarse con las masas; idéntica insuficiencia para expresar los intereses históricos de la clase obrera; la misma tendencia a interpretar subjetiva y dogmáticamente la realidad y el mismo vértigo irresistible al verbalismo insurreccionalista. Al igual que en el resto del mundo, carece de definición y ubicación frente a las grandes fuerzas internacionales en pugna, cual no sea una franca y declarada aversión antisoviética. Toda disensión en el campo socialista es acogida con entusiasmo, aunque ella se plantee desde posiciones reformistas o nacionalistas estrechas. Como expresión social, el "izquierdismo" también representó en Chile las tendencias revolucionarias de la pequeña burguesía ilustrada.

Sin embargo, preciso es reconocer que el MIR, en cuanto expresión orgánica del "izquierdismo" criollo, logró superar en el quehacer de sus militantes, defectos y vicios hondamente arraigados en las ideas y conductas de militantes de otros partidos de la izquierda chilena. Estas deficiencias conforman una verdadera "mentalidad", que tipifica el revolucionarismo pequeñoburgués: ausencia de aptitud para la tarea anónima y diaria; individualismo refractario al trabajo colectivo; insatisfacción permanente; inestabilidad emocional que oscila entre la euforia exitista y la depresión derrotista. Además, esta mentalidad es hostil a cualquier disciplina y rechaza todo comportamiento orgánico y metódico; se nutre en la rebeldía y en el impulso emocional; mientras políticamente se desgasta en un liberalismo desintegrador, que esteriliza todo accionar coherente y sistemático.

Reiteramos que esta "mentalidad" se dio en Chile principalmente fuera del MIR. Éste, bajo un severo sistema de centralismo democrático, con sólidos hábitos de disciplina, trabajo y sacrificio, no ofrecía un "terreno de cultivo" adecuado para su desarrollo. Proliferó en cambio, en estructuras orgánicamente menos rígidas, de vida interna más flexible y liberal, condiciones ambientales necesarias para el ejercicio del verbalismo sin destino y de la prédica sin práctica.

En el quehacer del movimiento popular chileno, antes y durante el proceso revolucionario, la ultraizquierda demostró siempre una pertinaz incomprensión del problema de las alianzas. Desde un pretenioso "purismo revolucionario", descalificó sistemáticamente toda clase de compromisos, los cuales eran presentados como transacciones espurias o bien traiciones. Subvalorizaban la imprescindible tarea revolucionaria consistente en acumular fuerzas, prescindiendo, voluntarista y temerariamente, de toda evaluación real del poder del enemigo. Desde estas concepciones, se desinteresaron por cualquier esfuerzo orientado a ganar o neutralizar a las capas medias, a las cuales, por el contrario, su accionar atemorizaba y su verbalismo revolucionario alejaba.

Frente al Gobierno Popular y a la que el MIR llamó "izquierda tradicional", asume una presuntuosa postura alternativista. Su incapacidad para realizar un análisis teórico correcto de la realidad nacional, impulsó al "izquierdismo" a desconocer la inmensa importancia que tenía para la revolución ganar una posición importante del poder burgués, en la perspectiva de capitalizar fuerzas y mejorar sustantivamente su correlación. Esto lo llevó a ubicarse, invariablemente, en posiciones antagónicas al llamado reformismo de los partidos obreros.

El Informe del Pleno de Algarrobo, del Comité Central del Partido Socialista, celebrado en febrero de 1972, precisó acertadamente las características esenciales de la política "izquierdista" frente al proceso:

La esencia de la política del MIR es levantar una alternativa distinta de la que ofrece la UP. A juicio del MIR, el programa de la UP no es revolucionario y la alianza que lo sustenta no es revolucionaria; luego el Gobierno Popular tiene un carácter de conciliación de clases y reformista; en definitiva, Chile no está viviendo un proceso revolucionario. Para el MIR lo revolucionario sería un programa que plantease terminar de una sola vez con todas las formas de explotación, basado en una alianza de obreros y campesinos casi exclusiva y un proceso en que se enfrentan violentamente los explotados con todos los explotadores (imperialistas, monopolios, terratenientes, burguesía mediana y pequeña, etc.). Desconoce en general, en sus acciones, la necesidad de acumulación de fuerzas junto al proletariado, de aprovechar aunque sólo sea circunstancialmente las contradicciones de intereses por pequeñas que sean entre los medianos y pequeños empresarios por un lado y los monopolios y la gran burguesía por otro. Se niega a reconocer el valor del gobierno en manos de los trabajadores, para debilitar y socavar el poder económico, ideológico e institucional de los enemigos fundamentales.

Durante los tres años del Gobierno Popular, la conducta de la ultraizquierda está sellada por el peso y variedad de sus desviaciones. Es maximalista e impaciente. Trata de situarse siempre a "la izquierda de la izquierda", moviéndose en una dicotomía irreal: blanco o negro, todo o nada. Tiende a considerar las medidas y métodos radicales, como los más revolucionarios, y a transformar el objetivo final en inmediato.

Sus actuaciones estuvieron —por lo general— marcadas por el signo de la improvisación y el halago indiscriminado a las masas. Una proclividad agitativa inorgánica lo empuja a la acción por la acción misma. Si hay posibilidad de tomar una predio agrícola o una pequeña o mediana industria, impulsa de inmediato la tarea, al margen de cualquier consideración, sobre su justificación y consecuencias.

Esta evasión de la realidad, condujo al ultrismo a formular llamados abiertos a la división horizontal de las Fuerzas Armadas. Típico error subjetivista, que prescindía del formidable peso de la ideología castrense, esencialmente jerárquica y disciplinada, sobre todo en el caso chileno.

Los empeños por ordenar la economía, elevar la producción, imprimir eficiencia y disciplina en el trabajo, eran considerados como preocupaciones de "tecnócratas" y "reformistas".

Incapaz de entender el verdadero papel del "poder popular", trató de arrastrarlo hacia una posición alternativista; trasformarlo en un doble poder, opuesto al conjunto de la institucionalidad burguesa, olvidando que en órganos importantes de ésta estaban instaladas las fuerzas populares. En esa perspectiva, confluía a deteriorar la autoridad del gobierno, estimulaba la indisciplina, introducía brechas en la unidad de la izquierda, y contribuía a confundir a la clase obrera y al campesinado.

De otra parte, y a pesar de su fetichismo armado, apelaba ingenuamente a la exaltación de un poder popular desprovisto de fuerza militar de sustentación. Un poder popular sin armas, frente a un poder burgués armado hasta los dientes.

En esta forma, vemos cómo la ultraizquierda incurre frente al proceso revolucionario, desde puntos de vista opuestos, en similar incapacidad a la demostrada por otros sectores del movimiento popular, cuyas desviaciones de derecha los inhabilitaba para comprender el papel que las instituciones democráticas desempeñaban en el proceso, y las condiciones y coyunturas que exigían su remplazo.

Mientras para unos, el peso de la institucionalidad operaba mecánicamente sobre las Fuerzas Armadas, coartando su papel natural en la lucha de clases, otros idealizaban un poder popular milagroso y omnipresente capaz por sí solo de derrotarlas militarmente. Mientras unos acusaban su desconfianza en la fuerza de las masas y en su capacidad creadora, refugiándose en la legalidad burguesa, otros atribuían al espontaneísmo de aquéllas una suerte de poder mágico y autosuficiente. Mientras unos alzaban la consigna de "la batalla por la producción", trasformándola en la respuesta principal a los problemas, otros despreciaban el ordenamiento económico y financiero, la disciplina en el trabajo y la preocupación por la eficiencia, como meras desviaciones reformistas y tecnocráticas. Mientras por una parte, se radicaba poco menos que el destino del proceso revolucionario chileno, en la posibilidad de establecer un "entendimiento en la cúpula" con la Democracia Cristiana; de otra, se desestimaba el empeño por atraer

a sus bases, y en general, por ganar a las capas medias para la revolución o bien neutralizarlas.

En cada situación general o particular del proceso, frente a los pequeños o grandes problemas planteados, se manifestaban inalterablemente los mismos criterios reiterativos y polarizados. El mismo maniqueísmo conceptual.

No obstante, y deseamos insistir en ello, a nuestro juicio es una grave equivocación suponer una especie de equilibrio compensatorio entre "las desviaciones de derecha" y "las desviaciones de izquierda". Estas últimas, con ser graves, múltiples y profundas, carecían de real peso en el movimiento revolucionario chileno. En definitiva, serán las desviaciones de derecha las condicionantes esenciales del epílogo trágico.

Se ha insistido en enfatizar sobre el papel disgregador jugado en ciertas coyunturas por el MIR e incluso por algunos militantes del Partido Socialista y de otras colectividades de la UP. Es necesario enfrentar tal concepción en términos adecuados. No desconocemos los efectos negativos provocados por planteamientos y acciones que facilitaron el trabajo de la reacción. Pero como lo hemos adelantado, atribuirle a este quehacer un carácter definitorio en el desenlace, es una ligereza analítica o un subterfugio intelectual, que no pretende otra cosa que distraer la atención sobre las verdaderas y profundas causas de la derrota.

Finalmente, pensamos se incurre en una seria omisión cuando se mide el valor de la ultraizquierda sólo en función de sus debilidades y desviaciones. Desde luego, conformaban una expresión revolucionaria. Ello no está en discusión. En las luchas sociales de la última década dilapidaron coraje y desinterés, asumiendo sin reserva el compromiso revolucionario.

El MIR, no obstante su desarrollo insuficiente en el seno de las masas, nunca fue percibido como un grupúsculo intrascendente. Aportó a las luchas de nuestro pueblo un plantel direccional de extraordinario valor intelectual y político, y un contingente cualitativamente significativo de cuadros eficientes y disciplinados, cuya aptitud y valor han sido generosa y ampliamente confirmados en la lucha contra la tiranía.

Miguel Enríquez, su más alta y consecuente expresión, muere heroicamente, asesinado por el fascismo, después de haberlo enfrentado durante más de un año desde la clandestinidad. Su muerte, tanto como su vida y su ejemplo, le ubican entre los revolucionarios más destacados del continente. Muchos de sus camaradas han seguido el camino señalado por él, ganando la gratitud y el respeto de nuestro pueblo.

Por ello, en la misma medida en que hemos discrepado de sus posiciones, también hemos defendido su derecho a transitar junto a los partidos de izquierda en las luchas venideras. Si logran superar sus debilidades, sin duda representan en Chile un potencial de energía revolucionaria que sería torpe desperdiciar.

9. ESTADOS UNIDOS Y EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO

CHILE: UN MODELO NO PREVISTO

Casi exactamente diez años después del triunfo de la Revolución cubana, accede al gobierno de Chile un movimiento popular, cuyo eje central son los dos partidos marxistas más poderosos del continente, exceptuando el cubano.

La victoria popular, alcanzada a través de elecciones libres y democráticas, suponía una innovación imprevista en las tácticas revolucionarias, la cual sorprende y al parecer rebasa las barreras defensivas militares del sistema interamericano. Éste se había adecuado para enfrentar “al marxismo” en el terreno de la guerrilla militar, conforme al canon impuesto por el éxito de la experiencia cubana.

Cuba alteró —con la poderosa fuerza expansiva de su ejemplo— el esquema político latinoamericano. De hecho irrumpe como un formidable factor dinamizador de las luchas revolucionarias de liberación. Abre nuevos caminos y señala nuevas perspectivas que agitan las aguas quietas de los años anteriores. La guerrilla sacude la tranquilidad del sistema de dominación y amenaza con “incendiar la pradera”. Los dispositivos de defensa se readecuan rápidamente para enfrentarla y derrotarla. En definitiva lo consiguen.

Pero en la misma medida en que la Revolución cubana se proyecta sobre las masas como factor concientizador, concientiza también a las clases dominantes. Éstas empiezan a visualizar —desde entonces— en cada movimiento popular emergente el peligro de un salto cualitativo hacia el socialismo. Cuba es entonces para la América Latina de 1960, lo que la Revolución bolchevique fue para la Europa de los años veinte.

Esta doble incidencia de la Revolución cubana se proyecta en toda su dimensión, cuando Fidel Castro visita Chile, en diciembre de 1971. Lo recibe en Santiago un millón de personas. La más grande manifestación de masas vista en la historia del país. A lo largo de todo Chile los trabajadores se agitan con entusiasmo y fervor revolucionario y se desplazan para dialogar con Fidel. Es el impacto sobre el pueblo. Pero aquella visita marca también el inicio de la contraofensiva burguesa, la cual adquiere también consistencia masiva. La reacción vislumbra en el huésped indeseado el peligro de la reiteración en

Chile de una experiencia que le es hondamente hostil y a la cual teme por sobre todas las cosas.

La victoria de 1970 logra neutralizar los mecanismos defensivos del sistema no sólo por la novedad de la variante, sino también, por la legitimidad política y moral de una victoria de "partidos marxistas", que proclaman una vía revolucionaria en pluralismo, libertad y democracia. Aun cuando se había hecho lo necesario —en términos tradicionales— para impedir el triunfo de Allende, no estaban preparados todavía para evitarlo en términos militares.

EL GOBIERNO POPULAR FRENTE A ESTADOS UNIDOS

El Gobierno Popular no desestimó la magnitud del problema, que su sola existencia significaba para EU, ni la influencia que sus relaciones tendría sobre el trascurso del proceso revolucionario.

En los primeros meses de su administración, el presidente Allende anunció la decisión de desarrollar una política amistosa con EU. Se trataba de ejercer a plenitud la soberanía nacional, sin concesiones principistas y en un plano de entendimiento y de respeto mutuo, que suponía por parte de Norteamérica una disposición básica para comprender la legitimidad moral y política del quehacer del gobierno chileno. Así lo dejó establecido el Presidente en su primer Mensaje Constitucional al Congreso:

Es propósito de mi gobierno mantener con los Estados Unidos de América relaciones amistosas y de cooperación. Nos hemos empeñado en crear las condiciones de comprensión hacia nuestra realidad, que impidan la generación de conflictos y eviten que cuestiones no esenciales perjudiquen ese propósito obstaculizando las soluciones negociadas y amistosas de los problemas que puedan plantearse. Creemos que esta conducta realista y objetiva, será correspondida por el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos.

En esta perspectiva los puntos más conflictivos contemplados por el Programa de Gobierno no fueron abordados y se prefirió diferirlos, a fin de no provocar conflictos artificiales, eventualmente utilizables por EU. Así por ejemplo, no se denuncian los pactos militares de ayuda mutua ni la Carta de la OEA, como lo establecía el programa. Por el contrario, y volveremos a insistir sobre ello, la ayuda militar de EU se mantuvo y elevó en términos por demás sugestivos.

En el plano internacional, se situó a Chile en una posición independiente, incorporándolo activamente al movimiento de países "No

Alineados". Nunca pretendió el gobierno de Allende ubicar a Chile en el campo socialista, entendiendo que sus condiciones socioeconómicas y políticas lo identificaban con la problemática del Tercer Mundo.

Chile reivindicó el derecho soberano de establecer relaciones —sin consultas obsecuentes— con todos los países del mundo. Así lo hace con Cuba, el Gobierno Provisional Revolucionario de Vietnam del Sur, la República Democrática de Vietnam, la República Popular Democrática de Corea, la República Democrática Alemana y la República Popular China. En estos dos últimos casos EU presionó abiertamente por impedirlo. Aun cuando Nixon ya había anunciado su viaje a China, deseaba mantener la unidad del bloque regional y evitar el establecimiento de relaciones bilaterales.

En el plano de las relaciones económicas, el comercio con EU continúa siendo el más importante. No hubo acto del Gobierno Popular orientado a reducirlo.

Ya hemos señalado cómo en el plano de las relaciones militares no existió ninguna intención dirigida a desconocer la vasta red de compromisos existentes. Se mantienen los programas de formación de oficiales en Panamá y los cursos de adiestramiento en diferentes centros militares norteamericanos; no se obstaculiza el desarrollo de las "Operaciones Unidas",¹ programadas anualmente con la Marina norteamericana; y tampoco se alteran los programas de adquisiciones bélicas contempladas en el pacto militar.

No obstante, la más trascendente medida adoptada por el Gobierno Popular —la nacionalización del cobre— hiere importantes intereses privados norteamericanos.

La recuperación de los recursos básicos constituía —como más de alguna vez lo expresara el presidente Allende— una reivindicación histórica. Aproximadamente el 80% de las exportaciones nacionales provenían del cobre controlado por monopolios extranjeros, los cuales durante medio siglo habían expoliado el patrimonio de la nación, transfiriendo al exterior el grueso de sus utilidades. No fue éste un acto arbitrario y unilateral del gobierno "marxista". La nacionalización del cobre se efectúa por decisión unánime del Parlamento, en el cual la coalición gobernante estaba en minoría.

Y bajo el amparo de las mismas disposiciones constitucionales, el Gobierno Popular, reparando una injusticia histórica, y con la más plena legitimidad moral, acuerda deducir de las indemnizaciones a pagar, las utilidades excesivas, consideradas como tales, las que excedían del 12% anual, a contar desde 1955.

¹ Se da este nombre a las maniobras conjuntas que anualmente realiza la Marina de EU y sus congéneres de América Latina.

De tal modo eran exorbitantes las ganancias acumuladas en los últimos 15 años, que al establecerse como utilidad más que razonable el porcentaje señalado, las empresas expropiadas vieron seriamente reducidas sus indemnizaciones y algunas, incluso, quedaron adeudando ingentes sumas.

Esta resolución afectó fundamentalmente los intereses de Anaconda Company y de Kennecott Cooper Co., copropietarias de las empresas de la gran minería del cobre: Chuquicamata, El Salvador y "La Exótica", la primera; y "El Teniente", la segunda.

No está de más señalar que las empresas nacionalizadas habían emprendido planes de expansión, los cuales —no obstante las extraordinarias utilidades percibidas— fueron financiados con créditos externos. Los planes aprobados y ejecutados bajo el gobierno de Frei, en gran medida fracasaron, lo que no fue óbice para que el Estado chileno, en cumplimiento de las disposiciones legales, se hiciera cargo de las deudas contraídas, ascendentes a la enorme cifra de 727 millones de dólares.

En resumen, Chile observó escrupulosamente el ordenamiento jurídico interno y las normas del derecho internacional. En resguardo de la vida de su pueblo y de su soberanía, afectó legítimamente intereses privados norteamericanos, que por décadas expoliaron su economía y sellaron su retraso. Al hacerlo, invocó las propias resoluciones de las Naciones Unidas, las cuales reconocen el derecho soberano de cada país a disponer de sus recursos naturales.

Por hacerlo fue víctima de una encarnizada agresión, agresión artera y terriblemente eficaz, destinada a sancionar el ejercicio de sus derechos como Estado soberano.

Finalmente, debemos consignar que otras importantes empresas norteamericanas fueron expropiadas mediante acuerdos bilaterales entre el Gobierno Popular y las compañías afectadas. Así ocurrió, entre otros casos, con el First National City Bank, la Bethlehem Steel Corp. y la Cerro Corporation, que era propietaria del mineral de cobre "La Andina".

El proceso de transformaciones no podía llevarse adelante sin enfrentar las naturales dificultades y resistencias externas. Así lo entendíamos. Ello era previsible en la perspectiva del ominoso historial intervencionista norteamericano.

Sin embargo, la decisión y magnitud de la agresión superó en mucho aquella previsión.

Nixon, quien "casualmente" había olvidado enviar el saludo de rigor al nuevo mandatario, expresó en un primer instante que "EU mantendría con Chile las relaciones que Chile quisiera tener". Una afirmación razonable. Pero los hechos demostraron más tarde, que cuando el presidente norteamericano la formulaba, tanto él como el Departamento de Estado ya habían elaborado y puesto en ejecución una estrategia de guerra.

El gobierno norteamericano, en el ejercicio de los derechos "legítimos" que hoy reclama y proclama Ford, interviene, especialmente en las dos últimas elecciones presidenciales, para impedir que las fuerzas populares puedan acceder al gobierno. Debemos recordar, que en 1964 aportó a la candidatura demócrata cristiana la suma de tres millones de dólares. Otros cinco millones de dólares habrían sido infiltrados en 1963 por intermedio del sacerdote jesuita Roger Vekemans para ayudar también al triunfo de Frei, hecho denunciado por el *New York Times*.

Durante la campaña presidencial de 1970 la ayuda financiera fue reorientada hacia la candidatura de Jorge Alessandri. El diputado norteamericano Michael Harrington denunció la entrega de otras importantes cantidades de dólares a los partidos de oposición en cartas dirigidas simultáneamente, el 18 de julio de 1974, al presidente de la Cámara de Representantes, Thomas Morgan, y al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, William Fulbright. Esta denuncia es elocuentemente expresiva de la desvergonzada intervención practicada en Chile durante los últimos diez años.

El triunfo sorpresivo de Allende lleva a la CIA y al Departamento de Estado a buscar una fórmula que permita revertir el resultado de los comicios electorales. Inicialmente —según Colby— se autorizó el gasto de 350 mil dólares para soborno de congresistas chilenos en los momentos en que el Parlamento debía decidir entre Allende y el candidato de la reacción. (El soborno fue evaluado posteriormente como ineficaz.)

Se decide entonces recurrir a métodos más expeditivos. El *New York Times* pone en descubierto las diversas variantes consideradas para impedir que el presidente electo asumiera el poder. El influyente periódico norteamericano señala que Richard Nixon dio carta blanca a la CIA, en 1970, para evitar la asunción de Allende y que su director adjunto Thomas Karamossines (jefe de operaciones encubiertas) fue enviado de inmediato a Santiago. Citando "fuentes gubernamentales autorizadas" el diario añade que la CIA se "halló así implicada en dos tentativas de golpe militar y que ambas preveían el secuestro del gene-

ral René Schneider, comandante en jefe del Ejército, asesinado cuando resistió a sus agresores". Una de ellas estaba liderizada por el general Roberto Viaux (quien posteriormente denunció ante los tribunales militares la participación en el complot del propio Frei) y la otra, a cargo de un grupo encabezado por el general Camilo Valenzuela, jefe militar de la provincia de Santiago, "al que se llegó a facilitar armas que más tarde fueron recuperadas sin que pudieran ser utilizadas".

Según el matutino neoyorquino, el 15 de septiembre de 1970, once días después de la victoria de Allende, Nixon "convocó a una reunión de alto nivel con la participación del jefe de la CIA, Richard Helms, a quien reprochó su incapacidad para impedir la llegada de Allende al poder". Según "una fuente gubernamental" el Presidente se encontraba "frenético" ante el triunfo de Allende.

No parece extraño el frenetismo de Nixon. Inicialmente no nos resultaba fácil comprender lo que significábamos como amenaza potencial para el imperialismo y la amplitud y proyecciones de esa amenaza. Quizás ello llevó a muchos a abrigar la ilusión de que el gobierno norteamericano podía tolerar la supervivencia del Gobierno Popular. La realidad clara y oportunamente prevista por los estrategas de la Casa Blanca era que Chile constituía un punto focal de desafío a EU en América Latina.

Como modelo político, la Unidad Popular establecía un poderoso precedente capaz de reproducirse en el corazón mismo del núcleo estratégico que representa Europa occidental, al abrir, básicamente, a las izquierdas de Italia y Francia perspectivas de triunfos similares. De otra parte, la implícita intención del Gobierno Popular de actuar fuera de la órbita capitalista y su concepción del pluralismo ideológico, debilitaba la presencia del imperialismo en el continente y desafiaba la hegemonía política de EU. Todo el quehacer de la Unidad Popular representaba un reto sistemático y un peligro de alcances incalculables para los intereses económicos y estratégicos norteamericanos.

Apenas diez días después de la elección —el 14 de septiembre de 1970—, Kissinger define el significado estratégico trascendental que atribuye al Gobierno Popular en un discurso pronunciado en Chicago:

Es bastante fácil predecir que si Allende gana hay muchas posibilidades de que se establezca durante un período de años una suerte de gobierno comunista. En este caso no tendríamos un gobierno de este tipo en una isla que no tiene relación tradicional ni impacto en América Latina, sino un gobierno

comunista unido, por ejemplo, a Argentina, que ya está profundamente dividida; unido a Perú que se ha estado moviendo en direcciones que dificultan tratar con él, y unido a Bolivia que también ha avanzado en una dirección más izquierdista, contra los EU, incluso sin ninguna de estas características. Así que yo creo que no debemos engañarnos con que la subida al poder de Allende en Chile no nos presente problemas masivos a nosotros y a las fuerzas democráticas favorables a EU en América Latina, y por cierto a todo el hemisferio occidental o a la Organización de Estados Americanos, es extremadamente problemático... Es una de esas situaciones poco afortunadas para los intereses norteamericanos... La evolución política de Chile —agrega— es muy grave para los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos en razón de sus efectos en Francia e Italia.²

Por su parte, y en forma más directa que su asesor, Nixon había señalado: "EU no puede tolerar ninguna forma transaccional de cambio hacia la sociedad socialista en América Latina."

Las citas son bastante reveladoras del pensamiento del presidente Nixon y del señor Kissinger. Se desempolva la retórica de la guerra fría para exhibir un peligro hemisférico más serio que el cubano. Estos hechos adquieren aún mayor significación, cuando con posterioridad al triunfo electoral de 1970, nos hemos impuesto de la intensa actividad desplegada por la Casa Blanca para impedir la victoria popular y que las medidas operacionales acordadas fueron implementadas desde el instante mismo de conocerse el resultado de la elección.

En el propósito de impedir el acceso de Allende al gobierno, se articula un plan operativo en base a las proposiciones formuladas por la International Telephone and Telegraph (ITT), plan revelado por el periodista norteamericano Jack Anderson, en julio de 1972.

El modelo propuesto fue puesto en ejecución entre el 15 de septiembre y el 24 de octubre. En aquel período el embajador de EU, Edward Korry, recibió "finalmente un mensaje del Departamento de Estado, dándole luz verde en nombre del presidente Nixon. El mensaje le daba autoridad máxima para hacer todo lo posible —menos una acción de tipo República Dominicana— para impedir que Allende tome el poder".

El plan en ejecución buscó crear una situación objetiva y subjetiva de crisis económica mediante el sabotaje de la producción, la amenaza de un colapso económico inminente y la restricción del crédito

² Citado en artículo de P. Jenkins en *The Guardian* (Londres) de octubre de 1973. Reproducido por *Le Monde Diplomatique* (París, noviembre de 1973). Esta misma declaración fue presentada en los *hearings* del Senado norteamericano sobre la intervención de la CIA y la ITT en Chile, en la primavera de 1973.

externo. En el plano político se trataba de provocar un clima de agitación y desorden que justificara la intervención armada, a la par que se intensificaron las campañas de amedrentamiento, utilizando el supuesto peligro del "marxismo totalitario". De otra parte, se desata una presión constante sobre las Fuerzas Armadas para obligarlas a intervenir.

La proclamación de Allende, por el Congreso Pleno el 24 de octubre de 1970, selló el fracaso de la estrategia parcial puesta en práctica para impedir la ratificación legal de la victoria del 4 de septiembre. Diversos factores confluyeron en el desenlace. Desde luego, la madurez del movimiento popular triunfante que no se dejó arrastrar a la provocación. El pánico financiero que se pretendió crear no alcanzó las proporciones previstas. De otra parte, el sector progresista de la DC se jugó internamente por la ratificación del triunfo popular y finalmente, el asesinato del general René Schneider actuó como elemento de inhibición dentro de las Fuerzas Armadas.

Las siete semanas transcurridas entre la elección y la ratificación parlamentaria del triunfo popular disipan cualquier duda sobre la posición de EU hacia Chile. La resuelta voluntad del imperialismo era atajar una alternativa socialista en Chile, así ella se ensayara por una vía democrática, en pluralismo y libertad. Su triunfo implicaba consecuencias desastrosas para los intereses norteamericanos. Si se confirmaba la viabilidad de un camino institucional al socialismo, ello desencadenaría aspiraciones similares no sólo en el resto del hemisferio, sino también en Europa occidental. En consecuencia, el problema no radicaba en nacionalizar o no nacionalizar el cobre; pagar o no pagar las indemnizaciones reclamadas. No eran sutilezas procesales del derecho internacional las que alteraban el sueño de Nixon, del Pentágono y la CIA, sino el efecto "dominó" de la "vía chilena" al socialismo. La decisión de aplastar la experiencia chilena, no puede resultar extraña en nuestros días, al menos a la luz del intimidatorio apercibimiento formulado recientemente por Kissinger frente a eventuales alteraciones del esquema político en algunos países de Europa. Si los EU declaran, abierta y tajantemente, que no permitirán la participación de un partido comunista en el gobierno de un país de Europa occidental, podemos inferir su reacción frente a la misma participación en un país de América Latina.

El modelo subversivo fracasado antes del 4 de noviembre de 1970, fue reelaborado con minuciosa amplitud y extraordinaria eficacia

después de esa fecha. Si antes se había jugado con algunas posibilidades aleatorias y coyunturales, ahora —con ilimitada profusión de medios— se monta una ofensiva que recién se extinguirá entre las llamas de La Moneda, el 11 de septiembre de 1973.

Ya hemos precisado la enorme complejidad y sofisticación del modelo puesto en práctica. Queremos únicamente insistir en algunos de sus aspectos específicos.

Allende habló en alguna oportunidad del “bloqueo invisible”. Se refería con ello al ataque oblicuo y subterráneo dirigido a estrangular la economía nacional. Los consorcios internacionales, con el aval implícito del Departamento de Estado, empezaron a operar en la penumbra.

Hasta 1970, Chile percibía por concepto de préstamos de los organismos financieros internacionales (BID, FMI, Banco Mundial) una cifra aproximada a los 80 millones de dólares al año. Estos financiamientos se cerraron abruptamente. La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) también suspendió drásticamente créditos que en años precedentes se habían otorgado en un promedio de 50 millones de dólares anuales. Los gobiernos anteriores contaron con líneas de crédito en la banca privada norteamericana por cerca de 250 millones de dólares. Asumido Allende, son reducidos a cifras irrisorias negando los acreedores a renovar las operaciones.³

De otra parte, préstamos contratados antes de 1970 con agencias del sector público de Estados Unidos, y aún en plena vigencia, también fueron suspendidos, obligando a mantener la ejecución de los proyectos en marcha mediante compras al contado en el mercado norteamericano, ante la imposibilidad de remplazar las fuentes de importaciones.

Igualmente fue bloqueado nuestro comercio exterior. Chile, al igual que los demás países de América Latina, debe recurrir al mercado norteamericano para las adquisiciones de bienes de capital. También los proveedores habituales se incorporaron al asedio, forzando al Gobierno Popular a cancelar anticipadamente los pedidos, con la natural presión sobre la balanza de pago. Se limitan además, severamente, las posibilidades de abastecimiento de equipos, repuestos, insumos, productos alimenticios y hasta medicamentos.

A la agresión financiera y comercial, se suman las acciones dirigidas contra el comercio del cobre por una poderosa empresa trasnacional, la Kennecott Cooper Co., quien a pesar de haber reconocido la jurisdicción de los tribunales chilenos, dedujo demandas ante los tribunales

³ El Export Import Bank postergó indefinidamente la concesión de nuevos créditos sosteniendo que Chile no era un “deudor solvente”.

de Francia, Holanda y Suecia, obteniendo el embargo provisorio de embarques cupríferos. Las demandas iniciadas —en definitiva rechazadas— pretendían que tribunales de aquellas naciones se pronunciaran sobre la nulidad de un acto soberano del Estado chileno, adoptado de acuerdo a la Constitución política y refrendado por su Parlamento. Al margen de la arbitrariedad, la intención final era entorpecer el comercio de cobre con Europa occidental y bloquear operaciones financieras en tramitación, creando de paso un clima de inseguridad entre nuestros compradores.

FORD, EL CINISMO Y LA CIA

Aparte del daño ocasionado a Chile y a su pueblo mediante aquel implacable cerco financiero, el papel de mayor incidencia en la “desestabilización” lo desempeñará la Agencia Central de Inteligencia de EU.

Por primera vez en su largo historial, la presencia de la CIA, siempre sobrentendida, es puesta al descubierto, y ello ocurre en el corazón mismo del imperio. Las denuncias formuladas por periodistas y parlamentarios norteamericanos se entrecruzan con las confesiones públicas y desafiantes de sus más altos personeros. Las evidencias son de tal manera abrumadoras, que hacen perder el pudor y los nervios a Ford, al extremo de improvisar una declaración, considerada por el *New York Times* como “la más desafortunada que haya hecho jamás el jefe de un gobierno presuntamente respetuoso de la ley”.

El presidente de EU no sólo reconoció explícitamente la descarada participación de la CIA en Chile, sino además reivindicó el derecho de su país a subvertir gobiernos constitucionales mediante el soborno y la violencia. El “esfuerzo” hecho en Chile —según él— estaba determinado por la necesidad de proteger “los mejores intereses norteamericanos”. Cuando un periodista le pregunta: ¿Bajo qué estatuto internacional los EU tienen derecho a atentar contra la estabilidad de un gobierno de otro país, elegido constitucionalmente?, responde: “No voy a emitir juicios sobre si ello es permitido o autorizado por el derecho internacional. Es un hecho reconocido, históricamente, al igual que en el presente, que tales medidas se toman en bien de los intereses de los países afectados.”

Pocas veces en la historia se ha vertido una expresión más bárbara y cínica de matonaje internacional. Nunca las banderas filibusteras defendidas con tanta soberbia y arrogancia. Jamás una legiti-

mación tan grosera de la voluntad imperial en orden a someter y administrar el destino de las "naciones de segunda clase". Con el mismo desenfado Mr. Ford se quejaría más tarde, de que el escándalo producido por las actividades de la CIA en Chile, "le había impedido enviar hombres a Portugal". Por supuesto, en resguardo "de los intereses del pueblo portugués".

En septiembre de 1974, se realizó en Washington, un simposio sobre las actividades de la CIA en Chile, organizado por los senadores Philip Hart y Edward Broocks. Uno de los participantes, John Marks, ex director de la Oficina de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado y coautor del libro *La CIA y el culto de la inteligencia*, reveló que "la agencia había mantenido en Chile —durante el gobierno de la UP— alrededor de cuarenta hombres. Entre ellos —dijo— había chilenos, incluso algunos periodistas". Por su parte, Marchetti, agente durante 14 años de la CIA y coautor del libro mencionado, reveló en el simposio que ese aparato de inteligencia norteamericano cuenta con unos 200 mil empleados y tiene un presupuesto anual de seis mil millones de dólares. "En Chile —dijo— el esfuerzo fue por desestabilizar un gobierno legalmente electo mientras en Vietnam se dedica a sostener a un dictador corrompido que no podría permanecer en su cargo treinta días sin el respaldo de la CIA."

Una investigación privada, promovida por la North American Congress on Latin America (NACLA), señala cómo en Chile se destacó un personal altamente especializado. De diez agentes identificados, dos habían participado en el golpe de Guatemala, en 1954, dos estaban "en labores" en la República Dominicana durante la invasión de 1965, y tres tuvieron activa participación en la brutal represión del movimiento de liberación en Guatemala, entre los años 1966 y 1969.

El debate promovido por sectores progresistas de Estados Unidos, acerca de las actividades de la Central de Inteligencia, junto con desnudar la magnitud de su injerencia en la vida política de otras naciones, puso también en evidencia la amplitud de su poder interno y sus profundas ramificaciones en la sociedad norteamericana. Cuando el senador Fulbright dio respuesta a una demanda del representante Harrington en orden a promover una investigación del Congreso sobre las actividades de la CIA, expresa su escepticismo en los siguientes términos:

Comparto su frustración sobre esta situación, pero cómo usted bien sabe esto es algo que ha estado sucediendo también en otros países durante muchos años. . . No creo que la investigación a fondo por parte del Comité de Relaciones Exteriores, produciría mucho más de lo que ya sabemos, y aunque produzca más, no hay nada que podamos hacer, a menos que haya un

tremendo cambio en la actitud de los miembros del comité... El Senado —afirma luego— no ha querido ejercer un control serio sobre la CIA y aparentemente aprueba las actividades en Chile a que usted se refiere y yo creo que son actividades que la CIA ha realizado en otros países.

Sin embargo, y no por cierto “para ejercer un control serio sobre la CIA”, el Senado norteamericano se vio forzado a promover una seria y meticulosa investigación sobre el quehacer de la agencia en Chile y en el resto del mundo. La opinión pública de EU, profundamente conmovida por el drama chileno, creó las condiciones que hicieron posible la revelación descarnada de la impúdica y brutal manipulación ejercida en la vida política y social de Chile, en los últimos trece años.

El informe de la comisión, presidida por el senador Frank Church, descorre los velos de una intervención sostenida y desvergonzada. Desde 1962 hasta hoy, la CIA y la embajada norteamericana, interfirieron todas y cada una de las manifestaciones de la actividad política de nuestro país. Han orientado campañas de opinión, financiado partidos, alquilado periodistas, sobornado a dirigentes políticos y legisladores, infiltrado las Fuerzas Armadas, e influido en mayor o menor medida, en cada decisión ciudadana. El estudio precisa, metódica y cronológicamente, el itinerario de las “acciones encubiertas” y la amplitud de los medios utilizados. Su franqueza es casi grosera. Nada queda entregado a la imaginación. Personajes, partidos, instituciones son exhibidos sin siquiera una pudorosa hoja de parra. La participación en la tarea de “desestabilizar” el gobierno constitucional se proyecta hasta en los más recónditos detalles. Frente al aluvión de evidencias, los desmentidos tímidos o airados nacen abortados por el ridículo.

¿Cómo y en qué forma actuó la CIA entre 1970 y 1973?

No fue la suya una actividad complementaria y tangencial a la rabiosa ofensiva burguesa. Después del triunfo popular se amplió considerablemente el *staff* local para asumir con “carta blanca” la dirección y ejecución del modelo contrarrevolucionario. De esta suerte, planifica, subvenciona y actúa en función del objetivo estratégico perseguido: el derrocamiento del gobierno constitucional.

Sus huellas digitales quedarán impresas tanto en los acontecimientos que preceden a la elección presidencial como en las acciones que la red subversiva pacientemente irá tejiendo más tarde. Desde aquella marcha de las “cacerolas”, que vuelca sobre las calles de Santiago a mujeres de la alta burguesía, reclamando alimentos, hasta los actos terroristas de los instantes postreros, ejecutados con una elevada precisión tecnológica, a la cual no tenían acceso los “especialistas” nativos.

Las revelaciones del Informe de la Comisión Church, descubren un tejido de sobrecogedora amplitud, extendido sobre todas las áreas de la actividad nacional. La sola y sintética enunciación de las acciones y medidas ejecutadas, sorprenderá al lector, ofreciéndole un cuadro no imaginado de la magnitud de la intervención. Sólo en el período que antecede a la elección de 1970, el Informe senatorial explicita las siguientes actividades:

Conexión de la CIA con varias corporaciones multinacionales para impedir la elección de Allende; entrega de fondos al Partido Demócrata Cristiano, al Partido Nacional; disposición de fondos para el soborno de parlamentarios en el evento de una votación en el Congreso Pleno; fondos para el montaje de una "operación de deterioro" anti-Allende; campaña de propaganda intensiva que utilizó "virtualmente" todos los medios de comunicación dentro de Chile; instalación de "elementos activos" en diarios y radios derechistas; "campaña del terror", implementada con películas, afiches, volantes, correspondencia directa, titulares de diarios, rayado mural, impresión de libros con fotografías, propaganda "negra", esto es, material falsamente imputado a determinados grupos o personas; subsidios a revistas y algunos semanarios de derecha; avisos radiales, informativos en radios de Santiago y de provincia; organización de acciones de provocación; subvención a grupos de acción cívica; subvención a *El Mercurio* y ubicación de "elementos activos" en su dirección y consejo de redacción; edición de folletos masivos; pintura de eslogan en dos mil murallas de Chile; apoyo a prensa clandestina derechista; financiamiento de los partidos de oposición para la compra de imprentas y radios; esfuerzo para quebrar al Partido Radical antes de la elección; reproducción en periódicos europeos y latinoamericanos de artículos hechos por la propia CIA, con predicciones alarmantes sobre el futuro gobierno popular; subvención a "Patria y Libertad"; contactos con oficiales de las Fuerzas Armadas para promover un golpe militar antes que Allende asumiera el gobierno; entrega de armas; promoción de pánico financiero; apoyo económico a organizaciones del sector privado; otorgamiento de fondos a los partidos de oposición en todas las campañas electorales entre 1969 y 1973; asistencia a grupos empresariales subversivos; establecimiento de "elementos activos" de inteligencia en los institutos armados chilenos; intervención directa en el asesinato del general René Schneider; red de contactos con oficiales chilenos "para rastrear el complot para el golpe"; "operación engaño" sobre el ejército "destinada a alertarlo" sobre una eventual intervención cubana "en su interior"; preparación de información orientada sobre los oficiales de las Fuerzas Armadas.

Si nos atenemos solamente a las actividades oficialmente admitidas

por los más altos ejecutivos de la CIA y a las revelaciones irrecusables de la investigación Church, podemos concluir que la agencia tuvo una participación reconocida en las instancias más decisivas del acontecer chileno a partir de 1970:

a] Durante la campaña presidencial de ese año, preferentemente apoya la candidatura derechista de Jorge Alessandri. Aparte de la acostumbrada inyección financiera, la CIA monta un inmenso esfuerzo de amedrentamiento de la opinión pública rearticulando la "campaña del terror" ensayada con éxito en 1964.

b] Organiza y dirige los planes alternativamente implementados entre el 4 de septiembre y el 24 de octubre de 1970 para impedir que el presidente electo asumiera el poder. Ya hemos señalado la complejidad del proyecto concebido: eventual soborno a parlamentarios; estímulo de un clima artificial de pánico financiero; preparación de un golpe militar y, finalmente, el asesinato del comandante en jefe del Ejército.

c] Presta apoyo financiero a los partidos burgueses agrupados en la "Confederación Democrática" en todas las elecciones generales y complementarias, incluyendo la de marzo de 1973. Según las declaraciones de William Colby ante el Comité de Asuntos Latinoamericanos, se invirtió sólo en esta última oportunidad un millón quinientos mil dólares, parte de los cuales fue utilizado para financiar "un influyente, aunque no identificado, periódico antiallendista".

d] Prepara y financia la huelga empresarial de octubre de 1972 y el nuevo paro de gremios y colegios profesionales promovido a contar de julio de 1973. Según el mismo Colby, el "Comité de los Cuarenta" autorizó en agosto de 1973 "un millón de dólares para nuevas actividades de desestabilización política".

El Informe de la Comisión Church, reconoce que el "Comité de los Cuarenta" y los organismos que le precedieron, autorizaron la inversión directa de más de ocho millones de dólares. Esta cifra puede inducir a una apreciación equivocada sobre la magnitud de la intervención. Creemos que es útil formular algunas precisiones. Desde luego, ella corresponde a cantidades directamente entregadas a partidos e instituciones cuyo poder adquisitivo debe medirse en moneda nacional en el contexto de los valores de mercado negro, extraordinariamente superiores (por lo menos 4 veces). No obstante, el Informe senatorial no cuantifica las cantidades invertidas en la ejecución de las acciones encubiertas de la CIA descritas en las páginas anteriores (campañas de propaganda, sobornos, subvenciones a diarios y revistas, asistencia a grupos paramilitares, montaje de operativos, etc.) ni determina los aportes e inversiones de las grandes empresas transnacionales y de otros organismos estatales norteamericanos, así como el costo

de las acciones de otras agencias de inteligencia que tuvieron permanentemente sus manos metidas en Chile.

Ésta es, repetimos, la participación reconocida. No obstante, su presencia se asoma a todas las esferas de la vida nacional. Trabaja activamente con los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas (más intensamente, como quedará demostrado, en el Servicio de Inteligencia de la Marina), y en la preparación y adiestramiento de grupos terroristas.

En los primeros meses de 1971, con el respaldo del dictador boliviano Banzer, se instala en la localidad de Viacha —territorio boliviano— un campo de entrenamiento militar, en el cual participan junto a instructores de la CIA, ex oficiales del ejército chileno y asesores bolivianos y brasileños. Este centro de entrenamiento mantenía en Santiago un “comando coordinador”, cuyas tareas incluían el establecimiento de contactos activos con miembros de las Fuerzas Armadas; la designación de enlaces; la selección de cuadros destinados al adiestramiento en Bolivia; la organización de vínculos permanentes con los organismos “gremiales” para complementar acciones de terrorismo y actividades militares y paramilitares durante las huelgas patronales, y el trabajo coordinado con las organizaciones de agricultores a fin de militarizar sus grupos “defensivos”.

En otro campo de adiestramiento castrense —situado en la ciudad boliviana de Santa Cruz— militares brasileños y bolivianos, previamente preparados en la Zona del Canal, instruyeron a 250 miembros de la organización fascista “Patria y Libertad” en las artes de la lucha de comandos. Este curso, bajo el nombre de “Operación Bandeirantes”, se mantuvo en actividad hasta pocas semanas antes del golpe militar.

Los grupos entrenados en estos campos, más los organizados en Santiago por los comandos “gremiales” y los partidos políticos de oposición, desencadenaron en el país una ofensiva terrorista de tal proporción, que en los últimos meses se llegó a perpetrar un atentado cada hora. Se dinamitaron puentes, carreteras, vías férreas, fábricas, oleoductos y centrales eléctricas; se colocó explosivos en residencias, oficinas públicas y establecimientos comerciales. En todos ellos quedó en evidencia el alto nivel de la asesoría técnica prestada por la CIA.

AUTOPSIA DE LA DESCOMPOSICIÓN

En los primeros días de diciembre de 1975, trascendió a la opinión pública el primer informe de la Comisión designada por el Senado norteamericano, con el objeto de investigar la intervención norteamericana en la política interna de otras naciones y concretamente en Chile.

El llamado "Informe Church" cierra un ciclo penoso para la opinión pública de EU, inaugurado hace un par de años con el escándalo Watergate. Éste fue un despertar amargo para el hombre medio norteamericano. Algo así como el inicio de un encuentro postergado con la realidad ingrata.

Por primera vez percibe claramente que la sociedad estable, democrática y puritana en la cual creía vivir, mostraba —al menos en la cúspide— signos evidentes de corrupción. Para el pueblo norteamericano el presidente de la nación era un personaje superior: respetable, incorruptible, ubicado por encima de la comunidad, como expresión de sus valores. Watergate abrió el estercolero. El jefe del país aparecía comprometido en la utilización de métodos rufianescos, mientras la pugna política, en el seno de la más grande democracia del mundo, se dirimía al más puro estilo de las mafias gansteriles.

El escándalo pudo haberse tapado con el sacrificio personal de Nixon. Sin embargo, abrió un forado a través del cual los hechos se precipitaron en cadena. El ciudadano llamado a suceder al presidente —el vicepresidente Spiro Agnew— es arrastrado a los tribunales acusado de soborno y peculado; sólo la jerarquía de su investidura impide que transite directamente de la Casa Blanca a la cárcel.

Desde otra perspectiva, la caída del gobierno de la UP contribuye a alterar los esquemas pacíficamente aceptados. El hecho impactó a la opinión pública norteamericana en términos que aún hoy parecen insólitos. ¿Por qué? El acontecimiento era más o menos habitual en el historial agitado del continente. El gobierno de Allende era percibido como "comunista" y, por tanto, como un adversario histórico de los EU. Nada parecía justificar una preocupación pública tan extendida y persistente.

Sin embargo, en torno al dramático caso chileno convergían factores sensibilizadores. Desde luego, la magnitud de la indignación universal. Pero en lo fundamental pesaba un hecho: por primera vez en los anales de EU aparecían cuestionados los procedimientos utilizados por las indubitadas estructuras de poder.

Ello impide que las encuestas parlamentarias, las investigaciones

promovidas por organismos privados y las denuncias formuladas por algunos personeros representativos del progresismo norteamericano, fueran en definitiva ahogadas por los mecanismos del sistema. Por el contrario, la abierta y cada vez más evidente interferencia en la vida de una pequeña nación del cono sur del continente, termina por generar un debate que cuestiona en su globalidad los métodos utilizados por el gobierno de EU en el manejo de sus relaciones internacionales.

En febrero de 1975 se constituyó el comité presidido por el senador Church, con el objeto preciso de investigar las "operaciones encubiertas" de los aparatos de seguridad norteamericanos. Recogiendo la preocupación de la opinión pública, originada en la escandalosa intromisión en Chile, la Comisión Church resolvió hacer un estudio especial sobre las acciones de espionaje e inteligencia de EU durante el período comprendido entre 1963 y 1973.

Por primera vez en investigaciones de esta naturaleza, se abrieron audiencias públicas donde comparecieron personajes del mundo oficial vinculados a actos de intervención en Chile y otros países de América Latina.

En general, las conclusiones del Comité senatorial confirman y amplían los antecedentes que hemos reunido en las páginas anteriores. Por lo tanto, valoramos la trascendencia histórico-política del acontecimiento. Se trata nada menos que del reconocimiento oficial, por parte del Congreso de EU, de la intervención desvergonzada e ilegítima en la vida política de un país, cuyos ciudadanos creían hasta hoy estar resolviendo libre y soberanamente su destino.

Sin embargo, nos interesa rescatar en estas páginas su significado profundo y revelador. El informe del Comité Church, recorrió ante el pueblo de EU y ante todos los pueblos del mundo, el grado de descomposición de la sociedad norteamericana y, en un plano más subalterno, el nivel de vileza moral, corrupción y sometimiento de la burguesía chilena.

Porque lo que ha quedado en evidencia no es el quehacer —tolerado y en cierto modo justificado— de los servicios secretos de una potencia cuyo destino se juega en la gran controversia mundial. Lo verdaderamente importante es la inescrupulosidad extrema de los métodos utilizados y la jerarquía del *staff* político que adopta las decisiones. Figuras prominentes y respetables de la "sociedad sana y puritana" eran las encargadas de planificar el asesinato de un jefe de Estado, la agresión a un país pequeño y de cuantificar el soborno de políticos, legisladores, militares y plumarios de los países atrasados. El espíritu de Chicago instalado en la Casa Blanca, institucionalizando el crimen como herramienta política y promoviendo la corrupción a escala in-

ternacional, con la misma metodología utilizada por los capos de la "Cosa Nostra".

La humanidad puede empezar a inquietarse. No se trata del drama moral de un país bananero, aplastado por alguna tenebrosa dictadura. Es la dirigencia de la mayor potencia capitalista occidental, que reivindica y convalida en el desarrollo de sus relaciones internacionales, las más puras prácticas gansteriles. Y lo hace desde cenáculos, donde se entrecruzan los fríos intereses de las poderosas empresas transnacionales y los grandes complejos militares industriales, con las exigencias estratégicas del imperio. Angustia pensar cómo a una cúpula política, en tal grado de descomposición, está entregada la posibilidad de percutar los mecanismos de un holocausto termonuclear.

Los antecedentes revelados por el Senado norteamericano, desnudan una intromisión tan grosera y profunda en las decisiones de un país, que hace difícil imaginar cuál es, en definitiva, el margen de autonomía reservado a sus habitantes, si lo hay.

Es el recuento de sólo diez años de la vida de Chile. Empero no hay motivo para circunscribir la persistencia del fenómeno a ese lapso y sólo a nuestro país. Sabemos que con mayor o menor intensidad lo mismo ha ocurrido en todas las repúblicas del continente.

El Informe senatorial no ha descubierto la intervención. Ésta es tan vieja como el imperialismo y consustancial a él. Su mérito incide en develar la amplitud, profundidad y naturaleza de la intervención. Incluso para aquellos que hemos venido denunciando en el discurso político de las últimas décadas, la injerencia intolerable y persistente de EU en la vida política de nuestros pueblos, resulta sorprendente constatar, que al menos desde 1962 hasta nuestros días, no hay un solo acontecimiento político más o menos trascendente, en el cual no estén impresas las huellas de la CIA o de la embajada norteamericana.

Millones de dólares han circulado por el sistema sanguíneo de la burguesía chilena. El dinero corruptor, la manipulación abierta o encubierta de individuos, partidos políticos, organizaciones sociales, Fuerzas Armadas, órganos de difusión, es decir, todos y cada uno de los componentes sociales, han venido tejiendo una maraña monstruosa que distorsiona el libre ejercicio de la soberanía popular y permite a la Casa Blanca ejercer el gobierno real de la nación. En definitiva, un país con su autonomía cívica mediatizada, su capacidad de decisión entrabada por las "operaciones encubiertas", elaboradas por el "Comité de los Cuarenta" en Washington e implementadas por la "estación local" de la CIA, en Santiago.

Por cierto, el éxito de la intromisión está en relación directa con los niveles de inmoralidad de la burguesía nativa. Tampoco —en este caso— la denuncia política de la izquierda estuvo a la altura de la

traición. La realidad superó con mucho nuestras más audaces aprehensiones. Gobernantes que conmovieron a Chile exhibiendo el puritanismo y la nobleza de sus almas; partidos políticos que proclamaron cotidianamente la pureza de sus virtudes patrióticas y ciudadanas; periodistas respetables proyectados en imágenes de caballeros andantes; organizaciones promovidas al amparo de los más elevados principios; diarios de centenaria prosapia republicana; tribunales que agitaban el fervor de las masas; todos son exhibidos de pronto, moralmente desnudos, en una orgía de traición y soborno.

Y no son pocos los damnificados. Los hay de todos los colores y todos los pelajes. Un mandatario, a quien un poeta decadente imagina: "limpio como el sol y brillante como la espada", aparece en el Informe Church trepando al poder por la escalinata del dólar puesta por la CIA. Durante diez años, el partido más importante resulta ser beneficiario de "cuotas" generosas de procedencia yanqui, que le permiten financiar campañas electorales, cancelar deudas o modernizar sus aparatos de difusión. Y los aportes son tan habituales, que un año después del golpe militar, el Senado norteamericano registra una discreta remesa de cincuenta mil dólares —algo así como el raspado de la olla— para "cancelar compromisos políticos generados antes del golpe". La campaña del candidato conservador en 1970, cuya honestidad y austeridad fuera profusamente publicitada ante el país, es tonificada con donaciones considerables de la RIT y de hombres de negocios norteamericanos. En general, todos los partidos históricos tradicionales —al menos sus tendencias más reaccionarias— y los grupos estructurados en torno a ellos, son "untados" con el dólar mercenario, en la gran repartija.

Con todo, es en el caso de *El Mercurio* donde la desvergüenza y el descaro adquieren un nivel más indignante. Es el ejemplo más claro de duplicidad y entreguismo. Este periódico, uno de los más antiguos de América Latina, tiene un historial centenario al servicio de los intereses oligárquicos y extranjeros. Vocero permanente de la antipatria, se puso al servicio del imperialismo inglés para aplastar los afanes nacionalistas de Balmaceda, deviniendo más tarde en un simple periódico norteamericano, editado en Chile. Ninguna institución refleja con tan límpida claridad lo que es el alma de nuestra burguesía: árbitro de la moral, ampuloso declamador de la libertad y la democracia, preceptor de los más elevados principios; presto, sin embargo, a alquilarse por libras ayer y por dólares hoy. Viejo condotiero de la reacción chilena y continental, terminó finalmente por integrarse a la red de intereses de las grandes empresas multinacionales. Su propietario, Agustín Edwards, encabeza el clan económico más poderoso del país, a la vez que oficia como vicepresidente de la Pepsi Cola

en EU. Prófugo de la justicia chilena, es al mismo tiempo huésped de Nixon en la Casa Blanca, a quien asesora en la criminal traición contra Chile.

El currículum de *El Mercurio* parece suficientemente meritorio como para explicar la magnitud de su entrega. La CIA entra a administrarlo directamente. No se trata sólo de que ésta “subveñionara” con importantes cantidades de dinero sus proclividades democráticas. La agencia instala a sus hombres en el consejo de redacción y asume de hecho —en junio de 1970— la dirección de la campaña publicitaria en contra de la Unidad Popular. Es la CIA la que directamente señala objetivos, selecciona temas, determina la línea de los editoriales e incluso, orienta los titulares. Las reiteradas referencias del Informe Church a las actividades de *El Mercurio*, ponen al desnudo algo más que las miserias morales de una empresa periodística. Son la radiografía nítida y reveladora de los mecanismos de corrupción y soborno que manipula la “prensa seria” de América Latina, en el formidable esfuerzo de desinformación y engaño implementado por el imperialismo.

Hasta aquí el ominoso abanico abierto de la corrupción de una clase. No se trata de individuos aislados cuyas debilidades se ahogan en el drama personal, socialmente intrascendente. Es la miseria moral de un estrato social que sacrifica todo al lucro y a la avidez de sus apetitos individuales. Todo el andamiaje principista sobre el cual afincó su sistema, se desmorona estrepitosamente en la gran subasta organizada por el imperialismo.

El Informe Church tiene el valor de un formidable testimonio histórico. En el decurso de la controversia social, una y mil veces, prevenimos al país sobre los intrincados mecanismos de intervención norteamericana en la vida chilena. Denunciamos —más allá de toda pasión subalterna— a Eduardo Frei como defensor de los intereses estratégicos de EU, y al diario *El Mercurio* como el portavoz oficial de estos intereses. Nuestras acusaciones se estrellaban invariablemente con la santa indignación de los afectados, cuando no con la ironía escéptica de sus falderillos. De aquí la trascendencia, que para las luchas futuras de nuestro pueblo, asume el reconocimiento tajante y directo del Capitolio norteamericano.

El desmentido torpe de hoy —tímido en algunos, cínico en los más— sólo confirma la violencia moral de una afirmación, que marca ante la historia y las generaciones futuras, el patrimonio ético de la clase dirigente de la sociedad chilena, en buena parte del presente siglo. La rancia oligarquía solía exhibir con orgullo la austeridad y el patriotismo de sus líderes en el siglo pasado. Se dice que Montt, Varas y otros, abandonaron el poder en condiciones de franciscana pobreza. En cambio, la burguesía de nuestro siglo tendrá serios pro-

blemas para sustituir los harapos morales de sus más prominentes personeros: los respetables partidos de orden; los engolados custodios de las grandes tradiciones nacionales; los titulares exclusivos de los altos valores patrióticos, no podrán sacudir el estigma de la traición. Algunos dólares más, algunas vergüenzas menos.

Quedará en pie, no obstante, la frustración de una nación, cuando termine por descubrir que sus profundos anhelos, las más caras aspiraciones, y la voluntad que creía expresar libre y soberanamente en el sufragio, en la actividad creadora, en la confianza entregada a líderes burgueses, aparentemente incorruptibles, han sido manipulados, tan lenta como imperceptiblemente, por hombres e intereses de un país extranjero.

Sería ingenuo pretender, que la interferencia infame en la vida de nuestro país y la amplitud inescrupulosa de los métodos empleados, sean un hecho excepcional, difícil de volver a producirse. En tanto los países latinoamericanos sean detectados como simples marionetas en el cumplimiento del "gran destino", las amenazas —reales o imaginarias— que sus luchas suponen, determinarán inexorablemente nuevas y más groseras intervenciones.

Hace apenas algunos meses, cuando ya se conocían las escandalosas conclusiones de la Comisión senatorial, Thomas Farer, representante del Departamento de Estado, formuló con franqueza descarnada las reglas del juego. Su auditorio, integrado por personalidades políticas y académicas de América Latina, escuchó sorprendido una afirmación conminatoria: "En la política de Estados Unidos hacia América Latina lo prioritario es la seguridad nacional norteamericana, y por ello fueron necesarias intervenciones directas y también encubiertas en el pasado. Seguramente en los próximos diez años no habrá intervenciones como las de la República Dominicana; sin embargo, es previsible que haya intervenciones encubiertas."

Finalmente y para que nadie se llamara a engaño, señaló categóricamente, que cualquier modelo de relaciones entre su país y América Latina, "para ser viable debe tener en cuenta los intereses y la ideología de EU", agregando que "no es concebible que América Latina sea socialista", y "que a lo sumo Estados Unidos podrá tolerar que se desarrolle un capitalismo nacional".⁴

Medida en su conjunto, la ofensiva montada por EU para derribar el Gobierno Popular y hacer abortar la experiencia revolucionaria, pasa a ser un factor determinante de la derrota final.

Del país que Salvador Allende describió con voz emocionada ante

⁴ Intervención en el Congreso de Oaxtepec, México, diciembre de 1975, Rev. *Ercilla*, 7 de enero de 1976.

la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1972 no ha quedado prácticamente nada.

Vengo de Chile, un país pequeño pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, su irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial, no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde los tribunales de justicia son independientes del Ejecutivo, en que desde 1833 sólo una vez se ha cambiado la carta constitucional, sin que ésta prácticamente jamás haya dejado de ser aplicada. Un país donde la vida pública está organizada en instituciones civiles, que cuenta con fuerzas armadas de probada formación profesional y espíritu democrático. Un país de 10 millones de habitantes que en una generación ha dado dos premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos hijos de modestos trabajadores. Historia, tierra y hombres se funden en un gran sentido nacional. (Discurso pronunciado ante la Asamblea General de la ONU el 4 de diciembre de 1972.)

Sus Fuerzas Armadas fueron utilizadas para destrozarse su democracia centenaria, liquidar su sistema de convivencia y destruir el Estado de Derecho, construido casi en el amanecer de la República. Chile fue quebrado cultural y socialmente, y convertido en una inmensa y horrorosa cárcel, donde se aplasta, escarnea y tortura a sus mejores hombres. Todo ello se ha hecho, como ha dicho el presidente Ford, "para favorecer los mejores intereses del pueblo de Chile y proteger los intereses de EU".

Sin la voluntad del gobierno norteamericano y la actividad criminal de la CIA, jamás el modelo contrarrevolucionario habría adquirido tales niveles de eficacia. La burguesía nacional no tenía capacidad ni recursos para ello. Sin el cerco financiero magistralmente orquestado desde Wall Street, la situación económica del país no se habría expresado en imágenes tan profundas de anarquía y desarticulación. Sin la presión persistente del Pentágono, el proceso de debilitamiento profesional y democrático en el seno de las Fuerzas Armadas habría tenido otro ritmo o no se habría producido. Sin la participación activa y eficiente de la CIA, el terrorismo desatado por la burguesía apenas se habría expresado en tono menor. Sin el dinero norteamericano, prodigado en el soborno, la corrupción y el esfuerzo infame por deformar y envilecer la conciencia nacional, las huelgas empresariales no hubieran ocasionado un daño tan irreparable.⁵ Sin el dedo percutor de

⁵ La huelga de los "transportistas", financiada por la CIA, paralizó 50 mil camiones durante cincuenta días, inmovilizando el transporte de un millón de toneladas diarias de alimentos, materias primas, combustibles y otros productos.

la CIA, el sector freísta de la DC no habría encontrado en el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, el pretexto para arrastrar a su partido a la pendiente conspirativa.

El mundo así lo ha entendido y por ello desprecia y condena la intromisión de los Kissinger y Nixon. Chile fue un Vietnam "silencioso y derrotado". La misma intervención desenfadada, el mismo desprecio por la voluntad del pueblo, la misma arrogancia brutal e intimidatoria, la misma invocación principista, hipócrita y mentirosa a la ley, la democracia y la libertad. Como el mitológico dios Jano, dos caras, pero también dos almas. Por una parte, adiestra los ejércitos nativos para impedir la insurrección armada contra obsecuentes dictaduras oligárquicas, y por otra, planifica y promueve esa insurrección armada en contra de un gobierno constitucional y legítimo. Reúne a sus lacayos para marginar a Cuba —durante quince años— de la comunidad continental, acusándola de injerencia en los asuntos políticos de otros pueblos; mientras interviene, confesa y abiertamente, para torcer el destino de un pueblo pequeño, que aspiraba a encontrar sus propios caminos en "pluralismo, democracia y libertad".

10. FUERZAS ARMADAS: LA MÁS SERIA INSUFICIENCIA

MITO Y REALIDADES

El artículo 22 de la Constitución política del Estado dispone: “Las Fuerzas Armadas son esencialmente profesionales, jerarquizadas, obedientes y no deliberantes.”

La afirmación jurídica no sólo consignaba la voluntad del poder constituyente, sino reflejaba una realidad de sorprendente y prolongada persistencia. Durante ciento cuarenta años, salvo breves períodos de excepción, los institutos armados chilenos habían permanecido marginados de la contienda política. En 1830, Diego Portales organizó el Estado oligárquico, sobre la concepción de la legalidad de un poder civil impersonal, autoritario, a cuya majestad las Fuerzas Armadas debían acatamiento irrestricto. El “Estado en forma”, concebido por Portales, refractario al caudillismo militar, singulariza el quehacer político nacional en el contexto anárquico y turbulento del continente. Chile es el único país al que no asoman los “caudillos bárbaros”, que agitaron la evolución política de América Latina en el curso del siglo XIX, y marcan el retraso de algunas naciones hasta nuestros días.

La concepción portaliana impregnó la vida del país de un hondo sentimiento civilista, que subentendía el sometimiento del poder militar al poder civil. En esta afirmación coincidían todas las fuerzas políticas chilenas.

Hasta 1920, durante casi un siglo, los militares estuvieron limitados a sus funciones de brazo armado de la oligarquía. Entre 1924 y 1932 hay un período de quiebre institucional, caracterizado por incruentas intervenciones militares, de inspiración progresista y antioligárquica.

En 1924, por primera vez los institutos armados, como tales, afloran al proceso político y se movilizan para exigir al Congreso Nacional la aprobación de un conjunto de leyes sociales, entre ellas el Código del Trabajo. Cuando Alessandri, el viejo, a la sazón presidente de la República, abandona el mando en protesta por las interferencias castrenses, los militares asumen brevemente la dirección del país. Reaparecen más tarde —tras Ibáñez— con un proyecto populista y antioligárquico. La inestabilidad política se prolonga hasta la caída —en 1932— de la fugaz “República Socialista” surgida de un golpe mili-

tar, encabezado por el comodoro del Aire Marmaduke Grove, fundador más tarde del Partido Socialista chileno.

Las veleidades populistas de las Fuerzas Armadas, fortalecieron el sentimiento antimilitarista de la oligarquía, al cual confluyen las demás fuerzas políticas, acentuando en esta forma su confinamiento profesional.¹ En 1932, este sentimiento y la desconfianza de la clase dominante llegan al extremo de crear un ejército burgués paralelo, concebido como garantía del civilismo; "las Milicias Republicanas" que agrupan a más de cien mil hombres poderosamente armados. Esta estructura paramilitar, abiertamente inconstitucional, subsiste hasta 1938.

No obstante, el presunto "apoliticismo" militar está en esencia condicionado por la propia capacidad del sistema para regular sus crisis internas, sin necesidad de recurrir a la violencia. Tanto los conflictos interburgueses, como los que surgían entre la burguesía y los demás sectores sociales, eran resueltos en el interior de la institucionalidad. Dicho en otra forma, no estando cuestionado el sistema de dominación capitalista, bien podían permanecer en sus cuarteles.

Finalmente, influye en las relaciones entre los uniformados y la organización civil un factor que debe estar presente en todo análisis, cual era la debilidad política de las Fuerzas Armadas.

En ello convergen diversos elementos. Desde luego, un generalizado consenso nacional les impedía actuar como grupo de presión, incluso en el plano de sus intereses profesionales. Desde otro ángulo, en Chile la profesión militar, al menos en el presente siglo, no tuvo un nivel de prestigio social aceptable, a diferencia de lo ocurrido en los demás países de América Latina. La oligarquía la consideró siempre despectivamente.

Otro elemento de su debilidad política es su restringido nivel de ilustración. Mientras otros ejércitos del continente se asoman al complejo mundo de los problemas sociales, políticos, económicos e internacionales, los militares chilenos permanecen reclusos en una suerte de subcultura, que de hecho los mantiene aislados de la sociedad.

Vemos entonces cómo una concatenación de factores convergentes alimentan la ilusión de una fuerza armada políticamente prescindente, no deliberante y sometida al poder civil. Una especie de mítico ejército profesional, más allá de las clases y por encima de sus conflictos.

La más seria desviación del proceso chileno, y la que en definitiva

¹ En septiembre de 1931 se sublevó una parte de la Armada bajo la dirección de suboficiales inspirados parcialmente en el ejemplo de la Revolución rusa, la que fue aplastada con el apoyo de la aviación.

sellara su destino, fue acceder, sólo con tímidas reservas intelectuales, a la aceptación de este mito. El papel profesional del ejército, no cuestionado por sucesos históricos profundos, justificado y sustentado en una ideología constitucionalista, mediatizó el verdadero papel de los institutos armados en una sociedad de clases.

El Gobierno Popular asume el poder reconociéndoles implícitamente el carácter de árbitros en el conflicto social y político, forzosamente agudizado por la dinámica revolucionaria. De hecho, la gravitación ocasional de un sector constitucionalista, con categórica expresión en los altos mandos, contribuyó a acrecentar la confianza en la lealtad militar al desempeño de su función arbitral. Confianza que prescindía de su carácter de ejército de clase, de su ideología pequeñoburguesa y de su ineptitud básica para dirimir la pugna social, consustancial a un proceso revolucionario, en favor de las fuerzas trasformadoras.

Cuando la Democracia Cristiana, expresando las tribulaciones de la burguesía electoralmente derrotada, exige a Allende, en 1970, el llamado "Estatuto de Garantías Democráticas", intentó —sin éxito— que el Presidente renunciara a sus facultades privativas para designar los altos mandos de los institutos armados, proponiendo —en cambio— su autogeneración. La demanda, con ser rechazada, no ocultaba la obvia intención de hacer del Presidente un prisionero del ejército y asegurar desde un comienzo el resultado del "arbitraje". Con la misma finalidad, la derecha impone más tarde la llamada "Ley de Control de Armas", que le garantiza el monopolio de los armamentos en el país.

La elección presidencial de 1970, lejos de convertir a las Fuerzas Armadas en "árbitro" del conflicto social emergente, las transforma en aval ante la burguesía, del sometimiento irrestricto del nuevo gobierno a las reglas del juego institucional; pero, a la inversa, no garantizan el acatamiento de la burguesía a las mismas normas. El mito del ejército apolítico se diluye ante la nueva realidad. De hecho, son concebidas como una fuerza de remplazo, disponible para el instante en que el proceso pusiera en peligro la supervivencia del sistema.

Los hechos posteriores demostrarían que el ejército no era un compartimento estanco ubicado más allá del bien y del mal.

El mandato constitucional, que establecía su obediencia al poder civil, tenía validez sólo en la medida en que su presencia no fuera reclamada para "salvar" el sistema. Formulada esta exigencia, los mecanismos determinantes de su conducta serán, en definitiva, activados por su ideología y su ubicación en el espectro clasista.

Abrumadoramente —al menos desde 1920— la oficialidad de las

Fuerzas Armadas era reclutada entre la pequeña burguesía. Hacia 1960, la hegemonía de estos estratos en el cuerpo de oficiales es casi absoluta. No obstante, otros factores de clase influyen en su alineamiento ideológico. En el curso de su carrera, y desde los primeros rangos, el oficial debe permanecer un tiempo prolongado en las guar-niciones de provincia. Allí, sus contactos sociales los vinculan con la clase alta rural y, en general, con los sectores "acomodados" del medio local. Con extraordinaria frecuencia el matrimonio se realiza con personas pertenecientes a estos sectores. Así, un oficial tipo del ejército chileno es integrante de la clase media en cuanto a su origen familiar, pero por su actividad social y profesional crea interconexio-nes sólidas con la burguesía. Tal situación se veía acentuada en la Fuerza Aérea y la Marina, ramas en que la selección clasista ha sido tradicionalmente más rigurosa.

Es ello lo que define y delimita el corpus ideológico al cual están adscritas. Si bien sus características institucionales diseñan, en ciertos aspectos, una relativa autonomía, en lo sustantivo son ideológicamente tributarias de los sectores pequeñoburgueses. En otras palabras, poseen una "ideología institucional" que no es antagónica, sino complementaria de su "ideología social", en cuanto expresión de las capas medias.

El apoliticismo de las Fuerzas Armadas es otra ilusión creada por el sistema. Se trata de una hábil trampa dirigida a bloquear la influencia social y política del medio ambiente, y más específicamente, la que pudiera ejercer el pensamiento revolucionario. Socialmente el apoliticismo del ejército es un fenómeno unidireccional. En la misma medida en que lo enclaustra respecto de toda influencia ideológica izquierdista, lo entrega indefenso a las ideas reaccionarias.

Hasta fines de la primera mitad de este siglo, el pensamiento militar —al igual que su estructura orgánica interna— aparece notoriamente influido por las tradiciones y concepciones geopolíticas prusianas.

El componente ideológico fundamental es el nacionalismo.

Alimentan el concepto de un destino de "gran nación", de un papel histórico cuya frustración se atribuye a la "demagogia" y a la "politiquería". Esta afirmación nacionalista estrecha, lleva a las Fuerzas Armadas a rechazar intelectualmente la existencia de la lucha de clases, y la politización "disgregadora" de la nación, organizada —según ellos— para el cumplimiento de su "destino histórico".

A partir de la Conferencia de Río de Janeiro, en 1948 (Chile suscribe el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca con EU), las ideas militares se orientan en función de otros factores. El Tratado de Río, impuesto por los norteamericanos en el período más gélido de

la guerra fría, incorpora una nueva noción al militarismo: la defensa del hemisferio, en la perspectiva de una eventual guerra mundial.

Es un hecho comprobado, que el ascenso del movimiento popular estimula la preocupación norteamericana —y por cierto la de la burguesía nativa— para mantener una estructura militar cada vez más amplia, eficientemente entrenada y equipada, y dotada de elevado nivel disciplinario. Ella es concebida como la última línea defensiva frente a la amenaza revolucionaria, expresada en el creciente poderío electoral y social de los partidos populares. Mientras la clase obrera ganaba votos, el sistema ganaba fusiles. Desde 1965 empiezan a aumentarse significativamente los montos absolutos de los gastos militares. Chile se ubica —inmediatamente después de Cuba— como el país de más alto índice de personal militar percápita.

El imperialismo norteamericano irrumpe en la formación profesional de nuestros militares usando todas sus variadas formas de penetración, articulando al mismo tiempo una casi absoluta dependencia en el plano tecnológico, y en el aprovisionamiento de material bélico. Podemos medir la magnitud de esta infiltración, si consideramos que entre 1950 y 1972, 4 932 militares chilenos fueron entrenados intensivamente en territorio de EU, y que a contar de 1968, casi todos los cadetes de la Escuela Militar han recibido instrucción antiguerrillera en la Zona del Canal de Panamá, por un lapso de dos meses. Un antecedente aún más revelador: el 55% de la oficialidad recibió algún tipo de instrucción en centros de adiestramiento norteamericanos.

El ascendiente norteamericano se proyecta indistintamente sobre las tres ramas de los institutos armados. La Marina chilena, el más reaccionario de los cuerpos castrenses, si bien adhiere románticamente a la tradición inglesa, se somete con igual fidelidad a las ideas y dictados norteamericanos. La Fuerza Aérea, la más joven de las ramas militares, carente de una tradición singular, aparece también firmemente ubicada en la esfera de influencia del Pentágono. La situación de Carabineros, en cambio, muestra algunos rasgos peculiares, útiles de consignar. Sus tareas propias —mantención del orden público— lo vinculan con los problemas reales de la población, determinando contradicciones ausentes en las otras instituciones.

Después del éxito de la Revolución cubana, EU fortalece aún más su sistema defensivo continental, estrechando los nudos vinculatorios con los ejércitos de América Latina. La preocupación militar se homogeniza esta vez en torno a un nuevo concepto catalizador: “El enemigo interno.”

En definitiva, los institutos armados asumen teóricamente tres funciones esenciales: la defensa de la soberanía nacional; la defensa hemisférica, y la defensa de “las fronteras ideológicas”.

En última instancia, la tarea básica, la que está en el "orden del día", es la defensa en cada país frente al "enemigo interno". Éste es hoy el adversario principal.

El adiestramiento profesional de las Fuerzas Armadas se realiza casi exclusivamente en función de él y los aparatos de seguridad, la policía, los servicios de inteligencia, se orientan a combatirlo.

Así las originalidades jurídicas establecidas por Pinochet, al establecer por decreto que los partidos populares son "el enemigo", con todo lo aberrantes y absurdas, gozan de la solvencia ideológica anticipada por el imperialismo.

La izquierda chilena, la clase obrera, los campesinos, los intelectuales progresistas, la juventud comprometida, los artistas, son "el enemigo interno", esto es en lenguaje juntista: "los extremistas extranjeros de la Unidad Popular".

Así adquiere hasta cierta lógica, la imposición de un "estado de guerra interno", el cual es la consecuencia represiva natural de la predeterminación del enemigo y la ocupación objetiva del territorio nacional, con los mismos métodos empleados por un ejército extranjero para oprimir una nación avasallada, aunque sin sujeción a las leyes internacionales de la guerra.

Finalmente, es útil dejar establecido, que el fascismo en el interior de las Fuerzas Armadas no es una categoría nueva, que aflora espontáneamente a la luz de la emergencia revolucionaria iniciada en 1970. Ya en el curso de la segunda guerra mundial aparecen grupos y logias de clara filiación totalitaria, sin mayor importancia, pero cuyas huellas han estado presentes en el acontecer nacional. Células del "Opus Dei" funcionaron en las tres ramas de las Fuerzas Armadas, mientras en la Marina operaban filiales de los "Caballeros de Colón", entidad de indudable raíz fascista. De otra parte, a través de la enseñanza militar, impartida en escuelas y academias profesionales, influyeron los mismos grupos hispanistas e integristas, hoy voceros ideológicos de la Junta Militar.

EL GOBIERNO POPULAR Y LAS FUERZAS ARMADAS

Hemos reiterado con insistencia premeditada en el hecho de que la desviación principal surgida en el seno de la Unidad Popular, se manifestó en el tratamiento dado a las Fuerzas Armadas. Lo que se hizo y lo que se dejó de hacer.

El análisis histórico de su comportamiento, la justa ponderación

de su composición social y las fragilidades de sus concepciones democráticas, debieron llevarnos a elaborar una política, que al menos permitiera consolidar las posiciones constitucionalistas y prever el desarrollo de sus contradicciones internas, en la búsqueda de una resolución favorable. Tal política fue sustituida por otra, que en la práctica permitía a las mismas Fuerzas Armadas dirimir su prescindencia. Así, se renunció al ejercicio de facultades legales para la remoción y promoción de cuadros, aceptándose que actividades sediciosas y aun sublevaciones, se encararan como problemas internos, con tolerancia de su investigación deficiente, disimulo de sus conexiones políticas y sanciones irrisorias a sus responsables. Por otra parte, se menospreció el hecho de sus vínculos con EU.

En definitiva, el gobierno de la Unidad Popular, a falta de una política militar capaz de sustentar un proceso de transformaciones revolucionarias, se limitó a ensayar un tipo de vinculación que no penetró en las formas tradicionales de manejo de los asuntos castrenses ni alteró la naturaleza formativa de sus cuadros. Tal empeño, al prescindir de su carácter de institución de clase, adquirió una simple connotación superestructural. En general, estuvo orientado a satisfacer sus aspiraciones profesionales (el equipamiento y la infraestructura operativa fueron objeto de una atención jamás dispensada por los gobiernos burgueses), a solventar sus reivindicaciones presupuestarias y establecer un *modus vivendi* de participación convencional en algunos sectores de la actividad económica. Éstas fueron las premisas básicas y puestas a prueba —necesario es reconocerlo—, resistieron hasta septiembre de 1973, en medio de la más profunda transformación de la estructura económica de la historia nacional.

La burguesía y el imperialismo sí definieron una política hacia los institutos armados. Entendieron de inmediato que ellos eran su garante natural, y en consecuencia, su quehacer se orientó a lograr el objetivo estratégico perseguido: la insurrección armada. Todo el complejo modelo contrarrevolucionario implementado: la guerra psicológica, el caos económico, la paulatina deslegitimación del gobierno, la imagen de "colosal desorden", tenía un postrer y exclusivo destinatario: las Fuerzas Armadas.

Utilizan todos los recursos, directos e indirectos, enfilados a erosionar psicológicamente los escrúpulos del sector constitucionalista. Tanto se les halaga, como insulta y encarnece públicamente, enrostrándoles su cobardía. Cuando la posición deliberativa de algún oficial trascendía, hasta el extremo de ser llamado a retiro, la reacción le rendía honores de héroe nacional. Tal sucedió con el general Alfredo Canales, en torno al cual funcionaba una activa célula conspirativa, y con el coronel Alberto Labbé, director de la Escuela Militar, posterior-

mente designado candidato a senador por la combinación electoral derechista.

Abiertamente, en el discurso político, se llama a los militares a intervenir, llamado que en el último tiempo adquiere, como alguien dijera, la forma de una "invocación mecánica". La oligarquía plutocrática, que durante más de un siglo había preceptuado su confinamiento político, les exige ahora definir opciones y actuar en consecuencia.

Negándose el gobierno a influir en los conflictos internos, de hecho se autoimponía una absurda renuncia a utilizar las facultades pertinentes para la promoción y remoción de sus cuadros. En la búsqueda de la "neutralidad" de los institutos armados, el gobierno anticipaba su propia neutralidad, permitiendo a ellos dirimir por sí solos su prescindencia.

Así los sectores democráticos fueron paulatinamente marcados y aislados. Sin coherencia fraccional, la "neutralidad" del gobierno los condenaba.

La participación militar, incluso su presencia en algunos gabinetes, no modificó la relación de fuerzas al interior de ella. Por el contrario, era utilizada arteramente para debilitar la posición de la oficialidad leal.

Finalmente, la situación interna se resolvió como era previsible. El general Prats, como comandante en jefe del Ejército y ministro del Interior, venía jugando el papel de muro de contención del golpismo. Por ello polarizaba todo el odio de la reacción y, más tarde, el peso de la ofensiva. El asedio para minarlo personal e institucionalmente se implementó de frente y de soslayo. Dos meses antes del pronunciamiento militar, se le montó una provocación pública, en una concurrida avenida de Santiago, donde "providencialmente" se encontraban periodistas y fotógrafos de la prensa reaccionaria. El 21 de agosto se asesta el golpe final. Algunas centenas de mujeres se congregan frente a su residencia para insultarlo soezmente y exigirle su abandono de las filas del ejército. Encabezaban la manifestación las esposas de seis generales y de otros altos oficiales. El vejamen, cuidadosamente concebido, precipita el desenlace: el cuerpo de generales, no obstante la magnitud del agravio, no solidariza ni respalda a su jefe. La renuncia inevitable de Prats y de los generales leales, Pickering y Sepúlveda, desbroza definitivamente el camino del *putsch*.

Al conocer la renuncia del general Prats, el presidente de la República comisionó a dos altos dirigentes del PC y al autor, el encargo de una última gestión a fin de obtener el retiro de la dimisión. En algunos pasajes del diálogo, el comandante en jefe del Ejército consignó algunas opiniones extraordinariamente reveladoras. Enfatizando su

escepticismo sobre la situación en el interior de las Fuerzas Armadas, expresó textualmente:

“—¡Qué inconcebible error han cometido ustedes! ¡Cómo no aprovecharon la oportunidad de cambiar las jerarquías del ejército, designando —por ejemplo— un capitán como comandante en jefe!”

Cuando uno de sus interlocutores le preguntó sorprendido: “¿Pero ello era posible?”, respondió de inmediato: “—¡Sí! Era posible. Al iniciarse el gobierno era posible. ¡Hoy no!”

En otro pasaje de la entrevista, cuando argumentábamos sobre lo absurdo de los infundios que se atribuían al PC y al movimiento popular en el seno de las Fuerzas Armadas, en tono casi exasperado nos dice:

“—De ello no me convenzan a mí. Yo sé que el PC ha mantenido una conducta seria y responsable en la gestión de gobierno. Pero el problema es otro: es el anticomunismo irracional que existe en el interior de las Fuerzas Armadas. Éstas están dispuestas a aceptar cualquier propósito descabellado atribuido al PC.”

El 11 de septiembre las Fuerzas Armadas dirimen el “arbitraje”. La decisión en favor de la conservación del sistema, se ejecuta con una brutalidad tan inédita y singular, como lo había sido —paradójicamente— inédita y singular la evolución política de Chile. El mundo se asombra y se indigna. El modelo fascista, más que previsible, era inevitable en el nuevo contexto político y social de Chile, pero no lo era la crueldad inaudita y la magnitud repugnante de la violencia desplegada por los “pundonorosos militares”.

Para la burguesía nacional y para EU, el golpe “institucional” era la opción racionalmente más favorable. Aventaba los peligros de una guerra civil con un margen de riesgo muy escaso, y colocaba a la clase dirigente en condiciones de iniciar de inmediato la recomposición drástica de la sociedad, sobre la base de una intensiva acumulación de capital y la superexplotación del proletariado. Ello, por primera vez en la historia —al menos durante un tiempo— sería posible sin interferencias democráticas.

Sin embargo, también es obvio que algunas fracciones de la burguesía tenían una opinión de las Fuerzas Armadas no menos deformada que la nuestra, cuando conciben la participación militar sólo en el cumplimiento de la “faena sucia”, para retornar posteriormente a sus cuarteles.

Ello, sin embargo, no fue viable. No lo era después de un proceso tan extraordinariamente tenso y polarizado como el transitado por Chile durante tres años. No lo era por la profundidad de las trasfor-

maciones realizadas, el potencial de los partidos proletarios, la magnitud y extensión del movimiento popular y los niveles a los que se empujaba la conciencia revolucionaria de las masas.

En todo caso, el error de ese sector de la burguesía no morigeró su responsabilidad. "Más temprano que tarde" el juicio histórico señalará a los culpables. En el banquillo, estarán confundidos, los ejecutores de la carnicería y los venerables repúblicos fabricantes del monstruo. Juntos, los militares fascistas, los generales civiles de la burguesía, y el gobierno de Estados Unidos de América.

AUSENCIA DE UNA POLÍTICA MILITAR

Al analizar el problema de las vías de acceso al poder, afirmamos que el camino elegido —político institucional— llevaba fatalmente al colapso del proceso revolucionario, desde el instante mismo en que la burguesía lo había desahuciado y, en cambio, buscaba el quiebre de la democracia representativa, como única forma para conservar sus privilegios. Agregamos que a pesar de las enormes dificultades, era factible la implementación de una línea estratégica armada, siempre y cuando la dirección revolucionaria hubiera manifestado la voluntad única y resuelta de llevarla adelante, y concluimos, en que solo tal perspectiva brindaba alguna posibilidad de éxito.

Naturalmente, esta afirmación exige dar respuesta al interrogante principal: ¿en qué forma y con qué medios era posible implementar una estrategia alternativa de esa naturaleza?

En el desarrollo de una línea armada, desempeñaba un papel insustituible, la elaboración de una política militar, capaz de anudar el cordón defensivo del proceso. A ella queremos referirnos.

Desde diversos ángulos se afirma una concepción fatalista acerca del margen de acción del movimiento popular en esta materia. La sostiene la imposibilidad de haber creado milicias obreras y campesinas, capaces de asumir la defensa del proceso. Incluso en determinadas instancias, se insiste en la inviabilidad de proveer al armamento del pueblo. Con el mismo escepticismo se concluye, que cualquiera intervención del Ejecutivo en los mecanismos de promociones, ascensos y asignaciones de mandos militares, redundarían en beneficio de la reacción, toda vez que serían exhibidos como interferencias ilegítimas en los institutos armados.

De ello se infiere, que el proceso revolucionario sólo podía jugar

sus cartas a la preservación de un sector constitucionalista, como disuasivo del desarrollo de tendencias golpistas.

De esta manera, las dificultades evidentes que suponía la ejecución de una política militar son consideradas insolubles, eludiéndose así la respuesta a la más seria omisión de la dirección revolucionaria.

No incurriremos en la ligereza de desestimar los riesgos inherentes a tal política. Indudablemente eran extraordinarios. Pero reiteramos nuestra categórica e íntima convicción: asumirlos era una necesidad insoslayable a la cual se vinculaba la única alternativa de continuidad del proceso. Eludirlos, era aceptar pura y simplemente la derrota. Pretendemos demostrar cómo siempre hubo un margen importante de maniobra y tuvimos a mano variantes de acción que pudimos y debimos utilizar.

Una vez planteada la intangibilidad del ejército, como condición de su "neutralidad", se obstruyó cualquier empeño orientado a ganar fuerzas en su interior.

Esta política implicaba, en instantes que fue posible ejercer a plenitud las facultades constitucionales privativas del jefe del Estado, las cuales le permitían promover cuadros y mandos leales, disolver focos potencialmente sediciosos y destituir los elementos golpistas. El presidente de la República podía llamar a retiro al Cuerpo de Generales—individualmente o en conjunto— cuando lo hubiese estimado oportuno. En la misma forma, a través de la Junta de Calificaciones, podía exonerar a oficiales superiores. En las últimas décadas, el único gobierno que no asume estas facultades es el nuestro. Tanto Alessandri como Frei, remplazaron íntegramente los tres altos mandos de las Fuerzas Armadas y el de Carabineros, en tres o cuatro oportunidades. Durante el Gobierno Popular, en las escasas ocasiones cuando se ejercieron estas atribuciones, no hubo problemas mayores.

Las posibilidades latentes en el Cuerpo de Carabineros eran insospechadas. En su seno y en todos los niveles jerárquicos había un clima de simpatía hacia el proceso. No debe olvidarse un hecho: los conspiradores fascistas sólo logran reclutar para el golpe a los generales César Mendoza y Arturo Yovane, ubicados en el cuarto y noveno lugar del escalafón. El resto, en definitiva desarticulados, permanecieron algunos leales al proceso; los más al gobierno legítimo. En la Escuela de Suboficiales, al estallar el *putsch*, la suboficialidad patriótica escribe un episodio heroico combatiendo durante dos días contra las fuerzas insurrectas. Todo ello indica la existencia de condiciones que habrían permitido transformar a la policía uniformada en un contingente defensivo de extraordinaria importancia. Ella agrupaba a más de veinte mil hombres pertrechados de armamento moderno y con mayor experiencia en la lucha urbana que el propio ejército.

Debo dejar consignado la permanente preocupación del Partido Socialista, el cual en más de alguna ocasión representó formalmente al gobierno la necesidad de reestructurar los altos mandos, promoviendo a oficiales —que los había de más sólido compromiso— y desplazando a aquellos manifiestamente hostiles al régimen.

Sin embargo las cosas operaban en sentido inverso. El sector sistemáticamente desarticulado fue precisamente el democrático. Siempre estuvo a la defensiva. No obstante constituir mayoría, eran los oficiales y suboficiales leales —y no los conspiradores— quienes actuaban clandestinamente, toda vez que los obedientes al gobierno eran postergados en sus ascensos, o lisa y llanamente dados de baja. La situación termina por adquirir una expresión grotesca después del frustrado golpe del 29 de junio de 1973. En lugar de ser eliminados los oficiales comprometidos en la conspiración, se manipula con éxito la renuncia del general Prats y tras ésta, la de los generales Pickering y Sepúlveda, todos de conocida inspiración constitucionalista.

Por otra parte, un trabajo serio y coherente hacia el interior de las Fuerzas Armadas debió orientarse a organizar y agrupar los elementos potencialmente leales al gobierno, que tenían un peso significativo y encarnaban, al igual que en otros ejércitos latinoamericanos (Perú, Argentina, Panamá, Ecuador), el desarrollo de tendencias democráticas y progresistas. Sin embargo, éstas permanecieron sólo como tendencias y no llegaron jamás a formar estructuras fraccionales. Carentes de una ligazón orgánica, serán barridos por una minoría fascista, audaz y resuelta, con claridad e identidad de objetivos, y sí constituida en fracción.

Indudablemente hubo altos oficiales comprometidos con el proceso.

Su presencia en el interior de las Fuerzas Armadas no era en modo alguno una ilusión óptica. Durante un período importante llegaron a tener hegemonía en los altos mandos. La derrota final no hace sino destacar su fuerza, aun después de haber sido descabezados y reprimidos institucionalmente durante tres años por los grupos sediciosos. Decenas de oficiales, suboficiales y personal de tropa fueron asesinados. El fascismo cobró en sus vidas el precio de su lealtad al gobierno legítimo. Son decenas los que aún permanecen encarcelados. Los procesos infames incoados a los sobrevivientes, a lo largo del país, ponen al descubierto su existencia malbaratada. Sólo dos de esos juicios han trascendido a la opinión pública: el entablado contra oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea, que compromete a más de 60 militares y cuesta la vida del general Alberto Bachelet; y el iniciado, con antelación al golpe, en contra del personal de la marinería, por haber denunciado las acciones conspirativas de almirantes y altos oficiales de la Armada. Anteriormente hemos mencionado el sacrificio heroico

de la suboficialidad de carabineros, masacrada bárbaramente por negarse a adherir al golpe.

En resumen, contábamos con un grupo significativo de oficiales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, en torno a los cuales debió concretarse una tarea orgánica, en el ámbito de una línea estratégica correcta.

Un contingente militar básico, leal al gobierno, con organicidad interna, estructurado en la perspectiva del enfrentamiento, cuya cohesión se asegurara en la ejecución de una política global, pudo —a no dudarlo— haber alterado el destino del *putsch* fascista. Traemos en nuestro apoyo la experiencia histórica. Cuando se inició la insurrección en España, el gobierno frente populista se encontraba en franca desventaja militar. La inmensa mayoría de los jefes y oficiales del ejército secundó la rebelión. Con todo tener a su lado sólo un núcleo limitado de oficiales y tropas, permitió articular una fuerza militar sobre la cual se construyó, durante tres años, la heroica defensa de la República. Esta fuerza —indudablemente— habría alcanzado la victoria de no haberse efectuado la intervención abierta y descarada de las potencias fascistas.

En Chile, también pudo y debió realizarse un esfuerzo serio y sostenido de penetración en la suboficialidad y en la tropa. Su importancia y proyección parece indiscutible si se tiene en cuenta la experiencia histórica. Al iniciarse la guerra civil en España, permanecieron leales a la República, cinco de cada cien oficiales de la Armada. Sin embargo, la marinería, las clases y el cuerpo de auxiliares, fervorosamente republicanos, evitaron la sublevación de la Armada, hecho que impidió a Franco trasladar las tropas de África y le obligó a recurrir a los aviones alemanes. Esta circunstancia retrasó la invasión.

Naturalmente, para conseguir tales resultados no eran suficientes los llamados consignistas a la división horizontal de las fuerzas armadas formulados en los instantes finales.

Por otra parte, tuvimos la oportunidad y los medios institucionales para estructurar en el interior de las Fuerzas Armadas, al menos en el ejército, un servicio de inteligencia leal, con oficiales afectos al régimen en su dirección. Por el contrario, durante toda la gestión de la UP, esos aparatos permanecieron, como había acontecido tradicionalmente, articulados directamente con la CIA y el Pentágono. Testimonios ulteriores han demostrado cómo en Chile desempeñó un papel decisivo el servicio de inteligencia de la Marina norteamericana. El resultado práctico de esta omisión fue la permanente desinformación del gobierno, realizada precisamente por los servicios de inteligencia

encargados de lo contrario. Ello explica que el "más leal" de los generales, Augusto Pinochet, pudiera conspirar tranquilamente —según propia confesión— desde los primeros meses del año 1972.

Finalmente, en la implementación de una política militar era imprescindible consolidar bases de apoyo en algunas unidades militares estratégicas, utilizando los mecanismos legales de traslados, promociones y destituciones. La ausencia de estas unidades, resultó dramáticamente significativa a la luz de la derrota del 11 de septiembre. Una vez más lo repetimos: si el pueblo hubiera contado con el apoyo de unidades militares, al menos en la capital, la historia se hubiera escrito de manera diferente. La combatividad de los trabajadores, la decisión de lucha exhibida ~~en las últimas~~ jornadas, hubieran alterado sustancialmente la correlación de fuerzas. La pandilla fascista lo sabía y por ello sólo se decide actuar, cuando abriga la seguridad de que los trabajadores están desarmados. Además, una mínima expresión de poder en el seno de las Fuerzas Armadas, habría mantenido junto al gobierno a un alto número de oficiales vacilantes, los cuales solamente definieron su destino —y con ello salvaron la vida—, cuando la balanza militar se inclinó sin dejarles otra alternativa que el heroísmo suicida o el sometimiento realista. Es un hecho comprobado que muchas unidades del ejército no se pronunciaron mientras no estuvo definido claramente el problema del poder. El regimiento "Buin", una de las unidades más poderosas de Santiago, en cuya adhesión los golpistas no confiaban, fue trasladado fuera de la capital el día anterior al asalto.

Esta situación se hizo patente con ocasión del frustrado golpe del 29 de junio de 1973. La falta de una respuesta enérgica puso en evidencia la enorme debilidad del gobierno, a la par que terminó por desmoralizar a los sectores constitucionalistas, aún gravitantes. Cientos de oficiales expresaron su disposición de apoyar al Presidente constitucional. Se presentó la oportunidad última e inapreciable —desde luego no exenta de riesgos— de desarticular la estructura fascista. Moral y legalmente, tomar la iniciativa, realizar una acción ofensiva del Poder Ejecutivo, aparecía plenamente justificada. El efecto práctico del repliegue, fue dejar sin dirección a los grupos leales y alentar la faena, desde ese instante desembozada, del golpismo.

Creo importante cerrar estas reflexiones destacando una circunstancia asaz absurda. La Unidad Popular no contó con una "política militar". Tampoco elaboró un plan elemental de defensa del gobierno cuando el desenlace parecía inminente. El único plan existente es el que Pinochet discutió con el presidente Allende. El gran administrador de la masacre era custodio y garante del gobierno legítimo.

Queda en pie otro interrogante: *¿Era posible armar al pueblo?*

Considerada esta opción como medida aislada, era extremadamente difícil. En el contexto de una estrategia global, sí era posible.

Existían disposiciones legales a cuyo amparo podía ensayarse la organización de dispositivos armados. Éstos, de otra parte, no eran ajenos al acontecer nacional. Hace más de un siglo, Diego Portales creó cuerpos de "guardias civiles" para enfrentar al caudillismo militar. En tiempos más recientes, en 1932, la derecha chilena organizó las llamadas "milicias republicanas", las cuales reunieron más de cien mil hombres bajo las armas; lo hizo con el propósito de enfrentarlas a un ejército sobre cuyas posiciones "izquierdistas" desconfiaba. Más o menos en la misma época, el Partido Socialista y el Movimiento Nacional Socialista, versión criolla del nazismo alemán, organizaron también grupos paramilitares. En 1947, la reacción estructuró otro grupo armado: la Acción Chilena Anticomunista (ACHA).

Señalo los antecedentes históricos con la sola intención de contribuir a disipar la opinión bastante común sobre la total impracticabilidad de la empresa.

¿Hubo posibilidad de entregar armas al pueblo para enfrentar una coyuntura de emergencia?: Todavía no están dadas las condiciones históricas para responder con mayor claridad a este interrogante. Pero mientras tanto, podemos afirmar con absoluta seguridad: ¡Sí, las hubo! Ello fue posible hasta las semanas inmediatas al golpe.

A modo de resumen. La vertebración de una estructura militar defensiva del proceso debió asegurar la convergencia de diversos factores: consolidar al sector progresista de las Fuerzas Armadas (militares constitucionalistas y comprometidos con el proceso), cautelar el aislamiento gradual de los grupos conspirativos; asegurar la lealtad de algunas unidades militares estratégicas; constituir dispositivos paramilitares; y adoptar las medidas para armar al pueblo en la emergencia y prepararlo anímicamente para ello.

De estos elementos, sólo el último operó en la experiencia chilena. Los mil días luminosos de la Unidad Popular vieron el despertar de una clase que toma conciencia de su fuerza y de su papel histórico.

Frente al adversario de clase mostró la amplia gama de su capacidad creadora y desplegó al más alto nivel su espíritu revolucionario. Cuando la ofensiva imperialista arreciaba, las masas generaron órganos de poder y dirección. Frente a la burguesía insurrecta en el paro patronal de octubre de 1972, los trabajadores de Chile muestran un grado de madurez y de conciencia que sorprende a sus propias direcciones. Hicieron andar el país cuando la burguesía intentó paralizarlo. Hasta la caída del gobierno siguieron multiplicando su esfuerzo crea-

dor en cada plano de la actividad nacional. Una profunda revolución en las conciencias, nació al calor del proceso y fue ella su máxima creación. Es la garantía de la derrota inevitable del fascismo.

Si este espíritu del pueblo, si aquella esperanza en un Chile nuevo, hubiera logrado horadar las murallas de los cuarteles, como en Portugal, llevando aire fresco a la estereotipada ideología de nuestros militares, la suerte del proceso hubiera sido diferente.

11. LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS EN LA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO

No intentamos hacer un enjuiciamiento minucioso acerca del diseño y la implementación de la política económica durante el gobierno de la UP. Recusamos del mismo modo, la pretensión de situar el análisis en la perspectiva convencional —válida para otros fines— de evaluar su eficiencia y coherencia desde el punto de vista de la ciencia económica oficial.

A nuestro juicio, cualquier esfuerzo analítico de la coyuntura 1970-1973 debe partir considerando dos hechos esenciales: la puesta en ejecución de un proceso de transformaciones revolucionarias, por una parte; y por otra, la existencia de una estructura económica devenida en franco obstáculo al desarrollo del país.

Los partidos populares asumieron la conducción de la nación en 1970, para promover un proceso de cambios estructurales, con vista a iniciar la construcción del socialismo, partiendo del traspaso del poder económico de los grupos dominantes a los trabajadores. La gestión económica quedaba entonces supeditada a este objetivo político superior. No era éste un gobierno tradicional, cuyo fin último fuera superar las tasas históricas de desarrollo económico. Dicho en otras palabras, se trataba de una experiencia que no debía ser medida —en una primera etapa— por sus resultados económicos, sino por sus logros políticos. Nunca se pretendió que el éxito en lo primero, despejara el camino a lo segundo. Por el contrario, se sobrentendía que era la consecución del objetivo político: el control del poder, lo que permitiría resolver los problemas económicos.

Nos interesa, por ello, avanzar algunas consideraciones sobre las relaciones existentes entre la lucha por el poder político; las transformaciones de las estructuras socioeconómicas y la política económica. En nuestra opinión, la comprensión insuficiente de los problemas que genera un período de transición, y el desconocimiento de los desequilibrios que se expresan en los planos económico y político, interfirieron en el desarrollo del proceso y contribuyeron a su frustración posterior. Es esencial, por tanto, empezar por establecer la interacción entre aquellos planos, en función de las transformaciones estructurales, que el movimiento popular se impuso como objetivos de su política económica.

El Gobierno Popular, establecido luego de la victoria de Salvador

Allende, fue el resultado —no previsible, pero tampoco fortuito— de un largo proceso histórico, durante el cual maduró la conciencia política de vastos sectores de la ciudadanía, como correlato del desarrollo de profundas contradicciones en el seno de la sociedad chilena.

En el nivel estructural básico, dichas contradicciones se expresaban como una contraposición creciente entre la necesidad objetiva de acelerar el proceso de desarrollo económico y social —orientado hacia la satisfacción de las necesidades fundamentales de las grandes mayorías nacionales— y la presencia cada vez más deformante del capital imperialista. Éste, aunque asentado en el enclave exportador tradicional, dominaba los sectores más dinámicos del universo industrial, determinaba el patrón de crecimiento de la economía y sus mecanismos de funcionamiento, e imponía, de paso, la lógica implacable del “desarrollo del subdesarrollo”.

En el nivel más alto de la superestructura política —el de los valores y representaciones ideológicas— esa contradicción se percibía en la inviabilidad de una alternativa de liberación, dirigida por la burguesía nacional. Lo impedía su incorporación orgánica al complejo de estructuras y relaciones de la dependencia, en calidad de clase dominante-dominada. El *test* histórico crucial de tal alternativa —entendida como un ensayo de modernización del capitalismo dependiente y de armonización de exigencias irreconciliables— se materializó en el fracaso de la experiencia del gobierno demócratacristiano. Ese gobierno intentó, en un primer momento, impulsar una política de cambios capaces de remover los obstáculos opuestos a una expansión capitalista; satisfacer, simultáneamente, difundidas aspiraciones populares; y crear, en general, las premisas para un desarrollo autosostenido, rápido y estable, basado en estructuras sociales y económicas más diversificadas.

La dinámica generada en el curso de esta experiencia, exacerbada por el compromiso evidente de la cúpula gobernante con los intereses estratégicos de la burguesía y el imperialismo, y por la reiterada utilización de instrumentos represivos, condujo finalmente al debilitamiento de la base social y política de la llamada “Revolución en Libertad”. Su fracaso generó una convicción: los obstáculos al desarrollo nacional autónomo y la satisfacción de las aspiraciones populares, no son imputables al imperialismo, como realidad exógena al sistema ni a la supuesta persistencia de relaciones de contenido precapitalista, sino al modo específico de existencia y reproducción de las relaciones de producción, y de sus estructuras históricamente cristalizadas en la formación social, conocida como capitalista dependiente.

De este modo, la lucha por la independencia nacional, por la liquidación del atraso tecnológico; la eliminación de las barreras a un desarrollo autosostenido y a la justicia social, asumiría la forma de

una movilización —no siempre coherente pero cada vez más decidida— orientada a la sustitución del complejo de relaciones de producción vigentes.

El desafío planteado en 1970 exigía combinar, de una parte, un proceso de acumulación de capital, indispensable para lograr un crecimiento económico rápido; y de otra, el incremento de los niveles de consumo de las masas, los cuales redundarían en más apoyo político. Ello generaba un círculo vicioso difícil de romper. La necesidad de un mayor respaldo social, obligaba a mejorar el estándar de vida de la población, mediante una redistribución masiva del ingreso en favor de los sectores más postergados. Ésta, a su vez, entraba en contradicción con una política de acumulación, capaz de procurar más elevados porcentajes de inversión.

De esta manera, la salida política estaba condicionada por la situación económica y ella, por su parte, para ser resuelta, exigía disponer de una creciente autoridad política. Así, el diseño económico se orientó, en el corto plazo, a provocar una reacción económica, cuyo efecto sería ampliar la base de sustentación social del proceso para emprender —a contar de ella— una transformación radical de la superestructura institucional.

Parece oportuno adelantar, que dentro de esta perspectiva el Gobierno Popular tuvo pleno éxito. En el primer año, conjuntamente con implementar las tareas nacionalizadoras establecidas en el programa, se logró un aumento espectacular del producto nacional bruto (8.3%) y un crecimiento industrial de más de un 12%, en un contexto de pleno empleo y control de la inflación. Como estaba previsto, aquel éxito se reflejó de inmediato en las elecciones municipales de abril de 1971, en las cuales las fuerzas populares obtienen más del 50% de los sufragios. No obstante, como insistiremos más adelante, la estrategia económica elaborada se interrumpió al renunciarse a adoptar las medidas políticas exigidas por ese triunfo.

En el marco de los hechos enunciados convergieron una serie de factores adversos que interfirieron gravemente en la política económica. Están en primer término, aquellos atingentes a una estructura económica heredada. También influyeron en forma significativa situaciones coyunturales de orden internacional. Otros son provocados artificialmente por el imperialismo y la burguesía nacional. Figuran asimismo elementos distorsionadores, consustanciales a un proceso radical de cambios. Y finalmente —no por ello menos trascendentes— los errores imputables a la dirección económica del Gobierno Popular.

Nos parece útil ponderar cada uno de estos factores.

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA HEREDADA:
OBSTÁCULO AL DESARROLLO

Hacia 1970, la economía chilena se caracterizaba por un alto grado de concentración monopólica industrial y financiera; un régimen latifundario en la organización del agro; un comercio exterior monodependiente —75% proviene del cobre— y una extraordinaria sensibilidad a las fluctuaciones del metal rojo. Ya hemos señalado en otro capítulo los grados de extrema subordinación financiera y comercial a EU.

La persistencia de esta formación capitalista dependiente condujo al país a un estancamiento crónico, acompañado de una de las tasas inflacionarias más altas del mundo. La fluidez de los créditos externos actuaba como simple paliativo de la crisis económica. La deuda externa superaba los 4 mil millones de dólares, la mayor del mundo medida per cápita, después de Israel. El país acusaba además una tasa de crecimiento bajísima: uno y medio por ciento per cápita durante los años 1968-1970.

En síntesis, la estructura económica heredada por el Gobierno Popular estaba determinada por los siguientes rasgos fundamentales: la insuficiente integración del sistema económico, y la gran heterogeneidad de los sectores primario extractivo, industrial y agrario; el crecimiento absolutamente desigual de éstos; la subutilización de la capacidad instalada; la extraordinaria concentración de la riqueza y del ingreso; el insuficiente nivel de acumulación; las altas tasas de desocupación estructural; la distorsión de las relaciones comerciales y tecnológicas y la concentración geográfica del desarrollo. Estos factores incidían de manera determinante en el desarrollo económico del país, y era ingenuo intentar la solución de los problemas económicos sin provocar previamente una alteración radical de aquéllos.

De otra parte, si queremos fisonomizar claramente las debilidades del sistema capitalista dependiente chileno, debemos precisar algunas características funcionales. Nos referiremos sólo a dos de ellas, las de mayor incidencia: el papel del Estado en la vida económica y la inflación y el endeudamiento, como condicionantes del desarrollo económico nacional.

En Chile, el impulso decisivo para la instalación y expansión del poder de la burguesía industrial fue suministrado por el Estado mediante su política proteccionista. Dicha política realizada a través de

la aplicación de altos aranceles a las importaciones de bienes competitivos con la producción interna, y la fijación de tasas de cambio preferenciales para la importación de equipos y materias primas esenciales, configuró el crecimiento extensivo de una estructura industrial ineficiente, cuyas tasas de ganancias fueron tradicionalmente defendidas, no por la vía de los incrementos de productividad y la disminución de los costos, sino por la de ajustes sistemáticos de precios, facilitados por la concentración monopoligópica y la inflación.

Una medida de la intervención decisiva del Estado, a fines de la década del 60, es la de su participación en el empleo global —alrededor de un 10%— en el valor agregado total —19.4%—, en el excedente generado medido por el valor agregado menos los costos directos de producción —43%—, y en el financiamiento de la inversión total en capital fijo —aproximadamente las tres cuartas partes en 1970.

A través de su acción económica directa —vinculada al gasto público y más específicamente a la actividad inversionista—, el Estado insuflaba dinamismo al sistema económico para compensar la insuficiencia del gasto privado, evitar las oscilaciones violentas del nivel de actividad, subvenir a necesidades básicas de la población y apoyar el desarrollo general, a través de la ampliación y modernización de la infraestructura (riego, energía, transporte, vialidad, etcétera).

La participación del Estado en el proceso de acumulación llegó a ser claramente dominante. Mientras el coeficiente promedio de inversión con respecto al PGB, alcanzaba un 16.1% en el decenio 1961-1970, la inversión pública directa aumentó en el mismo período de un 39 a un 49% de la inversión global (esto es, de un 6.6% a un 8% del PGB). Sin embargo, desde el punto de vista de su financiamiento, la función estatal era aún más decisiva. En el último año cubrió el 74% de la inversión geográfica bruta, habiendo sido inicialmente de un 46%. Dicho en otras palabras: durante el último decenio no sólo se produjo una sustitución importante de inversión privada por inversión pública directa (con un coeficiente de inversión global ligeramente decreciente), sino además una sustitución de fondos privados por fondos públicos en el financiamiento de la inversión privada.

Estos hechos, la mantención de una tasa de inversión geográfica insuficiente —ostensiblemente disminuida si se excluyen las cuantiosas inversiones extranjeras en el cobre entre 1965 y 1970—, el considerable aumento de la inversión pública indirecta y el vertiginoso incremento del endeudamiento externo,¹ constituyen por sí solos un juicio lapidario sobre las potencialidades reproductivas evidenciadas por el patrón

¹ El aporte externo que en 1965 financiaba el 30% de la inversión geográfica total, llegaría a cubrir en 1970 un 46%.

del desarrollo impuesto por el capitalismo dependiente, después de más de treinta años de esfuerzo industrializador.

A partir de los años cincuenta el desarrollo económico chileno fue acompañado por un proceso inflacionario persistente, que pasaría a constituir una referencia obligada de las políticas económicas aplicadas por los sucesivos gobiernos. El análisis de las causas de este fenómeno ha sido objeto de una encendida y fértil polémica, tanto en medios académicos como políticos. Hasta el día de hoy, se mantienen las diferencias respecto de los mecanismos que lo causan y propagan y sobre las medidas a adoptar para su control. Esto no es casual. La identificación de tales mecanismos y políticas supone la adopción de posiciones, no sólo en el plano técnico, sino también ideológico. De este modo, es natural e inevitable que el problema de la inflación trascienda los marcos de la discusión meramente académica para constituirse en factor fundamental de la lucha política.

En medida no desestimable, el proceso inflacionario aparece como una expresión de la pugna entre el "capital" y el "trabajo" por la distribución del ingreso. Por la vía de los incrementos autónomos de la tasa de ganancias (aumento de precios) y de las remuneraciones, aquellos factores disputan su participación en el ingreso total. Esta pugna tiende a hacerse constante, generando sucesivas e ininterrumpidas alteraciones, que originan a su vez, nuevas reivindicaciones. Cada alteración deja planteada una nueva demanda del sector perjudicado, el cual se moviliza en el acto con el propósito de recuperar la participación que ha perdido.

De aquí, que un rasgo común de los "programas estabilizadores", puestos en práctica, sea la contención de sueldos y salarios, mecanismo por medio del cual el sector que detenta el poder, impone a los asalariados la aceptación de una participación disminuida en la distribución del ingreso. Estas políticas, invariablemente, tienden a implementarse con el concurso de medidas represivas.

Sin embargo, la contención de la demanda no conduce automáticamente a condiciones de estabilidad. Y la experiencia chilena, bajo el régimen fascista lo está demostrando una vez más. La limitación de la capacidad de consumo, desincentiva la producción, y trae consigo una disminución de la actividad económica. Se produce así un descenso de las utilidades de los empresarios, que nuevamente los empuja a defender sus tasas de ganancias, mediante el aumento de los precios. El espiral vuelve a reactivarse, planteándose ahora la pugna en torno a un ingreso global disminuido. Queda así al descubierto la debilidad de la interpretación "monetarista", que ve la inflación como un pro-

blema de exceso de demanda, en el que la contención de ésta se exhibe como el remedio infalible del mal.

En Chile, la aplicación pertinaz de políticas centradas en la reducción del exceso de demanda ha incidido en la disminución de la tasa de crecimiento con severa depresión de la actividad urbano-industrial y el aumento significativo del desempleo, con el agravante de no haberse alcanzado los objetivos deseados, en razón de la influencia negativa del carácter monoooligopólico de la competencia. En definitiva, los programas de estabilización —políticas monetarias restrictivas, congelación de sueldos y salarios, contención de sus aumentos nominales, reducción drástica del gasto público, devaluación y control de las importaciones, y el otorgamiento de precios remunerativos a la agricultura— no han eliminado las presiones inflacionarias básicas. A lo más han logrado entorpecer momentáneamente los mecanismos de autoimpulsión inflacionaria, el alto costo social de la desaceleración del crecimiento, el aumento del desempleo y la polarización regresiva del ingreso.

La experiencia descrita lleva a concluir que las políticas de contención de la demanda han sido, en última instancia, irrelevantes para la solución del problema inflacionario en el contexto de una economía con alto grado de desequilibrio, en tanto esto no sea superado por la vía de las transformaciones estructurales.

Nos hemos extendido latamente en la descripción de la estructura heredada. No lo hemos hecho ciertamente por afanes pedagógicos, sino para trasfilar una imagen nítida de la magnitud de la tarea que debió enfrentar el gobierno de la Unidad Popular. La transformación de esta estructura no era un problema secundario en la gran empresa de construir el socialismo. Requería de un esfuerzo prolongado, el cual sólo podía enfrentarse desde posiciones de poder. Mientras no se resolvieran estos problemas estructurales de la economía chilena, era inútil intentar el mejoramiento de la situación económica. y pretender elevar los niveles de vida de las grandes masas, objetivo que, como lo hemos expresado más de alguna vez, se revertía sobre la urgente necesidad de ganar apoyo social para fortalecer el poder político del gobierno.

Y no era sólo este enorme desafío —la pretensión de provocar un cambio revolucionario de las estructuras, dentro de un régimen de absoluta libertad, y a mayor abundamiento, desprovisto de poder real— el que el Gobierno Popular debía enfrentar. Situaciones coyunturales internacionales sobreninientes, interfirieron gravemente en el desarrollo de los acontecimientos.

LA COYUNTURA INTERNACIONAL: DIFICULTADES IMPREVISTAS

Las fluctuaciones del comercio exterior impactaron gravemente la economía del país entre los años 1970 y 1973. La recesión del mundo capitalista trajo como consecuencia inmediata la caída del precio del cobre y el alza considerable de los productos agropecuarios. Si a ello agregamos el efecto de la inflación internacional, tenemos un cuadro devastador, sólo comparable al daño ocasionado por el cerco financiero deliberadamente articulado por el imperialismo.

El precio del cobre, singularmente generoso durante la administración de Frei, alcanzó sus índices más bajos en 1972, con un promedio anual de 48.5 centavos de dólar por libra. Ello se produce en el mismo instante en que las importaciones chilenas se elevan sustancialmente por efecto del alza de los precios internacionales de los productos agropecuarios.² La pérdida real para el bienio 1971-1972, por el solo concepto de aquel deterioro, alcanza la suma de 413 millones de dólares.

LA AGRESIÓN BURGUESA-IMPERIALISTA

Pero había aún más, no sólo se trataba de transformar radicalmente la estructura económica y social de Chile y de resolver los problemas de una coyuntura internacional absolutamente desfavorable. Era necesario también enfrentar la resuelta y abierta agresión del imperialismo norteamericano y de la burguesía nacional.

Ya nos hemos referido a las aristas variadas de la agresión económica externa al describir la intervención desembozada e intimidatoria de EU tanto en el curso como en el desenlace del proceso.

No parece necesario reiterar las alternativas complejas de aquella ofensiva. Pero sí es útil recordar algunas consideraciones que ponen de manifiesto la influencia decisiva de aquella agresión en la crisis económica.

Sobre este objetivo convergieron el bloqueo financiero, inicialmente invisible, más tarde público; las medidas comerciales restrictivas y los

² Entre 1970 y 1972, el precio al por mayor en los mercados internacionales se elevó: carne en un 40%, azúcar en un 97%, trigo en un 33%, cuero en un 127%, etcétera.

embargos impuestos sobre el comercio del cobre. El imperialismo norteamericano, haciendo tenaza con la burguesía nacional, concentra su esfuerzo en provocar la crisis global. Como gráficamente lo instruyera el presidente Nixon, se trataba de "hacer aullar la economía".

Pocos países de América Latina muestran una estructura económica tan sensible a los factores externos, y más específicamente a las fluctuaciones del comercio con EU. El 75% de nuestro comercio exterior provenía del metal rojo. El 65% de los bienes de capital dependían de importaciones norteamericanas. En 1970, el 78.4% de los créditos comerciales de corto plazo tenían su origen en bancos de EU. Nuestra infraestructura minera e industrial era de tal modo dependiente de los abastecedores estadounidenses, que en 1971 la retención de una simple partida de repuestos, cuyo valor de importación no excedía de los cien mil dólares, redujo por un tiempo considerable la producción de cobre.

Los estrategias del bloqueo pesaron escrupulosamente la vulnerabilidad de nuestra economía. Los analistas de la CIA y del gobierno norteamericano propusieron medidas y señalaron sus consecuencias. Fría y metódicamente las implementaron para alcanzar en el menos tiempo posible el objetivo señalado por Nixon. La agresión económica cuidadosamente planificada y ejecutada, produce efectos catastróficos y pasa a ser decisiva en el deterioro económico del país entre 1970 y 1973. Ella fue denunciada enérgica y dignamente por el presidente Allende ante el mundo, en el discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1972.

La burguesía nacional entendió que estaba cuestionada su supervivencia como clase dominante, y en consecuencia coincide plenamente con el gobierno de EU en la necesidad de hacer fracasar —a cualquier precio— la experiencia liberadora. La crisis económica era la crisis del régimen institucional sobre el cual descansaba la acción del Gobierno Popular y el factor precipitante del alzamiento militar tan afanosamente deseado.

No pocas veces nos hemos referido con anterioridad a la amplitud, complejidad y perfección del modelo elaborado por la Agencia Central de Inteligencia de EU. La ofensiva utiliza todas las variables de acción y se da en todos los frentes. En el Parlamento y en la asonada callejera; emplea la prensa y la televisión, al mismo tiempo que la huelga ilegal y el mercado negro; se ubicó en el plano institucional, al igual que en el terrorismo y en el sabotaje.

La oposición parlamentaria impide el financiamiento del presupuesto fiscal, generando así un nuevo factor de presión inflacionaria. De hecho, durante los tres años del Gobierno Popular, la mayoría derechista aprobó un financiamiento promedio equivalente a sólo un

20% de los recursos necesarios para solventar las leyes de reajuste de salarios, elevando de esta manera el déficit fiscal de un 33% en 1971 a un 42% en 1972 y al 50% en 1973. La magnitud de este déficit se transformaba así en la principal causa de la expansión monetaria y en el más gravitante factor inflacionista.

El paro empresarial de octubre de 1972, organizado por la burguesía, costó al país más de 200 millones de dólares y paralizó el transporte de un millón de toneladas diarias de alimentos, combustibles, materias primas y otros productos. Más tarde, la huelga de los supervisores y técnicos de las empresas cupríferas (mayo-junio de 1973), significó una pérdida neta de sesenta millones de dólares por concepto de disminución de exportaciones de cobre.

El grado de decisión en el propósito de provocar la caída del gobierno, arrastró a nuestra clase dominante a medidas de extrema criminalidad: trescientos mil vacunos fueron contrabandeados a Argentina; se promovió la matanza indiscriminada de vaquillas destinadas a la reproducción; miles de hectáreas quedaron sin sembrar; no se regaron ni abonaron sementeras ni se desinfectaron oportunamente los frutales. Un dato revelador: diez millones de litros de leche fueron arrojados a los ríos y caminos durante la huelga de octubre. Tal era la magnitud del odio. ¡El diluvio antes que Allende!

De otra parte, la burguesía desplazada de los latifundios, de los bancos y la industria monopólica, reorientó su poder económico a la especulación. Una nueva plutocracia especulativa emerge para reorganizar el mercado negro, provocar la escasez artificial, acaparar e incentivar la psicosis de consumo. Millones de dólares fueron distribuidos para sembrar la desconfianza y estimular la inflación.

Mientras tanto, el aparato publicitario de la reacción transformaba las acciones conspirativas en réditos políticos. El desabastecimiento, el mercado negro y la especulación se exhibieron como la consecuencia directa de los desaciertos gubernativos.

LOS ERRORES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

Como hemos podido apreciar, la tarea que debía enfrentar el proceso revolucionario era simplemente gigantesca. El reto era casi insoluble en las condiciones específicas en que aquél se desarrollaba. Transformar revolucionariamente las estructuras sociales y económicas, resolver los problemas coyunturales derivados de las bruscas fluctuaciones del comercio internacional, y al mismo tiempo, enfrentar la colosal ofensiva

económica, financiera y política, del imperialismo y la burguesía. Es en este contexto en el que deben ser ponderados los errores, las insuficiencias y los vacíos de dirección, que le son imputables a la UP.

La transformación de las estructuras socioeconómicas fundamentales debía enfrentarse conjuntamente con la aceleración del proceso de crecimiento y su ulterior sustentación sobre una nueva organización. Ésta, cristalizada en un área de propiedad social dominante, se inscribe en una concepción estratégica, que superando los estrechos límites del tecnocratismo conservador y del reformismo burgués, debía redefinir las vías y objetivos del desarrollo nacional.

El proceso iniciado con el triunfo de Allende, presentaba un carácter esencialmente diferente al de otras experiencias revolucionarias. Invariablemente éstas empezaron por resolver el problema del poder. Así fue en la URSS, en China o en Cuba. La especificidad del proceso chileno se encontraba precisamente en que el intento de sustitución de las instituciones y estructuras capitalistas, debía implementarse antes de haberse conquistado el poder.

Tal singularidad estaba preñada de implicancias teóricas y prácticas. Por de pronto, alteraba drásticamente la secuencia clásica de las interacciones entre la esfera de lo económico y lo político, tornando irrelevante —tanto para el diseño como para la implementación de la política económica— los esquemas históricos, centrados en la aceleración del crecimiento sobre la base de la acumulación socialista originaria. Este mecanismo de crecimiento requiere la supeditación estricta de la política económica de corto plazo a la política económica estratégica definida por las fuerzas hegemónicas de la revolución triunfante. Las tensiones de todo orden que la realización de un programa de acumulación intensiva desatan en un país pequeño y atrasado, exigen para su superación, no sólo un flujo apreciable de apoyo económico y técnico externo, sino también la existencia de un elevado grado de hegemonía política interna, acompañada de la fuerza coercitiva necesaria para enfrentar a los enemigos de la Revolución.

En el caso chileno, resultaba clara la inviabilidad de tal alternativa. Ello se explica no sólo por la inexistencia de los prerequisites referidos —poder, vanguardia hegemónica y fuerza coercitiva— sino porque el ejercicio del gobierno y la instrumentalización de la política debían efectuarse en un contexto institucional *sui generis*, caracterizado por una aguda lucha de clases y por el desarrollo simultáneo y creciente del conflicto social, dentro y fuera del aparato del Estado.

Acentuaban aún más la particularidad referida, dos circunstancias significativas: en primer lugar, si bien el bloque burgués había experimentado una derrota política de envergadura, conservaba intacto su poder económico y una considerable capacidad de liderazgo sobre un

sector significativo de la población, ligado orgánica e ideológicamente al sistema. En segundo lugar, la posibilidad de transformación revolucionaria de la sociedad, abierta por la victoria electoral, tenía lugar en un país, que a lo largo de su historia había alcanzado un estructura social compleja, caracterizada por una fuerte gravitación política y social de los sectores pequeñoburgueses. Estas capas, sometidas a la presión centrífuga desatada por la implementación del Programa de Gobierno, terminarían asumiendo un papel activo en la definición del conflicto básico entre burguesía y proletariado.

En síntesis, la opción fundamental de la política económica de corto plazo estaba, en términos generales, unívocamente determinada. Existía un propósito central: suministrar los estímulos necesarios para reactivar la producción y elevar el empleo, produciendo una reasignación preferencial del consumo en favor de los sectores de menores ingresos. Esta redistribución, operada a través de una subpolítica de precios y salarios, debía apoyarse en otra de gasto público, centrada simultáneamente en la provisión de servicios sociales y en la realización de inversiones indispensables para sostener el dinamismo del crecimiento, una vez agotada la fase de reactivación.

Ello planteaba, de partida, algunos problemas derivados de la necesidad de compatibilizar los objetivos principales de la política económica, con la situación concreta en cuyo marco debía desarrollarse. Éstos eran, en general, los problemas técnicos clásicos de consistencia y factibilidad, presentes en la ejecución de toda política reactivadora de corte keynesiano en una economía subdesarrollada, con severas limitaciones estructurales y con enormes rigideces en el sector externo. Esta situación estaba dramáticamente agudizada por el peso de una enorme deuda externa, cuyo servicio obligaba a prescindir de una proporción importante de los recursos en divisas —aproximadamente el 40%.

Vistas desde este ángulo, las exigencias metodológicas de coherencia y viabilidad de la política económica no se diferenciaban en abstracto de las planteadas por los esquemas aplicados en el pasado, a no ser por la extraordinaria gravedad de las restricciones heredadas. Esto, sin embargo, no pasaba de ser una apariencia engañosa, toda vez que la coherencia y la viabilidad técnica —requisitos insoslayables de cualquier política económica— debían ser evaluadas y realizadas no en condiciones institucionales y políticas normales, sino en el decurso de un proceso de transformaciones masivas, encaminado explícitamente a destruir el asiento material del poder de la gran burguesía y de las multinacionales extranjeras. El movimiento popular, a diferencia de los movimientos reformistas latinoamericanos, no conquistaba el gobierno para administrar la economía y realizar cambios limitados, man-

teniendo como criterio central la protección de los intereses estratégicos del sistema de dominación burgués imperialista. Por el contrario, el objetivo histórico —responsablemente asumido— era realizar una política destinada a sustituir este sistema.

Pero las diferencias no se agotaban allí. La compatibilización entre objetivo y medios conllevaba una opción metodológica ajena a toda rutina convencional, cual era la de prever con algún grado de realismo el comportamiento de los diversos agentes sociales y económicos en un proceso de cambios revolucionarios.

Éstos eran sólo algunos de los problemas a considerar en el diseño de la política a corto plazo. Tal diseño planteaba una interrogante no sólo nueva sino fundamental, a saber: ¿Cuál era la ligazón entre la política de corto plazo y la política de transformaciones estructurales?

En el patrón de crecimiento inherente al desarrollo capitalista dependiente la prioridad absoluta corresponde a la política económica coyuntural. Las previsiones y decisiones estratégicas tienen un carácter accesorio, correctivo, supeditado esencialmente a la dinámica autónoma de la concentración monopólica dependiente. Por otra parte, en el patrón de crecimiento empleado en la construcción del socialismo en su versión clásica, la prioridad absoluta corresponde a la política económica estratégica, dentro de la cual la política coyuntural es a su vez consecuencia e instrumento. Sin embargo, se mantiene la interrogante: ¿Cuál es la relación entre ambos aspectos de la política económica general, en una situación de transición simultánea en lo económico-estructural y en lo político?

Ésta es una cuestión imposible de eludir. Pero su formulación abstracta no tiene sentido lógico si no se la expresa con referencia a la situación concreta de transición. Sólo la precisión de su contenido, de sus momentos y mecanismos esenciales, de su estrategia política general, pueden conferir pertinencia a la interrogante planteada.

A nuestro juicio, la respuesta debe expresarse en los siguientes términos: la política económica de corto plazo debía guardar coherencia con la política de transformaciones estructurales. Ambas estaban obligadas a constituir momentos específicos —pero insolubles— de un mecanismo central de implementación de la estrategia de poder. Dicho de otro modo, la política coyuntural debía coadyuvar a la realización exitosa de la política de transformaciones, esto es, a la consolidación dinámica de un área de propiedad social dominante, la cual tenía —a su vez— la más alta prioridad, en función de su inserción en la línea estratégica general. Esto planteaba una serie de cuestiones difíciles de sistematizar en el contexto de este ensayo. En primer lugar,

aceptada la existencia de una cierta determinación principal que va de la política de transformaciones a la política económica de corto plazo, nos preguntamos: ¿es ésta una determinación absoluta? ¿Hay algún grado de determinación inversa?

Para responder a ello es necesario considerar el carácter general, no sólo económico sino político, de la fase del proceso inmediatamente posterior a la toma de posesión del gobierno. Tal consideración nos lleva a concluir que la política económica de corto plazo ejercía inevitablemente una determinación mediatizada sobre la política de transformaciones. Aquélla debía reactivar el sistema económico y mejorar las condiciones de vida de amplios sectores, no sólo por razones de justicia social, sino por la urgencia de consolidar un gobierno revolucionario surgido bajo los signos inequívocos de la conspiración reaccionario-imperialista y legitimado por una precaria mayoría relativa en las elecciones de 1970.

Del dinamismo de la reactivación y de los beneficios reales experimentados por los sectores a los cuales estaba dirigida, dependía en parte esa legitimación y su consagración ulterior en el acto electoral de abril de 1971.

La mencionada determinación mediatizada entre política económica de corto plazo y política de transformaciones obligaba a tener presente los siguientes aspectos:

a] Dada la definición de clase y la hegemonía marxista-leninista de la coalición gobernante, así como el conocimiento difundido de sus objetivos estratégicos, la política económica inmediata no podía ignorar —no obstante la aparente normalidad del marco político inicial— la potencialidad del conflicto. Ello exigía una minuciosa ponderación y selectividad, tanto en la distribución del ingreso como en la intensidad de la reactivación, para conciliar así los objetivos políticos con los objetivos económicos.

b] el carácter limitado del plan de corto plazo y su influencia en la implementación de la política de transformaciones, imponía no sólo determinar su intensidad, sino también su secuencia. Toda política de reactivación tiene un término, a partir del cual surge la necesidad ineludible de un cambio cualitativo y de una reformulación de medios y objetivos. Además, dicho cambio debía establecerse en el marco de un estrecho sincronismo entre la política coyuntural y la de transformaciones, a fin de reducir las distorsiones y desequilibrios derivados del inevitable boicot de la burguesía y del imperialismo.

c] La necesidad de compatibilizar en una fase inicial el ahorro y la redistribución. Éste es un aspecto esencialmente político. Si se desea acelerar la redistribución y aumentar la tasa de ahorro, deberá afectarse forzosamente el consumo de los sectores de altos ingresos. Este

problema no asume mayor dificultad en aquellas experiencias que se elaboran a partir de la conquista del poder. En un proceso de transformación por una vía institucional, el conflicto entre ahorro y consumo, entre nivelación y concentración de ingresos, se hace extremadamente complejo. En cualquier caso, el margen redistributivo en el corto plazo es limitado.

Sin desconocer la existencia de estos problemas, parecen quedar en pie los siguientes hechos:

La política económica coyuntural cumplió sus objetivos desde la perspectiva en que fue concebida. Sin embargo, en el desarrollo ulterior de los acontecimientos, tuvo como efecto el agotamiento prematuro de los márgenes de libertad, reales y financieros, del sistema económico. En esta forma se generaron notorias rigideces en el diseño de la política económica en las siguientes etapas.

En parte, ello se debía a que el esquema de reactivación suponía que la oferta debía ajustarse elásticamente al incremento sustancial de la demanda, provocada por la redistribución. Los sucesos posteriores demostraron la fragilidad de este supuesto. En la realidad, estimuló aún más las actitudes economicistas y reivindicativas, ya profundamente enraizadas en los sectores asalariados. En particular, no ponderó el hecho de que una vez mejorados los niveles de consumo de esos sectores quedaba planteado, irremisiblemente, el problema de su mantención posterior. Éste sólo podía, en definitiva, sustentarse en el crecimiento futuro de la producción, y aun bajo este supuesto, en una restricción del consumo de las clases no asalariadas. Sólo por esta vía era posible liberar capacidad para importar, financiar las inversiones destinadas a corregir desequilibrios sectoriales y hacer frente a las desarticulaciones asociadas a toda política de transformación. Sin embargo, limitar los patrones de consumo de la burguesía y de las franjas más privilegiadas de la clase media, no era en modo alguno sencillo. Por décadas, la inflación y la inversión extranjera habían venido financiando los elevados niveles de consumo de aquellos sectores. Importantes segmentos de las capas medias disponían de un alto poder negociador, a la par que de una significativa influencia política, que les permitía proteger su participación en la distribución del ingreso.

Pero esto no es todo. Nos parece además necesario subrayar el hecho de que el ensayo de reactivación implementado no estuvo acompañado de una apreciación objetiva de la situación general de la economía en el plano externo.

En definitiva, los aumentos de ingresos de las clases asalariadas, no debían traducirse en una simple imitación de los viejos patrones de consumo de las clases medias. Era indispensable remodelar la estructura del consumo global, en el sentido de modificar la participación

en los mismos, del consumo individual y colectivo, de los diversos sectores y capas sociales.

Está claro que la política de redistribución globalmente fue correcta, pero fue específicamente errónea en la forma e intensidad con que fue aplicada. Era indispensable redistribuir, pero a la vez, era urgente adoptar las medidas necesarias para evitar una expansión indiscriminada del consumo. Lo que demuestra la experiencia chilena, es que una expansión incontrolada provoca serias limitaciones y violentos desajustes.

Una política correcta debía considerar esta circunstancia, las dificultades inherentes a la restricción del gasto de los grupos de mayores ingresos, y las perturbaciones en el funcionamiento de la economía a corto plazo, provocada por el agotamiento de la capacidad productiva ociosa.

En otro plano, un programa de redistribución del ingreso debía proyectarse "selectivamente" sobre grupos específicos de la población (los más pobres), y no sólo sobre los sectores organizados, con trabajo estable e integrados al mercado. En general, las políticas de distribución convencionales se han basado en una ponderación global de los trabajadores, ignorando sus diferenciaciones internas. Una redistribución adecuada a la problemática de la transición, debía forzosamente materializarse, precisando los grupos sociales prioritarios y los bienes y servicios cuya producción debía expandirse.

De lo anterior, se infiere, que en una fase inicial, el proceso redistributivo debía realizarse al margen del mercado, recurriéndose a mecanismos que evitaran que la mayor demanda se revirtiera sobre el mercado tradicional. En esta perspectiva, el esfuerzo por mejorar las condiciones de vida, debía intentarse a través de una expansión importante de los servicios; de un sistema de distribución directa, y finalmente, el ineludible problema del racionamiento de ciertos productos.

En otro orden de ideas, no compartimos las conclusiones orientadas a demostrar que la experiencia económica de la UR confirma la posibilidad de "nacionalizar determinadas actividades decisivas, aislando al gran capital monopólico nacional y supranacional, sin que ello paralice ni perturbe al resto de la economía", dejando manifiesto que "las transformaciones estructurales no implican necesariamente un deterioro de la producción, sino que, a la inversa, pueden determinar su inmediato auge".

Esta afirmación reclama algunas precisiones. Desde luego, ella estuvo fuera del contexto real de los acontecimientos. Efectivamente, la experiencia chilena da pie para negar la afirmación según la cual,

en la fase inmediatamente posterior a la instauración de un gobierno revolucionario, los índices globales y sectoriales deban forzosamente sufrir un deterioro. Pero de allí a invocar el caso chileno como una posibilidad de causación positiva entre las transformaciones estructurales masivas y el "inmediato auge" de la producción, hay una enorme distancia. De hecho, el incremento de la producción, se produjo precisamente en la fase de iniciación de las transformaciones, cuando el clima político era aún relativamente favorable, y no se expresaba en toda su magnitud el peso del cerco imperialista, ni se agudizaba la ofensiva reaccionaria inducida por la política de transformaciones, en su fase más álgida.

A nuestro juicio la experiencia chilena demuestra todo lo contrario: la imposibilidad de estatizar actividades estratégicas, tratando de aislar a los enemigos principales, sin enfrentar una situación que inevitablemente conduce, si no a la paralización, al menos a gravísimas perturbaciones en todo el sistema económico y financiero.

Las afirmaciones que cuestionamos, descansan a nuestro juicio, en una falsa abstracción. Las transformaciones básicas, aún en la etapa inicial, estaban inscritas en la estrategia de poder de una coalición homogenizada por un bloque de partidos proletarios. En consecuencia, una reacción vigorosa de las fuerzas destinadas a ser destruidas, como poder económico y sistema de dominación, no sólo era previsible, sino insoslayable.

Ignorar este aspecto medular equivale a falsear las implicancias reales de una acción transformadora. Ésta tiene una enorme complejidad, más aún, cuando se da en un contexto en que el adversario de clase actúa libre e impunemente. Todo se orienta a crear gravísimos desajustes en la economía: El cambio de la propiedad de los medios de producción y la creciente organización de los trabajadores, se traduce en nuevos y mayores conflictos políticos; la redistribución del ingreso y la alteración de la estructura de producción, alteran la normalidad del mercado; se desarticula la producción agrícola; surgen fuertes desequilibrios entre oferta y demanda, expresados como elementos estimulantes del mercado negro, el acaparamiento y la inflación.

Además, tal razonamiento tiene otras connotaciones, no menos desorientadoras con relación a la desestabilización económica, instrumentada tácticamente, por el imperialismo, como arma contrarrevolucionaria.

Se argumenta que el éxito de los planes desestabilizadores no era inevitable. Por cierto esta proposición no tiene contenido real, si no se la fundamenta en un análisis concreto de las circunstancias y factores objetivos que la hicieron posible. Una reflexión más cuidadosa debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

La “desestabilización” —entendida como el esfuerzo deliberado del adversario orientado a quebrar la economía—, debe constituir una referencia obligada en el diseño e implementación de un proyecto de transformaciones revolucionarias. Ni el bloqueo financiero ni la faena de diversión económica pueden ser factores de sorpresa para la vanguardia revolucionaria. A ésta corresponde la tarea de impedir o reducir las posibilidades de crear condiciones favorables para su desarrollo. En último término, todo esfuerzo de transformación implica enfrentar la resuelta oposición de EU. El caso chileno, ha puesto en evidencia que tanto las grandes corporaciones multinacionales, el aparato militar y las estructuras de inteligencia, como el gobierno de EU, visualizan en cualquier intento de cambio un peligro para “su seguridad nacional”, dicho en otros términos, para sus intereses económicos y su voluntad continental hegemónica.

Sin embargo, la “desestabilización” no puede ser restringida ni explicada por la sola voluntad de los enemigos fundamentales. Diferentes factores coadyuvan o dificultan su ejecución. Ella tiene lugar en un contexto histórico-estructural que conlleva en sí un enorme potencial “desestabilizador” para la realización de cualquier proyecto revolucionario.

Hemos esbozado anteriormente algunas contradicciones de la política a corto plazo. Nos parece importante insistir en otras consideraciones.

A nuestro juicio, siendo justa la opción reactivadora, ella debió ir acompañada de un empeño por regular la expansión del consumo, para no comprometer las potencialidades de crecimiento futuro, en las cuales dicha expansión debía descansar para hacerse permanente. En otros términos, aun cuando la elevación del consumo —especialmente del consumo asalariado— era condición importante para el éxito económico y político de la coyuntura a corto plazo, también era imprescindible desplegar simultáneamente un esfuerzo de acumulación que permitiese enfrentar las exigencias futuras.

El análisis retrospectivo demuestra cómo la política económica superó con creces y prematuramente las metas redistributivas. En tanto el crecimiento del producto en 1971 fue de un 8.3%, el consumo privado aumentó en un 15% y el público en un 10%. Por otra parte, la mantención del nivel de inversión hubiese requerido un sustancial financiamiento externo. Éste —que en 1970 representaba un 46% de la inversión geográfica bruta— pasó a ser negativo. A su vez, el sector privado canalizó las inmensas utilidades derivadas de la reactivación hacia el consumo suntuario y la especulación. Finalmente, el sector público en razón de los bajos precios de los bienes producidos por él

—uno de los mecanismos de la contención inflacionaria— y en grado significativo, por la obstrucción parlamentaria opositora, fue incapaz de compensar la caída del ahorro privado y de los créditos e inversiones externos. El resultado final fue la disminución de la inversión interna en un 7.7%.

Esta debilidad del proceso de acumulación impidió más tarde reducir la brecha entre demanda y oferta agregada, provocada por la expansión desmedida del consumo y la disminución de la capacidad para importar. Todo ello convergió en la aceleración del fenómeno inflacionario.

Según el esquema antinflacionario, ésta debía reducirse en una primera etapa, para luego extinguirse como consecuencia de los efectos que las transformaciones estructurales producirían en la gradual eliminación de los desequilibrios causantes del fenómeno.

La Reforma Agraria debería permitir un incremento de la producción agropecuaria y disminuir la presión de ésta sobre las importaciones. De hecho, si bien ella, en 1971, experimentó un crecimiento considerable —en comparación con los índices históricos— descendió a un 1.6% en 1972. La oferta interna de alimentos subió en el bienio en un 6.7%, mientras la demanda —simultáneamente— experimentó una expansión cuatro veces superior (27.1%) como resultado del notable incremento de los salarios reales. Este desequilibrio se reflejó en el balance externo en un notable aumento en el porcentaje de las importaciones de alimentos (11.7% en 1965-1970; 33.1% en 1972). Este guarismo también comprende el aumento de los precios internacionales de los alimentos. El *quantum* de dichas importaciones se elevó en un 115% entre 1970 y 1972.

En esta forma, el sector agrario restó flexibilidad al sistema, contribuyó a agravar el déficit de la balanza comercial e incentivó las presiones inflacionarias. Por otra parte, absorbió importantes excedentes de otros sectores de la economía, tanto por la vía de la disminución de su tributación, como por la del aumento de subsidios fiscales y de reajustes de precios de bienes agropecuarios esenciales. Todo ello incide en el agravamiento del déficit fiscal y confiere mayor dinamismo a la espiral precios-salarios.

Como resultado de la reactivación económica, de la redistribución excesiva del ingreso, del descenso del valor de las exportaciones, del incremento de las importaciones, de las ingentes divisas absorbidas por el pago de la deuda externa, y de la suspensión de los créditos externos de corto plazo, no fue posible corregir la tendencia histórica al desequilibrio estructural de la balanza de pagos. Así, las posibilidades de rectificar el desfase creciente entre oferta y demanda global, como de financiar el desarrollo futuro, quedaron supeditadas en grado crí-

tico a la eventualidad de concertar nuevos y mayores créditos externos, lo cual no fue posible.

Por su parte, la política antinflacionaria careció de coherencia con el objetivo central de la política de transformaciones, esto es, crear un área de propiedad social dominante capaz de desatar una fuerte dinámica de crecimiento, captación y movilización de excedentes para sostener la reproducción ampliada. Dado que la política de precios estuvo concebida sobre la base de un criterio eminentemente redistributivo y en función de un objetivo de contención inflacionaria, ella terminó subsidiando las tasas de ganancia del sector privado y de un nivel de consumo, incapaz de sostener la economía nacional. El resultado fue precisamente contrario al definido en el programa: el área de propiedad social, en déficit creciente, lejos de constituirse en el sector líder de la acumulación, se trasformó en factor importante del déficit fiscal y la consiguiente aceleración inflacionaria.

Además las tensiones inflacionarias se vieron estimuladas por la agravación de desequilibrios básicos producida por la política transformadora.

Por otra parte, al expropiar industrias monopólicas y estratégicas de ramas intermedias y el sector bancario, sólo se coartó las posibilidades de disposición de recursos de la burguesía en una parte de la base productiva. Pero al no cortarles la retirada a través del establecimiento del control obrero en las ramas productoras de bienes finales y del control estatal y social de los circuitos de distribución, se le ofreció una preciosa oportunidad de conservar su capacidad de captación de excedentes, de reproducir los que la propia política económica ponía a su disposición —a través de actividades económicas ilegales— y de rehacer un poder económico sobre el cual sustentar su resistencia de clase.

Vistos desde este ángulo, pareciera que los problemas económicos del Gobierno Popular debieran ser atribuidos fundamentalmente a errores de los equipos técnicos de la UR. Ni tanto ni tan poco.

Los errores cometidos fueron gruesos y visibles, pero mayores aún fueron los provenientes de una inadecuada percepción política de la inevitabilidad del conflicto interno y externo, provocado por la materialización de la línea económica central, y las dificultades crecientes que dicho conflicto impondría a la realización del programa de transformaciones básicas y al funcionamiento de las estructuras modificadas.

La política de cambios estructurales estaba destinada —por su parte— a superar los obstáculos históricos al desarrollo y a crear las premisas institucionales para permitir una reorientación del patrón

de crecimiento. Sus fallas de concepción y de implementación —unidas a la obstrucción del adversario— no permitieron cumplir las metas mencionadas. En la medida que los objetivos políticos estratégicos, destruir la base real de sustentación del bloque hegemónico y establecer los embriones de nuevas relaciones de gestión y de poder, tampoco pudieron lograrse, se produjo una causación recíproca negativa entre ambos aspectos.

En los pasajes anteriores hemos enfatizado el papel que jugaron las inconsistencias mutuas entre las políticas de corto plazo y la de transformaciones. Nos ha parecido necesario hacerlo, por ser éste un elemento esencial para la cabal comprensión del proceso revolucionario y por constituir una omisión recurrente en gran parte de los análisis conocidos.

La línea argumentativa desarrollada no nos lleva a concluir que la derrota del movimiento popular tiene sus raíces en los errores e insuficiencias de la política económica. Tampoco compartimos la afirmación reiterada en orden a que las dificultades económicas hayan sido —en términos significativos— producto de fallas técnicas en la concepción y realización de la línea económica central. Esa afirmación distorsiona —desde una óptica tecnocrática y simplista— el carácter esencialmente complejo y dinámico de la interrelación vital que un proceso de transformación revolucionaria genera en los planos económico y político y en toda la vida social, cuando no se tiene realmente el poder.

Hemos tratado de demostrar como el proceso revolucionario, en las condiciones concretas de Chile, planteaba múltiples exigencias, muchas de ellas incompatibles. Fundamentalmente esta contradicción se expresaba en el propósito de modificar sustancialmente las estructuras socioeconómicas de la dependencia, preservando la estabilidad y continuidad democrática del país. Ello obligaba a un esfuerzo constante por asegurar una alta sincronización y consistencia entre las tareas de regulación y control económico y las de transformación de las estructuras básicas. De otra parte, era menester mantener la unidad de acción entre el comando político (gobierno-partidos) con la base social, tanto en las tareas constructivas, como en la contención de las acciones contrarrevolucionarias.

La necesaria expansión de aquella base social en dirección de los sectores medios fue obstruida, en buena parte, por la desarticulación progresiva de las actividades económicas fundamentales, cuyo normal funcionamiento se constituyó en una suerte de *test* acerca de la legitimidad del gobierno. Hemos insistido, con deliberada maja-

dería, en la incapacidad de la dirección revolucionaria para dimensionar correctamente el poder de hegemonización del bloque dominante sobre las capas medias —fundamentalmente no asalariadas— y el potencial económico e institucional reservado por las condiciones singulares del proceso, a la burguesía.

El proceso condujo a una situación revolucionaria caracterizada por la simultaneidad de una aguda crisis institucional y una grave crisis económica, no debidamente contempladas en el diseño político estratégico de la UP. El prelude de dicha situación estuvo marcado por divergencias progresivas en el seno de las vanguardias, y por la pérdida de unidad de acción entre el gobierno y las masas, crecientemente radicalizadas. Las opciones planteadas en uno y otro ámbito carecían ya de realismo y viabilidad. La oportunidad de la consolidación institucional del proceso se había extinguido hacía tiempo. El “realismo” económico era ya irrelevante en el contexto eminentemente político y polarizado del conflicto, enmarcado por la violenta ofensiva burguesa imperialista.

12. ONCE DE SEPTIEMBRE: DÍA DE LA TRAICIÓN

La tragedia asoma en las primeras horas de la madrugada. Desde Valparaíso se había anunciado a Tomás Moro la sublevación de la Marina. El Presidente con algunos hombres armados partió de inmediato a La Moneda, ignorando aún la magnitud de la asonada. Los hechos se sucedieron vertiginosamente. Primero, la confirmación de la traición; el *putsch* comprometía institucionalmente a los institutos armados y lo encabezaba el militar oscuro, obsecuente y genuflexo con el cual Allende había discutido algunas horas antes el plan de defensa del gobierno constitucional. Luego, la decisión suprema de impedir el sacrificio estéril del pueblo en la voluntad de su propio holocausto.

Allende fue asesinado en las primeras horas de la tarde, cuando las llamas consumían el palacio de gobierno, bombardeado en un épico despliegue de "audacia y valor".

Con Allende cae asesinada la democracia chilena, una de las más antiguas y sólidas del mundo, se derrumban estrepitosamente ciento cincuenta años de evolución política y valores históricos, nobles y dignos, cultivados a su amparo. Los *rockets* de Pinochet destruyen aquella mañana la república democrática consolidada en el amanecer de la nación, y demuelen hasta sus cimientos la creación de Portales: el Estado de derecho, impersonal, fundado en el respeto a la ley y en el irrestricto acatamiento del poder militar al poder civil, como antinomia del caudillismo castrense.

Con el brutal ataque al histórico palacio y con el asesinato premeditado del primer mandatario, se quiebra cultural y socialmente al país, abriendo entre los chilenos una brecha de odio, que sella a las generaciones presentes y compromete a las futuras.

PREPARAN SU GUERRA

Las fuerzas revolucionarias buscaron el poder a través de una vía pacífica. Aceptaron las reglas del juego democrático y se sometieron a ellas. El imperialismo y la gran burguesía, con mayor dosis de realismo, en cambio, concibió desde un comienzo una estrategia insurreccional armada.

Hemos insistido en otros capítulos sobre la gran antelación con que se plantea una voluntad rupturista. En septiembre de 1970, la CIA planifica el secuestro del general Schneider para provocar un golpe militar. En la misma época, el presidente Frei, se compromete en una acción civil “complementaria” destinada a desconocer el triunfo de Allende. En el curso del Gobierno Popular, se frustraron no menos de seis intentos subversivos en el interior de las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto, la burguesía prepara sus propios aparatos armados. “Patria y Libertad” se organizó en todo el país como un dispositivo paramilitar. El Partido Nacional, núcleo de la gran burguesía y del latifundio, adiestró también su contingente armado: los comandos “Rolando Matus”. En los barrios aristocráticos se crearon grupos especiales llamados “Proteco”, cuyo objetivo aparente era defender al vecindario, frente a un eventual ataque de las poblaciones marginales. Es decir, la reacción se armaba a vista y paciencia de todo el país, en abierta violación de una ley impuesta por ellos y que el ejército aplicaba únicamente a los trabajadores.

El modelo contrarrevolucionario insurreccional promovido por la CIA requería de un apropiado “clima de guerra”. La burguesía y sus cómplices se encargan de prepararlo y lo hacen con eficiencia. Organizan el caos económico; crean los supuestos doctrinarios para un paulatino cuestionamiento de la legitimidad del gobierno; desarticulan la institucionalidad; combinan todas las formas de lucha: legales e ilegales, de masas y terroristas, pacíficas y armadas, y promueven una abrumadora ofensiva ideológica.

Ésta era la faena de “ablandamiento” o de “desestabilización” como gráficamente se denominaría más tarde.

Las elecciones de marzo de 1973 clausuran definitivamente una eventual salida político-institucional. En el contexto más adverso en que gobierno alguno haya enfrentado una consulta electoral, la Unidad Popular obtuvo el 44% de los sufragios. Esta cifra representaba en esas condiciones un potencial cualitativamente muy superior, y lejos de actuar como disuasivo, se transformó en precipitante del golpe.

Es un hecho comprobado, que si bien la conspiración se venía gestando en el interior de las Fuerzas Armadas —por conductos diferentes— desde abril de 1972 (así lo confiesa Pinochet), adquiere sin embargo, coherencia y organicidad, inmediatamente después de las elecciones parlamentarias. El propio jefe de la junta confirma esta apreciación: “Para ser más exactos y aprovechando que está aquí el general Benavides, el día 20 de marzo de 1973, firmé un documento que le mandé, en el que estaban estudiadas las posibilidades políticas por las que atravesaba el país, y llegamos a la conclusión en forma muy clara, que ya era imposible una solución de carácter constitucio-

nal." "El ejército planificó en ese momento su forma de actuar. Fuimos ocho oficiales los que planificamos o recibimos órdenes para llevarlo a cabo." (*Las Últimas Noticias*, 8 de agosto de 1974.)

Un informe interno de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), reducto conspirativo de los grandes empresarios nacionales, elaborado con anterioridad a los comicios de marzo, previene a sus asociados ante la posibilidad de un *putsch* militar, a partir de los resultados electorales. Textualmente señalaba en una de sus partes: "Un 43% nos dejaría en cierta forma una vez más en tierra de nadie." "¿Habría salida constitucional posible?" Finalmente la respuesta: "Salida más probable: golpe militar de fuerza".

Este informe calificaba crípticamente a las Fuerzas Armadas de "gigante dormido", eufemismo revelador tanto del resentimiento como de las esperanzas de la plutocracia.

Como vemos, un extraordinario triunfo electoral a los ojos de la burguesía, lejos de legitimar al gobierno constitucional, fue la causa directa de su destrucción. La oligarquía plutocrática había entregado la decisión de los asuntos del Estado al sufragio universal, sólo hasta el instante en que éste no colocara en peligro el estatus capitalista.

En el interior de las Fuerzas Armadas el grupo faccioso venía elaborando los planes de guerra. Si damos por exactas las afirmaciones de Pinochet, estos planes empezaron a prepararse en el mes de abril de 1972. Es decir, existía la decisión de derrocar al gobierno, mucho antes de ocurrir ninguno de los hechos reivindicados posteriormente para cohonestar el golpe. Recordemos la confesión del "señor Presidente":

En abril de 1972 se había hecho una apreciación. El 13 de abril se analizaron las posibilidades en el Estado Mayor. Sí, en 1972. Nosotros siempre estamos estudiando posibilidades. Y esa vez se llegó a la conclusión que la materialización del conflicto insuperable entre los poderes ejecutivo y legislativo será sin solución constitucional. Ésa es la conclusión a que llegamos en la apreciación. Vino el 29 de junio, el "tancazo", y como yo digo siempre ahí estuvo la mano de Dios, aunque hay ateos que no creen. Dios me ayudó, me amplió la visión, y el día 4 de julio cambié mi planificación. Pero esto venía de antes, del mes de mayo. El 28 de mayo fue la primera vez que cambiamos la planificación. La planificación defensiva-ofensiva, se cambió ahora en una planificación ofensiva-defensiva, discretamente disimulada. Y principiamos a preparar nuestra planificación basado en esto. Se elaboró el "Plan Alborada". Una de sus partes, el plan de comunicaciones, era el "Plan Silencio". Los planes los hacía yo como jefe del Estado Mayor, con el jefe de operaciones, y los difundía bajo el aspecto de segu-

ridad interior. Esta planificación era nuestra, del ejército. Basado en esto en julio, dicté una orden en que dispongo que la Academia de Guerra me empiece a preparar la planificación. Pero como podía caer en manos indiscretas, yo transformé este documento que se llama "Apreciaciones de la situación de seguridad interior del ejército de Chile" en un "Juego de Guerra de Seguridad Interior". Y aquí llegamos a la siguiente conclusión: de que este combate, esta guerra se decidía aquí en Santiago. Fue la conclusión a que llegamos después del 29 de junio. Por eso yo digo: Aquí está la mano de Dios que nos mostró la reacción de los Cordones... En cuanto a las otras instituciones —agrega más adelante—, bueno cuando llegó el momento en que entremos en conversaciones dije yo: estamos bien. Era cuestión de apretar el botón. Tenía el dispositivo listo. Colaboré en todo esto la mano de la Providencia que me permitió tomar medidas, por ejemplo, ante el posible desafuero del senador Altamirano, con lo que las tropas quedaron en posición óptima. La fecha del 14 de septiembre era la que yo tenía en mente. Pero si era el 14 podía ser perfectamente el día 12, el 11 o el 10... yo estaba pensando en cómo iba a actuar. *Pregunta:* ¿Pero la fecha se adelantó en alguna medida con el discurso de Altamirano? *Respuesta:* No. Salvo, como dije, que me permitió acuartelarme. Y el día 11 a las 7 de la mañana, estaba todo el mundo comunicado, listo para actuar. Y a las 11, cuando estábamos en pleno combate... yo tenía comunicaciones con todo Chile. (*Ercilla*, marzo de 1974.)

Las declaraciones transcritas de alguna manera dibujan el retrato moral del personaje. Durante el año y medio anterior al golpe nunca dejó de conspirar. Nunca tampoco fue más solícito, gentil y obsecuente. Cualquiera de los altos dirigentes de la Unidad Popular puede testimoniárselo. Dotado de una personalidad sinuosa y de una capacidad intelectual extraordinariamente limitada, poseía en cambio una gran habilidad para mimetizarse. Podía ocultar herméticamente sus emociones y sus pasiones. Ello lo encumbró al poder sobre los cadáveres de tres hombres a quienes logró engañar: el presidente Allende; José Tohá, ex vicepresidente de la República y ministro de Defensa; y su amigo de toda la vida, el general Carlos Prats, comandante en jefe del ejército chileno.

Tres meses antes del cuartelazo, con el pretexto de dar cumplimiento a la ley de control de armas, las Fuerzas Armadas vuelcan sobre los trabajadores una despiadada campaña de provocación y amedrentamiento. Fábricas, empresas estatales, sedes políticas (por supuesto de izquierda), casas particulares, y hasta cementerios, fueron allanados en busca de armas. Se trataba de medir la capacidad de resistencia de la clase obrera y la eficiencia de los Cordones Industriales, como respuesta del pueblo. No encontraron armas. Sólo entonces actuaron.

LA DENUNCIA DE LA MARINERÍA

Algunos meses antes del golpe fui invitado junto con Miguel Enríquez, secretario general del MIR, y Óscar Garretón, jefe del Partido MAPU, a participar en una reunión promovida por un grupo de suboficiales y marineros. En aquella oportunidad nos entregaron —con detalles pormenorizados— todos los antecedentes de la actividad subversiva en gestación. Fuimos advertidos sobre los lugares, días y horas de los encuentros conspirativos, en los cuales habían participado, junto a los altos mandos de la Armada, algunos miembros de la misión naval norteamericana. Las reuniones se efectuaron en diversos puertos de la costa chilena, a veces en los casinos de los oficiales, otras en los mismos barcos de guerra.

Según este grupo, la sublevación estaba inicialmente planificada para mediados de agosto y su postergación no parece ajena a la culminación increíble y kafkiana de aquel episodio.

Nuestra reunión fue detectada. Los marinos detenidos, sometidos a bárbaras torturas y se inició un proceso contra quienes recibimos la denuncia. La Corte Suprema, por primera vez en la historia judicial del país, interviene ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para presionar el desafuero del secretario general del Partido Socialista.¹

Los golpistas, estableciendo una norma que más tarde crearía jurisprudencia, legitiman su derecho a conspirar; torturan precisamente a quienes revelan la subversión preparada contra el gobierno constitucional y persiguen a los dirigentes que recogen la información. Mientras tanto, la derecha orquesta una campaña de tono mayor para acusar a los jefes políticos, participantes en la reunión, como autores de intento de subversión en la Armada. Huelgan los comentarios. Tal fue el cinismo de los cabecillas de la subversión. Tal era el grado de debilidad del gobierno. Tal la impotencia a que habíamos sido arrastrados. Nosotros éramos los acusados.

Los marinos procesados hacen llegar una carta abierta al presidente de la República, fechada algunas semanas antes del golpe, carta que el Partido Socialista decidió publicar, para enfrentar el escándalo promovido por la prensa reaccionaria. A ella di lectura en un acto de masas celebrado el día 9 de septiembre, horas antes de la sublevación. No han faltado quienes vieron en su divulgación y en el discurso que entonces pronuncié, un factor desencadenante del *putsch* fascista. He

¹ En Chile los parlamentarios no podían ser sometidos a proceso sin resolución previa de la Corte de Apelaciones.

aquí algunos párrafos marcados de aquel dramático e inolvidable documento histórico:

Nosotros, los marinos antigolpistas de tropa buscamos por todos los medios comunicarle al pueblo y al gobierno de este golpe de Estado que planificaba la oficialidad golpista de la Armada. Para nosotros era vital evitar esta gran masacre contra el pueblo que estaba ya planificada con fecha definitiva entre el 8 y el 10 de agosto, por datos e informaciones concretas, sumando a éstas las diferencias de nuestros jefes para con nosotros la tropa donde nos explicaban que por tales o cuales razones el gobierno marxista debía ser derrocado y limpiado el pueblo de dirigentes "marxistas". Para ellos todo dirigente de izquierda —era sin duda el "Plan Yakarta"— debía ser eliminado, como nosotros mismos habíamos logrado saber por ellos y corroborado en el proceso que se nos sigue... En tanto a hechos, por ejemplo: a uno de nosotros el comandante Bilbao, fiscal, le preguntó de cómo se iba a restituir la legalidad, cuando no iba a quedar después del golpe ningún líder de izquierda vivo. También para nosotros, dentro de este plan, la suerte era incierta... ¿Nuestro delito? Oponernos a un golpe de Estado. Se nos ha flagelado y torturado criminalmente. Se nos ha ofrecido no flagelarnos más, inclusive dejarnos en libertad, con tal que nosotros cooperemos y digamos que los señores Altamirano, Garretón y Enríquez nos dirijan, y que nos habían ordenado bombardear Valparaíso, Viña, la Escuela Naval y otras cosas por el estilo. Como nos negábamos, nos seguían golpeando en la cruz, nos colgaban en ataúd, nos hacían tomar las meadas de los verdugos, nos colgaban de los pies y nos sumergían en el agua, nos sumían en pozos de barro, nos aplicaban corriente, nos tiraban agua caliente en el cuerpo, después fría y decenas de cosas más.

Terminan preguntando si "Defender el gobierno, la Constitución, la legalidad, el pueblo, es un delito, y al contrario, derrocar al gobierno, atropellar la ley y terminar con la vida de miles de seres humanos ¿Eso es legal? ¿Qué contestan los trabajadores?"

Firman esta carta 34 suboficiales y marinos recluidos en el cuartel Silva Palma de la ciudad de Valparaíso.

Las torturas de los procesados provocó gran conmoción pública, determinando, entre otras muchas, una gestión infructuosa ante los jefes navales, del cardenal Raúl Silva Henríquez y el ex candidato presidencial de la Democracia Cristiana, Radomiro Tomic.

Éstos eran los planes cuidadosamente preparados por los conspiradores. Se planificó una guerra relámpago cuyo objetivo era el aniquilamiento inmediato "del enemigo". La estrategia elaborada consultaba la utilización del factor sorpresa, el corte de comunicaciones, combates de corta duración, el aislamiento de eventuales focos de resistencia y

desde luego el de La Moneda —centro del operativo— y finalmente con singular violencia, la intimidación psicológica de la población.

Como lo expresaría más tarde Pinochet, los planes fueron ejecutados "de manera impecable, porque las instituciones actuaron como un reloj coordinadas por los mandos. No hubo una sola falla en la conducción". (*Ercilla*, marzo de 1974.)

A pesar de estas pretenciosas y arrogantes declaraciones, el *putsch* fascista había distado mucho de ser todo lo "impecable", organizado y eficiente que se pretende.

¡Qué fácil resulta la "impecabilidad" en contra de un enemigo desorganizado e indefenso!

Varias e importantes unidades militares no estaban comprometidas con los cuatro generales traidores y sólo tomaron su partido cuando tuvieron la certeza del triunfo inminente; existieron claras manifestaciones de desorden y desincronización en la ejecución del plan; hubo contradicciones en las instrucciones impartidas; no se adoptaron medidas obvias y elementales; soldados y oficiales demostraron un extraordinario nerviosismo e inseguridad en el cumplimiento de las órdenes; en muchas oportunidades tuvieron expresiones elocuentes de temor y cobardía; estaban aterrorizados; donde hubo algún asomo de defensa, retrocedieron o simplemente arrancaron. La impresión de solidez, firmeza, eficiencia y unidad fue más aparente que real y, en definitiva, tuvo su exclusivo origen en el hecho de que no existió capacidad militar de respuesta. Y ellos lo sabían.

A pesar de esta enorme ventaja, tener la ofensiva, una correlación de fuerzas abrumadoramente favorable, y saber a ciencia cierta, que el "enemigo" está inerme, el *putsch* no demostró más eficacia que la de su brutalidad y la crueldad más inhumana.

Nos preguntamos: ¿Qué habría sido de estos "impecables" y "valientes" generales si el pueblo hubiera dispuesto realmente de armas y de alguna mínima organización?

Y HUBO QUE CREAR EL "PLAN Z"

No tuvimos un plan de defensa. Mejor dicho, existió sólo uno: el plan discutido por última vez en la mañana del día 9 de septiembre entre el presidente Allende y... el general Pinochet.

Quizá si porque incluso a los fascistas les pareció inconcebible que careciéramos de una defensa básica, inventaron uno: el "Plan Z".

Éste fue exhibido en los primeros instantes como justificativo moral

del golpe, y publicado en un engendro ramplón de los periodistas palaciegos —asesorados por la CIA— denominado “Libro Blanco”, profusamente distribuido por la junta, dentro y fuera del país. Evidentemente “el libro” es de factura castrense. Sus contradicciones groseras, la incorporación incoherente de documentos supuestamente comprometedores, las imbecilidades acumuladas en estilo panfletario, ponen en evidencia una preparación precipitada y el bajo nivel de los asesores extranjeros.

No, obstante su factura truculenta, sirvió para embaucar algunos ingenuos, y también de pretexto a quienes debieron justificar su silencio ante la implacable demolición de Chile y su pueblo.

Abandonado por sus autores después del golpe, el “Plan Z” persistirá sin embargo como una de las mayores imposturas de la historia. El “Plan Z” es a Pinochet y su camarilla lo que el incendio del Reichstag fue a Hitler: vana y estúpida pretensión de justificar un crimen injustificable.

En un comienzo, este plan fue atribuido al gobierno de la UP. Los órganos informativos y las declaraciones de algunos personeros políticos, concordaron en que el “Plan Z” constituyó el fundamento último del golpe militar y el justificativo moral de la extrema represión posterior. Todo era permitido bajo la consigna: “¡Ellos nos iban a matar primero!” Posteriormente, en un esfuerzo por dar coherencia a las contradicciones de la primera hora, el general Leigh declaró a un periódico extranjero: “Los militares sólo conocieron el ‘Plan Z’ después del 11 de septiembre.” (*ABC*, Madrid, 6 de noviembre de 1973.)

Más tarde el canciller de la junta, Ismael Huerta —ex ministro del régimen popular— declara en Nueva York: “El plan disponía el asesinato del presidente Allende, del general Prats y de otras personalidades políticas chilenas.” (*El Mercurio*, 8 de noviembre de 1973.)

En definitiva, el plan no era imputable al gobierno de Allende ni a la Unidad Popular. El dispositivo macabro sobre el cual se pretendía montar el “autogolpe”, resultó no tener autor.

Si no es la Unidad Popular la que elabora el “Plan Z”, ¿a quién se le imputa? Nunca se ha dicho. El tema jamás volvió a ser tratado. ¿Acaso a alguna organización de la ultraizquierda? ¿Con qué objeto? ¿Un golpe contra el gobierno, contra los partidos populares, contra todo el país?

La factura burda de la provocación condujo a su rápido descrédito. Terminó por desaparecer de la circulación sin que ninguno de los confabulados volviera a invocarla.

Sin embargo, se mantienen frente a la magnitud infame de la impostura dos hechos concretos: en el curso de los dos últimos años,

nadie —absolutamente nadie— ha sido condenado en Chile como autor, cómplice, encubridor o instigador moral de tal plan y nunca se han exhibido pruebas de su existencia ante ninguna personalidad, organismo o comisión internacional, de las muchas que han visitado Chile.

En cambio, sí queda en pie el hecho que la última carta que el gobierno asediado pretendió jugar, fue el plebiscito, anunciado por Allende a Pinochet sólo algunas horas antes del golpe militar. Así, no se tomaba la iniciativa a través de ningún plan, menos del "Plan Z". Por el contrario, la consulta plebiscitaria constituía razonablemente, la virtual abdicación del poder.

EL GOLPE MILITAR: RESISTENCIA SIN ARMAS

Se han planteado en torno a los sucesos del día 11 de septiembre algunas interrogantes, las cuales recogen una preocupación generalizada. ¿Por qué no hubo resistencia popular? ¿Por qué no se llamó a una huelga nacional? ¿Dónde estaban los partidos populares cuando el presidente de Chile caía en La Moneda?

El cuestionario parece brutal, sobre todo en el contexto emocional creado por el heroísmo anónimo de los combatientes asesinados y el sacrificio consciente, autoimpuesto por el presidente Allende.

Nos parece, sin embargo, una inexcusable ligereza pretender circunscribir tales interrogantes al acontecer puntual del día del asalto al poder; a la precipitación vertiginosa de hechos que en pocas horas sepultaron las esperanzas revolucionarias, y a la conducta de hombres y partidos asumida frente a una realidad, que aunque prevista, no dejó de ser inesperada.

La respuesta final y profunda se haya en el trasfondo de la experiencia popular, en sus insuficiencias, en sus errores y debilidades y en los inmensos obstáculos surgidos durante su desarrollo. Sobre ellos hemos incursionado extensamente en diversos pasajes de este ensayo. No obstante, queremos insistir en algunos aspectos indebidamente ponderados y a propósito de los cuales la información resulta vaga y confusa.

Ausente una estrategia apta para responder al alzamiento armado, en definitiva, las posibilidades de defensa del gobierno se reducían a la participación de unidades militares leales, y a su coordinación con una masiva movilización del pueblo. Los partidos populares, habían

generado algunos escasos dispositivos armados, destinados teóricamente a jugar un papel complementario en una instancia subversiva.²

No se aceptó la alternativa de tomar la iniciativa. También se consideró a nivel de gobierno y de la Unidad Popular, la eventualidad legítima —dada la coyuntura insurreccional burguesa— de promover acciones ofensivas, que nos permitiera compensar la correlación de fuerza militar absolutamente desfavorable. Jamás los partidos de izquierda accedieron a crear un “comando único militar” a cuyo cargo estuviera el estudio y la ejecución del plan de defensa de la revolución.

Por cierto, la falta de “unidad militar” era el reflejo natural de la ausencia de “unidad política”. La unidad —en términos militares— no significaba otra cosa que la consolidación, en el momento del enfrentamiento, de todos los destacamentos revolucionarios, alrededor de una dirección única y centralizada, la cual debía determinar el curso de las acciones combativas.

De haber contado con una estrategia correcta y con aquella unidad orgánica, política y militar, pudimos y debimos elaborar un plan que nos permitiera —promovido el golpe— insurreccionar a todo el país, tomar y controlar los medios de comunicación, las fábricas, puentes, puertos, carreteras, hospitales, llamar a una huelga nacional y ajustar la movilización de las masas a las exigencias del mando militar unificado. Sólo así podíamos compensar la ventaja de quien ataca y asumir la ofensiva, sin la cual la victoria era ilusoria. Por lo demás, como lo hemos aseverado, la “eficiencia prusiana” distaba mucho de ser tan eficaz.

Pero si los partidos revolucionarios carecían de un plan defensivo, el alto mando de las Fuerzas Armadas, sí había diseñado uno *ad hoc* para disipar las preocupaciones del gobierno y distraer la atención de los oficiales constitucionalistas. Era el plan que el jefe del Estado discutía con Pinochet, cuando éste llegaba a La Moneda a reiterar su fe democrática y su lealtad al gobierno.

En resumen, la ilusoria defensa del proceso entregaba la iniciativa al adversario (plan defensivo-ofensivo para usar la terminología castrense). Éste se fundaba en el supuesto básico de contar con unidades militares y su ejecución quedaba en manos —exclusivamente— de las Fuerzas Armadas.

¿Y las armas del pueblo? Los trabajadores no tenían armas, excepto las que mínimamente podían obtener en forma individual e inorgánica. La propaganda fascista inventó un gran escándalo sobre las

² En el Congreso de La Serena (diciembre de 1970) el Partido Socialista impulsó la formación de una comisión de defensa. En abril de 1971, al celebrarse el primer Pleno del nuevo Comité Central, se estructuró definitivamente esta comisión.

armas “descubiertas” en Tomás Moro y en el palacio de La Moneda. Lo exhibieron como delito de lesa patria. ¡Cretinos! En cualquier país del mundo, en el lugar donde reside o ejerce el jefe del Estado, existen armas para su defensa, máxime si se trata de un gobierno contra el cual se habían montado no menos de media docena de asonadas, por supuesto armadas, y la vida de cuyo jefe estuvo permanentemente amenazada.

Toda la información destinada a demostrar la existencia de arsenales de armas en poder de la UP era tan estúpida y grotesca como el mismo “Plan Z”. Las armas exhibidas en Tomás Moro, en La Moneda y descubiertas y “redescubiertas” en otros lugares, apenas si cubrían las necesidades de un pelotón de 300 hombres. ¡Mil si se quiere! Pero ni éstas ni las que truculentamente denuncia el “Libro Blanco” (cantidad para equipar 5 000 hombres) era suficiente para enfrentar a un contingente profesional de 80 000 hombres, dotados de una poderosa infraestructura de guerra y un inmenso poder de fuego. Por lo demás, fueron las mismas Fuerzas Armadas las encargadas de certificar que el pueblo carecía de armas. Los múltiples allanamientos militares iniciados en los meses de junio, julio y agosto de 1973, les confirmaron que el pueblo estaba efectivamente inerme.

¿Hubo posibilidad de contar con armas? Lo hemos dicho antes. Sí las hubo, pero ello implicaba serios riesgos y estaba fuera de la concepción estratégica de la dirección revolucionaria. Así, la protección del régimen quedó entregada exclusivamente a la existencia de unidades militares leales. Por eso, la noticia en las primeras horas de la mañana del 11, de que tales unidades leales no existían, sepultó cualquier esperanza de resistencia organizada.

Las propias palabras de Allende se interpretan como el anuncio de la inutilidad de toda lucha: “En estos momentos pasan los aviones. Es posible que nos acribillen pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo. El pueblo debe estar alerta y vigilante. No debe dejarse provocar, ni dejarse masacrar. Pero también debe defender sus conquistas. Debe defender el derecho a construir con su esfuerzo una vida digna y mejor...”

No obstante, surgió la defensa espontánea. Se dio en forma mucho menos limitada de lo que públicamente ha trascendido, pero en todo caso fue aislada, inorgánica, desesperada. Miles de trabajadores, jóvenes obreros, estudiantes y campesinos, lucharon aguardando la presencia de regimientos leales que nunca llegaron. Muchos perdieron la vida en el lugar de combate. Otros se rindieron ante la inutilidad de

la resistencia y fueron posteriormente asesinados. Los fascistas no querían prisioneros.

En su conjunto, las masas se replegaron. No hubo dirección para la lucha. No había armas. Simplemente no existía correlación de fuerzas en el plano militar. Finalmente, se trataba de una catástrofe acerca de la cual no hubo en Chile ninguna experiencia. Ciento cincuenta años de vida democrática nos habían enseñado todas las triquiñuelas electorales y parlamentarias pero no a manejar dispositivos armados. La total ausencia de una tradición de lucha clandestina e ilegal, pesó también como elemento morigerante de la natural reacción de los trabajadores.

EL PARTIDO SOCIALISTA EL 11 DE SEPTIEMBRE

El Partido Socialista había planteado en sus torneos internos, el problema del enfrentamiento como la cuestión central y básica de todo el período. Sería extenso avalar con citas textuales de documentos partidarios, la corrección de nuestras prevenciones.

Oportunamente, y en el entendido de que el *putsch* era inevitable, propusimos que al menos se constituyera una comisión militar, integrada por oficiales leales y dirigentes de los partidos de izquierda —lógicamente con participación del MIR—, a cuyo cargo quedaba elaborar y ejecutar un plan defensivo.

Al no existir consenso, hicimos lo que honestamente podíamos hacer, considerando nuestras serias deficiencias orgánicas. El esfuerzo desplegado se desmorona en definitiva frente a la brutal factura del golpe fascista. Estaba construido sobre un supuesto falso. Este supuesto, como hemos dicho, era la existencia, en el seno de las Fuerzas Armadas, de un sector leal al gobierno.

En la madrugada del día 11, la comisión política del ps sin excepción, se reunió en el lugar previamente establecido. De inmediato se tomaron contactos directos con el presidente de la República, la Radio Corporación (del partido), la Central Única de Trabajadores y diversos centros fabriles. Comprobado el carácter institucional del cuartelazo la evaluación de los sucesos nos llevó a concluir —en ese momento— que las posibilidades de organizar una defensa eran prácticamente nulas. No era posible ya aquella mañana, articular tareas que debieron programarse en los meses previos, o al menos, en las semanas ante-

riores. Se descartó la alternativa de convocar a los trabajadores al centro de Santiago o llamarlos a una huelga nacional. A esa altura, los medios de comunicación controlados por el gobierno estaban ya en poder de los golpistas. La planta de Radio Corporación había sido bombardeada y ocupadas sus instalaciones. Igual ocurría con Radio Magallanes, radio del pc. Algunos dirigentes fueron enviados a diferentes Cordones Industriales, donde a pesar de no existir una orden general, se combatió. La falta de comunicaciones condenaba al gobierno y a los partidos a un virtual aislamiento.

Nuestros militantes luchan espontáneamente en todo el territorio nacional. En numerosas provincias las direcciones regionales son arrasadas en encuentros desiguales. Otras son capturadas. Los dirigentes medios del partido son asesinados en casi todas las ciudades. Desde entonces y en el curso ininterrumpido de estos últimos tres años, las acciones de exterminio no han cesado. Miles de camaradas cayeron en una u otra forma, haciendo interminable la nómina heroica encabezada por el militante socialista, Salvador Allende.

En los días siguientes al asalto, aislada y desesperadamente, se siguió combatiendo en diferentes puntos del territorio. Las páginas más heroicas de nuestra clase obrera y de sus partidos se escribieron en aquellos días. Los miles de mártires, no sólo están en la cuenta histórica de la perversidad fascista. Muchos, a lo largo de toda la geografía del país, entregaron su vida como un aporte exasperado, a la defensa de su gobierno, su proceso y su propio destino.

Los testimonios fragmentarios no nos permiten hacer un balance de conjunto de aquella resistencia tan heroica como impotente, pero ella tuvo una extensión mucho mayor a la atribuida normalmente. Se luchó en las poblaciones. En algunas de ellas, como La Legua —en Santiago— la resistencia sólo se extingue con el bombardeo de la aviación fascista. Los campesinos fueron bárbaramente masacrados. Se combatió en industrias, minas, regimientos y universidades. En el sur del país, se improvisaron acciones guerrilleras, que mal armadas y carentes de una infraestructura de apoyo, terminaron por ser aplastadas.

Resulta profundamente alentador, poder constatar hoy con perspectiva suficiente, cuán homogéneo fue el comportamiento de los dirigentes de los partidos y organizaciones de la izquierda, que conocieron las cárceles y centros de tortura del fascismo, El mundo ha tenido amplio acceso a los testimonios de Dawson. La dictadura concentró allí a los personeros de mayor jerarquía del gobierno derrocado. No logró quebrar a uno solo de ellos. En la fraternidad del infortunio, todos

derrocharon dignidad, entereza y espíritu unitario. Con orgullo legítimo la izquierda chilena puede exhibir la conducta de sus cuadros, en todos los niveles. En el enfrentamiento de la represión hubo bajas físicas, pero no bajas morales. Ni concesiones ni defecciones. Ni uno solo de los militantes revolucionarios ha sido condenado por delitos de desfalco, malversación, robo, aprovechamiento ilícito del cargo u otros, a pesar de haberse realizado una exhaustiva y minuciosa pesquisa policial en contra de cada uno de nosotros, hurgando hasta la quinta generación.

SALVADOR ALLENDE

El 11 de septiembre fue el día de la infamia. Pero también el día de la dignidad revolucionaria. Mientras los cuatro generales traidores emporcaban la historia de Chile, Allende la ennoblecía.

Aquel día pertenece a Salvador Allende. Durante su vida entera había predicado y practicado el respeto a la ley y a la Constitución. Había abrazado con pasión la alternativa de una vía al socialismo, liberada de la violencia, consustancial a otras experiencias. Sin embargo, en el instante definitivo coge las armas y combate. Las balas fascistas encontraron sus balas. Durante horas resiste junto a un reducido grupo de combatientes. Contra esa defensa frágil el adversario cobarde y sorprendido sólo atina a utilizar su inmenso poder destructor: el ataque de la artillería, el fuego de los tanques y el bombardeo implacable de los aviones. El coraje de Allende hace vacilar a los junteros asesinos. Más de una vez retroceden, intiman la rendición, le ofrecen respetar su vida. La respuesta fue invariable: "Los generales traidores desconocen lo que es un hombre de honor." Enfrenta la muerte sereno. Con frialdad profética anticipa el significado de su sacrificio: "Así se escribe la primera página de esta historia. Mi pueblo y América escribirán el resto."

La muerte de Allende cierra un ciclo en la historia nacional y abre las puertas de una nueva etapa en el proceso revolucionario. La evolución política y social de Chile ha sido dramáticamente rota. El hilo conductor que entrelazaba el acontecer nacional desde los inicios de la República hasta hoy, fue sangrientamente cortado por los generales mercenarios, coludidos con el gobierno norteamericano. La historia de Chile se reescribirá, a partir de septiembre de 1973, considerando la honda brecha de odio abierta por el terror fascista.

El sacrificio proyecta a Allende violentamente en la historia y le

selecciona como uno de sus más relevantes protagonistas, transformándolo en la más alta voz moral y revolucionaria de nuestra patria. Su personalidad política centrará el debate de los años venideros. Aun mirado desde un punto de vista tradicional y conservador, ninguna figura nacional en este siglo, alcanza perfiles tan fuertes y profundos.

Gabriel García Márquez, con la pasión de su pluma extraordinaria, afirma que Allende murió “defendiendo toda esa parafarnalia apolillada de un sistema de mierda que se había propuesto aniquilar sin disparar un tiro”.³ Creemos que se equivoca. Su sacrificio tiene un sentido más profundo e históricamente más trascendente. No es la democracia burguesa la engalanada con su muerte. Por el contrario, son sus miserias y lacras las puestas al desnudo cuando los militares traidores deciden ultimarle. No empuñó las armas ni entregó su vida por un sistema político y social en descomposición. Lo hizo para defender la legitimidad moral y revolucionaria de lo que alguna vez denominó “el segundo modelo de transición a la sociedad socialista”. Es su última contribución, honesta e incommovible, a una vía de transformación concebida como factible, en la singular realidad de Chile. Su muerte tiene además el contenido de una notable demostración histórica. Ante su pueblo y los pueblos del mundo, Allende pone en evidencia los harapos principistas de la burguesía. El desenlace trágico reivindica la vigencia de una ley, a veces cuestionada desde perspectivas abstractas y teóricas: las clases dominantes jamás respetarán un proceso revolucionario, aun cuando esté legitimado en la voluntad del sufragio universal; nunca aceptarán pacíficamente cambios que cuestionen sus privilegios de clase.

Allende había empeñado su palabra de respetar la Constitución y la ley. Así lo hizo, y al hacerlo no dejó de ser revolucionario. Aquel respeto era condición básica del camino que entendía correcto y defendió apasionadamente.

Pocas veces en los anales de las luchas populares un sacrificio fue históricamente más útil. La verdadera humanidad, ha recogido su nombre, su vida y su palabra. Las grandes corrientes del pensamiento humano han convergido en una formidable y ecuménica expresión solidaria. Antagonismos hondos y prolongados salvan brechas aparen-

³ Gabriel García Márquez, “Cómo mataron a Allende”, artículo publicado en la revista *Harper's*, de EU, 1974.

temente insuperables para protestar por el dolor de Chile. La muerte de Allende sacude la conciencia universal y su nombre se trasforma en una insólita bandera de lucha y unidad. Raro privilegio que el fascismo no llegó a imaginar. Privilegio del revolucionario caído; extraordinaria herramienta de combate para el futuro de nuestro pueblo.

13. DIALÉCTICA DE UNA DERROTA

URGENCIA DE UNA AUTOCRÍTICA

En torno a la experiencia transitada por Chile entre 1970 y 1973, y su dramática interrupción, se ha generado un fenómeno de seria y honda reflexión intelectual. Dirigentes políticos, cientistas sociales, revolucionarios de todos los signos, han asumido la tarea de desentrañar la gama de factores causantes del desastre, atribuyéndoles desde perspectivas y categorías diferentes, también distintos grados de incidencia.

Para los dirigentes del movimiento popular chileno el deber de desarrollar una autocrítica es urgente e insoslayable. La lucha continúa y es necesario impedir que los errores cometidos continúen proyectándose en combates futuros. Las lecciones trascendentes extraídas de la experiencia vivida, nos permitirán retomar el curso quebrado de la revolución chilena y enriquecer el patrimonio ideológico del movimiento obrero internacional.

En capítulos anteriores hemos tratado de trasferir —con el mayor rigor objetivo— la realidad sociopolítica en la que nace, crece y muere la gestión del Gobierno Popular. Sólo a partir de ella es posible una ponderación justa y coherente de los errores cometidos, de las desviaciones ideológicas que los determinaron y de los elementos coyunturales sobrevinientes, los cuales, en mayor o menor intensidad, confluyen en su destino trágico.

UN MODELO CONTRARREVOLUCIONARIO

Debemos empezar por puntualizar que frente a la perspectiva de un Chile socialista, el imperialismo y la burguesía no asumieron margen alguno de riesgo. No se dieron un compás de espera, como sucedió frente a otras experiencias, aguardando el curso de los acontecimientos.

Desde los primeros momentos las fuerzas en pugna sabían a que atenerse. Lo sabía EU cuando planteamos en el curso de la contienda electoral la decisión irrevocable de reivindicar nuestras riquezas básicas y expresamos nuestra voluntad de ejercer a plenitud los derechos

de Estado soberano, estableciendo —sin consultas obsecuentes— relaciones de todo orden, con los países proscritos por el imperialismo. Sabía EU, cómo la imagen ejemplarizadora del proyecto chileno, irradiaría sobre otros países del continente e incluso de Europa, afectando sus intereses estratégicos. Así lo advirtió sin rodeos Kissinger apenas algunos días después de la elección de Allende. Por su parte, el conjunto de la burguesía entendió con igual claridad, que cuando empezaban a cambiar de manos los bancos, las grandes propiedades agrícolas y los monopolios industriales, lo que realmente comenzaba a cambiar era la sociedad misma.

Por ello, actuaron en consecuencia.

El gobierno norteamericano, la CIA, los consorcios transnacionales, en connivencia con la alta burguesía nativa, diseñaron para Chile un modelo contrarrevolucionario complejo, extraordinariamente sofisticado e implacable en su ejecución. No parece existir precedente de una planificación insurreccional burguesa concebida con tal antelación, frialdad y precisión. En su elaboración no se descuidó detalle. Las nociones más modernas, en materia de psicología de masas, se utilizaron para determinar científicamente en cada coyuntura, sucesiva o alternativamente, las distintas formas de acción y lucha. No cabe duda que este modelo insurreccional burgués imperialista es el más completo que se conoce en la historia de América Latina. Incluyó el trabajo político y militar, la agitación de masas y la preparación armada, el cerco diplomático y el boicot económico, el espionaje tradicional y las operaciones encubiertas, el control de los medios de comunicación de masas y la guerra psicológica.

Por cierto, se cometen errores no deseados por el imperialismo. Tal ocurre, por ejemplo, con el asesinato del general Schneider, hecho que, lejos de convertirse en detonante del golpe militar, lo inhibe, facilitando el camino a la elección de Allende por el Congreso Nacional. Pero en la línea gruesa existe una coherencia básica, una combinación armónica de los elementos empleados, los cuales se orientan sustancialmente sobre la pequeña burguesía, pero cuyo destinatario final son las Fuerzas Armadas.

El modelo contrarrevolucionario estaba dirigido a “desestabilizar” el gobierno de la UP (término utilizado por un alto personero de la CIA al describir con “americana” precisión la complejidad de la tarea). Se trataba de erosionar la base de sustentación social, política, económica, y sobre todo militar, del régimen. La determinación fría y resuelta del gobierno de EU en orden a clausurar el capítulo abierto por las clases populares en septiembre de 1970, aparece groseramente revelada, primero en los documentos de la RRR, y confirmada, con posterioridad al golpe, por los más variados testimonios de personeros

norteamericanos, críticos algunos, cínicos los más, y desnudada hasta en sus detalles más domésticos, en el irrecusable informe de la Comisión del Senado norteamericano, presidida por Frank Church.

La faena se inicia ya antes que Allende asuma la presidencia de la República. El gobierno de Frei, aún en ejercicio en los dos meses siguientes a la elección presidencial, es el encargado de dar los primeros pasos. Mientras grupos extremistas de derecha precipitan actos de sabotaje y terrorismo, el ministro de Hacienda del régimen ocupa una cadena nacional televisada para anunciar al país una eventual debacle económica. El objetivo inmediato de esta "inocente" intervención fue provocar un pánico financiero por medio de una corrida bancaria, una baja drástica de los valores bursátiles y el retiro masivo de los fondos depositados en las instituciones de ahorro y préstamo. La acción no produjo los efectos buscados por la actitud enérgica del Presidente electo, quien obligó a Frei a disponer algunas medidas de emergencia que debilitaron el impacto del fenómeno artificialmente provocado. La estampida financiera había sido concebida como detonante de un cuartelazo en el cual, como más adelante se demostrará, estaban comprometidos altos jefes de las Fuerzas Armadas.¹

Desde el mismo instante en que Allende se instala en La Moneda, la burguesía intenta crear el clima propicio para su juego. Durante largos años especuló con el temor irracional de las personas utilizando el fantasma de la "dictadura marxista", y la afirmación de que el ascenso al poder del movimiento popular sumiría a los chilenos en una atmósfera asfixiante y totalitaria. Sobre este terreno se implementa un accionar polifacético, cuyo objetivo básico era atemorizar a las capas medias, ideológicamente inestables, con imágenes de anarquía, desorden, ausencia de autoridad, incapacidad, ineficiencia y deshonestidad. Ellas estaban destinadas a allanar el camino a una ulterior desestabilización del gobierno y del proceso.

¹ "Se hizo entonces presente (en la reunión del 'Comité de los 40' efectuada el 29 de septiembre de 1970) que probablemente no habría actuación militar a menos que se pudieran dirigir sobre Chile presiones económicas. Estas actuaciones del 'Comité de los 40', y el establecimiento de un grupo de trabajo interagencia para coordinar las actividades económicas encubiertas en contra de Chile, afectaron adversamente la economía chilena; siguió a ellas un pánico financiero importante. Sin embargo el esfuerzo norteamericano por generar una crisis económica, no tuvieron el efecto deseado en la votación del 24 de octubre ni estimularon una intervención militar para impedir que Allende asumiera el poder." "Entre el 5 y el 20 de octubre de 1970, la CIA hizo 21 contactos en Chile con funcionarios claves militares y de Carabineros. A aquellos que se inclinaban por dar un golpe de Estado se les aseguró un fuerte apoyo de los más altos niveles norteamericanos, tanto antes como después del golpe." (Del Informe Church.)

La guerra fue declarada en todos los frentes.

En el plano ideológico se orquesta una campaña con todos los recursos inimaginables. Una formidable red de medios de comunicación se homogeniza bajo la batuta del diario *El Mercurio*, financiado y dirigido directamente por la CIA, según quedó demostrado. La TV, las radiodifusoras, la prensa en general, cierran una gran cadena, junto a libros, folletos, afiches, películas, octavillas. Todo fue utilizado con eficiencia en la búsqueda de provocar un clima social, un "estado de ánimo" susceptible de ser aprovechado en el momento oportuno.

Esta poderosa armazón publicitaria es orientada a envenenar la atmósfera nacional con un ingrediente destinado a provocar estragos antes y después del golpe militar: el odio, el odio dosificado científicamente, sobre todo en la pequeña burguesía y en el ejército.² Primero se trabaja larvadamente; más tarde las consignas son públicas y desvergonzadas: "¡Junten rabia chilenos!" "¡El único marxista bueno es el marxista muerto!" "¡Ya viene Jakarta!" Y terminaron por juntar odio. Un odio espeso, casi palpable. Odio al pueblo, al "roto", al trabajador humilde. Este odio, envasado en los laboratorios CIA, a la vez que agudizaba la lucha frontal de clases, se nutría en ella.

La guerra decretada por el imperialismo fue dada sin cuartel en el terreno político, institucional e ideológico. Las reglas del juego se modifican sin rubor. El régimen presidencial, técnicamente caracterizado por la preminencia del Poder Ejecutivo, deviene en parlamentario por la manipulación coordinada de los demás centros de poder. Después del asesinato de Pérez Zujovic —junio de 1971—, se suelda el entendimiento estratégico entre las fracciones de la burguesía en transitoria disputa. El Parlamento, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República, convergen sincronizadamente en sistemática obstrucción a las tareas de gobierno. Se opera abiertamente, sin guardar apariencias seudoprincipistas y por el contrario, con impúdico abandono de las normas que hasta entonces habían reglado la institucionalidad chilena. El Parlamento no despacha ningún proyecto de ley de iniciativa gubernamental; aprueba proyectos de reajustes de remuneraciones sin financiamiento, a fin de incentivar el espiral inflacionario; remueve ministros atropellando el espíritu y la letra de la Constitución. Los tribunales se autoclausuran frente a los desmanes verbales y físicos de la burguesía insurrecta. Las reiteradas querellas deducidas por el gobierno frente a los increíbles desbordes publicitarios de la oposición son archivadas o sobreseídas; en cambio, las plan-

² A fines de 1972 la oposición contaba con 54 diarios y 98 radios y el gobierno sólo con 10 diarios y 36 radios. Es decir, la derecha controlaba el 64% de los medios de comunicación.

teadas ocasionalmente contra periodistas o personeros populares son acogidas de inmediato con odiosa severidad. Cuando la policía civil sorprende grupos fascistas en actos flagrantes de sabotaje o de terrorismo, el Poder Judicial dispone la libertad de los detenidos. "El señor" contralor hacía lo suyo. Los decretos dictados por el gobierno no eran refrendados o lo eran después de inagotables discusiones, con lo cual se fortalecía la imagen de ilegitimidad.

Un sector del estudiantado secundario, liderizado por la Democracia Cristiana, organiza bandas, que a diario —durante meses— provocan desórdenes en el centro y en barrios elegantes de la capital, destrozando las vitrinas de los locales comerciales, quemando autobuses y automóviles. Cobarde y hábil maniobra de la reacción: utilización de estos "niños terribles" en la búsqueda de un muerto que encendiera la chispa. Actuaban a sabiendas de que el gobierno no podía reprimirlos. En la misma "onda" sacaban turbas de mujeres a la calle. Mujeres bien alimentadas, con pieles y joyas relucientes, golpeaban ollas también relucientes, acompañadas por otras del lumpen marginal, en algaradas constantes donde reclamaban por el "desabastecimiento". Mujeres y niños para tonificar el clima agitativo y vigorizar a la vez las imágenes de caos, desorden y falta de autoridad del gobierno.

En los últimos meses, mientras se estimulaba toda clase de paros y huelgas ilegales, la derecha —con asesoría extranjera— monta una poderosa y eficiente organización terrorista, que lleva el "clima" a niveles de extrema tensión. Asesinan obreros y campesinos; hacen volar oleoductos, líneas férreas e instalaciones eléctricas; atentan contra la vida de dirigentes populares, quemando locales partidarios y llegan a asesinar a uno de los edecanes del presidente de la República.³

En resumen, la oposición burguesa contrarrevolucionaria, autoconstituida en defensora y garante de la legalidad, ubicaba el volumen principal de su ofensiva al margen de ella, mientras imponía al gobierno su respeto como una especie de "camisa de fuerza". Cada vez más éste se enredaba en la tupida red de la juridicidad, bajo cuyo amparo se había generado.

³ "El más prominente de los grupos paramilitares derechistas era 'Patria y Libertad', que se formó después de la elección de Allende el 4 de septiembre, durante el llamado *track* II. La CIA entregó a 'Patria y Libertad', US \$ 38 500 a través de una tercera persona durante el período *track* II, en un intento por crear tensión y un posible pretexto para la intervención militar. Después que Allende asumió la Presidencia, la CIA proveyó ocasionalmente al grupo con pequeñas cantidades a través de terceros..." — "Es posible que fondos de la CIA entregados a partidos políticos hayan llegado a 'Patria y Libertad' y un grupo similar, la brigada 'Rolando Matus' dados los estrechos lazos entre los partidos y estas organizaciones." (Del Informe Church.)

Finalmente, en el terreno económico es donde el quehacer reaccionario adquiere categoría de suprema inescrupulosidad. Planifica lisa y llanamente la destrucción de la economía nacional. En el contexto de una situación de extrema gravedad, determinada por el peso de una inmensa deuda externa heredada, una baja drástica en el precio del cobre y una alza considerable de los productos agropecuarios importados, se inicia una doble ofensiva. Mientras en el exterior el imperialismo obstruye los créditos de los organismos financieros internacionales, embarga nuestro cobre para provocar inestabilidad en el mercado y bloquea el abastecimiento de los insumos indispensables para la gran minería y la industria; en el interior del país la burguesía hace lo suyo. Ésta deviene en burguesía especulativa al amparo de un mercado negro, debidamente administrado tras el objetivo de lograr dividendos políticos y financieros. Se utiliza el sabotaje en las empresas estatizadas. El paro empresarial de octubre de 1972 significa a Chile una pérdida neta de 200 millones de dólares; la huelga de un sector minero en julio de 1973, arrojó otra de 60 millones de dólares por concepto de menor producción. Salieron subrepticamente del país más de trescientas mil cabezas de ganado, mientras eran sacrificadas miles de vaquillas en estado de parición para provocar problemas de abastecimiento.

Tal era el grado de resolución. A tal extremo llega la criminalidad de los métodos empleados.

Es a partir de la identificación del adversario, de su decisión frente al proceso, del potencial acumulado para destruirlo y de los medios utilizados, de donde podemos inferir la entidad e incidencia de los factores convergentes en la derrota.

ALCANCES NECESARIOS

Estimamos haber expuesto con claridad nuestro pensamiento frente a dos proposiciones íntimamente vinculadas, cuya proyección guarda decisiva vigencia en la definición de las opciones tácticas y estratégicas de las fuerzas revolucionarias.

La primera se refiere a la presunta incapacidad de la dirección de la Unidad Popular para lograr un entendimiento con el Partido Demócrata Cristiano, el cual eventualmente habría "salvado" el proceso. La segunda, la carencia de una política correcta hacia los sectores medios, que habría permitido ampliar la base de sustentación del gobierno, e impedido el supuesto aislamiento de la clase obrera.

Reiteramos lo anteriormente señalado. Nos parece una majadería seguir insistiendo, al menos desde el interior de los partidos populares, sobre la factibilidad de un entendimiento, al que la contraparte era esencialmente hostil y lo sigue siendo, incluso hoy, tres años de ocurrido el golpe militar. Si el diálogo no resultó viable fue por calculada decisión de la dirigencia DC y no por responsabilidad de la dirección revolucionaria o de algunos de sus partidos. A menos de elevar a la categoría de delito político el escepticismo de aquellos que oportunamente previeron el desenlace.

Frente al problema de las capas medias, coincidimos en que hubo un tratamiento equivocado, consistente —en esencia— en subestimar los factores ideológicos a los cuales éstas adscriben su comportamiento social y político. Creemos que pudieron y debieron evitarse errores imputables al “izquierdismo” cuyo efecto innegable fue estimular las aprensiones y temores de las masas pequeñoburguesas; pero afirmamos, que en lo fundamental, sólo una política de muy largo alcance, capaz de quebrar la persistencia y solidez de su sistema ideológico, pudo haberlas llevado a confluir en un proceso revolucionario, junto al proletariado y a los campesinos.

El aislamiento de la clase obrera. Nos parece importante reiterar nuestro pensamiento —formulando algunas precisiones— en torno a una afirmación profusamente recogida en ensayos y estudios sobre la experiencia chilena: el pretendido aislamiento de la clase obrera, consiguado como la causa protagónica del desenlace.

Curiosamente este juicio es reiterado —incluso en documentos oficiales de partidos de la UP— como una suerte de axioma. Aparece así predeterminado al margen de toda línea argumental. No es la conclusión de un análisis, sino por el contrario la premisa de ulteriores afirmaciones.

¿Existió tal aislamiento? De ser ello efectivo, ¿puede considerarse que sea “la más determinante” causa de la derrota?

Frente a la interrogante fundamental, los socialistas hemos expresado insistentemente un criterio diferente. Por el contrario, afirmamos que en ninguna instancia del proceso, ni siquiera en el momento del desenlace, la clase obrera estuvo aislada. Mantuvo agrupado en torno suyo un porcentaje muy alto del campesinado, a importantes sectores del subproletariado urbano y rural, a más del 40% del estudiantado y sin duda, a una parte no despreciable de la pequeña burguesía incluyendo a los mejores cuadros técnicos y profesionales del país. Una elemental ponderación estadística y electoral nos lleva a concluir, que ni siquiera en el instante en que la ofensiva reaccionaria

alcanza su expresión más virulenta (marzo de 1973), la clase obrera estuvo "aislada" del apoyo de otros estratos sociales.

Los resultados electorales, que dan una imagen parcial de la realidad social, ubican a la Unidad Popular con un 44% del electorado. Imaginar aislado un bloque político que controla esa fuerza electoral es un absurdo. Por lo demás, ese porcentaje representaba una fuerza social cuantitativamente superior. Según la dirección de registro electoral, un millón de electores no estaban inscriptos, no obstante tener derecho a ello. Era indudable, que en su mayoría abrumadora estos electores potenciales correspondían a los sectores más pobres de la ciudad y el campo y eran partidarios del Gobierno Popular.

¿Se puede entonces seriamente sostener que una coalición social que representaba algo más algo menos del 55% de la población estaba aislado? ¿Aislado de quién? ¿Del otro 45%? ¿La mayoría aislada de la minoría?

Aun si imputáramos a la UP el volumen absoluto de los votos de la clase obrera (650 000) éstos no cubrían el 50% de los sufragios obtenidos (1 650 000 votos).⁴

De esta manera, aproximadamente un millón de votos correspondían a campesinos, pequeña burguesía asalariada, estudiantes, profesionales, e incluso comerciantes, pequeños propietarios, transportistas y artesanos. Un bloque de esta naturaleza no puede considerarse aislado.

Podría argumentarse que esas fuerzas abandonaron el gobierno en los últimos meses anteriores al golpe. Quienes así lo afirmen "olvidan que justamente siete días antes del golpe, con motivo del tercer aniversario del triunfo, se hicieron en todos los rincones y grandes ciudades del país enormes manifestaciones de apoyo al gobierno. En Santiago, no menos de 800 000 personas desfilaron frente a La Moneda a los gritos de 'Allende, el pueblo te defiende', 'mano dura, no vinimos por las puras'; 'crear, crear, crear, poder popular'. Si todos estos cientos de miles de manifestantes a lo largo de todo el país, eran sólo

⁴ El proletariado chileno representaba en 1970, cerca de 650 000 obreros. Los campesinos sumaban no más de 600 000 personas, de las cuales, aproximadamente un 30% no estaban inscritas en los registros electorales. De todo ello se infiere que un sector mayoritario de la pequeña burguesía asalariada, de profesionales, de estudiantes, e incluso un segmento minoritario indudablemente de la pequeña burguesía no asalariada, dio su apoyo al Gobierno Popular. Esta afirmación fue corroborada por el CENOP (organismo de investigación de opinión pública integrado por socialistas y comunistas), el cual realizó encuestas en los días que precedieron a la elección de marzo de 1973, las cuales anticiparon con sólo errores de decimales los resultados. Estos sondeos atribuyeron al PS y al PC una representación de capas medias no inferior al 25% del electorado.

de la clase obrera, significa que la responsabilidad de los partidos obreros es mayor, porque no supo conducir a su destino a una clase cuantitativa y cualitativamente desarrollada. Lo que ocurre es que efectivamente no sólo eran trabajadores. ¿Es que no había allí empleados de banco, de correos y telégrafos, de la CORFO y de cuanto organismo estatal existía? Eran éstos minoría. Es cierto. ¿Pero hay alguna revolución en que estos sectores hayan estado en mayoría con ella? ¿No tuvieron los bolcheviques problemas con los empleados de correos, con los funcionarios, con los ferroviarios? En cuanto a camioneros y pequeños comerciantes tuvimos sectores minoritarios con nosotros hasta el golpe mismo. No olvidemos cómo nos pedían ayuda: unos piquetes de obreros que los acompañaran en su recorrido para que no fueran provocados por los gánsters de Vilarín; los comerciantes, para que los protegieramos de las hordas de 'Patria y Libertad', y poder abrir sus negocios. No. La clase obrera no estuvo aislada. Los que estuvimos aislados y ajenos a una política de defensa de la revolución fuimos nosotros, la Unidad Popular. Y sobre eso falta la auto-crítica." (Declaración del Secretariado Exterior de ps.)

Afirmamos categóricamente: la clase obrera no estuvo aislada. En cambio, sí es efectivo, que aun sin estar aislada, no logró concitar en torno suyo una fuerza militar y política suficiente para vencer. Aquí está el meollo del problema. No basta el 51% cuando el resto —la minoría derrotada en términos sociales y electorales— tiene a su lado la inmensa mayoría del poder económico, "del sentido común", las Fuerzas Armadas, del aparato represivo, de los medios de comunicación de masas y articula el omnipresente poder del imperialismo. La minoría "con fuerza" manda, arbitra y decide. Éste es el problema esencial, centro de la preocupación de los partidos obreros europeos, en la búsqueda de una solución correcta, y en el marco de sus realidades específicas.

Hay quienes han enfatizado acerca de la influencia decisiva que tuvo en la derrota del Gobierno Popular "la ausencia de una dirección única", producto de la existencia de dos líneas estratégicas, que habrían operado simultánea y alternativamente, sin llegar ninguna de ellas a implementarse consecuentemente. Pensamos que esta apreciación es equívoca. Lo negativo no está —fundamentalmente— en la existencia de dos estrategias, sino en la aplicación obstinada de una de ellas, errónea. No es la carencia de una dirección única la que debe aislarse como factor sustantivo de la derrota, sino el quehacer de una dirección equivocada. Hasta el instante de su dramática extinción el proceso se aferra con extraña fidelidad al objetivo estratégico: la

institucionalización de una vía política al socialismo. El sacrificio heroico de Allende en el Palacio de los Presidentes de Chile es el símbolo trágico de la lealtad guardada a una determinada concepción estratégica, conducida hasta sus últimas consecuencias. Es precisamente, la pretensión estéril de asirse ciegamente a las instituciones liberales, cuando ya la burguesía había arrastrado la lucha de clases fuera de ella; la falta de previsión y capacidad para alterar las formas de lucha, cuando fue necesario, lo que define —en esencia— la derrota político-militar de la UP.

Desde otra perspectiva, se ha atribuido a “desviaciones izquierdistas” —en términos concretos a la acción voluntarista del ultrismo— una responsabilidad decisiva y directa en la consumación de la tragedia sufrida por nuestro pueblo. Los excesos de la ultraizquierda son reales, y por cierto, ocasionaron no poco daño al proceso. Pero nos parece una deducción simplista y unilateral sostener, que a no mediar las demasías verbales y conductuales de unos “cuantos extremistas”, Chile habría transitado en forma pacífica, “en libertad y en democracia” al socialismo. En el ánimo de quienes magnifican el peso de estas desviaciones, parece pesar más el quehacer de algunas decenas de dirigentes ultristas, que el accionar coordinado de la RRR, la Anaconda, la CIA; un ejército prusiano; una burguesía expropiada; un latifundio desposeído; una pequeña burguesía aterrorizada por la inminente instauración de una “dictadura totalitaria”; y un Nixon dispuesto a hacer “aullar la economía”.

Otros atribuyen una influencia decisiva, a lo que habría sido una incorrecta política económica.

Nos parece profundamente erróneo evaluar la experiencia económica de la UP, fuera del contexto prefijado por la empresa revolucionaria en la cual estaba inscrita. En lo fundamental, es la crisis de transformación del sistema, los efectos de una coyuntura internacional adversa, y el volumen de la colosal ofensiva externa e interna, orientada a “desestabilizar” la economía, la causa determinante de la crisis económica, generada en la última época del Gobierno Popular.

Otro punto de vista bastante divulgado es el que tiene relación con el ritmo presuntamente inadecuado del proceso. Éste se habría “apresurado” demasiado, inclinándose peligrosamente a la izquierda. El desenlace abrupto de la experiencia chilena no se habría producido, si

el gobierno se hubiera dado una "pausa", trazando los tiempos razonables del programa revolucionario.

Tal afirmación cobra especial trascendencia, sobre todo, porque en torno suyo se desplegó —en el curso del proceso— un amplio y sostenido debate.

A nuestro juicio, influye en este enfoque una concepción mecanicista de la revolución, imaginada ésta como un simple dispositivo, sujeto a la voluntad de sus conductores y cuyo ritmo es posible acelerar o retardar al arbitrio. Quienes así piensan prescinden de los factores más sorprendentes del fenómeno revolucionario: la dinámica generada por éste; las tensiones que desata, la exaltación de una conciencia colectiva, en la cual afluyen la pasión, la voluntad y la imaginación de centenares de miles de seres humanos.

La "congelación" del proceso no era posible sin sacrificar la revolución. No habíamos alcanzado niveles que cuestionaran seriamente los fundamentos capitalistas de la sociedad, ni superado los problemas de su desarrollo dependiente, ni mucho menos, habíamos logrado una estructura aceptable de fuerza y poder.

La consecuencia práctica, visible e inmediata de una consolidación prematura, hubiera sido la desmovilización y frustración de la clase obrera. Las masas habían llegado a formular una exigencia revolucionaria más allá de la voluntad de sus direcciones. Entendemos era deber de nuestra dirección encauzar y orientar esa exigencia. Pero siendo ella legítima, la detención del proceso significaba traicionar sus aspiraciones y enajenar el apoyo entusiasta al gobierno. Y todo esto ¿a cambio de qué? ¿De pacificar a la pequeña burguesía? ¿De crear una situación de equilibrio hasta 1976 cuando debían celebrarse las próximas elecciones presidenciales? ¿En espera de un mejoramiento de la situación económica? ¿Acaso disuadir al imperialismo y a la burguesía lanzados desde antes de la ascensión de Allende en la pendiente conspirativa?

Detener la experiencia revolucionaria en un límite predeterminado, sólo tenía sentido y factibilidad en el marco de una estrategia diferente, perceptible por las masas, que nos hubiera dado tiempo para montar la defensa armada del proceso.

Tampoco la pausa resolvía el problema de la escisión del Estado y su consecuencial impotencia. Los segmentos de poder, repartidos entre la burguesía (Parlamento, Poder Judicial, Contraloría y aparato represivo) y el movimiento revolucionario (Poder Ejecutivo) terminarían por neutralizarse mutuamente, precipitando al país al caos y al desorden, como efectivamente ocurrió.

No hubo soluciones a mitad de camino. La única respuesta era la de seguir avanzando hasta originar una situación irreversible. Sólo

la ofensiva ininterrumpida de las fuerzas revolucionarias, en la consecución de una línea estratégica correcta, era capaz de quebrar la resistencia de la burguesía. El Partido Socialista así lo sostuvo reiteradamente en el curso del proceso. En el informe del Pleno de Algarrobo dijimos: "Lo más correcto es afirmar que éste es un proceso revolucionario que conduce a la toma del poder y abre paso al socialismo y que lo recorrido no nos permite consolidarlo, deteniéndolo en la marcha, sino profundizarlo. Desde un punto de vista político dicha profundización nos lleva a enfrentamientos cada vez más duros con la burguesía y el imperialismo." "La agresión armada del imperialismo y la burguesía se dará necesariamente en gran escala comprometándose toda su fuerza militar, social, económica, política e ideológica en una aventura en que se juegan definitivamente la última carta para el control del poder."⁵

En la larga enunciación de los errores cometidos, incluso se ponderan con cierta espectacularidad algunas expresiones de deshonestidad administrativa y de sectarismo, vicios indudablemente existentes, pero en medida muy inferior a la imaginada. La infame y sistemática campaña del adversario contribuyó a fraguar aquellas imágenes. Finalmente, la crítica al gobierno hecha por su incapacidad para mantener el orden público y colocar en cintura los desmanes de la burguesía, ignora que ella era sólo el efecto de una causa más honda y extendida: la carencia de una autoridad real, de una fuerza efectiva. Finalmente, también se ha especulado sobre los efectos milagrosos que habría traído una significativa ayuda financiera de parte del campo socialista.

LA DESVIACIÓN PRINCIPAL

A nuestro modo de ver, la simple enunciación de los errores cometidos dejan en la penumbra la causa verdadera, última y profunda de la derrota popular. Ésta sólo puede aislarse a partir de un factor no suficientemente destacado: el poderío del adversario y su determinación de poner término —al precio necesario— al proceso revolucionario que amenazaba incendiar el cono sur del continente.

Entendemos que este factor es consustancial a la revolución. Pero también lo es su ponderación correcta. En ella no se permite a la dirección revolucionaria la comisión de errores. La inmensa proyección de la experiencia iniciada, si no hubiéramos contado con evi-

⁵ Informe del CC al Pleno de Algarrobo, marzo de 1971.

dencias concretas e inexcusables, bastaba para prever el grado de decisión del adversario. ¿Qué podía desalentar al imperialismo? ¿Quizá sí sólo la perspectiva de enfrentar un nuevo Vietnam? ¿Qué podía disuadir a la burguesía? Sólo la certeza de encontrarse frente a un proceso con voluntad de lucha y capacidad militar de defensa. La fuerza y poderío del enemigo era entonces un elemento de la realidad concreta, que reclamaba de los dirigentes populares una respuesta antelada y eficiente, tanto desde el punto de vista táctico, como estratégico.

Es un hecho cierto que EU evaluó correctamente y con la debida anticipación, cuál era el alcance y trascendencia, tanto para América, como para el mundo, de un eventual triunfo del movimiento popular chileno. La dirección revolucionaria, en cambio, con una visión parroquial de su propio quehacer, no dimensionó la proyección de su victoria. Sólo con posterioridad al golpe detectó la magnitud internacional de la experiencia liderizada.

A nuestro juicio, la derrota de la Unidad Popular no se debe a una suma de errores remediables, sino a la comisión de un error irremediable: la incapacidad de la dirección revolucionaria para construir la defensa militar del proceso, a contar del enfrentamiento inevitable, no por voluntad nuestra, sino por la decisión de sus adversarios. En otras palabras, el problema cardinal, esto es, el problema del poder, no fue resuelto y no podía serlo, mientras se conservara una confianza ciega e irracional en la institucionalidad, que la propia burguesía había resuelto destruir.

¿Qué sentido tiene acumular sin orden ni ponderación lógica todos los errores cometidos? ¿Qué fenómeno revolucionario está libre de ellos? ¿Cuál proceso —victorioso o derrotado— no está preñado de demasías, excesos, omisiones y equivocaciones? Más allá de cierto masoquismo intelectual, quizá de un candoroso sentido expiatorio, aparece implícita —honesta o interesada— la pretensión de evadir la cuestión quemante, que está en el meollo de la experiencia chilena: ¿era o no viable, en el Chile de 1970-1973, el tránsito pacífico al socialismo “en pluralismo, libertad y democracia”?

Los errores señalados existieron. Los hubo en la dirección de la economía. Las desviaciones ultristas ocasionaron no pocos perjuicios. Quizá si el ritmo del proceso fue exageradamente acelerado. Hubo serias manifestaciones de sectarismo. La política hacia los sectores medios pudo ser más efectiva.

Todos, de alguna manera influyeron en el desenlace. No los menospreciamos. Requerían de una atención más intensa y seria, por parte de la dirección, y habría sido esencial superarlos para el éxito de la gran empresa revolucionaria. Pero aunque teóricamente los hubiéramos

corregido o evitado, no se alteraba por ello el destino del proceso si persistíamos en dejar sin respuesta el problema estratégico fundamental: un proceso revolucionario sin armas, frente a un adversario que se había reservado el monopolio de las armas y a mayor abundamiento, controlaba el aparato burocrático militar del Estado. Es el caso de un enfermo de cáncer, cuyo estado se agrava con otras serias complicaciones conexas con el mal principal. Éstas deben ser atendidas, ya que en su conjunto o separadamente pueden precipitar el deceso. Por lo que inevitablemente provocará la muerte, es el cáncer. Sólo su tratamiento oportuno puede evitar el desenlace fatal.

Naturalmente, el problema aparecerá, teórica y prácticamente superado, si trasferimos la responsabilidad del desastre a alguno de los muchos factores negativos presentes en el proceso. De este modo, siendo estos errores susceptibles de su corregidor, la factibilidad de la "vía chilena al socialismo" permanece intocada e inmaculada como categoría teórica y práctica.

Es ésta una manera elegante e indolora de eludir la cuestión cardinal. Un problema complejo, de trascendencia medular para el movimiento revolucionario chileno y mundial, es reducido a términos de extrema simplicidad: sin tecnócratas ineficaces, sin ultristas pequeñoburgueses y con dirigentes capaces de comprender la "potencialidad revolucionaria de la Democracia Cristiana"; EU se habría limitado a observar paternalmente la experiencia, la burguesía candorosamente se hubiera dejado expropiar y las capas medias enfervorizadas habrían corrido tras el proletariado para ayudarle a destruir la sociedad capitalista.

Precisamos categóricamente nuestro pensamiento. En Chile de 1970, se pudo ganar el gobierno al amparo del sistema sociopolítico vigente, incluso cubrir determinadas etapas del proceso de transformación, sin que aquél se resistiera. Pero lo que no era viable, lo que no era posible, era la mantención —sin fractura— de una línea político institucional hasta "iniciar la construcción del socialismo". En algún tramo del itinerario el enfrentamiento debía producirse —por exclusiva y explicable voluntad de las clases dominantes— y para ello el proceso tenía —obligatoriamente— que contar con una estructura defensiva militar.

¿Cómo ignorar esta perspectiva?

Para EU habíamos devenido en un problema extraordinariamente serio. El Gobierno Popular, surgido por una vía electoral, rebasaba sorpresivamente los límites de la concepción defensiva de su sistema de seguridad; se anunciaba como un peligroso precedente, capaz de repercutir en Europa occidental, en Francia e Italia especialmente, afectando el núcleo de sus intereses hegemónicos. La experiencia chi-

lena se incorpora a la temática de combate de los movimientos de izquierda de todo el mundo. En el plano de los intereses económicos, junto con nacionalizar el cobre y todas las riquezas básicas, le adosábamos una doctrina —la “doctrina Allende”— que cuestionaba la globalidad de las inversiones norteamericanas en el mundo.

Internamente, empezábamos a dinamitar el poder de la burguesía financiera, monopólica y terrateniente. Expropiábamos sus latifundios, interveníamos sus grandes empresas, tomábamos el control de los bancos y abríamos las compuertas de un proceso cuyo papel histórico —explícito y confeso— era nada menos que “traspasar el poder de una clase a otra” e “iniciar la construcción del socialismo”, y como si esto no fuera suficiente, el proceso lo dirigían dos partidos marxistas-leninistas.

Dada la enorme magnitud de aquel proyecto, teníamos la obligación de concluir en el carácter insoslayable del enfrentamiento. Si las extraordinarias “especificidades nacionales”, atribuidas al sistema político chileno, conducían a olvidar las leyes generales del tránsito del capitalismo al socialismo, la decisión del adversario, en cambio, nos obligaba a adecuar el proceso, en todos los planos, en particular el militar, a las nuevas exigencias.

Los acontecimientos del camino iban encendiendo las señales de alerta. Siete conatos subversivos se detectaron en el curso de los tres años de gobierno. Asesinan al general en jefe del Ejército y al edecán del presidente de la República; recurren al sabotaje, al terror, a la huelga criminal; intentan paralizar la producción; se promueve la especulación, el acaparamiento y el mercado negro. En los últimos tres meses anteriores al *putsch* fascista, se cometen veinticuatro actos terroristas diarios. Uno cada hora. Mientras tanto, el aparato represivo del Estado burgués, garante de la ley y del orden, miraba plácidamente el cielo.

La contrarrevolución administra la legalidad. Impunidad para la burguesía; severo y vociferante control para el movimiento popular. Cuando las fuerzas populares golpean: ¡Pare la pelea! Cuando la burguesía ebria de odio, asesina y destruye: ¡Siga la pelea! Esta extraña situación, que desde el conjunto de la institucionalidad reservaba a la reacción la facultad de interpretar y romper la legalidad a su antojo, era la notificación clara, brutalmente clara, de la clausura para las fuerzas populares del desarrollo pacífico de la revolución. Lo que la burguesía nos anunció mil veces en su conducta cotidiana, era nada menos que su determinación de destruir las formas representativas del Estado burgués, para preservar su esencia capitalista.

Ante esta decisión, la única opción realmente correcta era la de prepararse para alterar —con éxito— las formas de lucha, en el ins-

tante oportuno. Esto significaba pura y simplemente armar la revolución, otorgarle defensa al proceso, renunciar a caer inermes ante el enemigo.

El 11 de septiembre puso al desnudo un hecho dramático: la revolución carecía de defensa. Frente a la burguesía armada, el proletariado y sus aliados no estaban aislados, pero sí estaban desarmados.

¿Por qué esta confianza supersticiosa en la solidez de las instituciones políticas chilenas? ¿Por qué se ignoraron las leyes generales de la revolución, aprendidas en el abecedario del marxismo-leninismo? ¿En qué se fundamentaba este apacible voluntarismo, este idealismo, esta ilusión?

La larga estabilidad social de Chile había “internalizado” el mito de un “país original”, sin analogismos ni precedentes. Ciento sesenta años de evolución republicana, democrática y representativa; la imagen optimista y presuntuosa de la democracia más antigua de América, excepción hecha de la de EU; el modo peculiar de absorber los conflictos sociales acuñados en medio siglo de regímenes oligárquicos, populistas y reformistas; todo confluía en un sentimiento generalizado—más que en una concepción elaborada— sobre una suerte de “exclusivismo nacional”. Chile era la “Suiza de América”, y sus instituciones se comparaban a las más venerables del viejo mundo. Era por excelencia un país civilizado, culto, que amaba la vida política, los juegos parlamentarios, las formas legales y la retórica democrática. Todo en él se daba con características singulares. Singular su democracia, singular su vía “inérita” de tránsito al socialismo, y qué terriblemente singular, “su tiranía”.

Este mito impregnó hasta sus raíces la vida política de Chile. De él nace la desviación más decisiva del proceso, que atribuye ilimitadas potencialidades democráticas al sistema institucional y visualiza al conjunto de las Fuerzas Armadas, como un cuerpo esencialmente profesional y prescindente, y en tal calidad, erigido en garante del proceso en marcha. Se llegó a pensar que en Chile, “donde todo era posible”, un ejército educado en un rígida disciplina prusiana y en las nuevas concepciones político-militares “antisubversivas” yanquis, podía convertirse en “guardia suiza” del proceso revolucionario. Y no sólo se renunció a desarmar a la burguesía, a dismantelar su aparato burocrático-represivo, sino por ley, se le aseguró el monopolio exclusivo de las armas, entregándose a los uniformados el control de las pocas existentes fuera de la órbita castrense. Era ésta una nueva reiteración de fe en el mítico “ejército neutral”, aséptico a la lucha de clases y ubicado por sobre ella.

En lo fundamental, esta desviación ignoró las lecciones porfiadas de la historia, escritas con la sangre de muchos pueblos. Las clases

propietarias jamás se dejan desposeer sin recurrir a la violencia; no importa cuán legales sean los procedimientos empleados, ni democrático el proyecto que cuestiona su poder; que no existe una revolución desprovista de un poderoso fundamento de fuerza; y que una revolución proletaria, defendida por las armas de la burguesía, es una utopía inexcusable. Si esta desviación pudo alcanzar una expresión tan determinante, fue porque coincidía con una de las dos concepciones estratégicas.

Según esta línea estratégica, el proceso revolucionario se desarrollaría de manera pacífica, progresiva y gradual, a partir de una primera etapa, democrática y antimperialista, netamente diferenciada, a la que sucedería la etapa de transición al socialismo, sin necesidad de ruptura violenta del orden jurídico vigente. Sólo en esta segunda fase se abordaría el problema del poder.

Tal concepción, predominante en la conducción del gobierno y en la UP, terminó por expresarse explícitamente en los planteamientos formulados, después de las elecciones de marzo de 1973, por el secretario general del PC, Luis Corvalán, en su informe al último Pleno de su partido. En ese informe, definía el objetivo último de "asegurar lo que hemos llamado más de alguna vez el desarrollo normal de los acontecimientos, con vista a generar en las elecciones presidenciales de 1976, un nuevo gobierno popular y revolucionario que continúe la obra que le ha correspondido iniciar al que ha encabezado el compañero Salvador Allende".

La segunda línea estratégica se identificaba con el contenido revolucionario definido en el Programa Básico. Impulsaba resueltamente las reformas antimonopólicas, antimperialistas y antilatifundistas, entendiendo que este solo hecho, exigía resolver en términos ineludibles el problema del poder. Así, la revolución se concebía como un proceso ininterrumpido, de carácter socialista, cuyas diferentes fases no se implementarían en etapas de distinto signo. En consecuencia, valorizando como un hecho extraordinariamente positivo la instalación de las fuerzas populares en el gobierno y las posibilidades de utilizar la institucionalidad vigente, entendía que el objetivo central era crear un poder real, un poder militar propio; y un poder social surgido "desde la base", que permitiría remplazar el Estado burgués por un nuevo Estado, afianzado en este poder revolucionario.

En la pretensión de eludir la causa definitiva y última de la derrota se sostiene que "la situación geopolítica de Chile obligaba al movimiento de la Unidad Popular avanzar obligatoriamente por el camino

político institucional e impedir que se crearan los factores económico-sociales que permitieran la ofensiva armada de sus adversarios".⁶

Creemos que la disposición de la reacción, tanto chilena como norteamericana, en orden a yugular la experiencia revolucionaria, no dependía de la "buena conducta" observada por las fuerzas transformadoras ni del cuidado puesto en respetar "los márgenes admisibles" exigidos para ella. La moral política de la burguesía jamás ha requerido de "pretextos" para normar su comportamiento. Por el contrario, la historia de las luchas sociales está atiborrada de hechos subalternos y marginales, elevados a la categoría de pretextos y de monstruosas imposturas, exhibidas ante el mundo como justificativos políticos y morales de sus crímenes. La fascistización de la pequeña burguesía, como antes lo hemos señalado, no estaba determinada por la conducta callejera y altisonante de la ultraizquierda. Su causa íntima se encuentra en el peligro que amenaza su estatus cuando adquiere fuerza la insurgencia de los pueblos.

La oligarquía financiera y agraria de España, coludida con el fascismo alemán e italiano, no necesitó de pretextos para desencadenar la guerra civil. Inventó estos pretextos, al igual que en Chile: "el caos económico", "la anarquía social", la "conspiración del pc español" y el "fraude electoral" de febrero de 1936. En Alemania, Hitler incendia el Reichstag y responsabiliza a los comunistas. En Irán, bajo distintos pretextos, la CIA ordena derrocar el régimen del primer ministro Mossadegh, por su pretensión de nacionalizar el petróleo: más de 60 oficiales fueron ejecutados, unos 600 encarcelados y otros miles fueron gradualmente licenciados. En Guatemala, la United Fruit financia un ejército mercenario para derrocar al presidente constitucional Jacobo Arbenz, a quien acusaban de "comunista" por haber expropiado los latifundios de la ... United Fruit. En Brasil, la burguesía derriba el gobierno de Goulart aduciendo como causa última una deliberante reunión de la marinería. En Indonesia, la CIA fabrica la leyenda: el pc era un instrumento de China roja. Tenía un plan secreto para infiltrar y dividir a las fuerzas armadas, dar un golpe y eliminar físicamente a civiles y militares incluidos en una "misteriosa lista". Así se preparó la masacre de cientos de miles de ciudadanos. De manera que el tinglado montado en Chile ya había sido utilizado con anterioridad. El "Plan Z", en tanto farsa grosera y canallesca, en modo alguno era libreto inédito.

En Chile, veinticinco años antes, Gabriel González Videla había prefabricado un complot comunista, consistente en una serie de actos

⁶ Joan E. Garcés, *El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende*, edición argentina, 1973.

terroristas, para colocar dicho partido fuera de la ley, proscribir sus organizaciones y perseguir a sus militantes. Así cumplía la instrucción perentoria del Departamento de Estado norteamericano, impartida simultáneamente a los gobiernos de Italia, Francia y Bélgica. ¡Y en ese entonces no hubo “izquierdistas”, dentro ni fuera del gobierno, que sirvieron de pretexto!

Pretender que el quehacer de la clase hegemónica está condicionado por el “mal comportamiento” de los sectores revolucionarios es —por cierto— acientífico. Siempre aducirá un motivo real o artificial, pero no será éste el que determina su conducta y preside su lógica. El pretexto nunca explicitado, el que establece la verdadera relación de causa y efecto, encuentra su explicación en la más vieja ley marxista de la historia: las burguesías jamás se dejarán expropiar pacíficamente. Éste será, en definitiva, el único y verdadero argumento. Lo anterior, repetimos, en modo alguno implica un afán de minimizar el daño ocasionado por el ultrismo. Lo hemos dicho. Sus torpezas alimentaron y justificaron la estrategia del adversario y facilitaron su cometido. Su conducta debió haber encontrado en la dirección revolucionaria una respuesta más resuelta. Pero de allí a trasformarlo en un “chivo expiatorio”, que expurgue nuestras culpas hay una gran distancia.

Durante los dos años y diez meses de gobierno, la UR tuvo a su alcance dos opciones que dependían de su propia voluntad y no de factores ajenos. No eran excluyentes y pensamos ambas debieron ser complementadas.

La primera, históricamente ineludible: haber elaborado una estrategia de poder —a partir de la previsión del inevitable agotamiento de la institucionalidad— capaz de generar una estructura militar defensiva del proceso. Esta tarea implicaba el desarrollo de una “política militar”, que paralelamente a un esfuerzo específico al interior de las Fuerzas Armadas, construyera en el seno de las masas un poder disuasivo. Por lo demás, ésta habría sido la única posibilidad teórica de evitar el enfrentamiento. Dicho en otros términos: la vía pacífica al socialismo sólo era factible desde posiciones de fuerza. Resulta pertinente reiterar una conclusión expuesta en otros capítulos: si el proceso revolucionario hubiera contado con una organización armada, difícilmente habría sido derrotado. De tal magnitud era el espíritu combativo de las masas, su coraje, su conciencia revolucionaria y su decisión de lucha.

Mirado el problema retrospectivamente parece asaz absurdo. Pero el hecho cierto es que en el seno de la dirección revolucionaria, ni antes ni durante el gobierno, jamás se discutió una estrategia armada.

Y no porque se la considerara inviable. Simplemente fue desestimada a partir de la convicción, casi axiomática, de que la estabilidad política chilena haría posible el tránsito al socialismo “en pluralismo, libertad y democracia”. No se discutió una estrategia de poder, porque aparecía implícita la idea de que ella se sustentaba en el sufragio universal. Peligrosamente se olvidaba a Marx: “El sufragio da el derecho a gobernar, pero no da el poder para gobernar.”

Inexplicablemente el problema de la vía armada se soslayaba en los mismos instantes en que el gobierno popular aparecía desnudo de autoridad efectiva. La burguesía actuaba con impunidad utilizando todas las formas de lucha, donde y cuando le daba la gana. El gobierno estaba indefenso, impotente, maniatado. No pudo responder a la ofensiva “militar” de la oposición, con una contraofensiva también militar, que impusiera de un modo definitivo su autoridad. Nos empeñamos en aferrarnos a una legalidad que la burguesía, hacía ya tiempo, había enviado al desván de los trastos inservibles.

La segunda opción que tuvo el movimiento popular, en la perspectiva de buscar una real legitimación a través de los mecanismos institucionales, fue la de convocar a un plebiscito, inmediatamente después de la elección municipal de abril de 1971, y aun en oportunidades posteriores, aunque en condiciones más desventajosas.

En aquella época, la coalición gubernamental se había remontado sobre el 50% de los sufragios. El Partido Socialista planteó con insistencia la convocatoria a un plebiscito, entendiendo claramente que aquella coyuntura colocaba al movimiento popular ante la situación de conquistar nuevas posiciones institucionales, en la lucha por el control del aparato estatal.

Era la única posibilidad, desde el interior del aparato estatal, de ganar una nueva cuota de poder, de diseñar nuevas reglas de juego a tono con la correlación de fuerzas emergentes.

Esta iniciativa fue desestimada en el seno de la Unidad Popular, tanto por los sectores más moderados como por los “izquierdistas”, sosteniéndose que “un proceso revolucionario no se juega en las urnas”. La aseveración era correcta siempre y cuando existiera la posibilidad y la disposición de jugar su destino en el terreno deseado por el enemigo. En 1971, y hasta su extinción, el proceso no tuvo más alternativa que buscar una legitimación precaria en las urnas o una definitiva legitimación en las armas. Ambas conllevaban riesgo. Un riesgo insoslayable.

Puntualizamos nuestro pensamiento. No creemos que el plebiscito —supuesto el triunfo— fuera una especie de “pomada mágica”. En sí no evitaba el enfrentamiento, pero posibilitaba una mejor adecuación del movimiento revolucionario, lo robustecía en todos los frentes, in-

cluso en el militar, y le concedía un tiempo inestimable de preparación para la contingencia del choque.

Naturalmente no se agotaban en el plebiscito los márgenes de riesgo. Ganarlo podía significar incluso la precipitación del golpe. El sufragio universal no garantizaba la estabilidad del gobierno revolucionario. El 51% no basta ni bastó. Siempre existirán argumentos y "pretextos" justificativos, para ejercer la violencia armada en contra del pueblo; un supuesto "fraude electoral", algún infernal "Plan Z" o un providencial "conflicto fronterizo". Pero indudablemente, en tal eventualidad, las condiciones se hacían más difíciles para el adversario.

14. TIRANÍA FASCISTA

El asesinato de Allende es consecuencia de algo más profundo que el odio de la burguesía. La muerte del presidente de Chile no es sólo el simple ajuste de cuentas con el líder iconoclasta e irreverente que pretendió dar un uso abusivo a la institucionalidad liberal. Tras ella está la soberbia vindicación del poder de una clase dispuesta a destruir su propia creación jurídico-institucional, antes que perder sus privilegios. No es entonces una mera concesión literaria afirmar que el asesinato de Salvador Allende es un asesinato institucional. Los generales Pinochet y Palacios son apenas los ejecutores físicos de un crimen en el cual estaban coludidos —además del gobierno de Estados Unidos— el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, y los partidos políticos de la burguesía.

Crimen cuidadosamente elaborado. Durante tres años se tejió la trama que haría inevitable el desenlace. La burguesía transformó rápidamente el pánico inicial, en odio necesario, útil y activo, coordinando las alternativas de un pertinaz socavamiento institucional, con el caos económico y el terrorismo político.

El Parlamento y los tribunales hacen dejación abierta de sus funciones, para prestarse a un juego irresponsable, que busca deliberadamente el quiebre de la institucionalidad. Ésta muere cuando las balas de los sicarios fascistas siegan la vida del presidente de Chile. Insisto. Hay en ello algo más que un símbolo. Allende, con su adhesión porfiada y consecuente a aquella vía al socialismo, imaginada en democracia, pluralismo y libertad, se identifica consustancialmente con las formas institucionales representativas. Él las expresa en la misma medida en que la burguesía anuncia su intención de ultimarlas. Por ello, aquel asesinato selló la muerte de la República democrática existente en Chile durante ciento sesenta años. Dos hechos elocuentes computan la ciega voluntad de la burguesía —incluida la reformista— en orden a sacrificar “su Estado de derecho”: el acatamiento servil de Frei —presidente del Senado— a la clausura del Congreso Nacional, y el simulacro espurio de legitimar formalmente el poder del tirano, en una ceremonia grotesca, donde el presidente de la Corte Suprema le coloca la banda presidencial, terciada hasta ayer por el mandatario constitucional asesinado. (Eduardo Frei era presidente del Senado y en tal calidad, del Congreso, en el momento del golpe militar.)

Así la burguesía chilena, como harán otras cuando sea necesario, inmola las viejas formas de la democracia liberal con la objetiva y confesa pretensión de salvar su contenido capitalista.

UN BALANCE DEMOLEDOR

Hacer un balance desde la instauración de la tiranía en Chile es innecesario, por lo demás existe conciencia universal acerca de sus características y efectos. En el solo lapso de dos años Chile ha sido prácticamente demolido. Imposible imaginar una estrategia de destrucción capaz de producir resultados tan catastróficos.

En diciembre de 1972, Salvador Allende, con íntimo orgullo de patriota y revolucionario, hizo ante las Naciones Unidas la breve, hermosa y sugerente descripción de Chile que hemos citado en páginas anteriores.

De aquel Chile descrito por el Presidente asesinado, no queda hoy virtualmente nada. Ha sido desmantelado, piedra por piedra, institucional, material y culturalmente. La torpeza y la ignorancia fascista se combinaron con el odio y la avidez de una clase nunca satisfecha, para asolar la nación, como si sobre ella hubiera incursionado una gigantesca manada de elefantes furiosos, o hubiera pasado la "marabunta".

La faena devastadora aún no ha concluido, pero ya a esta altura podemos hacer una afirmación responsable: reconstruir el Chile anterior a 1970 es una tarea que comprometerá el esfuerzo de varias generaciones de chilenos. De tal magnitud es la reversión brutal impuesta por los militares: la liquidación del progreso económico, intelectual y social del último medio siglo. Chile ha sido desarticulado estructuralmente; arrastrado a un grado de extrema postración económica; aventado su patrimonio intelectual y científico; sus instituciones demolidas; agudizada su dependencia y su población marcada con hierros indelebles de odio, desconfianza y resentimiento.

Se le ha colocado al borde de una "desaparición catastrófica". Desde luego, se ha esfumado la rectoría política, intelectual y cultural reconocida por América Latina. Como Portugal en Europa, hasta su reciente reincorporación al mundo civilizado, Chile corre el riesgo de ser marginado de la historia. La dirección fascista, antihistórica y antinacional, con toda la irracionalidad de su poder destructor, ha provocado una crisis de tal hondura en la sociedad chilena, que sólo podrá ser superada en un largo período histórico.

La torpeza central de los militares chilenos es haber fundado las

perspectivas de desarrollo económico, en la iniciativa particular, en la empresa privada y en el monopolio trasnacional. Ignoran la historia de Chile. Nuestra burguesía demostró claramente en lo que va del siglo xx su definitiva ineficacia como clase conductora. Su presencia, relativamente reciente en la larga evolución nacional, muestra mayores habilidades como burguesía política y especulativa que como burguesía empresarial. Las magras tasas históricas de desarrollo así lo prueban. Chile era un país en que el 70% de la inversión nacional correspondía al Estado, y ello, por cierto, no se debía a un artificial intervencionismo de carácter socializante, sino a una exigencia histórica, planteada por la incapacidad de la burguesía nacional. El significativo desarrollo industrial del país se construyó casi exclusivamente sobre la base de una poderosa empresa estatal: la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). De aquel impulso se aprovechó la burguesía, durante cuarenta años, antes de decidirse a desmantelarlo.

La debilidad de nuestra burguesía reside en su carácter dependiente, y es lo que determina en esencia la inviabilidad del proyecto económico de la Junta Militar.

Los efectos están a la vista. La estructura económica del país ha sido subastada, en el afán de aprovechar una situación coyuntural antes de la liquidación definitiva. El ingreso nacional cayó en más de un tercio. La deuda externa casi se ha duplicado. Las empresas estatales fueron privatizadas a precio vil. Se ofrece al capital extranjero la explotación inmisericorde de nuestros recursos naturales, en condiciones que comprometen no sólo el destino del país, sino su dignidad de nación independiente. La urgente voluntad de acumulación condena a los trabajadores a un grado de explotación sin parangón, y un proceso creciente de miseria y hambre, afecta dramáticamente la salud fisiológica y mental de la clase obrera, el campesinado y el subproletariado marginal.

Un impacto potencialmente más demoledor todavía se está produciendo en el plano de la moral colectiva. Todo un gran empeño orientado a arrastrar a la población a un nivel de envilecimiento ético, que le impida discernir sobre la dimensión de la tragedia; sobre el sentido real de los acontecimientos nacionales e internacionales; y obligue en definitiva a aceptar —consciente o inconscientemente— el terror imperante, como alternativa fatal a un mal mayor, que pretenda evitarse. Se trata de imponer al ciudadano una visión maniqueísta del mundo y de la historia, que lo lleve a rechazar a todo ser humano con una concepción diferente del hombre y de la sociedad.

La juventud chilena, con sus posibilidades educativas restringidas, bajo un modelo elitista, cuyo valor supremo es el éxito económico individual; sin canales de expresión de sus inquietudes intelectuales; sin

participación en la vida sociopolítica del país; puede caer fácilmente en un escapismo, manifestado según lo reconoce la prensa oficial, en el alcoholismo, el consumo creciente de drogas, la prostitución, la delincuencia y el suicidio.

Medida en su proyección histórica, la guerra civil de 1891 —con toda su indiscutible trascendencia— parece insignificante en su magnitud social y política, al confrontarla con el efecto destructor del golpe de septiembre de 1973. Éste ha producido una incisión vertical y profunda en la continuidad histórica nacional.

Pretender entonces restablecer el sistema de vida democrático burgués no pasa de ser una ilusión ingenua. La burguesía lo sepultó premeditada y fríamente. La tarea de reconstruir el país devastado impone a las vanguardias revolucionarias la necesidad de elaborar un nuevo proyecto político y social, que recogiendo las virtudes históricas de la larga evolución política del país, deje a la vera del camino los mitos y falsedades del viejo sistema. Chile deberá ser repensado en sus instituciones, en sus hábitos, en sus esquemas políticos.

Nos parece, sin embargo, que no será posible implementar proyecto alguno sino a partir de una condición insoslayable: el castigo de los verdugos.

No es posible imaginar un nuevo destino en el cual transiten como si nada hubiera ocurrido las víctimas y los victimarios, los torturadores y los torturados, los asesinos y los hijos de los asesinados. La iniquidad alcanzó niveles irreversibles. No es éste un problema de venganza mezquina, ni siquiera un principio vindicativo de justicia. El dolor provocado alcanzó dimensiones tan profundas y extensas, ha sido tan hondo el quiebre que la sanción se transforma en una exigencia violenta, sin la cual es imposible restaurar el equilibrio social, indispensable para todo intento reconstructor.

El terror nunca será olvidado. Los testigos de crueldades inenarrables se asomarán multitudinariamente en toda la geografía del país. Nadie podrá alegar ignorancia. Los jefes políticos de la burguesía que engendraron la pesadilla monstruosa, difícilmente podrán sostener como Gil Robles después de la guerra civil española: “¡No era esto lo que yo quería para España!”

15. CONSIDERACIONES Y PROPOSICIONES ACERCA DE UNA ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA EN CHILE

La derrota del movimiento popular en Chile abre una seria interrogante a las fuerzas revolucionarias de América Latina. Sea en la búsqueda de nuevas alternativas nacionales, sea en el esfuerzo por precisar los lineamientos de una estrategia continental, deberemos empezar por definir los rasgos fundamentales de la coyuntura internacional y sus efectos sobre la fragmentada realidad del continente.

Una de las omisiones más serias de la dirección derrotada, fue precisamente la ponderación incorrecta de tales efectos. Ausente una apreciación cabal de la situación internacional, se generalizó una tendencia a subestimar la capacidad de acción del imperialismo en la preservación de su dominio, y a sobrevalorar, coetáneamente, las posibilidades de contar con un apoyo decisivo de parte del campo socialista.

El modelo insurreccional puesto en práctica por EU en nuestro país, puso en evidencia el grado de decisión que le anima en la defensa del hemisferio. Las debilidades estructurales o simplemente de coyuntura del imperialismo; la valoración real y no meramente voluntarista del poderío de las fuerzas revolucionarias; el peso efectivo de sus vanguardias; una evaluación correcta de la estructura de clases y su dinámica; la gravitación y consistencia del bloque ideológico burgués imperialista; el nuevo papel asumido por las Fuerzas Armadas; y la influencia y orientación de la Iglesia católica en cada escenario nacional, son todos factores que deberán ser medidos cuidadosamente al despejar las opciones de las luchas futuras.

En la búsqueda de los nuevos caminos sobre los cuales transitará la revolución chilena, debemos pues esforzarnos por establecer los grandes parámetros del contexto internacional, los trazos fundamentales de la realidad continental, y por cierto, las características específicas del Chile demolido por la tiranía fascista. No será ya posible imaginar el acontecer chileno, al margen de la situación latinoamericana y de las tendencias globales dominantes en el mundo. Sólo a partir de esas implicancias, de su proyección decisiva en cada caso singular, podremos definir con éxito las alternativas futuras.

En esta perspectiva, pretendemos esclarecer en las páginas siguientes, algunos factores de la realidad internacional y continental, cuya adecuada valoración estimamos ineludible, en el intento de aportar al debate revolucionario, algunos lineamientos generales de la lucha por

la democracia y el socialismo, en Chile y en América Latina. No es nuestro ánimo, por cierto, realizar una descripción exhaustiva de una temática tan extraordinariamente amplia. No es el objetivo de este ensayo. Tampoco nos sentimos en aptitud de hacerlo. Pero hay directrices y constantes cuyo bosquejo —aun general— nos permiten establecer algunas proposiciones básicas, que desbrocen el camino de las batallas venideras.

LA CRISIS MUNDIAL Y EL IMPERIALISMO

El término de la segunda guerra mundial inaugura un ciclo de crecimiento económico y social en el mundo capitalista. Éste se cierra en 1966 cuando la crisis económica aflora, nuevamente, como factor dominante del funcionamiento del sistema. El desempleo, la inseguridad, la pérdida de enormes capacidades productivas, la inflación, la anarquía, la criminalidad, el racismo, la inestabilidad política se revierten inquietamente en el escenario del mundo capitalista desarrollado.

En el curso de un ciclo expansivo de poco más de dos décadas, el capitalismo internacional alcanzó su más alto grado de integración bajo la hegemonía indisputada de EU de Norteamérica. El nuevo período de crisis general, iniciado en 1967, asume desde 1973 la forma de una depresión económica aguda, de la cual el capitalismo transitoriamente, se recupera, sin que en todo caso, llegue a superar la crisis general.

Esta crisis general se manifiesta en un debilitamiento considerable de la capacidad hegemónica de EU; en la desintegración coyuntural de las relaciones económicas internacionales, y en un renacimiento del proteccionismo y del nacionalismo burgués. En el plano económico, se expresa en una creciente hostilidad al libre movimiento de capitales, particularmente hacia las grandes corporaciones transnacionales. Somos testigos de una pluripolarización de la vida internacional, acentuada con el surgimiento de un polo japonés y de un polo europeo, orientado este último, a conformar la unidad del continente a fin de negociar en condiciones más favorables con EU, e incluso con la URSS.

Sin embargo, las contradicciones interimperialistas, aunque perceptibles y polifacéticas, se desarrollan en un marco restringido, que impiden el cuestionamiento global de la hegemonía norteamericana. Se trata de antagonismos, cuya amplitud está determinada, en última instancia, por el poderío económico y militar de EU, y por la vigorosa

y sólida presencia del campo socialista. De este modo, las contradicciones específicas dentro del mundo capitalista, no obstante su persistencia, no desembocarán en rupturas abiertas, como aquellas que provocaron los conflictos bélicos de 1914 y 1939.

La polarización del mundo en dos bloques, alteró el carácter de las relaciones internacionales, a la vez que el de las contradicciones interimperialistas. La guerra global, como expediente para dirimir la supremacía disputada, es cada vez menos factible. EU no puede optar por la derrota militar de la Unión Soviética. Su política exterior —y éste es el lineamiento central señalado por el Departamento de Estado— debe elaborarse sobre una premisa básica: la Unión Soviética ha emergido como una potencia mundial, con un poder militar y económico, al menos equivalente, con la cual es inevitable convivir. Sobre esta realidad, EU se plantea como objetivo óptimo: “moderar a la URSS durante un largo período de la historia”. Dicho en otras palabras, se trata de consolidar el *statu quo* actual, evitando se alteren los “equilibrios regionales”. Este objetivo, claramente expuesto por Kissinger, supone de hecho, la formulación de una propuesta que lleva implícita la voluntad de preservar el esquema político vigente, tanto en Europa como en África, Asia y América Latina. De allí la advertencia, perentoriamente formulada, en orden a “no aceptar” que los partidos comunistas de Europa occidental accedan a los gobiernos de sus respectivos países.

Dentro de este panorama, tiende a ahondarse la crisis general del capitalismo, cuyas características no son meramente cíclicas, como en épocas pasadas. La crisis actual, aunque de procesamiento lento, no parece encontrar caminos de retorno. Diversos factores históricos, no coyunturales, cuestionan la integridad del sistema. Los países del Tercer Mundo acentúan sus exigencias reivindicativas, económicas y políticas, mientras las luchas de los movimientos de liberación son planeadas en abierto conflicto con los intereses imperialistas, asumiendo —en forma cada vez más resuelta— un claro contenido socialista.

Los pueblos empiezan a adoptar medidas efectivas para preservar el dominio de sus riquezas naturales. Por primera vez, los países productores de materias primas se atreven a concertar acuerdos de precios y disponen de alguna capacidad política autónoma, como para hacerse escuchar en la escena internacional. Si bien es cierto que la reacción del imperialismo —particularmente del norteamericano— frente a esta nueva situación ha sido relativamente eficaz, no lo ha sido al punto de impedir, que la crisis general del capitalismo intensifique las pugnas internas en torno a precios, colocación de materias primas y disputa de mercados.

La llamada crisis energética, en cierto modo, expresa el resquebra-

jamiento del sistema imperialista de explotación y derroche de los hidrocarburos del mundo subdesarrollado.

Los países productores de materias primas han encontrado en la defensa de sus recursos naturales, un arma extraordinariamente efectiva para poner término a la rapacidad de las sociedades burguesas altamente industrializadas de Europa y Norteamérica. La constitución de organismos de coordinación, como OPEC y CIPEC, es la respuesta justa de los países atrasados a la secular y persistente explotación de que son víctimas. Organizaciones similares deberán cautelara el futuro la protección de otras riquezas que conforman hasta hoy el patrimonio usurpado de las naciones del Tercer Mundo.

De otra parte, el mundo ha sido testigo en las últimas décadas del desarrollo de nuevas y cada vez más agresivas formas de dominación imperialista. Gigantescos monstruos industriales y financieros entrecruzan sus tentáculos para imponer un nuevo esquema de poder y explotación. Son los nuevos agentes de la potestad imperial: las corporaciones multinacionales. En torno a sus intereses se agita la vida económica y política de los pueblos sometidos. Su expansión incontrolada ha llegado a constituirse en una amenaza real para el desarrollo y aun la supervivencia de la sociedad contemporánea.

A no dudarlo, configuran la expresión de poder más compleja y formidable, en la historia de la humanidad. Sus patrimonios superan al de muchas naciones y su influencia se impone a los estados. Manipulan creencias y valores individuales, adecuan los niveles de consumo a los índices que artificialmente prestablecen y proyectan sus decisiones, sobre las estructuras políticas de los países sometidos.

Según John K. Galbraith —brillante crítico del pensamiento liberal clásico— no es ya la necesidad del consumidor la que determina el ritmo del proceso productivo. (J. K. Galbraith, *El nuevo poder industrial*.) La tendencia creciente se orienta a establecer el dominio irrestricto del productor. Estas inconmensurables estructuras económicas “fijan los precios y van acomodando cada vez más ampliamente al consumidor” a su oferta. Son las sociedades fabricantes de armamentos (y por cierto el Pentágono) “las que determinan en el público la creencia acerca de las necesidades de la defensa nacional y no al revés como generalmente se sostiene”.

Los pueblos han tomado vertiginosa conciencia del papel decisivo jugado por las transnacionales en la política agresiva del imperialismo y de su interferencia corruptora y sistemática en la vida de los pueblos. En este contexto se ha venido generalizando la resistencia internacional contra estos modernos agentes de dominación, creándose alrededor de su presencia nuevas condiciones para el desarrollo de un amplio frente de fuerzas antimperialistas.

Y es éste un factor que no debemos desestimar. Hay conciencia creciente sobre la necesidad de enfrentar ese poder colosal. Si el mundo no es capaz de concebir fórmulas que permitan controlarlo, terminará por aceptar, que un número reducido de consorcios manipulen invisiblemente las decisiones económicas y políticas del sistema internacional. Como lo expresara Salvador Allende, en diciembre de 1972, ante la Asamblea General de las NU, las grandes sociedades trasnacionales "significan un ataque frontal contra el Estado-nación y un peligro cada vez más fuerte para los países en desarrollo".

VICTORIAS DEL SOCIALISMO

La etapa histórica actual se caracteriza por el tránsito del capitalismo al socialismo en escala mundial. En propiedad, puede afirmarse que la historia comienza a escribirse en socialismo. Éste es el protagonista principal de la época, y al amparo de su fuerza, se han impuesto los principios de coexistencia pacífica entre regímenes sociales opuestos y la política de distensión, en las relaciones internacionales.

El avance del campo socialista no sólo se percibe en la esfera económica. Comienza también a consagrarse su superioridad militar. Aún más, hoy cuestiona la preminencia capitalista en el plano científico y tecnológico. El curso de la historia universal —en forma cada vez más notoria— es determinado, conjunta y alternativamente, por el desarrollo ininterrumpido de la comunidad socialista, por la lucha de los pueblos sometidos del Tercer y Cuarto Mundo, expresada en el movimiento de los no alienados, y por el ascenso del movimiento obrero, en numerosos países capitalistas.

Las formidables victorias de los pueblos de Vietnam, de Laos y Camboya; el debilitamiento creciente de la presencia imperial en el continente asiático; la consolidación definitiva de Cuba socialista en América; las derrotas fascistas en Portugal y Grecia; el reconocimiento del derecho legítimo de la Organización de Liberación Palestina como portavoz de las aspiraciones de su pueblo; la liberación y el establecimiento de gobiernos revolucionarios en Mozambique, Guinea-Bissau y Angola; los progresos irreversibles de los movimientos anticolonialistas en África; las múltiples manifestaciones de unidad antimperalista en los países no alineados; son los elementos más relevantes del repliegue del imperialismo en el escenario mundial.

Dialécticamente interrelacionado con el fortalecimiento del campo socialista, el fenómeno histórico de mayor trascendencia en lo que va

del presente siglo, es el desmoronamiento definitivo del colonialismo. A partir del término de la segunda guerra mundial, se generaliza la lucha por la liberación de los pueblos coloniales, neocoloniales y dependientes. La India, el mundo árabe, la mayor parte del África negra, la inmensa mayoría de los países asiáticos, se incorporan al concierto de naciones libres, en un proceso continuo, que tiene un hito culminante y trascendente, en la victoria del pueblo vietnamita. Los movimientos de liberación nacional, agentes fundamentales de la lucha antimperialista, expresan no sólo la voluntad de alcanzar una identidad nacional, sino también —en los países neocoloniales y dependientes— la determinación de afirmar su plena autonomía económica y política. En esta perspectiva, esos movimientos se orientan a adoptar un contenido claramente socialista. La evolución política de África es elocuente. No menos de quince países africanos han optado —una vez ganada su independencia— por el socialismo, o bien, por una vía no capitalista de desarrollo.

En los últimos años, la correlación de fuerzas en el mundo colonial, semicolonial y dependiente se ha alterado drásticamente en perjuicio del imperialismo. Un papel de extraordinaria importancia corresponde en ello a los países no alineados, cuya gravitación en el manejo internacional es cada vez mayor.

El movimiento de los países no alineados surgió en los años tensos de la guerra fría, como una reacción de las naciones subdesarrolladas ante la división bloquista del mundo.¹ Desde entonces, hasta nuestros días, devino de una fuerza de acción que expresa el anhelo de los pueblos por una plena autonomía nacional y por el derecho a un desarrollo independiente, simultáneamente, con el esfuerzo coordinado por imponer una franca democratización de las relaciones internacionales. Con ese designio, los no alineados han venido implementando una acción efectiva en favor de la distensión mundial, y contra la naturaleza irracional de las actuales estructuras económicas internacionales. Desde este punto de vista, la no alineación representa hoy día, más que una tendencia histórico-social, una postura de equidistancia frente a las grandes potencias y un empeño por superar las barreras impuestas al pleno desarrollo de los pueblos.

No obstante converger en su seno, estados con sistemas extraordinariamente retrasados y feudales, junto a otros muy evolucionados, representan, en su conjunto, una poderosa corriente, incorporada en forma cada vez más resuelta e influyente, a la lucha antimperialista.

¹ Forzoso es reconocer que el Pacto de Varsovia se constituyó, en los hechos y cronológicamente, con posterioridad al Pacto de la OTAN y como una respuesta defensiva militar a las pretensiones agresivas de las grandes potencias imperialistas.

En el significativo avance de las fuerzas antimperialistas ha jugado un papel positivo la política de distensión internacional y de coexistencia pacífica entre estados de diferentes regímenes sociales. Ellas corresponden a una tendencia correcta y progresista de nuestra época y sería una insensatez plantear su caducidad.

Por cierto que la coexistencia es imaginada en términos diferentes por imperialistas y revolucionarios. EU aspira al congelamiento de la actual división del mundo entre capitalismo y socialismo. Interpreta la distensión, como forma de estabilizar los regímenes sociales en cada país y en los llamados "equilibrios regionales", a nivel mundial. Ésta es la concepción claramente formulada por el Departamento de Estado, a través de Kissinger y Sonnefeldt, hace apenas algunos meses: consolidación del *statu quo*, preservación *au trancé* de los "equilibrios regionales", y "domesticación" de la Unión Soviética "durante un largo período de la historia".

Ésta es una pretensión acientífica. La coexistencia pacífica no supone la "alteración pactada" del desarrollo de la lucha de clases, ni el congelamiento social en un país determinado, a fin de evitar la ruptura de "los equilibrios regionales".

Esta concepción de la distensión no es compartida por los países socialistas. Las aprehensiones "izquierdistas", sobre una eventual distribución del mundo en zonas de influencia, han sido irrefutablemente desvirtuadas por la actitud solidaria y combatiente de la Unión Soviética en Cuba, Vietnam y Angola, y constituyen el mejor testimonio histórico de una conducta antimperialista resuelta y militante.

Además, la propuesta de Kissinger es históricamente inviable. Las ideas revolucionarias han adquirido dinámica propia y una extraordinaria fuerza; las contradicciones internas de cada sociedad no pueden detenerse a voluntad; los antagonismos cada vez más violentos entre el mundo subdesarrollado y las naciones altamente industrializadas, no admiten ser estratificados por decisión de ninguna potencia. El mundo transita hacia el socialismo y ello es irreversible; las luchas de liberación se homogenizan tras una perspectiva antimperialista; los pueblos que recién han conquistado su independencia, se definen por opciones no capitalistas de desarrollo; la lucha de clases en los países occidentales, lejos de estancarse, amenazan seriamente "los equilibrios regionales". En el contexto de la distensión, aquellas luchas se expresan en formas y niveles distintos, ofreciendo al proletariado iguales o mejores posibilidades para el éxito de sus combates.

Por ello, en nuestra opinión, apoyar la paz y la coexistencia pacífica es un imperativo que no admite vacilaciones, en el entendido de que tal política no implica la estratificación de la situación internacional y de las realidades nacionales. La tarea de los revolucionarios

es precisamente estimular una dialéctica objetiva, que convierta la distensión en un instrumento de agudización de las contradicciones internas y de la dinámica revolucionaria en cada país.

Tomemos el caso de Angola. Él constituye una comprobación magnífica de cómo el avance al socialismo se torna incontenible. Situaciones imprevistas, coyunturas no imaginadas, desenlaces sorprendentes, todo, en definitiva, viene en apoyo de la gran corriente histórica de nuestro siglo: el tránsito del capitalismo al socialismo.

En esta oportunidad, es cierto, una vez más la pequeña isla de Cuba volvió a jugar un papel estelar en la gran victoria independentista africana, y una vez más, EU fue burlado. Esta situación se desarrolló dentro de la política de distensión.

En la realidad específica de América Latina, el violento reflujo que las fuerzas revolucionarias enfrentan en la actualidad, no es ajeno a la supervivencia continental de las prácticas y modalidades de la guerra fría. Un contexto internacional, que admita la diversidad de sistemas y que impida la pretensión imperialista en orden a bloquear los caminos del desarrollo y la liberación, lejos de obstruir, facilitaría la tarea de los pueblos latinoamericanos.

Desde una óptica profundamente equivocada, cual es la de suponer que la revolución ha desaparecido del horizonte de los países socialistas, algunos grupos revolucionarios latinoamericanos han expresado su permanente escepticismo frente a la política de distensión, al extremo de percibirla como un factor inhibitorio del empeño revolucionario. Ha influido en ello, una difundida tendencia a subestimar la lucha por la paz, explicable en un continente que no conoció los horrores de las dos últimas conflagraciones mundiales. Con todo, en nuestros días es absolutamente inimaginable un conflicto mundial, que no coloque a la humanidad entera al borde de su total desaparición. En la perspectiva de una catástrofe nuclear, el problema de la paz adquiere una dimensión desconocida, al poner en juego nada menos que la subsistencia del género humano. De aquí que todo esfuerzo orientado a preservar la paz, está plenamente justificado, más allá de cualquier voluntarismo.

En la ponderación de los avances sustanciales y sostenidos del socialismo, debemos pesar las nuevas condiciones y modalidades en las cuales se desenvuelven las relaciones internas de los estados del campo socialista.

Uno de los problemas más inquietantes para los combatientes antimperialistas de todo el mundo es el de la unidad de las fuerzas revolucionarias y progresistas. ¿Cómo lograr esa unidad? ¿Cómo hacer

más efectivas las acciones conjuntas? ¿Cómo hacer más vigoroso el frente de los hombres que luchan por la paz?, constituyen hoy interrogantes básicas de esta problemática.

No obstante la reiteración de estos anhelos unitarios, afloran divergencias y se profundizan divisiones de insospechadas consecuencias.

Sería inútil soslayar el hecho, de que uno de los obstáculos al desarrollo de una política más efectiva contra el imperialismo, es la división del movimiento comunista mundial, cuya expresión más relevante es el conflicto entre dos estados socialistas: Unión Soviética y China. En forma cada vez más alarmante y peligrosa se revelan los perfiles de una honda disensión, con efectos paralizantes en la dinámica de la lucha de clases, en los movimientos de liberación, en el combate contra el imperialismo, y en el esfuerzo por la paz.

Los términos de la polémica superan en intensidad y virulencia, a aquellos en que se plantea la lucha antimperialista.

En nuestro concepto, los niveles de responsabilidad son diferentes. En el caso específico de China, nos preocupa constatar el erróneo pragmatismo que impregna toda su política exterior. Para los revolucionarios de cualquier rincón del mundo, su conducta en el plano de las relaciones internacionales resulta inexplicable, sobre todo, cuando sólo hasta ayer, China condenaba desde posiciones presuntamente "izquierdistas" la conducta soviética. Lo único coherente en esta política es la determinación clara del enemigo principal: la Unión Soviética. A esa definición se supedita toda la política china. Se sacrifican principios y se asumen posiciones groseramente reaccionarias, en función de una ofensiva encarnizada y persistente en contra de la Unión Soviética. Sólo a partir de esta precisión, adquiere alguna lógica —aunque no justificación— la sorprendente política china de los últimos años.

Estimula vínculos con las más agresivas expresiones del pensamiento reaccionario universal. Agasaja a Heath y Strauss; intenta reflotar el cadáver político de Nixon; defiende el mantenimiento de tropas imperialistas en Europa occidental y Japón; propugna el vigorizamiento de la OTAN y SEATO; y se ubica junto a las fuerzas más regresivas de la humanidad, en el intento por aplastar la independencia del joven Estado angolés. Chile es víctima también de esta nueva orientación, que lleva a China a mantener —violentando la conciencia de nuestro pueblo y de los pueblos libres del mundo— relaciones de estrecha colaboración con la Junta fascista.²

² En febrero de 1976, la República Popular China concedió un préstamo de US\$ 100 millones al régimen de Pinochet. La mitad de este crédito fue en divisas convertibles y el resto en mercancías.

La sola existencia de factores conflictivos con un país socialista, cualquiera que sean las causas que lo originan, no convalidará jamás un entendimiento con el imperialismo. Ninguna consideración circunstancial puede justificar tal deformación. Al respecto no resulta inútil recordar un hecho histórico. Cuando en los últimos años de la década del cuarenta, se produjo una ruptura entre la Unión Soviética y Yugoslavia, esta última mantuvo una política de principios. Los problemas —graves por cierto— que aquel conflicto creó a la nación yugoslava, no la arrastraron a cultivar la amistad del imperialismo. En medio de enormes dificultades, mantuvo inalterable el camino que con plena autonomía se había trazado, para construir el socialismo, ubicándose solidaria y combatiente, junto a los movimientos de liberación nacional y a las fuerzas progresistas del mundo; constituyéndose, además, en el principal impulsor del movimiento de países no alineados.

No obstante, entendemos que para la suerte de la revolución mundial no es suficiente la determinación de culpas. China es un país colosal, cuya gravitación en Asia y en el resto del mundo es demasiado importante. Abrigamos, por cierto, la esperanza de que una nueva dirección restablecerá el verdadero pensamiento revolucionario y marxista y los principios del internacionalismo proletario. Creemos que constituye una exigencia ineludible, abrir un camino de entendimiento, que delimite los términos de la confrontación histórica, entre socialismo y capitalismo. Una tarea nada fácil. La conquista del poder colocó a los partidos comunistas ante el desafío grandioso de construir una sociedad nueva y universal. Pero al mismo tiempo, los enfrentó a contradicciones no previstas en las obras de los grandes teóricos. Múltiples y nuevas contradicciones seguirán planteándose a los revolucionarios y a los constructores del socialismo, pero ellas deberán ser enfrentadas con valor intelectual, en la perspectiva de asegurar una acción resuelta, eficiente, y sobre todo unitaria, contra el imperialismo.

No está en discusión —como en épocas anteriores— la existencia de un centro ideológico dirigente. El proceso revolucionario, en nuestros días, es el resultado de subproductos desiguales, que sin alterar la unidad del proceso, tranquean con autonomía creadora, consecuencia de la heterogeneidad misma de la vida.

Precisamente, esa autonomía imprime un sello positivo a las relaciones del campo socialista. La convicción de que cada revolución se construye teórica y prácticamente a sí misma, enriquece hoy el desarrollo de un auténtico internacionalismo proletario. El enraizamiento de la revolución en cada realidad singular, la indispensable conjugación de las leyes generales y particulares de la historia en cada esce-

nario concreto, no supone en modo alguno una "estrechez nacionalista", sino por el contrario, el método y la fórmula para construir la real unidad de las fuerzas antimperialistas.

Para los socialistas chilenos, el fortalecimiento de esa unidad es un imperativo vital. Quienes atenten contra la integridad del frente antimperialista asumen una inmensa responsabilidad histórica. Por esto no aceptamos alinearnos dentro de ningún movimiento mundial. Creemos que ésta es una exigencia obsoleta, históricamente superada, que corresponde a una concepción mecanicista de la unidad. Para nosotros, ella se expresa en el requerimiento de coordinación, de honesta vinculación, de diálogo abierto y permanente, de intercambio mutuo de experiencias, y sobre todo, de una real solidaridad con los pueblos que luchan por su liberación.

En este contexto, apreciamos muy en especial el fortalecimiento de la comunidad socialista y el papel que ha desempeñado y sigue desempeñando la Unión Soviética. Entendemos que ella es el principal contrapeso al imperialismo y medimos en ese marco el empeño extraordinario del pueblo soviético para conformar un poderío militar equivalente o superior al de EU. Ese empeño y el apoyo solidario, activo y resuelto que ha prestado a las luchas de liberación en cada rincón de la tierra, le han significado al hombre soviético, la postergación de mejores niveles de vida y bienestar, cuya satisfacción —por lo demás— venía a legitimar la construcción del socialismo.

Por esto, no nos parece justa la crítica hecha por algunos a la Unión Soviética, y en general al campo socialista, por no haber prestado una ayuda más efectiva al proceso revolucionario chileno. Ayuda económica a largo plazo le fue otorgada en cantidad y condiciones extraordinariamente favorables. Pero Chile requería reponer, con dramática urgencia, los recursos a corto plazo, cancelados por los organismos internacionales y los bancos y proveedores norteamericanos. Ello, en ese instante y en la cuantía exigida, no era factible para la Unión Soviética.³ En cambio, sí estuvo dispuesta a facilitar todo tipo

³ El autor presidió una delegación comercial chilena, que convino con el gobierno de la URSS créditos a largo plazo, para financiar diferentes proyectos de inversión, por una cuantía aproximada a los US \$ 350 millones. Además, la Unión Soviética se avino a avalar un crédito contratado en la banca suiza, de entrega inmediata, por US \$ 100 millones.

Además, la República Democrática Alemana concedió un crédito de uso inmediato, por US \$ 25 millones y otro semejante, aunque de menor cuantía, se contrajo con Bulgaria.

También creemos necesario recordar la inmensa ayuda prestada por Cuba al pueblo de Chile, especialmente, cuando le "donó" 40,000 toneladas de azúcar, a pesar de sus gravísimos problemas económicos.

de apoyo al gobierno revolucionario chileno. Si éste, concretamente, no requirió armas fue porque no estaba en condiciones de hacerlo.

De otra parte, debemos valorar el desarrollo de condiciones positivas para las fuerzas socialistas en algunos países del Occidente capitalista. Los partidos comunistas más poderosos de Europa han devenido en factores decisivos en la política interna de sus respectivos países. Su crecimiento hace posible el acceso a gobiernos de países, internacionalmente tan importantes, como Francia e Italia. El imperialismo no oculta su alarma y se ve obligado a anticipar amenazantes apercebimientos para tratar de impedir aquella eventualidad.

Tales avances no son ajenos al esfuerzo largo y perseverante de estos partidos por incorporar a la lucha por el socialismo a los más amplios sectores sociales. Indudablemente, éste ha sido un empeño exitoso, cuyas condicionantes plantean alternativas de innegables proyecciones futuras para el movimiento revolucionario mundial.

La conducta de partidos comunistas, como los de Italia, Francia, España, y otros de menor influencia en Europa, y el de Japón en Asia, ha estado determinada por concepciones de gran trascendencia, llamadas a abrir un vasto debate en el seno de las fuerzas revolucionarias.

Sobre la afirmación de una plena autonomía conceptual y política, que recusa la existencia de cualquier centro ideológico dirigente, y de "modelos para construir el socialismo", se plantean políticas independientes, enraizadas profundamente en cada realidad nacional. Éste es el socialismo "con los colores de Francia" de que habla Georges Marchais. "Los comunistas franceses e italianos se pronuncian: por la pluralidad de partidos políticos, por el derecho a la existencia y a la actividad de los partidos de oposición, por la posibilidad de la alterancia democrática de las mayorías y de las minorías." ⁴

Así la lucha por la libertad y la democracia, se identifica estratégicamente con la lucha por el socialismo. No corresponde, en consecuencia, como explícitamente se señala, "a una actitud de táctica coyuntural". El tránsito al socialismo será pacífico, a través del ejercicio de la democracia "hasta el fin" (*jusque au bout*), sometándose, en cada instancia y cualesquiera sean las circunstancias, a la decisión suprema del sufragio universal. Mientras el pc francés desahucia expresamente la noción leninista, de la dictadura del proletariado, como incompatible con la vía y la sociedad imaginada, los partidos

⁴ Berlinguer, intervención pública el 3 de junio de 1976 en París, *L'Humanité*, 4 de junio de 1976.

de España y Japón, establecen que: “la sociedad socialista que se prevé defenderá plenamente el régimen de pluralidad de partidos políticos, incluyendo la posibilidad de cambios de poder de acuerdo con el veredicto electoral, el respeto de los derechos humanos, las libertades de reunión, de palabra, de prensa, de asociación, y creencias, que incluye la propaganda religiosa, la autonomía de los sindicatos, el derecho de huelga, la plena libertad de la cultura y la ciencia”.⁵ Obviamente, tal sociedad es incompatible con “la existencia de una filosofía oficial del Estado y con medidas coercitivas estatales de tipo ideológico”.⁶ Finalmente, en cuanto a la vía, se explicita clara y terminantemente el rechazo a la idea de que “minorías activas, puedan por la violencia conseguir el triunfo de la revolución”.

Al margen de la polémica abierta en torno a la legitimidad histórica y científica de estas posiciones, y sobre todo, de su traslado mecánico a otras latitudes, en concreto a América Latina, debemos rescatar para nuestra experiencia —nacional y continental— la validez de los factores que básicamente las han causado: el papel, cada vez mayor, desempeñado por las capas medias en la sociedad europea; y las nuevas condiciones en que se da la lucha, en los países altamente industrializados. Desde luego, nos parece saludable la búsqueda de caminos propios, que sin cuestionar las leyes generales de la historia, se construyen a partir de las especificidades objetivas de cada realidad concreta, y la intención de superar la reiteración consignista de viejos esquemas de análisis y elaboración.

En el balance, profundamente alentador, de los avances del socialismo, tampoco podemos ignorar ciertos cambios positivos, operados en el seno de la socialdemocracia europea. Los últimos años han visto diluirse —en términos generales— aquellas posiciones de beligerante agresividad, tanto frente al campo socialista, como en particular ante la Unión Soviética, y los partidos comunistas de cada país. Hoy se percibe una mayor amplitud en el plano de las relaciones estatales y en el ámbito de las relaciones políticas internas.

Esta orientación es mucho más clara en los países de la llamada “Comunidad Mediterránea”. Los partidos socialistas de España, Italia y Francia, en la necesidad de convivir con partidos comunistas poderosos, se han abierto a un trabajo conjunto, tras proyectos políticos convergentes. Idéntica posición asume el ps belga, políticamente asi-

⁵ De la declaración conjunta de los partidos comunistas de Japón y España, 2 de abril de 1976.

⁶ *Idem.*

milado a aquélla. En cambio, el Partido Socialista de Portugal, no obstante participar en la entente mediterránea, mantiene frente al partido de Cunhal una ostensible discrepancia.

En los primeros meses del presente año, se celebró en París la Conferencia de los Partidos Socialistas del Mediterráneo. Por primera vez en la historia de la socialdemocracia europea, un grupo de partidos expresan orgánicamente una voluntad disidente del resto, en orden a buscar una mayor área de convergencias, tanto frente a las cuestiones más candentes de la realidad internacional, como frente a las situaciones específicas, generadas en su propia vida política.

Esta reunión, de algún modo institucionaliza las divergencias crecientes de estos partidos con algunos de sus congéneres del norte de Europa. Debemos valorar esta situación como altamente positiva, en la perspectiva de nuestros propios problemas, sobre todo en instantes, cuando se advierte claramente la intención del Partido Social Demócrata de Alemania Federal, de homogeneizar a los partidos socialistas europeos, en torno a sus propias concepciones, que lamentablemente no son las más avanzadas.

En el último tiempo, la socialdemocracia alemana ha venido articulando una intensa ofensiva política e ideológica en los países del Tercer Mundo. Esta pretensión es especialmente notoria en África y América Latina. En nuestro continente está desarrollando una actividad creciente, orientada a coordinar la acción de los partidos políticos latinoamericanos, directa o indirectamente, vinculados a la II Internacional.

Esta presencia en la problemática de América Latina no puede sernos indiferente. La bandera de un pretendido "socialismo democrático", no constituye sino la reiteración de la alternativa política configurada por la propia socialdemocracia alemana en su país: consolidar el estatus capitalista, a partir de formas de vida democrática burguesas, con algunos elementos progresistas y socializantes.

Los intereses de EU y del Partido Social Demócrata de Alemania Federal, convergen en América Latina, en la voluntad de estabilizar el sistema capitalista dependiente, bajo la hegemonía de los grandes monopolios transnacionales. Divergen en cambio en la metodología: EU prefiere afirmar la dependencia sobre dictaduras militares institucionalizadas; en tanto, la socialdemocracia alemana, intenta conseguirlo en un esquema de democracia representativa, apoyada en los pocos e importantes partidos de masas del continente, y en organizaciones —débiles hoy— cuyo fortalecimiento se empeña en estimular.

AMÉRICA LATINA: NUESTRO ESCENARIO

América Latina es una de las áreas geográficas y culturales más importantes del mundo. Ocupa una superficie dos y media veces superior a la de EU, dos veces superior a la de Europa y casi similar a la de la URSS. A fines del siglo xx su población superará los 500 millones de habitantes.

Su riqueza es incalculable: uranio, carbón, cobre, hierro, oro, plata, bauxita, petróleo, maderas, productos agropecuarios. Hasta ahora se ha utilizado una porción muy pequeña de esa fabulosa riqueza. En todo caso, suficiente para llenar las carteras ávidas de los inversionistas extranjeros y para apurar el dolor y la miseria de sus propios pueblos. En todas sus latitudes, el hombre harapiento y postergado camina todavía a pies desnudos sobre la fortuna a flor de tierra. Durante siglos, los galeones españoles y portugueses trasportaban el oro y la plata destinados a financiar la pompa de las monarquías europeas y de sus nacientes burguesías. Hoy no son necesarios barcos para transferir los dividendos cosechados por los grandes consorcios imperialistas.

Inmensamente rica, América Latina es sin embargo un continente pordiosero. Esa paradoja la convierte en una fuerza nueva, vital y potencialmente explosiva.

La revolución anticolonial se agotó en la codicia de los herederos de la metrópoli. Las oligarquías criollas, con la bendición de la Iglesia y el respaldo de los ejércitos, asumieron el poder y preservaron intactas las estructuras feudales de la sociedad colonial. La independencia política se construirá en un continente fragmentado en veinte naciones. El imperialismo tendrá buen cuidado de mantenerlo "balkanizado", manipulando sus querellas intestinas y estimulando sus rivalidades externas, a fin de estrangular su desarrollo y asegurar el saqueo eficiente y compartimentado.

El poder de las viejas oligarquías, ensambladas más tarde con las burguesías emergentes y el dominio omnipresente del imperio, se afianza sobre una curiosa dualidad: la Iglesia y los militares. Así la historia de América Latina se escribe entre indulgencias y fusiles. Ambas instituciones constituyeron los pilares de la estructura de dominación, sosteniéndola y profitando de ella. La Iglesia durante más de un siglo convalidó el orden oligárquico. Los ejércitos son hasta ahora, en forma cada vez más resuelta, sus custodios y garantes.

La historia del continente es una historia turbulenta. La violencia selló y limitó su evolución política. El poder se ha dirimido —casi sin

excepción— en el juego de las bayonetas más que en el recuento de los votos. Cuando el sufragio universal llegó a cuestionar los intereses del estatus imperialista y oligárquico, las armas se encargaron de restablecer la inmutabilidad del “orden natural”. Los caudillos “bárbaros” del siglo pasado, los populistas de las primeras décadas de éste, y las más modernas e “ilustradas dictaduras institucionales”, entretejen la gran constante de los uniformes. En 1975, los ejércitos controlan —directa o indirectamente— el gobierno de dieciocho naciones. Es decir, regimentan el destino de más de 200 millones de seres humanos. Lo que no obsta para que América Latina sea considerada parte integrante del “mundo libre”.

En el contexto de la política imperialista, América Latina ocupa un papel esencial por su importancia estratégica, vital para EU. Para éste, es una inagotable despensa de materias primas, y ha pasado a convertirse en parte “inseparable” de la economía norteamericana. Sin embargo, la significación más trascendente para las ambiciones del imperialismo deviene de sus características geopolíticas. Las coordenadas latinoamericanas son hitos de referencia de una vasta zona operacional de carácter militar, en la cual se combina el quehacer de las bases y centros de adiestramiento norteamericanas, con las actividades de los ejércitos nacionales, cuya tarea primordial es la represión del “enemigo interno”.

Desalojado parcialmente de sus posiciones en Asia, como consecuencia de las victorias vietnamitas, laosianas y camboyanas; deteriorada su influencia en Europa; con su prestigio menoscabado en África —en especial después de su derrota en Angola— y en el mundo árabe, EU se repliega sobre América Latina, intensificando su política de sometimiento y procurando evitar, con mayor rigor aún, todo asomo independentista. La experiencia de Chile es elocuente. Ella evidencia su resuelta voluntad de derrocar cualquier gobierno, mínimamente progresista y de alentar la instauración de nuevas tiranías militares, concebidas como un modelo *ad hoc*, para exterminar los movimientos revolucionarios.

En el largo historial del saqueo imperialista, jamás potencia alguna alcanzó tal grado de omnipresencia. La dependencia económica y la agresiva articulación militar son tan graves, como su profunda penetración cultural, ideológica y política.

Si bien la crisis general del sistema obliga al imperialismo a colocarse a la defensiva en el plano continental —paradójicamente—, el repliegue se revierte en una aguda ofensiva contrarrevolucionaria, cuya

orientación ideológica es impuesta por las empresas trasnacionales en la pretensión de mantener a toda costa su sistema opresivo.

Es esta presencia imperialista, múltiple, compleja, honda y agresiva, y la intención explícita de mantenerla a cualquier precio, la que determina las enormes dificultades de formular una estrategia revolucionaria viable. La actual coyuntura de repliegue no será breve. Mientras en África, políticamente más joven, casi una veintena de países han escogido una opción no capitalista de desarrollo, en América Latina, acusando la magnitud de su represión política, más del ochenta por ciento de sus habitantes viven bajo regímenes rabiosamente reaccionarios. Todo el inmenso potencial científico, militar, económico y tecnológico del imperialismo, se vuelca resueltamente para mantener esta situación. Todas las intrincadas variantes del poder: los ejércitos, las jerarquías religiosas, los instrumentos de la cultura, la educación, los medios de comunicaciones, los sofisticados mecanismos de inteligencia y represión, todo se entrecruza, en la maraña densa y espesa que aprisiona a nuestros pueblos. La lucha por la democracia y el socialismo deberá definir sus opciones, a partir de la ponderación exacta de esta realidad —la cual, por cierto, dista mucho de ser inamovible— y del conocimiento cabal del fenómeno de la dependencia en América Latina.

HISTORIA DE LA DEPENDENCIA

La actual estructura económica, social e institucional del continente es el resultado de la interacción de diferentes caracteres formativos generados en períodos distintos de la historia latinoamericana.

Durante todo el siglo pasado y hasta fines de la década del treinta de éste, dominaban en todo el continente las oligarquías mineras y terratenientes exportadoras de materias primas: mineras en Bolivia, agrario-minera en Chile, fundamentalmente agraria en Colombia y Centroamérica, vacuna en Argentina y Uruguay. El organigrama social estaba diseñado sobre un sistema bipolar: de un lado, una ínfima minoría oligárquica y del otro, una inmensa masa rural carente de toda expresión política.

En los últimos cuarenta años, en algunos países del continente, se inicia un intensivo esfuerzo industrializador. Especialmente, en México, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, emergen burguesías empresariales que marcan el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo latinoamericano.

El proceso de industrialización genera una estructura social más compleja y variada en la medida que trae aparejado el crecimiento de las ciudades, la ampliación del aparato estatal y el desenvolvimiento de nuevas actividades exportadoras. Irrumpe así una burguesía industrial, y junto a ella asoman las capas medias, cuya participación en el proceso, condicionará el desarrollo sociopolítico de los países más importantes de América Latina.

Estas capas medias irán afirmando su influencia en la vida política y social de las últimas cuatro décadas, mediante alianzas, ora con la burguesía, ora con las grandes masas marginales del campo y la ciudad. Sin embargo, no son ellas las que asumen la dirección de las políticas nacionales. Su grado de enajenación cultural, sus aspiraciones a formas de vida y de consumo modernas y conspicuas, y el grado de penetración ideológica, las llevan invariablemente a transferir ese liderazgo a las burguesías nacientes, las cuales imponen —al menos en los países antes mencionados— su propio proyecto de desarrollo.

Es interesante insistir en un fenómeno singular en la formación de la clase dirigente continental, al cual hemos hecho referencia tangencial en otras páginas de este ensayo. La burguesía industrial no nace en pugna, sino por el contrario, comprometida con las fracciones oligárquicas. Así, el desarrollo de la industria se produce en el seno del sistema oligárquico, y de hecho, la nueva clase empresarial, es un producto híbrido, entre la oligarquía terrateniente, minera o comercial exportadora, con la emergente burguesía industrial y financiera.⁷ En esta forma, los intereses de ambas fracciones, sin perder su especificidad, en definitiva, se entrelazan y complementan, en un compromiso básico, sobre el cual se asienta el núcleo de dominación oligárquico-burgués-imperialista.

Hasta el término de la segunda guerra mundial, el desarrollo industrial evoluciona en términos relativamente independientes del imperialismo norteamericano. EU no había devenido aún en potencia hegemónica mundial, y la política hacia América Latina estaba influida por las compañías norteamericanas, interesadas exclusivamente en la producción de materias primas y productos primarios. Ello dejaba un margen de relativa independencia a la nueva burguesía industrial, empeñada en el desarrollo de industrias sustitutivas.

Este margen de autonomía, hizo pensar en la posibilidad de que la burguesía industrial jugara un papel propio y participara, conse-

⁷ "Entendemos por oligarquía el conjunto de sectores de la clase dominante vinculados directa e indirectamente a la actividad primaria exportadora y a los latifundistas que producen para el mercado interno o que detentan la propiedad de la tierra sin hacerla producir mayormente." Vania Bambirra, *El capitalismo dependiente latinoamericano*, México, Siglo XXI, 1974.

cuentemente, en el proceso de afirmación nacional antimperialista. Tal pensamiento, incorrecto a nuestro juicio, nacía de la ponderación igualmente incorrecta, del grado de autonomía atribuido al esfuerzo industrializador.

No tiene ni tuvo asidero histórico la formulación política, que concibió el proceso revolucionario dividido en dos etapas, en dos momentos históricos: uno, democrático burgués y otro socialista. Por lo demás, la experiencia histórica concreta, en todos los países de América Latina, ha demostrado, que todos los procesos, cuando fueron conducidos por la pequeña burguesía y se limitaron a cumplir tareas producto de un vago nacionalismo burgués antioligárquico, concluyeron en un rotundo fracaso.

En este período —1930-1950— nacen los grandes movimientos populistas latinoamericanos. Son ellos expresiones político-sociales de la pequeña burguesía, y aparecen impulsados y dirigidos por ella, pero cuyo verdadero conductor, público o subrepticio, fue invariablemente la burguesía emergente, que aunque comprometida en esencia con el imperialismo, era capaz de desplazarse todavía con cierta autonomía.

Esta característica, hace languidecer en la desilusión de las grandes masas traicionadas, las pretenciosas y encendidas formulaciones populistas. El “varguismo” brasileño; el “peronismo” en Argentina; el “battlismo” uruguayo; el “aprismo” peruano; ADECO en Venezuela; el “ibañismo” en Chile, tienen todos el mismo e inalterable itinerario. La pequeña burguesía, principal dinamizador de estos movimientos, incapaz de formular su propio proyecto histórico, se inclina, en definitiva, por la inmutabilidad del estatus imperial. Líderes carismáticos como Vargas, Perón, Battle y Ordóñez, Haya de la Torre e incluso Paz Estenssoro; y las direcciones de los movimientos y partidos que logran una mayor consistencia orgánica y programática, como el PRI en México, ADECO en Venezuela, y el Partido de Liberación Nacional en Costa Rica, sintetizan —de acuerdo a sus particularidades nacionales— el compromiso sobre el cual se constituye el sistema de dominación burgués —imperialista. Tanto el paternalismo —rasgo peculiar de las oligarquías tradicionales— como los arrestos modernizantes y reformistas de las burguesías emergentes, son alternativamente utilizados para movilizar a las grandes masas pauperizadas y marginadas en apoyo de un precario desarrollo capitalista dependiente.

En las naciones donde no existe una burguesía industrial, capaz de promover —en función de sus intereses objetivos—, la expansión de un capitalismo moderno, corresponde esta tarea a la pequeña burguesía. Lo hace bajo coberturasseudoprogresistas y nacionalistas, que abandonan en cuanto accede al poder. Quizá el caso más elocuente sea el del aprismo en Perú, el cual logró —inicialmente— extraordinaria

influencia, incluso más allá de sus fronteras. En un comienzo reconoce inspiración socialista y alza resueltas banderas antimperialistas, pero termina por negarlas vergonzosamente, hasta devenir en nuestros días, en una simple alternativa reaccionaria al movimiento progresista, encabezado por los militares peruanos.

El mismo oscuro destino estuvo reservado a otros líderes y organizaciones, que en alguna instancia histórica encendieron el fervor popular y las esperanzas de las grandes masas explotadas de América Latina.

La participación de las clases medias en el proceso político se desenvuelve sin entrar en antagonismos con el imperialismo ni con las oligarquías, y tampoco llega a formular los lineamientos de un desarrollo capitalista autónomo. La sustitución de importaciones, elemento básico del esfuerzo industrializador, lejos de atenuar la dependencia, concluye por acentuarla.

Si bien las medidas proteccionistas favorecían a la empresa nacional, robustecían al mismo tiempo las vinculaciones externas, en la medida que se hacía necesario importar equipos, maquinaria y tecnología, y recurrir al financiamiento foráneo.

Desde otro ángulo, a partir del cese de la conflagración mundial y desde que EU consolida su función de centro hegemónico del sistema imperialista universal, empieza a evidenciarse un cambio sustancial en los términos de la dependencia. Cambio determinado por la gravitación creciente de grupos monopólicos, no interesados ya en la simple producción de materias primas para la exportación, sino en la elaboración de productos manufacturados, esto es, en el rubro más dinámico de la economía de los países dependientes. El nuevo mecanismo de dominación imperialista empieza por colocar bajo control a los sectores productivos industriales y promueve la monopolización y concentración de las economías, mediante la absorción de las empresas nacionales por los consorcios transnacionales.

Esta alteración del sistema se expresa políticamente en el abandono franco y "realista", por parte de las clases dominantes, de los proyectos reformistas de desarrollo nacional autónomo, y en la subordinación absoluta —tanto en el plano económico como político y militar—, al núcleo hegemónico. En las últimas tres décadas se escribe la historia de la integración progresiva de las burguesías nacionales latinoamericanas al sistema imperialista mundial, de su sometimiento y claudicación como clase, y de la renuncia a sus iniciales aspiraciones independentistas y nacionales.

Pero también este período marca el ocaso definitivo del nacionalismo pequeño burgués. Las clases medias, sólidamente atrapadas por el bloque ideológico dominante, van desgastando paulatinamente el

cuño antimperialista exhibido por los grandes movimientos sociales que encabezaran en los años treinta y siguientes. En Bolivia, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se amanceba a la luz del día con la oligarquía proimperialista; mientras la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) hace lo propio en Perú. El Partido de Liberación Nacional de Costa Rica predica el "realismo" del sometimiento, a la par que el peronismo argentino, ideológica y orgánicamente fragmentado, trasfiere parte de sus capas más importantes a la defensa del estatus.

El fracaso del nacionalismo pequeñoburgués estaba determinado por su impotencia para ofrecer una opción realista y viable, a su formulación antimperialista. Nunca definió una alternativa real y tangible en aquellas naciones donde asumió el poder o tuvo influencia en el gobierno. Esta incapacidad frustró, en ciertos países, las posibilidades autónomas del proletariado en ascenso, atrapados por él.

Concretamente, el MNR nace en 1941, estimulado por las heroicas y combativas luchas del proletariado minero, a las cuales era ideológicamente receptiva la pequeña burguesía boliviana. Pero tanto en su origen, como en su concepción primigenia, era un movimiento de carácter pequeñoburgués, aunque permeable en algunas etapas de su desarrollo, a las ideas revolucionarias y socialistas. A pesar del inmenso poderío alcanzado por el proletariado minero, de lograr el apoyo de importantes sectores del campesinado, de haber realizado profundas reformas estructurales y destruido el ejército, es su conducción mediaticada la que en definitiva rubrica su suerte y condiciona su fracaso histórico. No obstante, la revolución boliviana configuró la mayor y más seria experiencia revolucionaria de América Latina —exceptuando las de Cuba y Chile—, cuyas vivencias sacudieron el letargo de las grandes masas del continente. Ellas pusieron en evidencia —por primera vez en el hemisferio— que las grandes transformaciones reclamadas por nuestros pueblos, para romper el cerco de la dependencia, la miseria y la incultura, sólo son posibles mediante la liquidación de las estructuras burguesas y su sustitución por estructuras socialistas.

Quizá si el rasgo más característico de la frustración de los proyectos reformistas y populistas sea la impotencia de la burguesía y su aliada, la pequeña burguesía, para enfrentar el problema de la tierra. Pese a que su solución constituye una exigencia, *sine qua non*, del desarrollo capitalista, nunca pudo ser encarada en términos efectivos, por el peso del compromiso burgués oligárquico. Sólo México, bajo la conducción de Lázaro Cárdenas lleva adelante la Reforma Agraria hasta cuestionar el dominio de los terratenientes.

Definidos los términos de la dependencia y el papel que en el

seno del sistema desempeñan las clases sociales latinoamericanas, podemos concluir, sin margen de error, cuál es el carácter de la revolución en el continente: ésta será socialista o no lo será. Tanto para los países avasallados por la dominación oligárquico-imperialista, como para aquéllos en que la burguesía industrial y financiera integra el esquema de dominación, el socialismo es la única alternativa viable de desarrollo. La única vía para la ruptura del sometimiento. Y no se trata de una mera declaración doctrinaria. Responde a un profundo imperativo histórico.

La batalla por la democracia, la lucha contra los monopolios y el imperialismo, el combate por la tierra, están indisolublemente vinculados a la lucha por el socialismo. No resulta ocioso recordar al amparo de la experiencia histórica que el único país donde se llevaron consecuentemente adelante tareas antioligárquicas, antimperialistas y democráticas, fue Cuba; y ello fue posible, exclusivamente, porque su vanguardia asumió la representación del interés histórico del proletariado. En un mismo proceso, ininterrumpido, fueron abordadas las tareas de la revolución antimperialista y democrática y las de la revolución socialista.

En términos generales, en los países del Tercer Mundo, los intereses históricos de los pueblos son incompatibles con una vía capitalista de desarrollo.

TENSIONES EXPLOSIVAS

A despecho de la debilidad ostensible de las condiciones subjetivas en América Latina, las condiciones objetivas de la revolución maduran y se desarrollan a ritmo vertiginoso.

Nuestro continente es un volcán, el estallido de cuyas tensiones será violento y doloroso. En ningún otro lugar del mundo se registran desniveles tan colosales y odiosos. Entre la miseria y la riqueza hay una brecha sideral que lejos de atenuarse se acentúa y continuará ahondándose en las décadas inmediatas. La diminuta cúspide de la pirámide social —que protege apenas al dos o tres por ciento de la población— recoge más del cincuenta por ciento del ingreso continental. Frente a la pequeña minoría de privilegiados, millones de seres humanos continúan vegetando en una atroz miseria, sin asomarse siquiera a la vida civilizada.

Lo increíble son los grados extremos de abandono y pobreza en un continente tan fabulosamente rico. Quizá Venezuela nos ofrezca

la más nitida radiografía de esta contradicción tan absurda como inhumana.

En ningún otro continente la distribución del ingreso es tan brutalmente regresiva como en América Latina. Su burguesía goza de un estándar de vida superior al de la burguesía europea. El producto bruto equivale hoy al que tenía Europa capitalista en 1950. Su población, no obstante, vive en condiciones peores que las del continente africano.

La tasa de crecimiento vegetativo de la población es superior al 3%, la mayor del mundo. Su ritmo impetuoso podemos medirlo si tenemos presente que en 1920 había solamente 90 millones de latinoamericanos y en 1960, 211 millones. Es decir, en sólo 40 años la población creció en una y media veces. Si mantenemos la progresión, en 1980 la población será de 380 millones, y para fines de siglo, no inferior a 500 millones. Doscientos millones más de seres humanos reclamarán alimento, habitación, vestuario, educación, salud, consumo y trabajo, sin considerar que será necesario responder previamente a la exigencia formulada por el déficit actual.

Éste es sin duda el problema más dramático que nos plantea el "desarrollo del subdesarrollo". Únicamente mantener la situación actual, sin mejorar su magro nivel de subsistencia, requiere que una parte considerable del ingreso nacional se oriente a inversiones demográficas. La presión social, generada por el vertiginoso crecimiento de la población, impone a las clases dominantes desafíos que no están en condiciones de responder.

Hasta ahora, con ceguera increíble, se empeñan en colocarse sordinas al sordo rumor subterráneo, que asciende desde el trasfondo de las grandes masas explotadas, recurriendo a regímenes compulsivos, en definitiva, impotentes para contener el estallido final.

Otro rasgo inquietante de la realidad latinoamericana es la profundización creciente de los desniveles existentes entre población rural y urbana. Mientras el crecimiento urbano alcanza en las últimas décadas una tasa superior al 5% anual, la población rural permanece estacionaria. Este fenómeno parece inevitable si consideramos una singularidad latinoamericana. Una o dos ciudades importantes en cada país, concentran los beneficios de la modernización, mientras la periferia urbana y las zonas rurales monopolizan la miseria y la incultura.

Vinculado al factor antedicho, el otro elemento que aumenta la presión de la caldera, es el enorme atraso de la población agraria. En 1960, más de la mitad de los habitantes de América Latina vivían en el campo. En este sector, la ausencia de oportunidades sociales y económicas se expresa en forma más dramática. De esa inmensa pobla-

ción, la mayor parte la constituyen propietarios minirundistas. El resto son asalariados agrícolas sin tierra, que vegetan en condiciones de extremo atraso. Sin tierras, sin recursos económicos, ajenos a los beneficios sociales, el campesino latinoamericano es explotado dentro y fuera del sistema salarial. Vende barato su exigua cosecha y compra caro lo que le es imprescindible. Sin conciencia política ni organización, tradicionalmente se ha visto forzado a sostener el sistema político que lo explota.

Basta la sola enunciación de los profundos males que laboran muy hondo en las entrañas de las repúblicas americanas, para imaginar la magnitud de la tragedia continental: escaso crecimiento del producto nacional bruto; inversión interna casi nula; altas tasas inflacionarias; redistribución regresiva del ingreso; desempleo masivo; términos de intercambio absolutamente desfavorables; exorbitante endeudamiento externo; concentración cada vez mayor del capital; gigantescas utilidades de los grandes consorcios trasnacionales; crecimiento demográfico superior al de los otros continentes; marginalidad creciente; pavorosos índices de salud, mortalidad infantil, desnutrición, y analfabetismo; problemas habitacionales abrumadores; injusticia social; corrupción de las clases gobernantes; y por sobre todo este desolado panorama, como telón de fondo, dominando el terror, el crimen y la violencia reaccionaria, trasformada en institución continental.

Estos factores debemos proyectarlos con efecto acumulativo en las décadas venideras. Serán el combustible de la gran hoguera. El cuadro alucinante de un continente rico, con quinientos millones de seres humanos, en la miseria o al borde de ella, debiera ser suficiente para alertar el instinto de conservación de la ínfima minoría plutocrática, usufructuaria del poder.

No obstante, no hay respuesta en el contexto de la actual estructura social y política de dominación. Tanto los patrones de "crecimiento hacia afuera", como los esquemas de "crecimiento hacia adentro" (industrialización sustitutiva), no lograron resolver las cuestiones medulares de la realidad continental: la dependencia, la concentración y la marginalidad. Éstas, lejos de atenuarse, se agudizan. Es ésta la exigencia que determina el destino irrevocable de la revolución latinoamericana. Las condiciones objetivas seguirán madurando, en espera de que se generen las condiciones subjetivas, hoy parcialmente ausentes. La interrogante la dejó planteada Allende hace casi cuatro años. Ante los representantes del mundo dibujó la colosal tragedia de un continente empobrecido artificialmente:

En América Latina, grandes ciudades que muchos admiran, ocultan el drama de cientos de miles de seres que viven en poblaciones marginales, produc-

to de un pavoroso desempleo y subempleo: esconden las desigualdades profundas entre pequeños grupos de privilegiados y las grandes masas cuyos índices de nutrición y de salud no superan a los de Asia y de África, que casi no tienen acceso a la cultura... Ningún régimen, ningún gobierno ha sido capaz de resolver los grandes déficit de vivienda, trabajo, alimentación y salud. Por el contrario, éstos se acrecientan año a año con el aumento vegetativo de la población. De continuar esta situación ¿qué ocurrirá cuando seamos más de 600 millones de habitantes a fines de siglo?... Es fácil comprender por qué nuestro continente registra una alta mortalidad infantil y un bajo promedio de vida, si se tiene presente que en él faltan 28 millones de viviendas, el 56% de su población está subalimentada, hay más de 100 millones de analfabetos y semianalfabetos, 13 millones de cesantes y más de 50 millones con trabajos ocasionales. Más de 20 millones de latinoamericanos no conocen la moneda, ni siquiera como medio de intercambio. (Discurso pronunciado el 4 de diciembre de 1972, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.)

CRISIS DE VANGUARDIAS

La ofensiva imperialista en el continente se intensifica en instantes que el movimiento obrero atraviesa por un período de franco reflujo, cuya manifestación más elocuente fue el aplastamiento del proceso liberador chileno.

Los años sesenta se inauguraron con la Revolución cubana y culminaron con su afianzamiento. Durante la década, la ola revolucionaria que amenazaba incendiar la pradera latinoamericana, se extinguió abruptamente, como una luz de bengala, tras la derrota de la lucha guerrillera, simbolizada por la muerte de Che Guevara, en Bolivia.

No siempre se ponderó correctamente, en las heroicas empresas de liberación, emprendidas en las diversas latitudes de América, las condiciones objetivas y subjetivas de cada país. En realidad, la lucha armada guerrillera cubana no había triunfado por obra del azar. Ella correspondía a una poderosa demanda de carácter nacional; estaba entroncada en el espíritu y ejemplo de los grandes combatientes de la independencia inconclusa; había sabido interpretar y expresar las exigencias más vitales de amplios sectores del país; estaba dotada de un indiscutido liderazgo; empleó una estrategia correcta y supo implementar en tácticas apropiadas esa estrategia justa.

También los últimos diez años han visto desfallecer las experiencias reformistas y frustrarse reiteradamente las soluciones frentepopulistas formuladas por algunos sectores de la izquierda. Sucesivos golpes

militares han colocado a la mayor parte del continente bajo el imperio de dictaduras tan brutales, como resueltas a perpetuar la dependencia de sus pueblos. Tras la intensa reversión contrarrevolucionaria en Bolivia y Uruguay, el colapso de la experiencia chilena y el golpe militar en Argentina, solamente quedan en pie —manteniendo algunas tenues luces de esperanza— el modelo peruano y la afirmación antimperialista de Panamá.

Además, sorpresivamente, hemos visto emerger dos jóvenes estados, Jamaica y Guyana, alzando resueltas banderas antimperialistas y con posiciones extraordinariamente avanzadas, dado su particular contexto.

En este escenario, asume una trascendencia nunca antes imaginada, la solidez y eficiencia de la nueva estructura represiva. En ningún otro plano de las relaciones internacionales, la integración latinoamericana ha alcanzado tal grado de decisión y eficacia. Sobre nuestros pueblos opera hoy una virtual “internacional de la inteligencia”. Los aparatos nacionales de seguridad han incorporado a su faena sangrienta, los más modernos adelantos científicos y tecnológicos. Las escuelas de “inteligencia” —norteamericanas y brasileras— gradúan profesionales de la tortura, alquilan asesoría y exportan tecnología. En el último tiempo han aflorado a la superficie numerosas manifestaciones de un profuso “intercambio regional”. “Desaparecidos” en Chile, reaparecen en calidad de cadáveres en Argentina; detenidos en Argentina, continúan su itinerario de tortura, en las cárceles chilenas, uruguayas o bolivianas. De esta manera, las dictaduras latinoamericanas —bajo la docta tutela de la CIA— internacionalizan y homogenizan la represión. El continente se convierte así en una colosal prisión, custodiada por cancheros, solidarios en el terror y en el crimen.

En el campo del movimiento revolucionario el cuadro, sin ser deplorable, no es alentador. Los partidos comunistas del continente —víctimas de la persecución despiadada de las dictaduras castrenses— no logran un mayor desarrollo. La izquierda no comunista mantiene apenas una precaria existencia, mientras los sectores más radicalizados se desgastan en el vértigo de una fragmentación incesante.

Prácticamente, hoy en día, no hay en América Latina partidos obreros de real gravitación. Muchas de las vanguardias revolucionarias están quebradas, por la dispersión ideológica, por su debilidad orgánica y el peso de una sistemática represión. El desenlace del proceso revolucionario chileno y la derrota momentánea de la heroica empresa guerrillera, pusieron en evidencia el fracaso de dos concepciones incorrectas. Para hacer camino en el futuro habrá que recoger el saldo de esas experiencias, en los términos enunciados por Fidel Castro: “Con el pueblo sólo no se hace la revolución. ¡Hacen falta

armas! Y con las armas sólo no se puede hacer la revolución. ¡Hace falta también el pueblo!”

La grande, prioritaria y urgente tarea planteada hoy al movimiento revolucionario latinoamericano es fortalecer donde las hay y construir donde no existen, poderosas organizaciones de masa, inspiradas en la ideología del proletariado, y movilizadas tras una estrategia revolucionaria, elaborada sobre la ponderación científica y minuciosa de las actuales condiciones del continente, y la singular realidad de cada país, y más allá de todo, sobre una irrenunciable voluntad unitaria.

La Declaración de los partidos comunistas reunidos en La Habana, en junio de 1975, constituye a nuestro juicio una excelente base de discusión para empezar a soldar el compromiso básico de todas las fuerzas progresistas, democráticas y antimperialistas del continente. La tarea no es sencilla. Imaginar una estrategia continental, supone un extraordinario esfuerzo por romper la tupida malla ideológica tendida por el imperialismo. El eje central de esta red, continúa siendo el anticomunismo, al igual que lo fue en los instantes estelares de la guerra fría. Los partidos pequeñoburgueses más importantes de América Latina, y sus líderes más connotados, continúan haciendo de aquél, la piedra de tope de sus políticas: ADECO, sectores peronistas, APRA, el Partido de Liberación Nacional, la Democracia Cristiana en Chile y Venezuela, han afincado su desarrollo y supervivencia en la práctica de un anticomunismo agresivo y militante.

Éste es un fenómeno que enfrenta a los partidos comunistas, y en general a las vanguardias revolucionarias, a un reto de extraordinaria complejidad. Los países de mayor desarrollo relativo de Latinoamérica, poseen hoy, una estructura de clases muy semejante a la de los países de Europa capitalista. En ellas, las pequeñas burguesías juegan un papel cada vez más decisivo. ¿Cómo ganarlas? ¿Cómo destruir sus irracionales fijaciones anticomunistas y antisoviéticas? ¿Cómo desvanecer las persistentes imágenes que identifican a EU, con “la democracia” y “el mundo libre”; y al socialismo, con “el totalitarismo” y “la opresión”? ¿Cómo internalizar en las capas medias la verdad proscrita de su “mundo de fantasías”?

Estas interrogantes imponen la necesidad de abordar científicamente la lucha ideológica. El anticomunismo es, en esencia, un producto prefabricado y manipulado por el poderío ideológico y publicitario de EU. La monstruosa campaña imperialista, por décadas volcada sobre las repúblicas latinoamericanas, se asienta sobre tres componentes esenciales: el apoyo entusiasta de las burguesías nativas; la Iglesia católica, que no obstante los significativos cambios operados en su seno, continúa —al menos a nivel de su máxima jerarquía—

considerando al marxismo “intrínsecamente perverso”; y finalmente, las Fuerzas Armadas, quienes ideológica y militarmente lo sindicaron como el “enemigo principal”. Debemos reconocer, que también ha incidido en la amplitud del fenómeno las dificultades explicables de los partidos comunistas —bárbaramente perseguidos— para entregar una respuesta, que esté a la altura de la ofensiva burguesa imperialista, y para ofrecer a las masas latinoamericanas un proyecto social y político, capaz de atraerlas y movilizarlas.

Para enfrentar estas tareas existe una base humana y orgánica no desestimable. El crecimiento y pujanza del proletariado latinoamericano aumenta vertiginosamente; sus luchas en Bolivia, Argentina, Chile y Uruguay, entre otros países, es una elocuente demostración de ello; los grandes movimientos campesinos en demanda de tierra, no cesan, y día a día, la prensa informa sobre las crueles matanzas realizadas por las oligarquías represivas; la rebeldía y la combatividad de la juventud y los estudiantes, da testimonio de actos heroicos realizados en todas las latitudes del continente; la conciencia, el espíritu de lucha y el compromiso revolucionario de lo mejor de la intelectualidad latinoamericana, aumenta y se expande; una clara e irreversible toma de posiciones de los sectores más avanzados del clero católico y de las masas cristianas, aporta un aliado extraordinariamente importante; la decisión y madurez política de la mujer de nuestro continente, la incorpora en lugar preferente, a las luchas por la democracia y el socialismo; la presencia de fuerzas, y movimientos armados, combatiendo en numerosos lugares, confirman la heroica e irrenunciable voluntad de lucha; y por último, la incorporación cada vez mayor, de militares a la defensa de los auténticos intereses de los pueblos, de su verdadero honor y dignidad, abre perspectivas ciertas de victorias futuras.

Y por sobre ello, se proyecta como factor de enorme significación para el éxito de la empresa liberadora, el ejemplo, la influencia y el prestigio de la Revolución cubana. Cuba, pionera en las batallas por la emancipación continental, supo transformar la lucha por la democracia, en la lucha más resuelta y decidida por el socialismo. La Revolución cubana, encabezada por Fidel, “buscó fuerza y aliento en las tradiciones patrióticas y democráticas de su pueblo, en la movilización más activa de las masas trabajadoras y en el análisis dialéctico de las situaciones políticas concretas”.⁸ El éxito de la guerra insurreccional contó con una importante base social, en la medida en que se

⁸ Del discurso pronunciado por Armando Hart Dávalos, miembro del Buró Político del PC cubano, el 21 de octubre de 1974, en el acto de homenaje a Miguel Enríquez, secretario general del MIR, asesinado por el fascismo chileno.

fundamentó en una gran demanda de carácter nacional y democrática. Ello, a no dudarlo, permitió rebasar el sistema defensivo norteamericano, adiestrado hasta entonces en la mediatización de los grandes líderes populares. Más tarde, desarrolla las potencialidades del socialismo revolucionario, en medio del asedio asfixiante del imperialismo. En ese contexto debe medirse la empresa histórica, que alcanza hoy, su plena e irreversible consolidación. Existe en América Latina —alumbrando el porvenir de nuestros pueblos— una sociedad libre de tensiones sociales, igualitaria, cuyo pueblo se dinamiza en un proceso intenso de autoafirmación y autoconstrucción. La lección y la energía que ella expande, continuará inflamando los ámbitos revolucionarios del continente y más allá de todo, confirmando la imposibilidad de ser “desestabilizada” por el imperialismo.

Los trazos más nítidos y persistentes del perfil continental están determinados por la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia católica. Ambas instituciones aportaron históricamente su fuerza y su influencia para sostener el sistema de dominación, hasta constituir sus pilares fundamentales.

Una y otra han sido receptivas a las transformaciones, operadas más allá de los claustros y cuarteles. Se han adecuado a la exigencia social, las más de las veces, para ahogarla, o al menos, mediatizar su contenido revolucionario. Sería un error ignorar —al amparo del viejo consignismo— la entidad y proyección de los cambios operados internamente a partir de los años sesenta, y la necesidad de trazar, a contar de ellos, los lineamientos de una política correcta, hasta nuestros días ausente en la estrategia revolucionaria.

EL GOBIERNO DE LOS EJÉRCITOS

Los militares son hoy el gobierno de América Latina. El 80% de la población está sometida a regímenes impuestos al amparo de las armas. No resulta exagerado afirmar, que la inmensa mayoría de la población continental, jamás ha conocido ni practicado los mecanismos del sufragio universal.

La presencia de los uniformados en el destino de nuestros pueblos no es un fenómeno de hoy. Ya en la Colonia, los militares eran el instrumento de poder de las metrópolis. Más tarde, en el transcurso de la vida republicana, continuarán arbitrando la vida política y

social, primero como mandatarios de las oligarquías nativas, luego de las burguesías nacionales, y finalmente, como capataces del bloque de dominación, hegemonizado por las grandes empresas trasnacionales.

Hasta fines de los años cincuenta, el imperialismo asignó a los ejércitos el papel de custodios y garantes del orden administrado por las oligarquías plutocráticas criollas. El fracaso de las concepciones reformistas de la "Alianza para el Progreso", y la impotencia natural de las burguesías locales para generar estructuras políticas capaces de mantener el estatus, llevaron a los estrategas del imperio a ver en los ejércitos, la única fuerza organizada, disciplinada y homogénea, capaz de asumir directamente y sin mediación, el papel dirigente.

De aquí la violenta acentuación de su papel protagónico. Ninguna elaboración estratégica podrá en el futuro olvidar su presencia.

Quizá el efecto más importante de la política imperialista hacia América Latina sea haber impedido —al menos transitoriamente— la función potencialmente "nasserista" y reformadora, que debieron y pudieron jugar los ejércitos en la vida continental. Ésta ha sido la consecuencia práctica de la "domesticación" de los estratos castrenses, sometidos a la prédica constante de la ideología "antisubversiva" y de "la seguridad nacional".

Hasta mediados de los años sesenta, la intervención militar se mantenía en torno a caudillos uniformados —carismáticos, paternalistas y hasta antioligárquicos algunos— respaldados por el ejército. Pero tal intervención no reflejaba ni comprometía la presencia institucional de las Fuerzas Armadas en el quehacer nacional. El papel declarado de las que podríamos llamar "dictaduras populistas", fue mantener el *statu quo*, sin concesiones reformistas ni pretensiones desarrollistas, salvo el caso de Perón en Argentina y Getulio Vargas en Brasil. Estas dictaduras se apoyaron en los militares, en los grupos financieros y monopólicos extranjeros y nacionales, en importantes sectores de la pequeña burguesía, y en el lumpen proletario.

La experiencia guerrillera enfrentó a las Fuerzas Armadas —al menos en algunos países— al estudio de los complejos problemas del desarrollo y a la capacitación de sus oficiales en materias económico-sociales. Los estudios de economía, planificación y sociología se incorporan a los programas de las academias militares en algunos países del continente. En Brasil, la preparación científica de los cuadros militares venía ensayándose desde 1949, cuando se creó la "Escuela Superior de Guerra" (ESG). Algunos años después, un instituto similar se fundó en Perú: el "Centro de Altos Estudios Militares" (CAEM), cuyas aulas visitaron esclarecidas personalidades de América. Este contacto con las disciplinas sociales, adquiere una mayor relevancia, a partir de la

necesidad de enfrentar —en los años sesenta— la lucha “antisubversiva” en condiciones de mayor eficiencia.

El efecto práctico del contacto sistemático de algunas fuerzas armadas latinoamericanas con aquellas categorías del pensamiento humano que antes les eran extrañas, fue el desarrollo de una nueva concepción del papel que éstas debían jugar en el seno de la sociedad. Los militares asumen el poder institucionalmente. Son ellos los que sustituyen a los partidos de la burguesía, y toman el poder, atribuyéndose la plenitud de la “función civil”, en la perspectiva de dar cima a un proyecto histórico nacional, en última instancia, orientado a preservar la explotación capitalista dependiente.

La participación institucional de los institutos armados hace exigible una fundamentación ideológica. Ésta venía plasmándose, desde hacía tiempo, en los centros de adiestramiento del Pentágono, con un nombre progresivamente reconocido y aceptado: “La Doctrina de la Seguridad Nacional”.

Al terminar la segunda guerra mundial, en el año 1946, se creó en EU la National War College, tras el objetivo preciso de cautelar los lineamientos ideológicos básicos que sirvieran de salvaguardia de la seguridad nacional de Norteamérica.

Cuando en 1947, en plena guerra fría, Harry Truman requirió del Congreso norteamericano la aprobación de la ley de seguridad nacional, dio el primer paso —quizá sin pretenderlo— para la revisión de toda la teoría política que ha servido de fundamento a las sociedades liberales del mundo occidental capitalista. La creación del “Consejo Nacional de Seguridad” y de la CIA —inicialmente concebida como una agencia de informaciones secretas— se traducirá con el tiempo, en la concreción de un “nuevo poder”, por cierto no pensado por los clásicos de la teoría política, ubicado por encima y más allá de los tres poderes tradicionales, y cuya existencia supone una innovación radical de la concepción burguesa del Estado. De hecho, ya que no de derecho, las instituciones fundadas por Truman alteraron el equilibrio de poderes establecido en la Constitución de EU, al asumir funciones privilegiadas, fuera de cualquier control, especialmente en lo que se refiere a los planos de la política internacional y de la defensa nacional.

El “nuevo poder” actúa abierta o clandestinamente, de acuerdo a un objetivo superior, que legitima el uso y el abuso de sus acciones: la seguridad nacional. Esta concepción abstracta y vaga, rebasa los ámbitos territoriales de la nación norteamericana, y sirve de justificativo a todas las acciones —de cualquier tipo— destinadas a preservar la vasta red de intereses económicos, políticos y militares de EU. La amplitud de la seguridad, cuya protección se entrega a la “comunidad

dé inteligencia" está determinada por la ecuación: EU = sistema capitalista, = mundo libre, = civilización occidental y cristiana.

Los centros de adiestramiento del Pentágono difundieron las nuevas concepciones entre los oficiales de los ejércitos latinoamericanos. Éstos las harán madurar en el contexto de sus realidades específicas. Entre ellos, los militares brasileños, logran desarrollarlas en un más alto nivel de coherencia ideológica y consecuencia práctica. Al amparo de sus postulados, se aspira a construir un nuevo ordenamiento social, necesariamente dirigido por la élite militar, cuyos objetivos últimos serían: de una parte, la preservación del sistema de vida cristiano occidental; y de otra, la realización del destino singular, reservado a determinadas naciones.

Aquella doctrina se ha venido elaborando con ingredientes variados. Desde luego, ha buscado apoyo presuntamente científico, en la geopolítica. Si bien ésta nace entroncada con la ideología nacional socialista, y parecía sepultada con ella, con posterioridad al término de la segunda guerra mundial, empezó a ser reivindicada, principalmente por autores norteamericanos, llegándose a atribuirle un alcance científico y universal.

En su "época fascista" la geopolítica aparece identificada con la necesidad histórica de procurar un "espacio vital" a la Alemania hitleriana. Posteriormente los estrategas del Pentágono superan esa concepción restringida, trasformándola en una justificación seudocientífica de la presunta división del mundo entre "Oriente Comunista" y "Occidente Democrático".

Este antagonismo, principal e insoslayable, determina un estado de guerra permanente y total; guerra que se da en cada instante y en todo lugar; compromete a todos los hombres, lo entiendan o no y cualquiera sea su voluntad. Todos los ciudadanos, civiles o militares; al igual que todas las naciones, están involucrados en ella. América Latina forma parte del mundo cristiano occidental y tanto sus pueblos como cada uno de sus habitantes son parte integrante —militar e ideológicamente— de ese mundo.

Ahora bien, la estrategia que reclama esta guerra total, se expresa en planos diferentes. En el ámbito económico, el desarrollo se concibe en función de fortalecer el poder nacional. La concepción exacerbada de la seguridad, legítima cualquier sacrificio exigido a los ciudadanos. Bienestar y seguridad pueden ser incompatibles. Fue el dilema planteado por Goering a Alemania, en la segunda guerra mundial: "mantequilla o cañones". Obviamente prevalecieron los cañones.

La misma contradicción y la misma respuesta es válida hoy. Si bien no se renuncia a la libertad y a la democracia, y por el contrario, éstas se mantienen como "objetivos nacionales" deseables, se posponen

en función del fortalecimiento del poder nacional; de las exigencias que formula "la guerra toral"; y de la realización "del destino nacional".

En el plano social pasa a ser lícito manipular las ideas y los objetivos culturales en la perspectiva de ganar más poder nacional.

Desde este punto de vista, los criterios valorativos no se miden desde categorías éticas, sino en función de lo que es útil o no útil a la estrategia global. Poder nacional y seguridad nacional convergen en un valor absoluto, que no admite restricciones ni limitaciones de ningún tipo. La consecución de este valor es el desiderátum de toda actividad pública y privada.

En esta estrategia, esencialmente pragmática, la religión pasa a jugar un papel de extraordinaria importancia. El Occidente se identifica simbólicamente con dos concepciones primordiales: el cristianismo y la democracia. Toda la cultura occidental está impregnada del cristianismo y este es un factor de extraordinaria trascendencia para motivar el combate contra el marxismo. Basados en este orden de ideas, los regímenes de "seguridad nacional" buscan el apoyo de la Iglesia, en su ofensiva ideológica contra el comunismo. Por cierto, que no son propiamente los valores cristianos los que interesa preservar a la doctrina de la seguridad nacional. Se trata de que la Iglesia avale moralmente al Estado en su "santa cruzada", y se comprometa con la preservación del sistema capitalista monopólico dependiente.

Finalmente, una conclusión inevitable: sólo los militares están en condiciones de llevar a cabo esta tarea mesiánica. Frente a los políticos, desgastados en el juego corruptor de la democracia tradicional, sólo las Fuerzas Armadas tienen el poder y la voluntad, de regenerar y repensar la nación.

Éste es el arquetipo doctrinario en torno al cual las empresas multinacionales, el gobierno de EU y las burguesías monopólicas nativas, han planificado la "remodelación" continental. El *test* de suficiencia se ha rendido en Brasil. Allí, la "función civil" de las fuerzas armadas ha alcanzado los más altos niveles de eficiencia. El nuevo modelo económico rechaza el reformismo estructural, preconizado por la "Alianza para el Progreso", y centra el esfuerzo de la nación en la reproducción masiva y acelerada del gran capital, con prescindencia de cualquier costo social. La experiencia, impuesta en un país de magnitudes colosales, compatibiliza su vocación de gran potencia, con los particulares intereses de las multinacionales norteamericanas, alemanas y japonesas, en la configuración de un virtual "subimperialismo", que proyecta su resuelta voluntad expansionista, no sólo sobre América Latina y el Caribe (Guyana), sino también, sobre los países del África atlántica.

Brasil es un país continente. Posee inmensas riquezas naturales, una población de más de cien millones de habitantes y fronteras con todos los países de América del Sur, excepto Chile. El papel mediatizador asignado por el imperialismo, lo convierte virtualmente en el “guardián del orden” de su “patio trasero”. Los militares brasileños han aceptado con entusiasmo esta función, situando a Brasil junto a EU, en esta guerra total y permanente en la que se juega el destino de “la civilización occidental democrática y cristiana”.

Estas “nuevas verdades” alientan la conducta política de casi todos los ejércitos del continente. Tras el fracaso y desprestigio de las dictaduras oligárquicas tradicionales y de los regímenes democrático burgueses, el imperio ha encontrado en las Fuerzas Armadas, el instrumento más eficiente para articular el despojo y la dependencia. Al menos, el más depurado de riesgos.

Las concepciones seudoideológicas elaboradas por el Pentágono y perfeccionadas por los militares brasileños, a despecho de su primitivismo intelectual y científico, son lo suficientemente atractivas como para concitar la adhesión de sectores importantes del gobierno militar latinoamericano. No se les llama a cubrir una emergencia coyuntural, ni a constituir un necesario paréntesis entre dos experiencias democráticas. Se los invita —nada menos— a realizar un destino histórico. Como diría Pinochet: “para ello no hay plazo, sólo hay metas”. En ello incide la fuerza y la peligrosidad de esta suerte de papel mesiánico, vendido por los Ford, Kissinger y los grandes consorcios multinacionales, a las élites militares, transitorio gobierno en América del Sur.

Sería un error imperdonable, dimensionar la farsa ideológica montada por el imperialismo, a través de sus debilidades conceptuales, históricas y científicas. Su capacidad de penetración social está determinada por la voluntad de construir un nuevo modelo de articulación de la dependencia, cuya solidez descansa pura y simplemente en la fuerza.

Las concepciones desarrollistas de la “Alianza para el Progreso”, en alguna medida, pretendieron ganar la adhesión y apoyo de nuestros pueblos. La nueva estrategia, en cambio, recoge el fracaso de la experiencia kennediana y opta por imponer, a sangre y fuego, el modelo que las empresas multinacionales han seleccionado como el más eficiente: superacumulación capitalista por la vía de la superexplotación del proletariado. Este modelo no admite concesiones por razones de costo social o político. La expoliación de los sectores laborales y la desnacionalización de los países, sólo puede conseguirse mediante una estructura militar represiva, tan despiadada como eficiente.

Todo este andamiaje seudo doctrinario, construido sobre principios

anticientíficos y antihistóricos, se orienta, en definitiva, a asegurar la reproducción acelerada del capital. Está claro —para la publicidad— que se trata de cautelar la existencia del “mundo libre”, de los “valores democráticos” y la supervivencia de “la civilización occidental cristiana”.

Es en torno a esta concepción, que EU y las burguesías monopólicas, intentan regimentar la vida del continente.

Con este propósito: homogeneizar la estructura de dominación continental bajo el modelo brasileño, el imperialismo realiza una poderosa embestida en contra de los gobiernos de Perú y Panamá, con el objeto de rendir sus posiciones nacionales y progresistas.

Además, están siendo objeto de grandes presiones reaccionarias, los dos pequeños y jóvenes estados del Caribe, Jamaica y Guyana, por sus políticas independientes y sus posiciones antimperialistas.

En este contexto, una política hacia las Fuerzas Armadas, ajena a todo consignismo, a partir de una comprensión cabal de la complejidad de la tarea, capaz de horadar el espeso tejido ideológico, que hoy aprisiona a los ejércitos latinoamericanos, es históricamente insoslayable.

LA IGLESIA CATÓLICA Y LAS MASAS CRISTIANAS

Durante muchos años ha prevalecido una concepción equivocada, ciertamente estimulada por los sectores reaccionarios, que ha servido para mantener un hondo abismo entre las masas cristianas y los movimientos revolucionarios, a los cuales se ubicaba en posiciones antagónicas, y hasta irreconciliables, con las concepciones católicas. Sin embargo, la agudización de la explotación en nuestros países, así como la madurez creciente de la conciencia de los pueblos para identificar a los verdaderos responsables, son factores que han pesado resueltamente en la evolución de las distintas concepciones religiosas y filosóficas. A la luz de ellas, comenzó a madurar una progresiva convergencia entre los pensamientos cristiano y marxista, reflejada en el paulatino acercamiento de las masas cristianas con los movimientos populares de izquierda. Esta convergencia, de extraordinario valor para las luchas revolucionarias futuras, influyó indudablemente en los cambios verificados en la conducta de la Iglesia frente al conflicto social.

Hasta principios de la década del sesenta subsistía la imagen de una Iglesia introvertida en sus preocupaciones teológico-pastorales, com-

prometida con el estatus y vinculada financieramente al capitalismo internacional.

Esta ubicación conservadora y hostil al cambio social tiene profundas raíces históricas. Durante la Conquista y la Colonia legitimó el exterminio indígena y avaló la rapiña de la metrópoli. Más tarde, los escasos curas que empuñaron las banderas independentistas fueron anatemizados y perseguidos. En el período de construcción de las nacientes repúblicas, se identificó tempranamente con los regímenes oligárquicos y santificó el terror de los caudillos bárbaros. Durante el presente siglo —con una presencia menos activa en la política contingente— mantendrá sin embargo su alianza con las minorías plutocráticas.

No obstante, los últimos quince años son escenario de acontecimientos externos e institucionales que van desbrozando el camino hacia una inevitable toma de posiciones frente al drama social. En 1962 se celebra el Concilio Vaticano II bajo la dirección e inspiración del Papa Juan XXIII, y en 1968, en Medellín, Colombia, la Segunda Asamblea Episcopal de América Latina. Desde el mundo temporal, soplan las brisas renovadoras de la Revolución cubana, insurge la violencia revolucionaria a la cual se incorpora la rebeldía ejemplar de Camilo Torres, y los cristianos —en cuanto ciudadanos— se ven enfrentados a opciones sociales y políticas, en esta oportunidad, con una nueva visión enraizada en el propio acontecer histórico.

Vaticano II cuestiona por primera vez las arraigadas y paralizantes concepciones sobre la acción temporal de la Iglesia. Para la teología preconiliar, ese campo no competía a la Iglesia, cuya misión exclusiva era la de evangelizar y predicar. Las perspectivas abiertas por el Concilio encuentran un campo fértil en la reunión de Medellín, donde se recoge como primicia, en América Latina, la concreción de un pensamiento cristiano progresista, si no revolucionario, que venía gestándose soterradamente en las bases del clero latinoamericano y en grupos aislados de seglares. En una actitud sin precedentes, los obispos del continente se asoman a la trágica realidad de nuestros pueblos y a los factores más relevantes de su retraso. “El pasado nos configura definitivamente como seres latinoamericanos; el presente nos pone en una coyuntura decisiva y el futuro nos exige una tarea creadora en el proceso de desarrollo.”⁹ Agregan sentirse solidarios “con las responsabilidades que surgen de un continente aún bajo el signo trágico del subdesarrollo”. Y recogiendo un concepto utilizado reiteradamente por la izquierda continental, en Medellín se denuncia “la violencia

⁹ Conclusiones de la Segunda Conferencia Episcopal de América Latina, p. 31.

institucionalizada" impuesta por las estructuras del capitalismo, bajo superficiales coberturas legalistas y se habla de una "teología de la liberación".

Las conclusiones de aquella conferencia reflejan un fenómeno difundido en años anteriores y a su vez sirven de estímulo a otros por venir.

Un sector del clero joven venía trabajando activamente en los barrios marginales de las grandes urbes, en las zonas más pobres del campo, en las fábricas y en las organizaciones obreras, sobrepasando en su acción los marcos tradicionales de la caridad asistencial. En diversos países fueron vertebrados movimientos apostólicos, que al orientarse hacia una acción política abierta, se separan de la jerarquía. En 1962, nace en Brasil el movimiento "Ação Popular", en base a estudiantes católicos que actúan junto a los comunistas en el frente universitario. En 1965, Camilo Torres impulsa con otros sacerdotes la creación del "Frente Unido", inmediatamente después de su ruptura con la jerarquía eclesiástica colombiana. En 1968, se crea en Chile el grupo "Iglesia joven" y más tarde "Cristianos para el socialismo". Bajo una inspiración decididamente renovadora, cristalizan movimientos sacerdotales como los del "Tercer Mundo" en Argentina, el cual se pronuncia en 1970, en favor de un "socialismo latinoamericano"; y ONIS en Perú, quien asume una participación significativa en el proceso revolucionario nacional. En 1965, nace en Colombia el grupo "Golconda", autor en 1969 del llamado "Manifiesto Buenaventura", sin duda uno de los documentos más explícitos de compromiso revolucionario; preconiza "una sociedad de tipo socialista", y acoge como legítimas "las diversas formas de acción revolucionaria en contra del imperialismo".

No pretendemos recoger las conclusiones de Medellín, como materialización de un compromiso que supone el abandono definitivo de las seculares posiciones conservadoras de la Iglesia. No es de ninguna manera la consagración oficial de una nueva toma de posiciones. En rigor, fue la consecuencia de la eclosión de una minoría, impulsada por el nuevo espíritu que venía agitando al clero joven. El conjunto de la jerarquía latinoamericana se encargaría más tarde de retomar el "realismo", colocando "agua en el vino de Medellín". Pero indudablemente, la Conferencia Episcopal de 1968, señala un hito histórico al legitimar lo que hasta ayer era herejía. Su influencia fue decisiva en el desplazamiento de sectores cristianos hacia un franco y militante cuestionamiento del estatus.

Medellín es una luz de razonable esperanza. En esencia, siguen pesando en las jerarquías latinoamericanas, aquellas tendencias conservadoras, vinculadas social y doctrinariamente a las clases dominan-

tes. Ellas han venido mediatizando la fe, colocándola al servicio de las estructuras opresoras, e identificando los valores cristianos con los valores burgueses. Pero con intensidad aún mayor, gravitan en su seno, sectores reformistas de inspiración cristiana, quienes precisados a cuestionar formalmente la validez del sistema, se preocupan sólo de modernizar y humanizar el orden capitalista, pretendiendo enclaustrar en un mismo proceso a explotadores y explotados. Sin embargo, lo trascendente, es que todo ello, expresa en definitiva, una poderosa dinámica interna, opuesta a la concepción de una Iglesia monolítica, legitimadora del poder oligárquico imperialista.

Cualquiera sea el grado de influencia que tengan las nuevas corrientes progresistas y revolucionarias dentro de la Iglesia continental, lo importante es la proyección interna y externa del fenómeno gestado en su seno. En América Latina —la Iglesia— mantiene una gravitación en la conducción de las masas, superior a la de toda otra región del mundo. Che Guevara comprendió temprana y lúcidamente el significado de los cristianos en nuestro continente y el papel que deberían asumir en la lucha de liberación: “Cuando los cristianos se atrevan a dar un testimonio revolucionario la revolución latinoamericana será invencible.” Con la misma y profunda percepción, Salvador Allende diría a Régis Debray: “Hay un germen revolucionario en las masas católicas que es difícil imaginar. Eso tenemos que organizarlo. Eso tenemos que unificarlo.”¹⁰

De aquí la trascendencia para el movimiento revolucionario continental, que no sólo el clero humilde, sino dignatarios esclarecidos de la jerarquía eclesiástica, reclamen y asuman un papel combatiente en la batalla social. Son muchas las figuras que han ido perfilando una Iglesia distinta, identificada con la rebeldía de los pobres y con la construcción de una sociedad básicamente socialista. En Chile, alcanzó extraordinaria relevancia la figura del Obispo de Talca, Monseñor Manuel Larraín, ex Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, cuyo pensamiento social y su aporte a la lucha por la reforma agraria, trascendieron las fronteras del país. En nuestros días, tienen resonancia universal —entre muchas otras— las personalidades de Helder Cámara, obispo de Recife, indoblegable en la denuncia cotidiana contra la dictadura brasileña; Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, promotor del movimiento cristiano por el socialismo; Leonidas Proaño, obispo de Riobamba, Ecuador. Ellos simbolizan el compromiso de las masas cristianas, cuya magnitud y profundidad tenemos el deber de valorar. Es nuestra obligación fortalecer la unidad del pueblo, de cristianos y marxistas, en el esfuerzo por erradicar

¹⁰ Régis Debray, *Conversaciones con Allende*, México, Siglo XXI, 1971.

la miseria y la injusticia social. Esa unidad debemos buscarla y construirla, no sólo en función de una alianza táctica, útil para una coyuntura determinada, sino en la convergencia de un gran compromiso histórico y estratégico.

El imperialismo, ciertamente ha detectado el peligro que entraña el abandono por parte de la Iglesia de las que fueran sus centenarias posiciones conservadoras. Hasta mediados del 60, ello no constituía un factor de preocupación para EU. Por el contrario, su carácter intrínsecamente anticomunista, la identificaba como su aliado natural, cuya acción temporal, en todos los campos, jugaba un importante papel de contención del comunismo.

No obstante, los acontecimientos de la última década, han llevado a Washington a priorizar su atención sobre la Iglesia, y a endurecer su política frente a aquellos sectores percibidos como "radicales". No es ajeno a la preocupación imperialista el hecho que en los últimos años la represión también haya alcanzado a la Iglesia latinoamericana; sobre todo en los países del cono sur: sacerdotes asesinados en Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia, religiosos encarcelados y expulsados de sus países, parroquias allanadas, medios de información censurados, actividades pastorales y educacionales restringidas. Se perfila así toda una estrategia imperialista, destinada a neutralizar las tendencias progresistas —y con mayor razón las revolucionarias— de los sectores más avanzados del clero continental.

La atención que el imperialismo dispensa hoy a la Iglesia católica de América Latina, nos da en buena medida la magnitud del proceso gestado en su seno, y ante el cual las fuerzas revolucionarias no deben permanecer indiferentes.

Sería injusto terminar estas reflexiones omitiendo un juicio valorativo sobre la conducta de la Iglesia chilena en estos tres años de barbarie. Las manifestaciones reaccionarias —y positivamente anticristianas— de algunos miembros de la jerarquía, no cuestionan la actitud resuelta y humanista, asumida institucionalmente, en la protección de las víctimas y en la defensa de los derechos humanos y libertades individuales, bárbaramente conculcados. Debemos medir el hecho de que, por primera vez en la historia americana, la Iglesia católica —en su conjunto— se enfrenta a una dictadura y de hecho se ubica en una trinchera de resistencia frente a ella. El cardenal Raúl Silva Henríquez, primado de la Iglesia chilena, asumió desde un comienzo una posición condenatoria, de extraordinaria importancia para la lucha antifascista. Bajo su inspiración y dirección, la Iglesia de Chile ha implementado una intensa y sostenida actividad, desafiando la ira de los militares usurpadores. Obispos católicos han denunciado valerosamente los crímenes de la junta, y no pocos sacerdotes han arriesgado su

libertad y su vida para escamotearle víctimas a los esbirros del régimen. Los templos han devenido en receptores de la angustia y el dolor de nuestro pueblo y en expresiones abiertas de protesta y rebeldía.

El movimiento popular debe justipreciar el papel extraordinariamente positivo que ha jugado la Iglesia chilena, como expresión de los cambios que se vienen operando en su seno.

Hemos intentado definir los rasgos fundamentales de la coyuntura internacional, y ello, no con un propósito meramente descriptivo. Como lo afirmamos al iniciar este capítulo, una de las más serias insuficiencias de la dirección revolucionaria derrotada en 1973, fue la virtual subvaloración de los efectos de la correlación de fuerzas internacionales, sobre las luchas continentales, y específicamente, sobre el proceso revolucionario chileno. La ausencia de un real dominio de la coyuntura mundial, limitó la capacidad de análisis y de previsión de aquella dirección.

Es ésta una omisión en que no debemos reincidir, si intentamos seriamente retomar el camino interrumpido por el *putsch* fascista. No se puede elaborar una estrategia de liberación, sin "situar" la especificidad de cada lucha en el contexto diseñado por las "grandes fuerzas en pugna".

La actual coyuntura presenta rasgos que tienden a acentuarse en los años venideros: el avance socialista tiene un ritmo incontenible; del mismo modo, la profundización de la crisis capitalista, cuando más, podrá ser reducida por algún tiempo, prolongando el desenlace inevitable. Ambas tendencias convergen en América Latina —y no por obra del azar— en un período de reflujo del movimiento revolucionario, al cual es necesario adecuar los nuevos lineamientos tácticos y estratégicos.

Sobre esta realidad debemos repensar un camino para Chile.

UN CAMINO PARA CHILE

La derrota del movimiento popular, en septiembre de 1973, configura un hito inolvidable en la historia de Chile. De una parte, marca el término de una larga evolución social y política que concluyó en la fundación de la democracia burguesa más avanzada de América; y de otra, el fin de una etapa de ininterrumpido ascenso del movimiento obrero. Ello ocurre en una forma socialmente cataclísmica, expresada

en el ejercicio más brutal de la violencia reaccionaria contra el pueblo, y en la constitución de la forma más extrema de dictadura burguesa: la fascista. De otra parte, la derrota inaugura una fase inédita, en la cual el objetivo histórico del proletariado —la conquista del poder— debe ser reformulado de acuerdo con las nuevas condiciones.

El planteamiento anterior no implica una simple descripción de los hechos o una tentativa puramente escolástica de periodización. Tiene el valor de una proposición básica para el análisis subsiguiente: el 11 de septiembre marca un quiebre histórico de la sociedad chilena. Tanto para la burguesía como para el movimiento revolucionario supone la ruptura definitiva del centenario marco institucional; la cancelación de las formas tradicionales de lucha política y económica; y el entierro del viejo estilo de “hacer política”, que había singularizado el acontecer histórico nacional.

Para el movimiento obrero, el drama social de septiembre, implica no sólo enfrentar las duras condiciones impuestas por la dictadura, sino también asumir, desde nuevas perspectivas, el cumplimiento de su misión. Ello involucra, en esencia, tres tareas:

a] Reconocer científicamente el pasado con el fin de conservar y desarrollar todos sus aspectos positivos y superar las “insuficiencias históricas”, más allá de los errores cometidos. Éstos son apreciaciones subjetivas equivocadas, ajenas a la realidad objetiva, siempre presentes en todo acto humano. Las insuficiencias históricas, en cambio, encarnan debilidades en el desarrollo ideológico y político de un proceso, cuya manifestación inmediata se refleja en una valoración sistemáticamente equivocada de lo real. Por ejemplo, fue una seria “insuficiencia” la valoración equivocada del papel histórico de las Fuerzas Armadas en Chile y de la política que tal papel exigía. Un error, en cambio, pretender ganarlas accediendo a sus demandas tradicionales y la intención voluntarista, de dividir las horizontalmente.

b] Evaluar, objetiva y adecuadamente, la gravísima regresión estructural y superestructural, que significa en la sociedad chilena, la catástrofe social de septiembre de 1973.

c] Diseñar el camino al poder, es decir, definir una estrategia que recoja, tanto las experiencias del pasado —nuestras y de los demás pueblos— como los nuevos factores, sobrevinientes en la lucha, nacidos de la realidad creada por el fascismo.

Enfrentar crítica y autocríticamente estos aspectos fundamentales no es sólo un problema de voluntad. Es también un problema de capacidad, de rigor científico y de creación colectiva. Un partido sin la voluntad y capacidad de hacerlo devendrá en organismo viejo, anquilosado, inepto para conducir la lucha revolucionaria. El apego a dogmas y clisés, propagandísticos y doctrinarios, transformará a sus

difusores en entes anacrónicos, frente a una realidad que ha mutado radicalmente y que debe ser analizada y digerida con criterio nuevo y rejuvenecido. Quien tenga disposición y aptitud de avanzar por esta vía crítica y de reconstrucción revolucionaria, ganará la posibilidad y el derecho de ser vanguardia.

HACIA UNA POLÍTICA REVOLUCIONARIA DE MASAS

En esta convicción, hemos asumido el esfuerzo y la responsabilidad que animan este ensayo. Lo hemos concebido como el primer aporte de un dirigente socialista chileno, a un intenso debate, cuyas conclusiones deberán desbrozar los caminos transitoriamente obstruidos por la derrota y el reflujo revolucionario.

Hemos intentado esta tarea desde categorías de pensamiento y de análisis que son, por cierto, las de nuestro partido: el Partido Socialista de Chile. De allí que hayamos ensayado rescatar el papel histórico que jugó nuestra organización en los sucesos pasados, y el que —a despecho de sus insuficiencias y errores— está llamado a desempeñar en la construcción del futuro Chile socialista.

El Partido Socialista, con sus características peculiares —por cierto no todas positivas— demostró en el pasado capacidad para ser vanguardia. El proceso realizado entre 1970 y 1973, y los hechos que lo antecedieron, no son concebibles sin la existencia de nuestro partido, incluso sin la presencia vital de su militante más destacado: Salvador Allende. Su concepción de una alianza política y social amplia, hegemónica por la clase obrera, hace posible la victoria de 1970. Son sus singularidades —como organización marxista-leninista— las que facilitan y hacen viable la constitución de un vasto frente, donde se compatibiliza el carácter revolucionario de su dirección, con la movilización de extensos sectores del espectro social. Ello no hubiera sido posible sin nuestra presencia. De hecho —hasta la fecha— no lo ha sido en ningún otro país del mundo.

Su vigencia como factor de convergencia no está cuestionada por la ofensiva fascista. Sin su participación activa, no es imaginable la lucha contra la dictadura ni la empresa que nos permitirá reencontrar el camino de la liberación.

En el desarrollo de este trabajo nos hemos esforzado —desde nuestras perspectivas partidarias— por desentrañar en el análisis revolucionario, las grandes lecciones capaces de hacer útil la derrota.

Creemos que la tarea de diseñar una estrategia de poder, a partir

de las nuevas condiciones planteadas por el fascismo, impone a la vanguardia revolucionaria, además de una severa autocrítica acerca de sus graves insuficiencias, una convergencia sobre tres premisas fundamentales: el carácter socialista de la revolución chilena; la apertura de una etapa específica del proceso revolucionario, sellada brutalmente por la presencia de la dictadura fascista, y la convicción de que una vía pacífica al socialismo —al menos en las actuales condiciones históricas— es inviable en Chile.

Sobre ellas reiteramos afirmaciones ya hechas. La revolución chilena tiene un carácter socialista. Al precisararlo, no formulamos un simple deseo o una consigna voluntarista, sino reafirmamos una conclusión originada en el análisis científico de nuestra sociedad. Tal carácter está irrevocablemente determinado por el desarrollo de un capitalismo dependiente, que amputó desde su inicio las posibilidades históricas de la burguesía, en cuanto a que ésta pudiese asumir el papel que teóricamente le correspondía en una eventual etapa democrático-burguesa. Es pues, la naturaleza dependiente del capitalismo chileno, y su desarrollo concentrador y excluyente, la que determina el carácter socialista de la revolución; obligada a cumplir, de paso, las tareas antimperialistas, antimonopólicas y antilatifundistas.

En segundo término, afirmamos la existencia de una etapa específica en el desarrollo único del proceso revolucionario, signada por un reflujo profundo de las fuerzas populares y el cambio radical de las condiciones de lucha. Los objetivos que exige esta etapa son también específicos: en esencia, el derrocamiento de la dictadura y la destrucción de las estructuras militares, sociales y políticas, que la hicieron posible y la sostienen. Esta "especificidad" obliga a una concentración del quehacer revolucionario tras este propósito concreto e ineludible, y la amplitud de su accionar debe establecerse, a partir de las posibilidades reales y objetivas ofrecidas por una coyuntura tan dramáticamente adversa. No siempre hay una comprensión cabal de esta realidad inamovible. Muchas veces hemos escuchado a revolucionarios plantear —con una arrogante dosis de voluntarismo— que la dictadura del proletariado es la alternativa lógica e histórica a la dictadura fascista. A partir de esta concepción se formulan programas maximalistas, que pretenden borrar, en una suerte de sonambulismo ideológico, la magnitud colosal de la derrota y la extrema debilidad de las condiciones subjetivas, sobre las cuales se inicia la lucha antifascista.

En la perspectiva de las exigencias que impone esta fase, debe tenerse muy claro, que el combate por las libertades democráticas, y los derechos de los trabajadores, no es contradictorio, y por el contrario, es concordante con la lucha por el socialismo. La Revolución cubana, sin ir más lejos, en el recuento histórico, nos entregó una con-

tundente lección sobre la identidad dialéctica de ambas luchas. La movilización contra el batistato se implementó desde el primer momento en defensa de la Constitución de 1940. La lucha misma se encargó de rebasar aquel objetivo históricamente limitado. Al calor de ella, el pueblo cubano abrazó las ideas socialistas. Aquel programa mínimo, permitió a la guerrilla contar con una base de apoyo sólida y eficiente, y ello, porque los revolucionarios cubanos “supieron buscar aliento y fuerza en las tradiciones patrióticas y democráticas de su pueblo, en la movilización activa y permanente de las masas y en el análisis dialéctico de las situaciones políticas concretas”.

Finalmente, entendemos que la experiencia chilena debiera haber despejado cualquier duda en relación al problema de la vía. Sabemos que la derrota misma no certifica —por principio— la inviabilidad de un tránsito pacífico al socialismo. Ello explica que esta cuestión se mantenga hasta nuestros días en el centro del debate ideológico.

A nuestro juicio, más allá de los efectos demostrativos del proceso clausurado en septiembre de 1973, la discusión parece tajantemente zanjada por el propio imperialismo. A esta altura, nos parece insensato insistir en las posibilidades, aunque sean sólo teóricas —para Chile y América Latina—, de un camino carente de respaldo histórico en la experiencia revolucionaria mundial; aduciendo para ello, que en la interrupción sangrienta del proceso chileno, pesaron más los errores cometidos, que la inviabilidad de la vía ensayada.

La naturaleza de este problema ofrece algunas facetas inhibitorias. El análisis frío y riguroso de la previsión de un camino al socialismo, está preñado de no pocas amenazas y peligros. La burguesía y el imperialismo, en la misma medida que legitiman la ominosa violencia fascista, se dan maña para transformar en una suerte de herejía, la pretensión lógica de las víctimas de enfrentarla apelando a iguales métodos. Quienes concluyen en la inevitabilidad del uso de la violencia —por la voluntad resuelta y confesa de las minorías dominantes— son exhibidos como peligrosos apologistas y corifeos “del violentismo” y del terror armado. En esta forma, la previsión del empleo de la violencia revolucionaria, que emerge de la inhumanidad del sistema y de la institucionalización del terror, es identificada con el afán íntimo y subjetivo de provocarla.

No nos sentimos tentados a dejarnos atrapar por este tipo de limitaciones. La derrota de la experiencia chilena —ésta es nuestra profunda e íntima convicción— es el precio, elevadísimo, de la renuencia a prever oportuna, correcta y estratégicamente, la inevitabilidad del uso de las armas en defensa de la revolución amenazada.

ALGUNAS IDEAS PARA LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO POLÍTICO

A partir de las condicionantes antes señaladas (carácter socialista de la revolución; existencia de una etapa específica, antifascista, y la precisión del problema estratégico de la vía), cualquier proyecto político, con pretensiones de éxito, deberá considerar estas insuficiencias históricas, puestas al desnudo por la derrota revolucionaria. Ellas dicen relación con: a] Una correcta ponderación de la correlación de fuerzas a nivel internacional, de su influencia en el continente y consecuentemente en Chile; b] La comprensión científica de la consistencia y solidez del bloque ideológico burgués imperialista; y c] Una traducción correcta, a la realidad chilena y continental, de la teoría leninista del Estado.

En la superación de estas insuficiencias, encontraremos los elementos necesarios para establecer las líneas rectoras del proyecto histórico, en función del cual debemos encarar el futuro. La formidable exigencia nace de la constatación del peso y fuerza del bloque ideológico dominante, de una parte; y del poderío y eficiencia de las estructuras represivas del Estado burgués, de otra. Lo anterior se traduce en dos parámetros esenciales, sobre los que debe construirse el quehacer futuro del movimiento revolucionario: uno, orientado al quiebre, o al menos la erosión, del sistema ideológico que aprisiona al conjunto de la sociedad; el otro, a la ruptura del aparato burocrático-militar, sobre el que se asienta el poder monopólico-imperialista.

Ambas directrices suponen la concepción de una lucha prolongada, de largo aliento, con el necesario sacrificio de las impacencias revolucionarias.

EL BLOQUE IDEOLÓGICO, LAS CAPAS MEDIAS
Y LA POLÍTICA DE ALIANZAS

Al consignar los obstáculos enfrentados por el gobierno de la UP, nos hemos referido con especial latitud al problema de las capas medias, tratando de desentrañar las grandes pautas de su comportamiento y preestablecer las condiciones, hipotéticas, en que pudieran acceder a un proyecto de transformaciones revolucionarias de la sociedad.

Concluimos, que más allá de los errores cometidos en la búsqueda de un entendimiento básico con la pequeña burguesía, lo que en esen-

cia determinó su agresiva hostilidad al proceso, fue el peso, fuerza y consistencia de sus ideas burguesas.

La experiencia chilena coloca el problema de las capas medias, en el primer rango de la temática revolucionaria, no obstante haber sido una cuestión ampliamente debatida —desde hace ya tiempo— en los medios progresistas europeos.

Pensamos sea éste uno de los problemas contemporáneos más complejos de resolver, y no nos parece posible encarar las tareas que impone la revolución latinoamericana, sin un estudio profundo, cuidadoso y científico de la conducta de estas capas —y de las capas de estas capas— al menos, en países como el nuestro, de mayor desarrollo relativo.

Si trabajamos cualquier estadística, sobre las variaciones experimentadas por la estructura de clases en América Latina, comprobaremos una tendencia acusada al incremento de los estratos medios, a la reducción de los sectores agrarios y a un crecimiento, proporcionalmente menor, del proletariado. En Chile, por ejemplo, la pequeña burguesía duplica a la clase obrera propiamente tal.

Diversos factores han influido en este fenómeno. Al amparo del crecimiento urbano acelerado fue generándose una extensa economía de servicios, trasformada posteriormente en una de las principales fuentes de desocupación disfrazada. Paralelamente, se incrementó en forma considerable el sector técnico-profesional, mientras la expansión de las funciones del Estado fortalecía una frondosa burocracia pública.

La industrialización y el progreso científico-técnico, en países como México, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile —hoy debemos incluir a Venezuela y Colombia— provocó importantes cambios sociales y económicos, que alteraron la composición social del proletariado, al exigir un aumento en sus niveles de calificación. Así, un sector no desestimable del proletariado industrial, al recalificarse, se ubicó en una situación social semejante a la de los técnicos. Amparado por poderosas organizaciones sindicales, este estrato advino a esquemas remunerativos y sociales privilegiados, originándose de este modo la denominada “aristocracia obrera”, cuyos patrones de vida y comportamiento político se identifican con los de las clases medias. Orientada por una fuerte tendencia economicista y antideologizante, su influencia conservadora, ha pesado decisivamente en el movimiento obrero organizado de América Latina.

Frente a los sectores medios, en continua expansión y con peso específico propio en el plano político y social, las clases dominantes han prodigado un sostenido esfuerzo para neutralizar sus tendencias iniciales al cambio. Aceptaron abrirles oportunidades económicas significativas a través de una legislación social privilegiada; dividieron

Cuadro de la estructura de las fuerzas laborales chilenas ponderada en miles de trabajadores y en porcentajes

	1930	1940	1950	1960	1970
Agricultura	503	619	629	648	552
Minería	77	96	101	97	75
Industria	205	298	405	406	415
Construcción	57	58	101	164	148
Servicios	255	429	489	568	730
Comercio	122	162	221	225	303
Trasporte	85	74	95	120	155
Otras activ.		30	76	126	226
Totales	1 304	1 766	2 117	2 354	2 604 (en miles)

(No se precisan obreros y empleados.)

Desarrollo económico de Chile 1940-1956; La economía chilena en el período 1950-1963; XIV censo nacional de población y III vivienda, abril de 1970.

a los trabajadores fijándoles categorías de beneficios distintas; los medios de comunicación fomentan expectativas de consumo y la imitación de modelos de vida de los países altamente desarrollados. De otra parte, se establecieron sistemas discriminatorios de comprometer a las clases medias en la preservación del estatus, hasta hacerlas sentirse parte integrante, real o potencialmente, privilegiada, del sistema de dominación.

Ello quedó tajantemente demostrado en el curso del proceso chileno.

Durante las últimas cuatro décadas, las fuerzas coaligadas de la gran burguesía y el imperialismo, han gobernado sirviéndose de la pequeña burguesía, instrumentalizada en función de sus intereses. Sólo la frustrada "restauración" alessandrista, entre 1958 y 1964, constituye —en parte— una excepción a esta constante. De esta manera, el antagonismo entre el movimiento obrero y la pequeña burguesía, se manifestó palmariamente durante los 14 años de administración radical (1938-1952), durante el sexenio populista de Ibáñez (1952-1958), y durante el gobierno demócrata cristiano (1964-1970). Por cierto, no fue ésta una confrontación permanente y absoluta, ni tuvo tampoco el mismo carácter, por ejemplo, el trienio de Aguirre Cerda y el sexenio de González Videla; pero en el trazo grueso, vale la afirmación de que el movimiento popular chileno se desplazó en permanentes contradicciones con los partidos de la pequeña burguesía. Así, por lo demás, lo testimonian los grandes acontecimientos políticos del período.

Durante tres décadas, bajo administraciones de distinto signo, la represión contra el movimiento popular siempre estuvo presente: la masacre de la "Plaza Bulnes" en 1946, ordenada por un presidente radical; la persecución anticomunista de González Videla; los cruentos sucesos de abril de 1957, en el período de Ibáñez; las masacres de la población "Cardenal Caro" y otras, en el gobierno conservador de Alessandri; y las de "El Salvador" y "Pampa Irigoín" bajo Frei.

Nada tiene de extraño entonces, que este antagonismo en el terreno político, tuviera su correlato en el plano social. Debido a ello, entre otras causas, la clase obrera, durante el Gobierno Popular, no consiguió conformar una coalición mayor con las capas medias, que le hubiera permitido acumular más fuerzas, tantas como para ver coronada con éxito su empresa histórica. En otras palabras, no obstante haber conseguido aglutinar importantes sectores de la pequeña burguesía, esto no bastó para neutralizar al conjunto, o por lo menos, a la mayoría, la que por el contrario, se cohesionó resueltamente en torno al bloque burgués imperialista.

¿Cuáles son las exigencias de una correcta política de alianzas en Chile?

Nuestra tesis central es que para estructurar un vasto frente político, en el cual la clase obrera homogenice una amplia red de alianzas con otros grupos y estratos sociales, y logre acumular tanta fuerza como para dar a su proyecto una perspectiva cierta de éxito, es necesario la concurrencia de dos requisitos: a] Que los partidos de la clase obrera no renuncien a construir su propia hegemonía. Para ello, debe representar una real alternativa de poder, capaz de atraer a otros sectores, entre los cuales no sólo se haya el campesinado y el grueso del subproletariado urbano y agrícola, sino también, segmentos muy importantes de la pequeña burguesía. Así, el proletariado debe crear su "propia fuerza" de atracción, y no prestarse para ser simple masa de maniobra de otras clases. Si no logra previamente, ser una fuerza en sí, jamás podrá ser una fuerza que hegemonice a otras; y b] Que los partidos obreros conciban la ampliación de su fuerza en un proceso dialéctico, donde se concilien, tanto los intereses históricos del proletariado, como los de las otras capas y sectores sociales, susceptibles de ser atraídos para las ideas revolucionarias.

Estas exigencias copulativas, que compatibilizan las aspiraciones hegemónicas del proletariado, con la necesaria amplitud de la alianza, parte del supuesto básico, de que el desarrollo político de la clase obrera sea tal, como para hacer de su o sus partidos un real núcleo de atracción. La tarea, por tanto, es construirlo allí donde no existe y desarrollarlo donde existe.

De hecho, estas dos exigencias estuvieron parcialmente ausentes en la concepción de los partidos populares, en las décadas pasadas. El ps, al formular la política denominada "Frente de Trabajadores", enfatizó en la primera de ellas —esto es, la creación de una fuerza autónoma propia. Si bien los éxitos de esta política fueron innegables, su aplicación práctica adoleció de serios vicios, especialmente por el carácter sectario y restrictivo que adquirió en diversas oportunidades, lo que obstaculizó la concreción de la segunda exigencia.

El pc, por su parte, sostuvo una política de mayor amplitud, la cual partía por reconocer un papel autónomo a la burguesía nacional, postulando alianzas con ella y la pequeña burguesía, pero sin cauterizar, en cambio, el papel dirigente de la clase obrera.

Nos parece necesario puntualizar de paso, dos conceptos de la máxima importancia para el debate revolucionario: hegemonía y alianza. Sólo a partir de su correcta comprensión podremos intentar definir los lineamientos de una adecuada política de alianzas.

La búsqueda de la hegemonía implica una vasta nervadura de alianzas con las más diversas capas y sectores sociales, en las cuales la clase obrera asume una función conductora. Tal papel direccional nace del consenso de sus aliados, que reconocen la superioridad de su

concepción científica del mundo, y han sido educadas en ella, por la vanguardia revolucionaria. Así concebida la alianza, no se forja en entendimientos burocráticos realizados en la cúpula. Ella se plasma en torno a un gran proyecto histórico, que tanto en la sociedad imaginada, como en los valores a que se apela, e incluso en el lenguaje utilizado, expresa, no sólo las reivindicaciones específicas de los sectores sociales que se desean atraer, sino también, y sobre todo, asume las aspiraciones más íntimas, profundas y mayoritarias del pueblo.

En la experiencia chilena, en forma reiterada, se ha tendido a identificar las organizaciones políticas, e incluso, sus superestructuras direccionales, con el sector social cuya representación asumen. De esta manera, se invierten los términos de una correcta política de alianzas: se trabaja de arriba hacia abajo, y no de abajo hacia arriba. La persistencia de este error lleva, por ejemplo, a concebir como equivalente, un compromiso con el Partido Demócrata Cristiano, y más aún con su dirección, con una alianza con las capas medias. Puede ocasionalmente resultar así, pero no necesariamente es siempre así. Para un partido revolucionario, la única política realista frente a estas capas, y en definitiva exitosa, consiste en ganarlas, educarlas e incorporarlas en un gran proyecto de vida.

En su concepción restringida, el concepto de alianzas tiene un alcance puramente circunstancial e instrumental. En ella, está inmersa la idea de la "utilización" del aliado, el cual tiene naturalmente un carácter recíproco. En el trasfondo de este tipo de compromiso está implícito el siguiente razonamiento: Soy débil, necesito aliado, cuando sea fuerte, arrasaré con ellos.

El partido revolucionario, que aspira a la hegemonía, no es ajeno a las alianzas tácticas, ni tampoco a los compromisos puntuales, porque no es extraño al acontecer diario y vive inmerso en la coyuntura política. Pero funcionaliza esas alianzas y esos compromisos, en el prisma de su objetivo estratégico, llegar a ser hegemónico, esto es, establecer la primacía de "su ideología". En esta perspectiva, el concepto de lucha hegemónica no se opone a las alianzas y compromisos tácticos, al contrario, las supone.

La alianza estratégica carece de un carácter instrumental. Su objetivo último no está determinado por la pequeña ganancia política o el mezquino dividendo electoral. El "aliado" no debe experimentar la sensación de ser "utilizado" ni tampoco la de servir de "tonto útil" para un trecho del camino. De hecho ni es utilizado ni es un acompañante transitorio, puesto que está incorporado y forma parte del proyecto de la clase obrera, proyecto del cual, si bien es subalterno en un plano histórico, lo incluye en cambio, a plenitud, al abrirle una perspectiva distinta, nueva, superior y trascendente, precisamente en

la reforma intelectual, moral y cultural de la sociedad, postulada por la clase fundamental.

En este proceso la clase obrera también debe ceder. Debe contabilizar los intereses de los sectores que se pretendió hegemonizar. Hay un equilibrio en los compromisos que obliga a ésta a hacer concesiones, pero sin afectar su objetivo estratégico.

La autonomía de la clase obrera, señalada antes como requisito esencial para el éxito del movimiento popular, tiene la virtud de crear un polo de atracción indispensable, que además de otorgar personalidad política propia a la clase, facilita la difusión de su proyecto histórico. La conformación de este polo no es sin embargo condición suficiente para romper la servidumbre ideológica de la pequeña burguesía. Lo que, en último término, lo transforma en una "real fuerza de atracción" es la validez y corrección histórica del proyecto que formula. Sin embargo, la sola existencia de aquel polo permite desvanecer las ilusiones de los partidos políticos de las capas medias, en orden a instrumentalizar al proletariado en funciones de sus intereses.

En la experiencia del movimiento popular chileno, los sectores pequeñoburgueses que adhirieron al proyecto socialista, provenían en su mayor parte de las capas medias asalariadas, de importantes estratos intelectuales y del estudiantado. Si bien la clase obrera logró que estos sectores reconocieran filas en los partidos Socialista y Comunista, es decir, adoptaron como propia la ideología del proletariado, convirtiéndose en sus agentes, no logró, en cambio, construir una amplia red de alianzas con sectores de la pequeña burguesía, en cuanto a tales, puesto que su política estuvo orientada —por lo menos fue el caso del ps— a la captación de elementos individuales de la pequeña burguesía. Es decir, los hizo ideológicamente proletarios, en la medida en que renunciaron a sus intereses de clase e hicieron suyos los del proletariado. Sin embargo, no intentó —con la amplitud necesaria— incorporar las reivindicaciones y aspiraciones de grupos y estratos subalternos, compatibilizándolos con los propios.

El otro frente, de vital importancia, sobre el cual, lamentablemente, fijó tarde su atención el movimiento popular, fue el de la mujer. Éste revestía un inmenso significado, no sólo por su peso cuantitativo —el 50% del electorado— sino por su gravitación cualitativa, en el seno de la sociedad chilena.

En países como el nuestro, la abrumadora mayoría de las mujeres no están incorporadas al trabajo productivo y asalariado; en cambio, sí realizan tareas excepcionalmente duras, sacrificadas y abnegadas en el cuidado y sostén de la numerosa familia proletaria y campesina,

y en la profusa red de prestación de servicios. Esto obliga a que la mujer permanezca, por lo general, marginada de las luchas sociales y políticas; y en mucho mayor medida que los hombres, sujeta a la servidumbre ideológica de la burguesía, en especial, a la influencia religiosa. Así se explicaba el hecho que la Unidad Popular lograra una votación sustancialmente superior en el registro de hombres al de mujeres. En ellas predominan —incluso en los estratos más modestos— los valores propios de las capas medias, en particular, se ahonda su temor a la “inseguridad” y al cambio. Todas las imágenes de caos, de anarquía, y desorden, son percibidas con mucha mayor intensidad y violencia, por la mujer, dado su nivel cultural, su reducido desarrollo político, su escasa conciencia de clase. Todo ello es consecuencia del papel específico y subalterno, que cumplen en una sociedad capitalista, agravada por su condición de dependiente y subdesarrollada.

La propaganda reaccionaria encontró en la mujer, fácil y amplio terreno de proselitismo. Múltiples razones explican este fenómeno; unas, propias del subdesarrollo y su forma peculiar de manifestarse en “el estatus” de la mujer en nuestras sociedades; las otras, propias de la psicología femenina, de la gran influencia religiosa, de las miserables condiciones ambientales y de los tipos de trabajo que debe realizar: “labores del sexo”, empleadas domésticas (en Chile existían aproximadamente 200 000), lavanderas, costureras, y proporcionalmente muy pocas en trabajos productivos de obreras o asalariadas.

En síntesis, en nuestras sociedades subdesarrolladas se encuentra doblemente explotada y discriminada: como mujer y como trabajadora; y por eso también su lucha tiene un doble objetivo liberador.

Lo anterior obliga a los partidos obreros a dispensar una preocupación muy especial al problema de la mujer y a los factores concretos que configuran su “universo cultural”.

En resumen, la experiencia recogida en Chile permite afirmar que la política de autonomía de clase y la creación en torno a ella de una poderosa fuerza de atracción social, política y cultural, constituyó la piedra angular del extraordinario movimiento de masas que hizo posible la victoria de 1970 y dinamizó el posterior proceso revolucionario, entre 1970 y 1973. Los avatares de aquel proceso nos enseñaron, sin embargo, que aquello no fue suficiente; y la pretensión de remprender el camino liberador, obliga a la clase obrera a avanzar tras la consecución de una coalición de fuerzas, aún más amplia y poderosa, capaz de constituirse en una irrecusable alternativa de poder frente a la burguesía.

Ahora bien, ¿sobre qué factores debe estructurarse un esfuerzo por erosionar el bloque ideológico burgués imperialista

La experiencia chilena constituyó un extraordinario *test* de sufi-

ciencia para el esquema cultural dominante. Los valores, abierta o subliminalmente internalizados, se revirtieron contra el intento transformador y ubicaron en trincheras opuestas y agresivas, a sectores mayoritarios de la pequeña burguesía. De paso, se demostró que los cambios operados en la infraestructura económica, no sólo no se trasladaron de manera inmediata y mecánica al universo superestructural de las ideas y representaciones colectivas, sino por el contrario, éste se cierra en un sólido circuito defensivo.

Para destruirlo o debilitarlo es básico desarrollar una permanente, firme y resuelta lucha ideológica. Lucha planificada minuciosamente en toda su inmensa gama; implementada con los extraordinarios adelantos técnicos, sin dejar nada a la improvisación; fundada en estudios exhaustivos y científicos de las técnicas reaccionarias en la manipulación de las masas y en el dominio de los medios de comunicación; en la guerra psicológica; en las campañas de terror; en el manejo de la información y la desinformación; “del odio, del miedo y de la esperanza”; de la propaganda negra, blanca y gris.¹¹ Al mismo tiempo debe basarse —esta lucha ideológica— en el dominio cabal y científico de los múltiples temas que la componen y complementan; en análisis profundos de cada idiosincrasia nacional; de los rasgos psicológicos peculiares de cada país; de la conducta de cada sector social; de sus reivindicaciones y aspiraciones más sentidas; incluso del lenguaje y de las imágenes; en una palabra, es necesario dibujar un esquema de sociedad futura, deseable, mejor, más justa y más humana.

Por eso, cualquier proyecto revolucionario, debe apuntar al objetivo de destruir el corpus ideológico de los sectores pequeñoburgueses, en forma de diluir sus prejuicios, disipar sus temores y anular su hostilidad básica al cambio, hasta llegar a identificarlos con los valores permanentes del humanismo marxista y de una sociedad justa y noble.

El objetivo de erosionar la entente hegemónica nos obliga a superar viejas insuficiencias, hábitos arraigados y consignismos, que hasta hoy han impregnado la conducta de las fuerzas revolucionarias chilenas. Con nuestra virtual complacencia, la burguesía ha monopolizado las banderas del patriotismo, de la eficiencia, de la moral pública, del orden, de la autoridad. Ha expropiado, para manipularlos con éxito, valores trascendentes de toda organización social, hasta llegar a presentarlos como valores exclusivos de su clase y de su ideología. La izquierda ha cedido gratuitamente este terreno.

El complejo desafío que nos impone el futuro, nos obliga a reivindicar —porque es necesario y justo— las auténticas tradiciones nacio-

¹¹ Según el “Manual de defensa del ejército norteamericano”, son estos tres los elementos básicos de la guerra psicológica.

nales y patrióticas. Ellas son sentidas por Chile, pertenecen al patrimonio de nuestro pueblo, y somos nosotros, su vanguardia, quienes debemos expresarlas con mayor propiedad y más legítimo derecho. Conceptos como los de honestidad pública y privada, patriotismo, libertad, eficiencia, deben incorporarse, no sólo a nuestro léxico, sino sobre todo, a nuestra conducta diaria, individual y colectiva.

Se trata de ofrecer un esquema de existencia deseable, una concepción coherente del mundo; de internalizar valores de vida y motivaciones colectivas, que estén en la dirección del proyecto propuesto. Ello no sólo debe ser percibido así, por la clase obrera y los campesinos, sino también por nuestros artistas, estudiantes, intelectuales y científicos en general, por todo lo que se llama: "las fuerzas de la cultura", cuya gravitación en las sociedades modernas tiene una relevancia extraordinaria.

A esta pretensión de romper la hegemonía cultural burgués-imperialista, está íntimamente ligada la concepción de una correcta política de alianza. En las páginas anteriores hemos señalado cuáles son las exigencias que ella plantea en el plano teórico. Sin embargo, subsiste la interrogante: ¿Cuál sería una correcta política de alianzas en las condiciones actuales y específicas de Chile?

Reiteraremos una afirmación ya anticipada: En Chile, toda política de alianzas —aún en estas circunstancias— debe elaborarse en función de la aspiración hegemónica de la clase obrera. El éxito estará determinado por su capacidad para concitar el más amplio consenso de las capas y grupos sociales que interesa atraer.

La alianza formulada por la clase obrera y sus partidos, sólo tendrá destino en la medida en que sea expresión de un proyecto político trascendente, que resuma las grandes aspiraciones nacionales, que interprete el sentimiento profundo de nuestro pueblo, y que sea percibido como una solución real y tangible. Este proyecto debe estar avalado por la conducta política cotidiana de quien lo propone; exige una consecuencia severa entre lo que se dice y lo que se hace; entre el objetivo último —la construcción del socialismo— y la respuesta específica a cada problema cotidiano. La alianza deseada calará mucho más hondo y tendrá una fuerza mucho más expansiva, en tanto los sectores que se pretenden ganar, visualicen en la propuesta histórica y en el quehacer diario, la ausencia de actitudes sectarias y dogmáticas.

Es en este horizonte, en el que debemos encarar un antiguo problema, no pocas veces debatido en el seno de la izquierda chilena: la posibilidad de un compromiso con el Partido Demócrata Cristiano.

Indudablemente buscar una alianza estratégica con éste, en tanto exprese intereses de fracciones de la alta burguesía chilena y de grupos monopólicos norteamericanos y de Alemania Federal, es una insensatez política. Pretender imponerle el proyecto histórico del proletariado es una ilusión acientífica, en tanto los sectores sociales que hasta hoy le confieren su representación, continúen siendo radicalmente hostiles a él.

Como hemos afirmado, la propuesta político-social de la vanguardia revolucionaria, debe incorporar los intereses y reivindicaciones de amplios sectores de la pequeña burguesía y orientarse a romper su servidumbre ideológica. Sus efectos, no obstante, deberán medirse en un plazo largo. La complejidad de esta tarea nace de la circunstancia, de que el destinatario final de esta propuesta, es una base social y no la superestructura política que la representa. La Democracia Cristiana chilena será receptiva a una alianza con pretensiones estratégicas, sólo cuando su base social sea permeable a las ideas socialistas. Mientras las visualicen en imágenes distorsionadas, su respuesta continuará siendo negativa.

Sin embargo, entendemos muy claramente que el drama de Chile ha generado una situación singular, que requiere de una respuesta específica. Ésta hace, no sólo posible, sino categóricamente deseable, una convergencia con la Democracia Cristiana tras un objetivo histórico concreto: destruir el fascismo.

¿Sobre qué elementos de juicio formulamos esta afirmación?

La horrenda dimensión y profundidad del drama vivido por nuestro pueblo, debe ser la piedra angular en el desarrollo de una política de emergencia. Actuamos en el período inmediato sobre una realidad abrumadora: una nación demolida en sus instituciones, quebrada social, política y culturalmente; un país con su economía destrozada, esquilado por los grupos monopólicos nacionales y los grandes imperios transnacionales. La nuestra es una nación ocupada y prisionera. Una formidable estructura represiva ensaya con éxito su eficiencia operativa y tecnológica sobre el territorio nacional. El ámbito social en el cual desarrollamos nuestra lucha, está marcado por el temor, la frustración y la miseria. La penetración imperialista en su tejido social es una de las más sólidas del continente.

A partir de esta realidad —y no de otra imaginaria— debemos buscar una respuesta seria y realista a las múltiples interrogantes que formula el período histórico, sellado por la brutal presencia fascista. Éste es el factor principal, básico, que hace ineludible el intento de convergencia tras el objetivo señalado. Sería una insensatez desestimarlo, casi un crimen, eludiendo la superior obligación histórica de unir y movilizar a la abrumadora mayoría nacional antifascista. En

otras palabras, pensamos que esta etapa específica obliga al desarrollo de una política de alianzas, también específica, válida para este período de la lucha revolucionaria. La constitución de un amplio frente antifascista sería la materialización ideal de esa política, en la comprensión de que tal frente supone la confluencia de distintas fuerzas sociales y políticas, para un exclusivo e irrenunciable designio histórico: la destrucción de la tiranía y de las fuerzas y estructuras que la hicieron posible y sostienen.

De esta manera, en la etapa del proceso revolucionario, iniciada el 11 de septiembre de 1973, la lucha por el socialismo pasa por la radicalización de la lucha antifascista, cuyo objetivo no es sólo derrocar la dictadura sino, además, barrenar las bases institucionales que sirvieron de soporte a la contrarrevolución y que aparecen hoy comprometidas con ella, y por tanto, susceptibles de ser destruidas.

El movimiento popular debe enfrentar esta tarea en el marco de un dramático reflujo nacional y continental. En el interior de Chile, las organizaciones políticas y sindicales, han sido gravemente desarticuladas y la lucha antidictatorial se da en contra de un complejo represivo de extraordinario poderío y eficiencia. En el exterior, la "internacional de la represión" se orienta a transformar el continente en un inmenso territorio vedado a las ideas democráticas y revolucionarias, e incluso, progresistas. En nuestro caso concreto, si colocamos el brazo de un compás en el centro de Santiago y extendemos el otro hasta el punto más cercano, al cual podemos acceder libremente, constataremos que en un radio circular de siete mil km, o más, Chile está aislado por un inmenso océano de agua y otro de dictaduras. Esta situación debe considerarse y difícilmente la encaró otro movimiento revolucionario. Siempre, en mayor o menor medida, encontré apoyo logístico y solidario en países limítrofes o próximos.

Éste es otro aspecto de la realidad, que nos obliga a depurar nuestra conducta de arrogancias sectarias y exigencias dogmáticas.

Hemos definido con claridad meridiana la esencia ideológica, la representación social y el papel histórico que la Democracia Cristiana ha jugado en Chile y en el resto del mundo. Pero el impacto brutal de la experiencia fascista no transita en vano por su base social y política. Ella necesariamente está proyectando, y proyectará aún más, desplazamientos y cambios que debemos valorizar.

La tiranía aplasta y asfixia a los sectores más modestos de la población, pero su proyecto margina también a la pequeña burguesía chilena, lo que genera y seguirá generando graves contradicciones con estratos que inicialmente le entregaron su adhesión. En tanto, expresión de estos intereses, la Democracia Cristiana, entra en conflicto creciente con la dictadura. Está claro que su dirección reaccionaria

tratará de zanjar los antagonismos sobrevinientes, pretendiendo erigirse en una alternativa burguesa. Pero también es evidente que la presión social tiende a alterar la correlación de fuerzas internas, hasta ahora favorable al freísmo. Esta situación abre una perspectiva de razonable optimismo: que los grupos más decididos, no vinculados a los intereses monopólicos nacionales y norteamericanos, en tanto disidencia o como dirección, sean capaces de impulsar una resuelta lucha antifascista, unitaria, popular, democrática y nacional. En esta nueva coyuntura, el sector progresista de la DC, puede asumir un papel decisivo. Hombres que con gran consecuencia se han incorporado a la lucha contra el fascismo, como Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, Renán Fuentealba, Claudio Huepe, Gabriel Valdés, Fernando Castillo, y otros, tienen hoy la oportunidad de comprometer a su partido en la realización de acciones conjuntas y tareas comunes con las fuerzas populares.

Estas acciones y estas tareas son imprescindibles para derrotar al fascismo. Nuestra misión inmediata es evitar al país un mayor cataclismo social, capaz de conducirlo a una virtual "desaparición histórica".

No obstante, no podemos prescindir de una circunstancia concreta, asaz negativa. Mientras el frente antifascista funciona de hecho en el seno de las masas y al calor de las acciones contra la tiranía, la dirección freísta intensifica su esfuerzo por mantener a la DC atada al destino predeterminado por el imperialismo: liderizar una opción burguesa, que asegure al país un gobierno autoritario, aunque capaz de ofrecer al mundo una imagen menos brutal. Esta alternativa insensata, pretende —en la propuesta de Frei— hacer borrón y cuenta nueva sobre los años de barbarie, tiende a actuar como catalizador interno y neutralizar los esfuerzos unitarios de los sectores más avanzados.

Frei, aboga para la mejor presentación del "recambio", por un consenso amplio que abarque, desde una presunta "derecha democrática" hasta un bucólico socialismo, también "democrático", tolerado por los norteamericanos.

La grosera pretensión divisionista de esta propuesta no tiene destino. Ni lo tendrá alternativa alguna que se construya sobre la intención de dividir al movimiento popular y proscribir a más del cuarenta por ciento de los chilenos de la vida ciudadana y de toda participación pública.

Hoy se abre una expectativa razonable, como lo planteara Radomiro Tomic, para crear "la unidad política y social del pueblo". Debemos luchar por ello.

EL COMPLEJO MILITAR REPRESIVO

Juzgado el movimiento popular desde una perspectiva histórica, tres son los elementos de su éxito: a] haber logrado soldar una sólida unidad de clase, expresada en el entendimiento de los grandes partidos obreros, Socialista y Comunista; unidad deseada y apreciada por sus respectivas bases, trasformada en elemento esencial del acervo político de cada una de nuestras colectividades; desarrollada y fortalecida por encima de concepciones teóricas diversas y de los avatares de la lucha diaria; b] haberse planteado el papel hegemónico de la clase obrera, negándose a trasformarla en masa subalterna de una conducción pequenoburguesa; y c] haber sabido aplicar la teoría marxista-leninista a la realidad chilena, admitiendo que el camino al poder, no surgía de imitaciones mecánicas de otras experiencias o de la aplicación de esquemas dogmáticos y preconcebidos.

¿Cuáles son en cambio los factores que impidieron que su éxito transitorio se convirtiera en definitivo?

De alguna manera hemos dado respuesta a esta interrogante. No fueron simples "errores" los causantes de la interrupción sangrienta de la experiencia revolucionaria. Enfatizamos por el contrario, la presencia de graves y profundas "insuficiencias", cuya génesis se encuentra en los orígenes y desarrollo del movimiento popular.

Entre las más graves, hemos aislado la errada traducción de la teoría leninista del Estado a la realidad chilena. Para Lenin, el Estado es "un aparato especial de represión", "un instrumento de opresión de una clase sobre otra". "Fundar un nuevo Estado", como postulaba el Programa de la Unidad Popular, obligaba a modificar el signo de clase del aparato militar represivo. La transferencia del poder de una clase a otra, exigía adoptar la vía estratégica adecuada para desarticular la columna vertebral de ese Estado: sus aparatos represivos. La ausencia de una política orientada a descomponer y apoderarse del centro neurálgico del Estado burgués fue una grave "insuficiencia", cuyas trágicas consecuencias la historia recoge.

Repetimos escuetamente el criterio extensamente desarrollado en capítulos anteriores: nunca hubo por parte de los partidos de izquierda, al menos orgánicamente, un intento serio de estudiar las instituciones armadas, conocer su organización, su funcionamiento, sus valores rectores, los puntos más sensibles de su acervo ideológico. Las Fuerzas Armadas devinieron en un ente intocable, cuyos problemas resultaban inconveniente discutir ante la opinión pública. Desde el triunfo del Frente Popular —en 1938— Chile vivió un intenso proceso

de "democratización". Básicamente, bajo el impulso de los partidos de izquierda, se fue construyendo una democracia política que bien podría destacarse entre las más perfeccionadas del mundo. Por supuesto, no tenía un correlato de igual dimensión en lo económico y social, donde se expresaba con mayor nitidez el contenido de clase de esa democracia. Sin embargo, durante ese largo período, las Fuerzas Armadas permanecieron inmunes a la ola democratizadora y no es una exageración afirmar, que fue la única institución del Estado, marginada de un proceso, que permeabilizó hasta sus raíces a la sociedad chilena y en grado diverso, todas sus instituciones políticas.

La misma omisión constatamos en la orientación antimperialista del movimiento popular. Centrada inicialmente en la denuncia y agitación sobre sus formas de penetración en la economía chilena, se proyecta posteriormente también al plano ideológico. El éxito en este terreno es innegable y se manifiesta en la votación unánime del proyecto de nacionalización del cobre. Sin embargo, jamás se desarrolló un esfuerzo semejante frente al problema de la penetración imperialista en las Fuerzas Armadas, a su dependencia tecnológica, al entrenamiento de la oficialidad en escuelas norteamericanas, al tipo de cursos, a las ataduras restrictivas de la soberanía nacional, por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Éste, firmado en Río de Janeiro, en plena guerra fría (1948), a pesar de haber cambiado la situación internacional, mantiene su vigencia y continúa operando como instrumento de subordinación de nuestros institutos armados, al complejo militar de EU.

En síntesis, la izquierda chilena permaneció largos años silenciosa y ausente frente al problema militar. Diversos factores explican este fenómeno, que llegó a constituirse en la más seria insuficiencia del movimiento popular.

Un primer elemento era, sin duda, el papel cumplido por las Fuerzas Armadas en América Latina y Chile. Un papel sistemáticamente regresivo, casi sin excepción, hasta el advenimiento al poder del general Juan Velasco Alvarado. No hay otra experiencia similar. En diapasón menor, podrían señalarse los movimientos militares: del "tenientismo" en Brasil; "peronista" en Argentina; el movimiento de la oficialidad del ejército que depuso a Alessandri en 1924, en Chile; la condición militar del presidente Juan Jacobo Arbenz en Guatemala; la dura y heroica batalla antimperialista librada por el coronel Francisco Caamaño en Santo Domingo; Carlos Lamarca, capitán del ejército de Brasil, quien encabeza una larga y sacrificada guerrilla en contra de la tiranía; y en Guatemala, los militares revolucionarios Yon Sosa y Luis Augusto Turcio Lima, liderizan la resistencia armada contra la explotación oligárquica y la dependencia mo-

nopólica; y así, numerosas otras rebeliones militares, realizadas en diversas épocas y latitudes, confirman la existencia potencial, en el seno de los institutos armados continentales, de importantes grupos y movimientos, patrióticos, democráticos, antimperialistas y revolucionarios.

Sin embargo, en general, las dictaduras “gorilas” en América Latina han constituido una expresión de los intereses del imperialismo y de las oligarquías monopólicas; se ha ensañado con los partidos populares de cada país, y ha actuado siempre, como factor disuasivo de “última instancia”, para preservar la hegemonía de las minorías plutocráticas.

La constatación de este hecho reiterado, generó en la izquierda chilena un “antimilitarismo” espontáneo e irracional. En el caso del Partido Comunista, este fenómeno fue reforzado por la extrema contraposición en que la propaganda reaccionaria lo colocaba con las Fuerzas Armadas. Sistemáticamente, ella proyectaba una imagen “no nacional” del PC, en tanto que la educación militar agita el patriotismo y el nacionalismo como banderas ideológicas fundamentales.

El Partido Socialista, por su parte, se desprende sólo “intuitivamente” de las concepciones antimilitaristas de la izquierda latinoamericana. Nace ligado a un movimiento militar de carácter nacionalista pequeñoburgués. Un comodoro del Aire, Marmaduke Grove, es uno de sus fundadores y su figura política más destacada en el primer decenio de su vida. Su vinculación, sin embargo, según pasan los años, tiende más bien a disminuir. Renace tímidamente cuando el PS Popular apoya en 1952 la candidatura presidencial del general Carlos Ibáñez, el militar que más honda huella ha dejado en la vida política del presente siglo, por sus posiciones nacionales y antioligárquicas. El secretario general del PS de la época, senador Raúl Ampuero, desempeñó durante largos años la presidencia de la Comisión de Defensa del Senado, manteniendo desde allí estrecha relación con los mandos militares. Ampuero fue, sin duda, el dirigente de la izquierda chilena que con mayor lucidez analizó el problema de las Fuerzas Armadas. Desde entonces se establece un circuito de relaciones, que aunque débil, no desaparece en los años posteriores, como lo demuestra el hecho —por cierto no fortuito— de que la mayoría de los militares patriotas, asesinados o encarcelados, con ocasión del golpe militar, expresaran evidentes simpatías por el socialismo.

No obstante, la inconstancia y falta de organicidad de estos empeños, impidió su concreción en un programa de agitación de banderas democráticas y patrióticas en el seno de las Fuerzas Armadas. Tampoco llegó a manifestarse en un plan sistemático de penetración ideológica o en la incorporación programada de cuadros, con conciencia de clase en las instituciones castrenses.

El triunfo de la Revolución cubana, en 1959, suceso de honda repercusión en el socialismo chileno, sella, por una equivocada interpretación nuestra, una manera esquemática de resolver el problema del Estado y del poder. Las fuerzas armadas de la burguesía debían ser destruidas por las fuerzas armadas de la clase obrera, por el ejército del pueblo. De este modo, el antagonismo entre la izquierda y el ejército se hace definitivo. El desarrollo de concepciones "foquistas", unilaterales y equivocadas, desatan un proceso, en el cual se suceden intentos diversos de creación de fuerzas armadas populares, aplastadas sin excepción, por las Fuerzas Armadas burguesas, modernizadas, adiestradas y apertrechadas, por el imperialismo, precisamente para enfrentar las nuevas exigencias de la lucha antiguerrillera. Así, pueblo y ejército se divorcian cada día más en el continente.

No es éste, por supuesto, un fenómeno atribuible al puro plano de la ideología. Obedece sin duda a un hecho real y objetivo: el carácter del Estado burgués. Las Fuerzas Armadas en esencia son reaccionarias, toda vez que constituyen el brazo represivo de este Estado de clase. Pero ello no debió llevarnos a considerarlas como un compartimento inexpugnable y afiado. La lucha de clases también se expresa en su interior, aunque mediatizada por los principios "internalizados": verticalidad del mando, jerarquía, obediencia y disciplina no consciente.

En este sentido, la Unidad Popular padeció tanto de fatalismo como de esquematismo. Fatalismo, frente al mito burgués que colocaba a las Fuerzas Armadas por encima y al margen de la lucha de clases; y esquematismo, en quienes pensaron contraponerle, como única y exclusiva respuesta, el ejército popular.

En estricta consecuencia, la única política coherente con la vía escogida por la UP, era proyectar la división social y política de Chile al interior de sus institutos armados; para primero, restarles cohesión; y segundo, constituir dentro de ellos, unidades armadas de defensa del proceso. Esta fórmula no era incompatible con medidas de carácter complementario, como ser la preparación de cuadros de sólida formación militar y de aparatos paramilitares.

De lo anterior se colige, que los errores cometidos durante el gobierno de la UP, en materia de política militar, son consecuencia de un insuficiente análisis teórico de esta materia cardinal.

La percepción cabal de esta insuficiencia nos permite comprender la prioridad que tiene en la elaboración de una estrategia política, el esfuerzo por descomponer y romper la estructura represiva del Estado burgués. Este esfuerzo, en términos más concretos, se expresa en el desarrollo de una política militar.

Los ejércitos juegan hoy un papel decisivo en el acontecer univer-

sal. Esto es tanto más claro, en América Latina, donde las democracias representativas apenas si languidecen, como manifestaciones formales, en no más de tres o cuatro países. En el resto, los uniformados actúan directamente o por intermedio de testaferros civiles, en el gobierno de los asuntos nacionales. En la última década, como ha quedado dicho, han superado la vieja etapa de "simples guardianes" de las oligarquías, para asumir el papel —mucho más complejo— de ejecutores directos e institucionales de políticas desarrollistas.

Sin embargo, a despecho de este nuevo papel institucional, asoman en su interior inquietudes, que llevan a algunos sectores a adoptar posiciones democráticas, nacionales y progresistas.

Chile no ha escapado a este fenómeno. La vorágine de crueldad, que ha envuelto a las Fuerzas Armadas, compromete desde luego la estructura misma institucional. Pero lejos de sofocar, estimula las contradicciones inevitables que afloraron ya antes del golpe militar. La conciencia de la ignominia, que subyace en el trasfondo de los estratos castrenses, hace más relevantes esas contradicciones, aunque el terror, transitoriamente, obstaculice su expresión cabal.

Ello facilita el esfuerzo que debe realizar el movimiento revolucionario, en orden a desarrollar en su interior las condiciones que permitan crear la estructura defensiva de un proceso de cambios. Muchos factores —débiles aún— contribuyen a este propósito. A pesar de la represión interna, subsisten las convicciones democráticas por las cuales sacrificaron sus vidas los generales Schneider, Prats, y Bachelet; crece la comprensión del carácter de los intereses cuya defensa criminal les es impuesta. Los privilegios y la corrupción de grupos de la oficialidad superior, ahondan el malestar de los uniformados y socavan su disciplina; la faena desnacionalizadora de la junta y su sometimiento a los designios norteamericanos, hieren el patriotismo de muchos que hoy mastican su rebeldía inexpresada; de una u otra manera se detecta el grave daño ocasionado a la seguridad del país por el aislamiento internacional y la magnitud de la repulsa universal.

Existen pues elementos, que deterioran la compacta imagen institucional exhibida con posterioridad al golpe militar, y que en cierto modo, son consecuencia directa de éste. Sobre ellos debemos trabajar. Los ejércitos, no obstante el papel asignado por el Estado burgués, no son impermeables a las contingencias de la comunidad donde habitan. Naturalmente, como en toda organización jerarquizada, las Fuerzas Armadas son más refractarias a las influencias externas, lo cual hará más lenta y difícil la concreción de una política tendiente a alterar los mecanismos psicológicos, que las ubican automáticamente en la defensa del estatus. La obediencia, la disciplina, el espíritu de cuerpo, el respeto a la jerarquía, han sido trabajados ideológicamente, para

impedir todo juicio reflexivo. Se ha desarrollado una pedagogía eficiente para mutilar intelectualmente al subordinado, generando un formidable poder en la cúspide de la pirámide institucional.

Una correcta política hacia las Fuerzas Armadas, no sólo debe estar orientada a desnudar los vicios del sistema capitalista y debilitar el peso de la ideología burguesa, sino también, a quebrar los peligrosos dispositivos de inhibición intelectual y ética, que aplastan los niveles inferiores de la estructura militar.

LAS FUERZAS MOTRICES DE LA REVOLUCIÓN CHILENA

La revolución chilena será obra, fundamentalmente, de la clase obrera y sus partidos. Esta afirmación sigue siendo válida. La experiencia dramática vivida por nuestro pueblo le otorgan un mayor y definitivo relieve histórico. El reflujo coyuntural del movimiento de masas no cuestiona el papel protagónico del proletariado y sus organizaciones. Los partidos populares siguen constituyendo el núcleo central, en torno al cual se levantará la única alternativa viable a la dictadura.

El esfuerzo del fascismo por destruir las vanguardias obreras ha resultado históricamente estéril. La experiencia de todos los demás países demuestra su increíble capacidad de supervivencia. El fascismo —no importa cuánto tiempo dure— no logró exterminar los partidos socialistas y comunistas y las ideas revolucionarias en Portugal, Alemania, España, Italia o Grecia. Al contrario, en el instante del ajuste de cuentas, han emergido —con una fuerza insospechada y muy superior a la que tenían antes— para reasumir su papel conductor.

En Chile existe una conciencia sembrada en el tráfico de medio siglo de luchas, que la dictadura no logrará liquidar. El pueblo que vivió los días luminosos de la experiencia revolucionaria y luego conoció la magnitud de la infamia fascista, sobremontará el terror, fortalecido con nuevas armas y con más eficientes formas de lucha.

UN PARTIDO PARA EL SOCIALISMO

El ps es sin duda la organización política más reprimida por la dictadura. Hacemos esta afirmación sin la menor dosis de sectarismo.

En la actual circunstancia una pretensión competitiva resultaría macabra. Ella corresponde a la simple constatación de un hecho al que atribuimos consecuencias objetivas.

Los asesinatos de Salvador Allende y de José Tohá, inauguran la explosión de odio volcada sobre nuestro partido. Cinco integrantes del Comité Central fueron asesinados: Arsenio Poupin, Eduardo Paredes, Arnoldo Camú, Luis Norambuena, y Víctor Zerega. Desde hace más de un año están desaparecidos en las mazmorras fascistas, los dirigentes nacionales Carlos Lorca, Ricardo Lagos y Exequiel Ponce, este último jefe del partido en el interior del país. Carlos Lazo y Erich Schnake, también miembros del Comité Central, son los únicos dirigentes nacionales de los partidos populares, procesados y condenados por presunta infiltración en las Fuerzas Armadas. Más de la mitad de los miembros de la dirección máxima han conocido las torturas y los campos de concentración. Cuadros medios fueron sistemáticamente eliminados a través de todo el país. Miles de nuestros compañeros fueron torturados salvajemente con la torpe e inútil intención de quebrar la solidez de su compromiso revolucionario.

Militantes del partido se prodigaron en acciones heroicas en toda la geografía nacional. Ante la exasperada imposibilidad de dar una respuesta orgánica a la barbarie, derrocharon coraje en la resistencia aislada o en el accionar de pequeños grupos organizados al calor de la lucha contra la represión.

Hay lecciones que recoger. Ellas dejan, sin embargo, un saldo positivo no previsto por la irracionalidad del adversario: una extraordinaria experiencia histórica; conciencia revolucionaria; promoción de cuadros políticos y militares en la cárcel o en el exilio; hábitos y métodos clandestinos de lucha, desconocidos en el partido.

Ésta es la argamasa humana sobre la cual podemos y debemos reconstruir una poderosa y eficiente vanguardia revolucionaria, que rescate los valores específicos de su personalidad histórica y supere las debilidades ideológicas y orgánicas que contribuyeron a frustrar el éxito de la empresa, cuya dirección compartió.

En esta perspectiva, el ps debe empezar por reafirmar la resuelta voluntad de autonomía, impresa por quienes le dieron vida y forjaron su presencia en la realidad nacional. Siendo parte integrante de la inmensa humanidad que lucha por el socialismo, no se adscribe sin embargo a ningún centro de influencia ideológica ni a ninguna de las grandes corrientes, que hasta hoy dividen el movimiento obrero internacional. A nuestro juicio, un partido revolucionario, con plena autonomía conceptual y política, es capaz de entregar un mejor aporte, más positivo y creador, a la lucha por el fortalecimiento y la unidad de las fuerzas socialistas y de los movimientos de liberación nacional.

Enraizado profundamente en la realidad chilena, el ps debe reafirmar su antigua vocación latinoamericanista, hoy más justa que nunca, cuando la lucha deberá ser unitaria y de todos los pueblos del continente, en contra del imperialismo norteamericano.

A partir de la ubicación del partido, en el plano internacional y específicamente en América Latina, podemos plantearnos la interrogante básica: ¿sobre cuáles fundamentos es concebible su reformulación como vanguardia revolucionaria?

Imaginamos al Partido Socialista como un partido marxista-leninista; organizado sobre los principios del centralismo democrático; autónomo para definir el camino de la revolución chilena; profundamente enraizado en las grandes tradiciones nacionales y en los valores auténticamente democráticos y patrióticos; con una acendrada vocación latinoamericanista e internacionalista, en la medida que expresa su resuelta alineación con todas las fuerzas que luchan por el socialismo y la liberación nacional.

El Partido Socialista hizo suyo el marxismo no como un dogma, sino como un método científico para interpretar la realidad, enriquecido por nuevos aportes y la experiencia generada por el devenir social. Su adhesión al marxismo-leninismo es la consecuencia de un proceso de maduración ideológica, de un desarrollo creador que ha recusado intransigentemente toda asimilación sectaria y consignista.

El partido es una organización de masas, estructurado democráticamente. Nuestro partido tiene un inmenso arraigo en el seno de los trabajadores chilenos. Esta cualidad no puede perderse cualesquiera sean los términos de la lucha. Naturalmente, las condiciones represivas irán graduando los niveles en los cuales el partido manifiesta su carácter de masas. En condiciones de extrema clandestinidad, tales posibilidades de expresión, están ciertamente limitadas y las tareas orgánicas tenderán a concentrarse en un grupo reducido de cuadros político-militares. No obstante, aunque el trabajo actual dificulta una acción abierta de masas, debe él estar orientado a mantener la ligazón indispensable entre la estructura partidaria clandestina y el desarrollo de una vasta y poderosa red de organizaciones de masas.

No pensamos, por cierto, ni aun en las presentes circunstancias, en la pequeña vanguardia de cuadros, de organización estrictamente militar, de gran eficiencia operativa, de rígida disciplina, pero desligada de las masas y ajena a sus reivindicaciones reales y específicas. Indudablemente, las circunstancias creadas por el terror fascista, nos empujan a adoptar tal tipo de organización. Sin embargo, nuestra lucha no debe transformarse en lucha de vanguardias militarizadas, o de sectas o grupos terroristas. La nuestra será, en esencia, una lucha de masas, y en su grado más alto, una insurrección armada popular y

para que no pierda tal carácter, debemos darnos una organización adecuada a este objetivo.

El carácter de partido enraizado en las masas no se contrapone con la exigencia perentoria de elevar el nivel ideológico de sus militantes y la formación de cuadros político militares. Un partido afinado en las masas no es sinónimo de partido desorganizado, asambleísta, carente de dirección centralizada y disciplina revolucionaria, con militantes ligados sólo sentimentalmente al socialismo, pero sin formación política teórica. Por el contrario, la fuerza del partido debe asentarse, en la elevación general del nivel político de todos sus miembros, en la correcta compatibilización, entre las decisiones de la dirección con su aplicación disciplinada y masiva. Podemos decir, que un partido tal, para cumplir su papel conductor, debe realizar un esfuerzo orgánico e ideológico, muy superior al de un partido de cuadros.

El centralismo democrático, norma orgánica básica de todo partido revolucionario, se traduce fundamentalmente en el estricto acatamiento de las minorías a las mayorías, y de los organismos inferiores a los superiores, y supone el rechazo de toda "tendencia", "corriente", o "fracción" dentro de él

Entendemos sí, que el centralismo democrático debe tener una concreción real. No puede ser una simple formulación declarativa. Debe ejercerse de manera, que junto con sancionar rigurosamente cualquier desviación "tendencial", haga de la democracia interna una práctica constante.

En este sentido nos parece válida la diferencia entre partido "monolítico" y partido "homogéneo". El centralismo democrático no debe aspirar al monolitismo, esto es, a suprimir toda disensión teórica, a crear militantes que piensen idéntico, formados bajo una orientación acrítica y con prohibición de profundizar conocimientos de autores "no oficiales"; pero sí debe desarrollar la homogeneidad de su masa partidaria, a través de la discusión crítica, del debate permanente y de la confrontación abierta de las ideas.

Por cierto, la conjugación de centralismo y democracia, admite diversas gradaciones. Ellas corresponden a diversas situaciones objetivas (períodos de clandestinidad, lucha armada o lucha legal) o a la momificación de la estructura partidaria, que deriva en el centralismo burocrático.

Sobre estos fundamentos, el Partido Socialista debe, además, definir para Chile el perfil de la sociedad que aspira a construir.

La clase obrera difícilmente podrá cohesionarse, tomar conciencia de su fuerza y aspirar a la hegemonía y al poder, sin precisar los lineamientos de su proyecto histórico. Es decir, debe traducir su concepción del mundo en un diseño concreto de sociedad, que cumpla

con un doble propósito: primero, servir de polo aglutinador; y segundo, homogeneizar a los grupos auxiliares y clases subalternas en torno a él.

El primer paso de un partido revolucionario en esa dirección es definirse a sí mismo. El partido vanguardia de la clase obrera debe ser el espejo de la sociedad propuesta para todo su entorno social. Por ello, los conceptos de centralismo y democracia partidaria conforman elementos básicos, no sólo desde el punto de vista de su propia normatividad orgánica, sino también, en el propósito de concitar el más amplio consenso en torno al proyecto histórico propuesto. Para decirlo en otros términos: la conciencia del militante, las normas centrales de organización partidaria, el espíritu y la moral revolucionaria, no son simples elementos de una "racionalidad interna", sino anticipaciones fundamentales de la sociedad que se desea construir.

La ausencia de sectarismo, la limpieza de los procedimientos políticos, la adhesión a la verdad, su entrega a las masas, la exaltación de los valores morales proletarios, el tipo no meramente instrumental de sus alianzas, la erradicación del burocratismo, el estímulo a la iniciativa crítica y creadora, constituyen todas características que el partido debe incluir en su praxis social y en su proyecto histórico. A la inversa, la organización rígida y totalitaria, el sectarismo, la triquiñuela política, el ocultamiento de la verdad a las masas, la instrumentalización de los aliados, el burocratismo, las pretensiones monolíticas y dogmáticas, que ahogan la crítica y la creación libre, provocan aversión y no consenso, en la misma medida que aparecen como antagónicas a la sociedad ofrecida, como esquema deseable de vida futura.

Difícilmente, un partido de naturaleza dogmática y sectaria, será capaz de generar en torno suyo un amplio consenso y el reconocimiento de su papel rector, por parte de los grupos, clases y sectores, que se quieren convertir en aliados.

En este sentido, la propia naturaleza de los partidos obreros chilenos impuso, en el pasado, un fuerte obstáculo a la ejecución —si no a la concepción misma— de una política de alianza.

Por lo que corresponde al PS, poseyendo éste una enorme potencialidad, nunca alcanzó un grado aceptable de homogeneidad ideológica y disciplina política; cayó muchas veces en un consignismo esquemático y careció de militantes con extendido nivel ideológico, permitiendo el desarrollo de conductas liberales, anárquicas y fraccionalistas. En la aplicación concreta de su política de "Frente de Trabajadores" generó más de una vez desviaciones puristas, expresadas en manifestaciones sectarias.

Además, el partido vanguardia no puede estar presente sólo en los "grandes debates teóricos" sobre la revolución, su carácter, las vías y

el papel motriz de la clase obrera; y ausente de todo aquello aparentemente adjetivo, doméstico y subalterno. No corresponde motejar de “reformista” o “socialdemócrata” a quien se preocupe de los problemas concretos de cada día, primordiales, por lo demás, para el trabajador de carne y hueso. Cualquiera posibilidad otorgada por el régimen para mejorar las condiciones de las clases explotadas, ampliar las libertades públicas y lograr reivindicaciones económicas específicas, deben ser aprovechadas y no subvaloradas, en virtud de un purismo revolucionario.

LA UNIDAD DE LA CLASE

Hemos enfatizado en muchas oportunidades, siempre con íntima complacencia, el singular entendimiento logrado en Chile por los partidos Socialista y Comunista.

Su persistencia y profundidad carecen de precedentes en la historia de las luchas sociales, latinoamericanas y mundiales. Durante veinte años, ambos partidos vitalizaron conjuntamente el auge del más poderoso y vasto movimiento popular del continente. Juntos liberaron un proceso revolucionario, que en su ascenso y derrota, en sus grandezas y debilidades, se proyectara decisivamente en las batallas de otros pueblos.

Desde la quiebra del movimiento obrero internacional, al concluir la segunda década del siglo, nunca socialistas y comunistas han marchado en convergencia tras objetivos políticos trascendentes; sólo excepcionalmente, en períodos transitorios y obligados por la presión de factores externos insuperables. El antagonismo se ha dado en forma constante y en Europa ni siquiera el peso dramático de la experiencia fascista generó condiciones para soldar una unidad efectiva. Así fue, ayer en España, Francia o Italia, y lo es hoy —con tan peligrosas consecuencias— en Portugal y Grecia.

A la peculiaridad del fenómeno chileno no son ajenas las especificidades del ps. Salvo brotes esporádicos y no significativos, nuestro partido actuó depurado de los resabios anticomunistas y antisoviéticos que marcaron el quehacer de otros partidos y movimientos populares, y que con irresponsable obstinación continúan dañando el potencial revolucionario de la clase obrera. Indudablemente, la aptitud unitaria del socialismo chileno, encontró un correlato adecuado en el pc, sin el cual, esta unidad no hubiera sido posible: su solidez orgánica, su coherencia ideológica, y su profundo enraizamiento en las

tradiciones de lucha del proletariado. Además ha contado con numerosos dirigentes de excepcionales condiciones, en especial debemos mencionar a Luis Corvalán, su secretario general, hasta hace poco encarcelado por la dictadura.

Hace ya casi tres décadas, el ps formuló una política de clases a partir de la cual desarrolló una concepción del movimiento revolucionario, cuyo supuesto básico era y es la unidad de los dos partidos obreros. Ésta fue concebida como una cuestión de principios y no como una simple formulación táctica. El pc, por su parte, coincidió en una valoración correcta de la unidad, en su significado y proyección para la lucha obrera y el destino de la revolución.¹²

Es un hecho cierto que la unidad ha beneficiado a ambos partidos. Les ha permitido crecer en forma equilibrada e ininterrumpida, manteniendo sus posiciones específicas. En el quehacer unitario, lejos de deteriorarse mutuamente, compensaron sus insuficiencias ideológicas y orgánicas, morigerando el daño que ellas pudieron ocasionar al conjunto del movimiento popular.

Por supuesto, el camino de entendimiento no fue fácil. Durante la época stalinista, especialmente en el curso de la segunda guerra mundial, surgieron serias discrepancias, expresadas tanto en el plano teórico como práctico, cuyo efecto inmediato fueron la división del movimiento sindical y enconadas y artificiales querellas, difíciles de disipar.

En la búsqueda de una ecuación unitaria, socialistas y comunistas debieron hacer concesiones. Conquistada la unidad, subsistieron antiguas diferencias y afloraron otras nuevas, frente a los grandes temas contemporáneos. Ello es natural. Son las que explican y justifican la existencia de dos partidos obreros en nuestro país. Sin embargo, en más de veinte años de intensa práctica unitaria, siempre se encontraron los mecanismos para encararlas en un debate franco, promovido ante el pueblo, en el seno de las masas. Lo que nos une, lo que suelda nuestro destino en una común empresa histórica, es mucho más que aquello que nos separa. Uno de los mayores méritos políticos de Salvador Allende, es, precisamente, haber comprendido la necesidad histórica de la unidad y haber contribuido como el que más, a plasmarla.

No obstante, constituiría un error aceptar la fatalidad de las divergencias subsistentes, sin realizar un serio esfuerzo por superarlas, por

¹² "El Partido Socialista no puede prescindir del pc, ni el pc del Socialista. Estamos obligados a entendernos cada vez en mayor medida. De ello depende la suerte del movimiento de liberación." Luis Corvalán L., secretario general del pc, en carta dirigida a la COMPOL del ps.

ampliar el área de convergencia y por profundizar aún más la unidad alcanzada.

No puede menospreciarse el efecto de tales discrepancias, sobre todo conociendo su decisiva interferencia en el desarrollo del proceso revolucionario. Creemos imprescindible abordarlas, más aún, cuando enfrentamos tareas tan extraordinariamente complejas y difíciles, como son las de derrocar la dictadura fascista y retomar el camino de la construcción socialista.

Las discrepancias fundamentales no son sobrevenientes. La unidad se forjó hace dos décadas comprendiéndolas y aceptándolas: una posición internacional con facetas disímiles; una distinta comprensión del carácter de la revolución chilena y de la dinámica de las clases sociales; una óptica diferente en la previsión de las vías de acceso al poder, y una apreciación, también diversa, sobre lo que a juicio de cada partido era una correcta política de alianzas; amén de dos estilos políticos, de dos formas de "hacer política".

Algunas de ellas persisten en el enjuiciamiento de la actual situación chilena y en la definición de sus alternativas futuras.

El fortalecimiento de la unidad de la clase obrera es la piedra angular sobre la cual se construyeron las victorias del pasado, y se construirá la victoria contra el fascismo.

Si triunfamos en 1970, fue porque el grado de unidad alcanzado, bastaba para afrontar con éxito la tarea propuesta. Si fuimos derrotados en 1973, fue porque esa unidad no era suficientemente profunda como para responder a la enorme complejidad de una obra transformadora y el gigantesco poderío del adversario. Esa debilidad se manifestó, esencialmente, en nuestra incapacidad para entregar al proceso una dirección política única y coherente —y por imponer consecuentemente— una estrategia, también única y correcta.

Por ello, debemos reiterar nuestro propósito en orden a elevar el compromiso con el pc, en términos cualitativamente superiores, imponiéndonos —ambos partidos— exigencias más rigurosas. No se trata de alimentar en abstracto una imagen unitaria dormida en laureles de éxitos pasados. La unidad —en una coyuntura como ésta— debe ser reformulada en términos concretos. Sin ellos: estrategia única, respeto mutuo, confianza recíproca, discusión honesta, no habrá alternativa revolucionaria ni proceso triunfante. Tampoco habrá Frente Antifascista ni lucha victoriosa.

De algo deben servirnos las lecciones propias y ajenas. Cuando escribimos estas líneas, Portugal nos está proporcionando el más reciente e inquietante ejemplo del costo absurdo de la división. Allí se da un cuadro exactamente contrario al de Chile. Hubo un sector revolucionario en las Fuerzas Armadas —con el cual nosotros jamás

contamos— capaz incluso de liderizarlas. Pero este factor —con ser extraordinariamente positivo— no bastó para compensar las graves divergencias existentes entre socialistas y comunistas, las cuales han arrastrado al proceso portugués al borde de una reversión reaccionaria.

Casi cotidianamente la experiencia de otros, se encarga de recordarnos la necesidad de cautelar la preciosa y privilegiada herramienta forjada por el movimiento popular chileno.

En el Pleno de La Habana, celebrado en abril de 1975, los socialistas reiteramos este propósito y formulamos algunas bases concretas para materializarlo. Propusimos realizar un debate ideológico exhaustivo, con el fin de compenetrarnos de nuestras respectivas posiciones; disipar viejas desconfianzas; enriquecer nuestro acervo ideológico; corregir colectiva y fraternalmente los errores y desviaciones; y construir una sola y gran voluntad unitaria, revolucionaria y socialista. Planteamos asimismo, la necesidad de desterrar prácticas sectarias y divisionistas, que no pocas veces antepusieron los intereses partidarios a los superiores intereses de la revolución; así como desarrollar un mutuo respeto a nuestras respectivas identidades históricas; a sus gloriosas tradiciones de lucha y a sus aportes valiosos y diferenciados, a la causa y las ideas revolucionarias.

A pesar del tiempo transcurrido y la enorme disimilitud del contexto histórico, recobran plena vigencia, a nuestro juicio, las formulaciones teóricas planteadas por Dimitrov en los años treinta. El llamado "Frente Popular" fue concebido alrededor de un núcleo preexistente, el "Frente Único Proletario", órgano de la clase, que cautela la autonomía y la hegemonía del proletariado, en el desarrollo de una correcta política de alianzas.¹³

Ese centro neurálgico lo configuran en Chile, los partidos Comunista y Socialista y en un nivel superior, el conjunto de las expresiones

¹³ "En la movilización de las masas trabajadoras para la lucha contra el fascismo, tenemos como tarea especialmente importante la creación de un extenso frente popular antifascista, sobre la base del Frente Único Proletario. El éxito de toda la lucha del proletariado va íntimamente unido a la creación de la alianza de lucha del proletariado con el campesinado trabajador y con las masas más importantes de la pequeña burguesía urbana, que forman la mayoría de la población, incluso en los países industrialmente desarrollados."

En el mismo documento, Dimitrov insistía: "Lo primero que hay que hacer es crear un frente único, establecer la unidad de los obreros en cada empresa, en cada barrio, en cada región, en cada país, en el mundo entero. La unidad de acción de proletariado nacional e internacional, he aquí el arma poderosa que capacita a la clase obrera no sólo para la defensa, sino también para una contraofensiva victoriosa contra el fascismo, contra el enemigo de clase." Jorge Dimitrov, Informe al VII Congreso Mundial de la Internacional Comunista, 2 de agosto de 1935.

del pensamiento revolucionario, que confluyen hoy en la Unidad Popular.

LA UNIDAD DEL PUEBLO

La línea estratégica que orientó el nacimiento del FRAP, hace veinte años (1956) y de la UP más tarde (1969) sigue siendo válida. Fue tan realista y justa entonces como lo es hoy.

La UP representa un hito culminante en la maduración del movimiento popular chileno. Su vigencia no está cuestionada ni por la dimensión de la derrota ni por las nuevas condiciones de la lucha. Sin embargo, sería una insensatez reclamar esa vigencia transfiriéndola mecánicamente a la nueva realidad impuesta por la irrupción fascista.

La UP emergió de la derrota con una sobrecarga de insuficiencias, vicios y errores que el pueblo de Chile detecta, cuestionando su eficacia como instrumento político. Debe entonces ser repensada, actualizada y depurada de sus expresiones negativas, en términos de que nuestro pueblo pueda percibirla, nuevamente, como un sólido bloque orgánico e ideológico, con solvencia intelectual, moral y política.

Nuestra tarea es revitalizarla. Construir, valiéndose de ella, una fuerza mayor y más amplia, que ofrezca una real alternativa de poder y sea visualizada por los trabajadores como su propio instrumento de lucha. La concebimos como una "alianza básica" en el seno de los trabajadores, pero capaz de proyectarse con amplitud sobre todo el tejido social. Sólo a contar de la existencia de esta fuerza, reformulada como opción real de poder, consideramos posible la concertación de acuerdos, pactos o entendimientos con otras fuerzas del espectro político nacional, en torno a los objetivos concretos exigidos por la lucha contra la dictadura.

La reformulación de la UP no es tarea fácil. Supone de partida sustituir métodos de trabajo anacrónicos, prácticas viciadas e incluso, dirigentes. Quienes la representen en el futuro, no deben estar ligados a un pasado, que si bien la historia terminará por reivindicar plenamente, por el momento, pesan sobre ellos hondas desconfianzas, producto —en la mayor parte de los casos— de la propaganda infame del adversario. Aun cuando la UP ha ido ganando simpatías y recuperando su inmenso prestigio, importantes sectores de la población continúan recordándola en imágenes de sectarismo, cuoteo, ineficiencia y desorden.

Es necesario, entonces, que Chile perciba el esfuerzo de una auto-

crítica real, animada por una irrenunciable voluntad rectificadora, que conjuntamente con reivindicar lo verdadero, lo profundamente nacional y lo auténticamente humanista de sus posiciones, de su conducta y de su proyecto político, sea capaz de sacudir los errores, las mezquindades, y los sectarismos que oscurecieron su quehacer.

No debemos perder de vista un hecho históricamente trascendente: el saldo demoledor de la derrota no se contabiliza sólo en la nación destruida, sino también en la envergadura de la frustración provocada. Son los factores subjetivos los primeros que debemos recomponer: la pérdida de fe y confianza en la dirección, el peso del terror que por largo tiempo resentirá el espíritu de combatividad de las masas, y la resistencia de ellas a dejarse movilizar tras otra gran empresa histórica, cuyo desenlace pudiera ser de nuevo... el abismo.

La nueva dirección revolucionaria, repensada en su estructura, en sus métodos y en su proyecto histórico, no está enfrentada en modo alguno a situaciones insuperables. Le corresponderá —es cierto— remontar un período de grave y profundo reflujó, en el cual convergen factores aún desconocidos. La experiencia fascista ha servido para descorrer brutalmente ante las masas, los velos que ocultaban el carácter de clase del Estado, su esencia opresora. La trágica realidad ha venido en apoyo de las afirmaciones teóricas, para poner en evidencia la falsedad intrínseca de las instituciones burguesas. Cada hombre de Chile ha conocido la felonía de un Parlamento que aplaudió su propia clausura, y de un Poder Judicial, cuya pretendida majestad, naufragó vergonzosamente en el sometimiento cobarde, burdo y grosero a la tiranía. Nadie en el futuro podrá ser engañado con el mito de un ejército exhibido como símbolo y guardián de las gloriosas tradiciones nacionales y la existencia de una burguesía culta, civilizada y humana.

Existe un cuestionamiento hondo y global de los grandes mitos de ayer. Éste quizá sea el único y gran aporte del fascismo. De otra parte, la conciencia de clase sembrada en medio siglo de luchas, fortalecida en el curso del proceso revolucionario, ha sido enriquecida por la derrota y la heroica resistencia antifascista. La batalla contra la dictadura ha generado una experiencia organizativa considerable. Los partidos y movimientos de la izquierda, incluyendo el MRR, cuentan hoy con la disposición combativa y el heroico patrimonio de sacrificio y abnegación, acumulado por sus militantes. El trabajo clandestino, ajeno a las prácticas políticas chilenas, coloca a las corrientes revolucionarias en condiciones de combate, antes no previstas. Se ha ganado la convicción íntima, definitiva e irrevocable, acerca de la imposibilidad de encarar una empresa revolucionaria, sin la imprescindible organización de su defensa, en términos ideológicos, orgánicos y militares. Finalmente, tendrán a su haber un contingente de cuadros for-

mados en las sombras de la clandestinidad y de la represión, y una nueva juventud revolucionaria, que no se agotará en los pasillos parlamentarios ni en las viejas prácticas politiqueras y demagógicas.

Por último, nos parece conveniente señalar algunas precisiones en torno a los partidos de la UP y de la izquierda en general.

Al ponderar el entendimiento socialista comunista, como el núcleo básico de la convergencia con otras fuerzas de la izquierda chilena, no estamos subvalorando el aporte de otras organizaciones políticas. Comprendemos que esta formulación, clasista y unitaria, genera serias y justificadas reservas, en las otras fuerzas de la UP, en la medida que ella es visualizada como un polo hegemónico, llamado a administrar el entendimiento con los demás partidos aliados.

Es necesario disipar tales recelos. El énfasis puesto en la unidad de los dos partidos obreros, tiene una motivación superior ineludible: la unidad de la clase obrera. Se trata nada menos que de la fuerza motriz de la revolución. No es la unidad *per se*. Es la convergencia social sobre la cual se levanta el proceso revolucionario. Es nuestra gran conquista y nuestro gran aporte; malbaratarla sería un crimen histórico. La reiteración en el discurso político está precisamente en la línea de preservar ese privilegio, y no en la de subestimar la presencia y el quehacer de otras corrientes del pensamiento revolucionario, a las cuales, lejos de ubicar en "funciones de segunda clase", reconocemos una gran importancia y una irrestricta igualdad de derechos, en la conducción de las luchas venideras. Esta unidad tiene desde luego un valor cuantitativo, pero más allá de ello, se le debe medir en su proyección cualitativa. El movimiento popular adquirió su pleno desarrollo con la incorporación de masas cristianas y de capas comprometidas de la pequeña burguesía laica, que le dieron amplitud y madurez, y de un contingente direccional, de extraordinario valor intelectual, técnico y moral.

La alta capacitación profesional y la honradez ejemplar de los cuadros aportados por la Izquierda Cristiana, MAPU y Partido Radical, sumados a los que poseían los partidos Socialista y Comunista, permitieron disponer de un excelente plantel técnico al Gobierno Popular. Debemos insistir sobre la honradez acrisolada de estos técnicos y dirigentes. La gigantesca y acuciosa pesquisa fascista, realizada por miles de funcionarios atemorizados, soplones a sueldo, torturadores desquiciados y reaccionarios enloquecidos por el deseo de venganza, tras la perspectiva de descubrir —por lo menos— "un" hecho vergonzoso, "un" delito o "un" acto inmoral, imputable a alguno de estos técnicos y dirigentes, no logró su objetivo. No existe, hasta hoy, tres años de ocurrido el golpe, un solo dirigente o técnico destacado de la UP condenado por delito de estafa, desfalco, malversación, robo o en-

riquecimiento ilícito. ¡Tal fue la moral de los dirigentes revolucionarios! ¡Tal fue la campaña abominable de falsedades, mentiras y calumnias, propalada por la reacción! Ni un solo condenado, ni un solo sancionado por delitos que atenten contra el honor, la dignidad y la moral de los 150 000 revolucionarios detenidos, encarcelados, torturados y asesinados por el fascismo.

Hemos intentado en este capítulo, aportar al debate activo y abierto del movimiento revolucionario, algunas conclusiones que emergen de nuestras propias categorías de análisis y de pensamiento. Cualquiera que sea el valor que se les atribuya, no son en modo alguno resultantes improvisadas de un esfuerzo precipitado. Por el contrario, son ideas maduradas desde hace largo tiempo, en la meditación permanente, sobre las alternativas futuras de la lucha popular en Chile y en América Latina.

Se trata, en todo caso, del trazado grueso, de las ideas fuerzas, y de las orientaciones centrales que a nuestro juicio deben servir de parámetros en la definición de las opciones tácticas y estratégicas, que todavía permanecen sin respuesta.

Hemos hurgado en el pasado para reivindicar las grandes lecciones que la derrota puso en evidencia. A partir de ellas, y de las limitantes impuestas por la inquietante realidad continental —y la más específica de Chile—, emergen proposiciones que estimamos básicas e insoslayables: no serán posibles nuevas victorias revolucionarias sin que las fuerzas populares precisen los lineamientos de una estrategia continental; del mismo modo, abrigamos la convicción íntima, de que no habrán perspectivas serias de éxito, en el marco de las realidades nacionales, al margen de un gran proyecto político, orientado sustantivamente, a erosionar el bloque ideológico dominante y a quebrar la estructura represiva-militar, impuesto por el imperialismo y las burguesías locales.

No hemos avanzado más allá de estas concepciones básicas generales, en una proposición detallada y minuciosa de las urgentes tareas de hoy. Sería pretensioso siquiera intentarlo. Corresponde a la dirección revolucionaria hacerlo, tanto en el debate teórico, como en la praxis cotidiana; en la creación individual y en el quehacer colectivo. Lo determinará, en definitiva, la vida misma y el pueblo de Chile.

impreso en talleres gráficos victoria, s. a.
jesús terán 9-a — méxico 1, d. f.
tres mil ejemplares
29 de abril de 1977